

Movimientos socioespaciales y socioterritoriales

**Estrategias y resistencias
en América Latina**

Fernanda Valeria Torres
(Comp.)

Movimientos socioespaciales y socioterritoriales

Movimientos socioespaciales y socioterritoriales : estrategias y resistencias en América Latina / José Sobreiro Filho ... [et al.] ; Compilación de Fernanda Torres. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2024.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-813-803-9

1. Sociología. 2. América Latina. 3. Geografía I. Sobreiro Filho, José II. Torres, Fernanda, comp.

CDD 306.098

Otros descriptores asignados por CLACSO:

Movimientos Sociales / Geografía / Socioespacialidad / Socioterritorialidad / Estado / Políticas Públicas / Población / Pandemia / América Latina

Arte de tapa: Dominique Cortondo Arias

Corrección: Rosario Sofía

Diseño del interior y maquetado: Eleonora Silva

Movimientos socioespaciales y socioterritoriales

Estrategias y resistencias
en América Latina

Fernanda Valeria Torres
(comp.)



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány

Directora Ejecutiva

María Fernanda Pampín

Directora de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich

Coordinador Editorial

Solange Victory y Marcela Alemandi

Producción Editorial



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital desde cualquier lugar del mundo ingresando a libreria.clacso.org

Movimientos socioespaciales y socioterritoriales. Estrategias y resistencias en América Latina

(Buenos Aires: CLACSO, julio de 2024).

ISBN 978-987-813-803-9



CC BY-NC-ND 4.0

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires

Argentina | Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875

<clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>



Suecia
Sverige

Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas.

Índice

Introducción.....	11
<i>José Sobreiro Filho, Mariana Relli Ugartamendía, Matthew Aaron Richmond, Patricia Pintos y Felipe Mesel</i>	

Parte I

Estrategias y resistencias de los movimientos socioespaciales y socioterritoriales en América Latina

Apuntes sobre conflictos socioambientales y sus expresiones territoriales en Argentina	33
---	----

Lucrecia Wagner

Conflitos, acumulação por espoliação e governo bio/necropolitico do território no contexto de grandes projetos de des-envolvimento.....	53
--	----

Valter do Carmo Cruz e Bruno Cesar Malheiros

Convergiendo movimientos y geógrafes. Tácticas para navegar la brecha del idioma	77
---	----

Sara Koopman

Experiencias de movimientos socioterritoriales

Movimientos socioterritoriales en la lucha por la soberanía alimentaria en la ciudad de Caracas	95
--	----

Luis Enrique Ortuño Hernández

Pitanga Rosa: olhares a partir da experiência do movimento
de mulheres camponesas – Brasil.....113

Marilete Molinari e Zenaide Collet

Problematizando las geografías afrodescendientes

La diáspora africana y la espacialización de los territorios
quilombola en Brasil129

Rafael Sanzio Araújo dos Anjos

Microfísica de la reacción. Hacia una teoría de los quilombos
afroargentinos151

Norberto Pablo Cirio

As lutas por lugares de memória no combate ao racismo
e a antinegritude.....173

Denilson Araújo de Oliveira

Parte II

Producción colectiva y autogestiva de la vivienda y la ciudad

Autogestión colectiva del hábitat y construcción de ciudad.
La experiencia uruguaya en el cooperativismo de vivienda 191

Cristina Fynn

Posibilidades y desafíos de la institucionalización de la
participación social en el consejo provincial de vivienda y hábitat
de la provincia de Buenos Aires..... 205

Ana Pastor

Experiencias populares y prácticas estatales durante la pandemia covid-19

Ninguém solta a mão de ninguém. A ampliação do repertório
de práticas organizativas de comunidades de baixa renda
de Porto Alegre na pandemia de covid-19.....217

*Betania de Moraes Alfonsin, Pedro Prazeres Fraga Pereira,
Paulo Eduardo Berni, Pedro Acosta Oliveira, Fernanda Madalosso*

*Guimarães, Flávia Segat, Debora Carina Lopes y Vitória
Alvarez Montanari*

Los barrios de la periferia del Gran Buenos Aires y las
organizaciones sociales en la pandemia. Algunas líneas para
entender su estatuto.....233

María Maneiro

Los Comités Barriales de Emergencia. Experiencias de
organización popular en articulación con el Estado frente
a la crisis de producción / reproducción social 247

María Antonia Muñoz

El Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata..... 259

María Inés Iglesias

Sobre los autores y autoras..... 267

Introducción

*José Sobreiro Filho, Mariana Relli Ugartamendía,
Matthew Aaron Richmond, Patricia Pintos y Felipe Mesel*

Este libro surge de la experiencia desarrollada en el marco del II Encuentro Latinoamericano de Movimientos Socioespaciales y Socioterritoriales [ELAMSS] que tuvo lugar en marzo de 2020, de manera virtual, pero con la radicación institucional en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Se trató de la segunda edición de un espacio de debate que iniciamos hace ya varios años, en pos de comprender las organizaciones y movimientos sociales desde una perspectiva espacial.

Como expresamos en la fundamentación del II ELAMSS:

Debemos superar las lecturas de los movimientos desde el espacio absoluto, que reduce el espacio al área o superficie. En nuestra Latinoamérica, los movimientos en lucha tienen una perspectiva multidimensional del espacio, desde la tierra al agua, desde el cuerpo a las ideas, desde la semilla a la comida, desde el trabajo a la cultura, desde la organización a las políticas públicas, estos movimientos crean espacios y se apropian de territorios. El ELAMSS es un espacio de diálogo interdisciplinario frente a los intensos procesos de exclusión social y desterritorialización provocados por las políticas neoliberales, pensando los espacios y los territorios como forma de comprender mejor los procesos y los conflictos.

Desde un equipo amplio de trabajo, análisis, investigación y acción social y estatal, buscamos entonces enfatizar el enfoque espacial / territorial para analizar las diversas dimensiones que atraviesan las prácticas, relaciones y sentidos que se involucran en los procesos de movilización y organización social.

También, es necesario resaltar otro de los objetivos que dotaron a este encuentro de una intencionalidad particular: la apuesta por integrar en el debate teórico-práctico el protagonismo de todas las voces y miradas: las que provienen de la academia, las que surgen de la gestión y experiencias estatales y las construidas por militantes, dirigentes y referentes de los movimientos y de las organizaciones sociales.

De allí, emerge el énfasis en la perspectiva espacial y en la multiplicidad de voces y experiencias que se expresa en todas las mesas que funcionaron durante el II ELAMSS: la mesa 1 en la cual analizamos los conflictos y las estrategias que plantean los movimientos, enfatizando los conflictos socioespaciales y socioterritoriales; la mesa 2 en la cual conversamos sobre las identidades y sociabilidades que se construyen de, desde y en los espacios y los territorios; la mesa 3 que desarrolla los desafíos, en una escala global, de diálogos, traducciones y conceptualizaciones en la relación norte-sur; la mesa 4 que encara el problema de gestión estatal en su territorialidad y, por último, la mesa 5 que debate sobre las posibilidades de institucionalización o de recrear instituciones en los territorios de los movimientos y organizaciones.

Contamos con la participación de personas de diferentes países del mundo: colegas del mundo académico, compañeros militantes de los movimientos y las organizaciones, referentes de ONG y de gestión en reparticiones estatales, quienes expresaron sus voces, sus experiencias y sus análisis. De todas esas participaciones, recibimos catorce contribuciones escritas para la elaboración de este libro, que se detallan más adelante. Pero antes de reseñar estos aportes, nos parece necesario dar cuenta brevemente de los principales debates que

se desarrollaron en las mesas de trabajo, buscando incorporar todas las voces participantes y los principales emergentes del intercambio.

Participaron en la Mesa 1 Marilete Molinari, referente del Movimiento de mujeres campesinas de Brasil; Santiago Chara, referente de la Comunidad Indígena Punta Querandí, del Partido de Tigre, en Buenos Aires; Raúl Zibechi, educador popular, periodista y escritor uruguayo; Lucrecia Wagner, investigadora del Conicet, quien trabaja sobre conflictos ambientales y resistencia frente a la minería en Argentina; Luciana Santander, Mariana, Sosa, Mariano Paz y Francisco Ramos, de la Asamblea Plaza Dorrego del Barrio de San Telmo de Buenos Aires; Stalin Herrera, sociólogo, coordinador académico del Instituto de Estudios Ecuatorianos y también parte del movimiento indígena campesino de Ecuador, y Valter do Carmo Cruz, geógrafo, investigador de la Universidad Federal Fluminense, que trabaja entre otros temas sobre movimientos, identidades colectivas, derecho territorial y conflictos territoriales en la Amazonía.

Los panelistas hicieron alusión a distintos tipos de desigualdades y conflictos, con variadas escalas e intensidades, desde situaciones vinculadas al despliegue de grandes proyectos mineros o hidroeléctricos, al avance del agronegocio a gran escala, o de emprendimientos inmobiliarios vinculados a las nuevas formas de valorización residencial y turística en ámbitos urbanos. Estas problemáticas observables a diferentes escalas no están desconectadas, sino que de alguna manera están hilvanadas dentro de la lógica de un capitalismo racial cada vez más extractivo.

Se enfatizó sobre el carácter ontológico de la desigualdad socioespacial, de marcado carácter racista y patriarcal, donde ciertos grupos han sido históricamente producidos como marginalizados —y lo siguen siendo—, negados en su condición humana. Quizás donde esto se torna más evidente, o con un carácter más violento, es en las denominadas zonas de sacrificio en torno a la minería en Argentina, donde ciertos ambientes y vidas son considerados sacrificables; o en las situaciones de desplazamiento y confinamiento de los grupos indígenas, afrodescendientes y campesinos. En referencia a esto, Raúl

Zibechi plantea la existencia de una desigualdad naturalizada que atraviesa nuestras vidas y que, precisamente por estar naturalizada, se torna más difícil de observar, de allí la potencia de muchas de las formas de resistencias que emergen como ruptura y cuestionamiento al orden socioespacial imperante.

Todas estas estrategias y luchas lograron poner algunos límites al proyecto neoliberal, ganar algunas disputas en la calle, pero a la vez plantear algunos desafíos y dilemas.

A partir del planteo de que ciertos espacios solo se pueden cambiar con el cambio de la estructura de la sociedad; surge la pregunta sobre cuál sería el papel de los movimientos socioespaciales y socio-territoriales. Esto amerita algunas reflexiones. La primera, recuperando el planteo del geógrafo Marcelo Lopes de Souza, si se piensa el espacio como una dimensión esencial y llena de implicaciones para la sociedad y no como un mero cuadro de referencia, no es posible pensar un cambio en las relaciones sociales sin un cambio en la organización espacial. Esto es algo que los movimientos han entendido muy bien y ejercitan en sus prácticas cotidianas y, además, lo que llevó al ámbito académico, en particular a la geografía latinoamericana, a problematizar teóricamente la relación entre movimientos sociales y espacio, y a proponer herramientas analíticas para abordarlo.

Una de esas herramientas es la propia idea de movimiento socioespacial y socioterritorial que le dio nombre al encuentro, que plantea esencialmente la imposibilidad de pensar lo social de manera separada de lo espacial, en este caso en relación con los conflictos y las luchas. A partir de lo discutido, se hizo evidente que muchas de las estrategias de lucha y resistencia son prácticas espaciales con distintas expresiones: ya de resignificación de lugares, de ocupación de espacios, de producción de territorios, de manifestaciones en el espacio público, de políticas de escala. Cualesquiera sean, todas son prácticas espaciales.

Finalmente, otra cuestión que vuelve relevante a la dimensión espacial es que hay una nueva gramática, en clave territorial, que

vienen construyendo los movimientos, que logran articular luchas dispersas. Esto se vincula con algo que se planteó en la mesa de apertura, cuando se dijo que el espacio, el territorio son referencias importantes para pensar todas las dimensiones de la vida. Una clave es pensar como propone Doreen Massey al espacio como esfera de posibilidad de la multiplicidad, reconocer la coexistencia simultánea de los otros con sus propias trayectorias, con sus propias historias para contar ayuda a una política de reconocimiento de las diferencias.

En la Mesa 2 se debatió sobre identidades y sociabilidades en, desde y por el espacio y el territorio. Promoviendo la relación entre soberanía alimentaria, mercados campesinos e identidades territoriales, el primer grupo de intelectuales se caracterizó por desplegar duras críticas a la falta de un proyecto de soberanía alimentaria, así como a sus consecuencias como resultado del modelo hegemónico impuesto por el capitalismo. Rita Zanotto, de La Vía Campesina, destacó la alimentación como un derecho, las semillas como patrimonio popular y la soberanía alimentaria como una forma de construir una verdadera seguridad alimentaria y soberanía nacional desde los territorios populares. Ante un contexto de dura guerra económica, Luis Ortuño, miembro del Movimiento Agro Urbano Siembra, defendió la soberanía alimentaria como parte de una lucha permanente contra el imperialismo y el capitalismo. Experiencias e ideas que pueblan el campo y las ciudades venezolanas simbolizan la existencia de alternativas, la creación de unidades para defender y fortalecer al pueblo y a su territorio, así como contribuir a expandir la solidaridad. El contexto paraguayo, presentado por la investigadora Lorena Izá Pereira (Red DATALUTA), fue claro para resaltar el predominio del agronegocio en detrimento del territorio campesino y ante un Estado capturado. Se destacó que, en ciertas coyunturas, las luchas territoriales tratan con sujetos que tienen la capacidad de desempeñarse, juzgar y legislar de manera peculiar y sugerente. Al final, Humberto Tommasino, de UDELAR, realizó una reflexión precisa destacando no solo las nobles virtudes de las universidades públicas latinoamericanas, sino también el papel de los intelectuales

populares capaces de involucrar a los sujetos en un proceso de reinención de la sociedad. Cuando se compone y llena de pueblo, de su gente y sus conocimientos y cuando se desprende de su academicismo y arrogancia, se transforma en una universidad cada vez más dispuesta a construir una idea real de soberanía alimentaria.

La forma en que las identidades crean territorios, a través de la sociabilidad y el conflicto, fue el centro de atención del segundo bloque. El investigador Rafael Sanzio, de la Universidad de Brasilia, señaló que los sistemas políticos, económicos, sociales y culturales brasileños refuerzan la falta de lugar para los afrobrasileños. A pesar de ser una de las naciones africanas más grandes del mundo, víctima de un proceso estatal de blanqueamiento y frente a una estructura legal racista, Brasil aún no puede garantizar el acceso a la tierra y presentar los territorios quilombolas como una parte interesante e interesada de los proyectos de planificación territorial en Brasil, haciendo del racismo y los prejuicios parte de estas políticas. Ana Cristina Ottenheimer nos invitó a una lectura sobre el aporte de las cátedras libres como espacios de trabajo colectivos de gran relevancia en la producción y diálogo de saberes indígenas, campesinos, afrodescendientes y muchas otras identidades, que se encuentran más allá de los muros de la universidad. Martin Torres, del “Cuerpos X: Laboratorio de geografía y género”, fue didáctico y llamó nuestra atención sobre la relevancia de la crítica sobre trayectorias precarias y una mirada más profunda a la geografía de los cuerpos. Las identidades están llenas de corporeidades con manifestaciones espaciales y, en consecuencia, son prácticas de resistencia indígena, quilombola, campesina y LGB-TQIA+. América Latina, debido a la colonialidad, se caracteriza por una compleja interseccionalidad de corporeidad, que expresa especificidades geográficas, según el contexto del que se trate, además de representar microterritorialidades y son capaces de crear espacios y territorios subversivos. Finalizando con una lectura capaz de involucrar un macro y micro análisis, Eloisa Berman debatió cómo la cuestión política se manifiesta en el fenómeno territorial a través de una mirada comprometida con la cotidianidad y la multiescala. Su

lectura nos dice que ya sea a escala corporal o a escala nacional, la realidad exige cada vez más una perspectiva capaz de comprender y considerar las territorialidades interseccionales (raza, género, etcétera) que producen y relacionan los diferentes territorios.

En la Mesa 3 los dos bloques tenían temas bastante diferentes, pero también varios puntos de conexión. En ambos espacios de debate se abordaron temas de diálogo y formas de resistencia en el contexto de estructuras dominantes que reproducen enormes asimetrías de poder. Recapitulamos aquí las presentaciones y sus temas centrales.

Norberto Pablo Cirio, de la Universidad Nacional de la Plata, presentó su proyecto de mapear espacios históricos y actuales de las poblaciones afrodescendientes en Argentina, invisibilizadas por el “mito de la Argentina blanca”, para producir lo que él llama una geografía del silencio y de los silenciados. En la misma línea, Denilson Araújo de Oliveira, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, discutió el proyecto Porto Maravilha, una reforma urbana neoliberal en Río de Janeiro, que está silenciando la historia de la Zona Portuaria de la ciudad, por donde pasaron un millón de africanos y mujeres africanas esclavizadas y muchas murieron, enterradas en el cementerio de Pretos Novos que fue descubierto y excavado recientemente. El tercer presentador, Juan de Dios Mosquera, director del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos Cimarrón de Colombia, enfatizó la gran presencia demográfica de los afrodescendientes en Colombia y América Latina y rasgos importantes en el lenguaje y la cultura popular, pero también la falta de reconocimiento de esta influencia y apreciación de la africanidad en la región. Y finalmente, Maguemati Wagbou, de la Universidad Nacional de Colombia, expuso su trabajo sobre las relaciones y diálogos multidireccionales entre grupos y organizaciones de la diáspora africana y afrodescendiente en América Latina y el Caribe.

En el segundo bloque Sara Koopman, de la Universidad Estatal de Kent en Estados Unidos, describió algunas experiencias y los grandes desafíos de publicar textos traducidos del español en revistas

académicas de habla inglesa y de facilitar la comunicación entre activistas latinoamericanos y grupos solidarios en Estados Unidos. Senda Sferco y Ana Paula Penchaszadeh, de la Universidad de Buenos Aires, discutieron los desafíos ético-políticos de la traducción, la intraducibilidad y el concepto de criollización, a partir del libro *Poética de la Relación* del poeta afrocaribeño Edouard Glissant, del que se ha publicado recientemente una traducción al español. Melisa Yaleva, coordinadora del colectivo Identidad Marron, expuso cómo este colectivo fue creado por jóvenes de piel oscura y origen indígena o popular para nombrar a partir de la corporalidad y vivencia del racismo estructural, y resistir las lógicas que lo reproducen. Y finalmente, Sofía Zaragocín, de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, describió cómo sus experiencias como joven migrante en los Estados Unidos generaron una comprensión de la posicionalidad del conocimiento y la traducción como algo corpóreo y relacional.

Entonces, para resumir estos diálogos tan amplios sobre diferentes temas —y desde diferentes perspectivas— quisimos identificar algunas dinámicas espaciales y algunos aspectos escalares, que permean estos debates.

A escala internacional, y reforzada a escala nacional a través de una muy marcada y desigual división del trabajo y de los recursos, existen estructuras de diversas formas de dominación y hegemonía, ya sean raciales como se comenta en el primer bloque, o lingüísticas como en el segundo bloque, o sobre la base de algún otro criterio de diferencia. Esta dominación se manifiesta en la repetición y reproducción de procesos de silenciamiento y olvido de las historias africanas y afrodescendientes en varios países latinoamericanos, tal como lo describen Norberto, Denilson y Juan de Dios. De lo contrario, podemos percibir una estructura de dominación en la geopolítica de la producción y circulación del conocimiento académico legítimo y sus aspectos lingüísticos. Como Sara, Senda, Ana Paula y Sofía han descrito de diferentes maneras, las barreras del idioma son sustentadas por instituciones, universidades y revistas académicas de habla inglesa, que median el intercambio de conocimientos y la traducción

entre diferentes contextos culturales, sociales y lingüísticos de manera muy asimétrica.

A partir de ahí podemos saltar a una escala más local o microorganizacional para ver cómo diferentes sujetos y actores experimentan y reaccionan a los efectos de estas estructuras. En estos procesos micropolíticos, nos gustaría resaltar una distinción entre respuestas más y menos institucionalizadas. Por ejemplo, escuchamos algunas pistas sobre cómo abrir espacios de diálogo dentro de las instituciones académicas de habla inglesa. Sara nos llama a insistir o presionar a las revistas de habla inglesa para que incluyan más traducciones —y traducciones bien hechas—, y a las universidades y organizaciones para que contraten intérpretes calificados para las reuniones bilingües. También insiste en la obligación ética de citar referencias en otros idiomas, práctica que ejemplifica Sofía, quien siempre busca publicar tanto en español como en inglés, a pesar de las diversas dificultades que esto presenta.

En la Mesa 4 nos propusimos reflexionar y debatir sobre las diferentes modalidades de interrelación entre los movimientos sociales, las organizaciones sociales y el Estado en sus distintos niveles: nacional, provincial-estadual, municipal, local, con base en experiencias de Brasil, Venezuela, Argentina y Colombia. Se pusieron en común distintas experiencias organizativas asociadas a la elaboración de normativas, el diseño e implementación de políticas públicas y la participación en la gestión pública. En un primer bloque participaron Laura Arévalos (referente de Villa 20 en Argentina), Betânia Alfonsin (del Instituto de Derecho Urbanístico de Brasil), Análida Rincón Patiño (de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín) y María Maneiro (del Instituto Gino Germani de la UBA, Argentina). En un segundo bloque participaron Gerardo Rojas (ex viceministro de economía comunal de Venezuela), Inés Iglesias (Consejo Social de la UNLP), María Antonia Muñoz (de la Universidad de Mar del Plata) y Sol Calandria y Paula Belloni (del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia).

En los dos bloques surgieron aspectos comunes para remarcar: cómo las políticas públicas se tensionan en los territorios se redefinen y cómo se geografizan, y tres de sus componentes que son relevantes. Por un lado, el planeamiento / planificación (territorial) como hecho técnico estatal que colabora con los intereses de agentes económicos del complejo inmobiliario-financiero, hecho que plantea la dicotomía del Estado entre planeación y contingencia. Por otro, la normativa, que podríamos pensarla *a priori* como una síntesis del planeamiento, pero que, sin embargo, es muchas veces la traducción inmediata de agendas urgentes que cristalizan intereses particulares y dan lugar a relaciones conflictivas en las que las organizaciones sociales buscan traccionar la institucionalidad a su favor. En este sentido, se han resaltado experiencias de coproducción normativa en proyectos de reurbanización que estuvieron, en su etapa de redacción, mediadas por el conflicto y la negociación o la búsqueda de consensos, y por un ejercicio de adquisición de saberes nuevos y lenguajes técnicos ajenos para poder dar esas discusiones (ingeniería, arquitectura, derecho). Finalmente, la productividad jurídica de los conflictos urbanos: los conflictos se tornan procesos de elaboración colectiva de situaciones jurídicas, una modalidad de difusión de conocimientos jurídicos. En este último componente la alianza estratégica con sectores de la academia comprometidos apareció como un componente vital para llevar a cabo las traducciones necesarias para dar la discusión. Acá se renuevan miradas en relación a cómo la producción científica debe generar impactos territoriales que ayuden a las luchas contrahegemónicas, de lo que emergen preguntas cómo: para quién van dirigidos los resultados de los estudios / investigaciones —incluso críticos— que la academia desarrolla y cómo se socializan, cuál es la audiencia que tiene acceso a su lectura y qué formatos de difusión se emplean para poder ser aprovechados y que queden como un recurso más dentro de un repertorio amplio de saberes prácticos y estrategias que las organizaciones comunitarias llevan a cabo.

Otro aspecto abordado es el de las organizaciones sociales y movimientos populares, no solo como destinatarias de la política pública o grupos que las resisten, sino en muchos casos como las hacedoras y las ejecutoras de las políticas. En la mesa se presentaron variadas experiencias que, a partir de modalidades distintas de interacción con los Estados, han asumido roles particulares. Por ejemplo, en el caso venezolano se puso de manifiesto que los consejos comunales se propusieron con una autonomía política relativa en relación al Estado y al sector privado, una apropiación progresiva de ámbitos institucionales de discusión para ir tensionando las decisiones estatales desde un ideario de construcción de poder popular.

Estos avances sobre el Estado se dieron desafiando también ideas más liberales clásicas en relación con los modelos de participación, que abren espacios institucionales con fines más procedimentales que políticos sustantivos, a partir de objetivos preestablecidos, como el modelo de gobernanza urbana en el que las decisiones en la renovación urbana ya están tomadas. En definitiva, la participación llega hasta el límite en el que empieza a incomodar al mercado. En el caso brasileño, en cambio, a partir del golpe de 2016, pudimos ver cómo los movimientos sociales urbanos han buscado resistir al desmonte de un entramado de políticas urbanas innovadoras a nivel mundial que, si bien no necesariamente tenían su correlato material en las condiciones habitacionales de la población brasileña, sí servían como plataforma de interlocución. Frente a sucesivos Gobiernos en Brasil (Temer y Bolsonaro) que buscaron descaracterizar el ordenamiento urbanístico consensuado en etapas anteriores, centrando las intervenciones en el derecho de propiedad, y generando una difícil articulación entre la idea de ciudadanía y la idea de propietario (es decir, una ciudadanía atada al acceso al mercado, en este caso, al mercado de suelo); los movimientos territoriales se propusieron sostener el ideario del derecho a la ciudad, asumiendo la defensa de un concepto que el Estado fue abandonando.

Con esto, si bien el derecho a la ciudad es un concepto de difícil juridificación, es interesante ver cómo se remodelan y se amplían

algunos conceptos que antes encontraban cierta recepción institucional y que luego empiezan a ser encarnados por organizaciones sociales. En el caso colombiano, en Medellín, la resistencia de los movimientos sociales urbanos ha puesto el eje en la idea de permanencia frente a los desplazamientos, reposicionando la idea de “morador” por sobre la de “propietario”.

Finalmente, en el caso argentino, se identificó que, más allá de las rupturas, las organizaciones sociales no han tenido un vínculo de ajenidad o exterioridad respecto de los Estados. Se han puesto de relieve modelos como el fomentismo que suponen una mancomunidad de esfuerzos entre el Estado y grupos asociativos. En el período de los años noventa de políticas focalizadas (territorializadas) y de un modelo asistencial participativo, se instituye un vínculo sociedad-Estado en el que las organizaciones sociales crecen, a su vez producto de las crisis de modalidades trabajo-céntricas, se construyen otras formas de lazos fuertemente territorializadas, muchas veces más pragmáticas.

Asimismo, en la mesa se resaltaron diferentes problemáticas. Las limitaciones de los tiempos de la militancia vs. trabajo / tareas de cuidado; Militancia barrial vs. militancia política y otros formatos de hacer política. La complejidad del esfuerzo: lucha, negociación, confrontación, consenso, gestión conjunta; la militancia (no remunerada) y feminizada, dinámicas complejas entre el aprender, interpretar, traducir y contar.

Para cerrar, todas estas situaciones se vieron especialmente expuestas con la pandemia del covid-19, la que ha sido definida como una crisis de cuidados y expuso la precariedad urbana en nuestros países; las formas de vivir y de morir. En la mesa se relataron distintas experiencias, en las que se pudo identificar una baja articulación entre organizaciones comunitarias (con justa remuneración) y la estatalidad capilar, el hecho de que los estados se recostaron en las organizaciones sociales para llegar a los barrios populares y la organización popular como garante de la reproducción social a través de Comités de Crisis y Comités Barriales de Emergencia.

En la Mesa 5, “Movimientos sociales e instituciones forjadas desde el territorio: prácticas, articulaciones y disputas”, nos propusimos debatir acerca de las posibilidades y los límites de los movimientos sociales para generar construcciones institucionales en sus territorios. Para ello, invitamos a personas provenientes de organizaciones sociales de Argentina, Uruguay, México, Colombia, Ecuador y Barcelona y reflexionamos a partir de sus experiencias para abordar distintas dimensiones de la reproducción de la vida, prácticas de movimientos sociales que en sus territorios generan formas institucionales que conviven más o menos conflictivamente con otras institucionalidades, estatales y no estatales.

La mesa contó con dos bloques temáticos desde los cuales abordar el debate. El primero, “Producción colectiva y autogestiva de la vivienda y la ciudad”, contó con la participación de Ferrán Aguiló y Daniela Idrovo de la Fundación La Dinamo de Barcelona, Cristina Fynn, primera presidenta de la Agencia Nacional de Vivienda del Uruguay, Néstor Jéifetz y Marina Thía del Colectivo de Organizaciones de Hábitat de Argentina y Ana Pastor de Madre Tierra y representante en el Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

Desde sus diferentes experiencias de lucha por el derecho a la ciudad y sus disputas contra las manifestaciones del capital concentrado en la urbanización capitalista, nos presentaron la importancia de contar con herramientas normativas que se expresen tanto en el reconocimiento estatal de los procesos autogestivos como en recursos técnicos y económicos para promoverlos.

Observando las tensiones en la relación Estado-organizaciones, señalaron la importancia de que los movimientos sociales no pierdan su independencia política y que, siempre en relación con las bases, presionen sobre las resistencias expresadas por los intereses sectoriales (*lobbies* de grandes actores inmobiliarios) y sobre las inercias de la burocracia estatal. En ese sentido, nos alertaron que los marcos normativos generados a partir de las luchas sociales no son

un punto de llegada, sino un paso más en esas disputas y resistencias ante la mercantilización del acceso a la vivienda y a la ciudad.

Al segundo bloque, “Los otros procesos pedagógicos”, fueron invitadxs René Ramírez Gallegos, académico y exsecretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador; Ana Dumrauf, investigadora del Grupo de Didáctica de las Ciencias naturales, ambientales y de la salud de la (UNLP CONICET) de Argentina; Itzel Farías Malagón, responsable del área de intercambio de aprendizajes de la Universidad de la Tierra Oaxaca (UNITIERRA) de México; Libio Palechor, coordinador pedagógico de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca de Colombia y Juan Manuel Esquivel, director de la experiencia educativa de la Organización Barrial Tupac Amaru de Jujuy, Argentina.

En los relatos de sus diversas experiencias, observamos objetivos compartidos y caminos diferentes para abordarlos. La importancia de la educación intercultural, el rescate de lenguas, saberes y tradiciones ancestrales, el rechazo del pensamiento único y del sentido común dominante para apostar por una educación basada en nuevas epistemes, son elementos estructurantes y comunes a todas ellas. Se plantea la urgencia de producir conocimiento contraexperto (entendiendo como “experto” al que sostiene a un sistema ecocida) que parta de las necesidades de las propias comunidades y se erija sobre lógicas comunitarias, no capitalistas.

Para ello, las intervenciones mostraron caminos diferentes. Algunas experiencias se plantean vías simultáneas que combinan procesos sociales con procesos político-institucionales y otras no buscan generar ni articular de ninguna manera con el Estado, sino mostrar alternativas diferentes de vida, de producción, de educación y también de articulación en redes y encuentros de base, prescindiendo de lo estatal. En la mesa se dio un interesante y renovado debate entre posiciones autonomistas y posiciones que combinan organización territorial con organización política. Quedaron planteados algunos interrogantes acerca de los elementos de la institucionalidad

propia de las organizaciones sociales que son imprescindibles para mantener su independencia cuando incursionan en las entrañas del Estado.

De ese conjunto de dimensiones, problemáticas e interrogantes que nutrieron una intensa semana de trabajo, hemos recibido interesantísimos trabajos que se ocupan de profundizar en diversos aspectos que se ligan a las manifestaciones, los conflictos y las dinámicas desplegadas por organizaciones y movimientos socioterritoriales y socioespaciales.

La primera parte del libro se organiza en tres bloques de contribuciones.

El primero lleva por título “Estrategias y resistencias de los movimientos socioespaciales y socioterritoriales en América Latina” y cuenta con los trabajos de Lucrecia Wagner, Valter do Carmo Cruz y Bruno Cesar Malheiros, y Sara Koopman. Lucrecia indaga sobre las expresiones territoriales de las disputas entre diversos actores sociales en el marco de la conflictividad ambiental en Argentina. Para ello, aborda algunos ejemplos de conflictos recientes, donde la delimitación del territorio para ciertos usos ha tomado relevancia como eje de disputa en torno a ciertos proyectos extractivos, en especial de minería a gran escala, socialmente cuestionados. Valter y Bruno, a su vez, partiendo de la base de que los grandes proyectos de (mal)desarrollo son dispositivos territoriales capaces de suspender, en términos políticos, jurídicos y normativos, toda la complejidad y diversidad territorial de los espacios en los que se instalan, proponen problematizar la dinámica de la excepción de los procesos de territorialización de estos grandes emprendimientos de (mal)desarrollo para desnaturalizar su lógica de violación y cuestionar los sentidos concretos de su necesidad. Por su parte, Sara despliega la importancia de la traducción para desplegar una estrategia a escala global por parte de los movimientos sociales latinoamericanos.

El segundo bloque se titula “Experiencias de movimientos socioterritoriales” y refiere a casos específicos de movimientos socioterritoriales, analizados por Luis Ortuño y Marilete Molinari y Zenaide

Collet. Luis se ocupa de mostrar cómo los movimientos socioterritoriales y socioespaciales de Venezuela, específicamente de la ciudad de Caracas, han avanzado con experiencias concretas en la producción de alimentos y formas de distribución local, aglutinadas en el Plan Siembra Caracas como métodos de construcción hacia la soberanía alimentaria. A su vez, Marilete y Zenaide proponen compartir algunos aspectos de la experiencia de la Asociación Pitanga Rosa desde la perspectiva del campesinado brasileño, Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil [MMC].

El tercer bloque se denomina “Problematizando las geografías afrodescendientes” y los trabajos incluidos allí están dedicados a analizar los colectivos negros en Brasil y Argentina. Rafael Sanzio analiza los aspectos geográficos de las comunidades quilombola de Brasil, en un panorama espacial y de múltiples escalas; Norberto Pablo Cirio, por su parte, plantea un diálogo interdisciplinar entre ciencias “duras” y “blandas” para abordar un fenómeno intrínseco a la trata esclavista, el quilombo, que aún repercute en la Argentina, y Denilson Araujo de Oliveira analiza la herencia de las formas espaciales del antiguo Cais do Valongo y los cementerios de Pretos Novos en la zona central de la ciudad de Río de Janeiro.

La segunda parte del libro consta de dos bloques. El primero, titulado “Producción colectiva y autogestiva de la vivienda y la ciudad”, está dedicado a la exposición de dos procesos de traducción institucional de experiencias de producción social del hábitat. Cristina Fynn realiza una sistematización histórica de la experiencia de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua [FUCVAM], enfatizando en la importancia de que los movimientos sociales puedan mantener independencia política y capacidad de presión para resolver las inercias de la burocracia estatal. Por su parte, Ana Pastor nos ofrece una mirada sobre la institucionalización de la participación de las organizaciones sociales en la provincia de Buenos Aires, mediante la creación del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, señalando los desafíos en cuanto a la inclusión de demandas de las organizaciones que no integran dicho ámbito, y su

capacidad de contribuir a una mejor articulación entre las esferas provinciales y municipales en la gestión socioterritorial.

El segundo bloque, “Experiencias populares y prácticas estatales durante la pandemia covid-19”, está compuesta por cuatro trabajos, dedicados a exponer y analizar distintas experiencias organizativas que han construido espacios de diálogo, articulación y tensión con el Estado, tres de dichos trabajos poniendo el énfasis en el contexto de la pandemia por covid-19.

El trabajo de Betania de Moraes Alfonsin et al. refiere a la resistencia ejercida por las poblaciones de bajos ingresos en tres territorios de Porto Alegre (Brasil), en los que la pandemia expone el proceso de precarización socioeconómica de las periferias que la antecede. En estos espacios se registra un retroceso brutal en cuanto a la exigibilidad de derechos, la disminución de espacios institucionales y el cierre de importantes equipamientos públicos, frente a lo cual se pudo identificar una rearticulación política del tejido comunitario.

El desarrollo que María Maneiro realiza pone el acento en cómo la pandemia mostró una crisis en las redes de cuidados, manifestó desigualdades de género y de clase, ancladas socioespacialmente en la periferia del Gran Buenos Aires. En este contexto reaparecen las organizaciones sociales para el reparto de mercadería (alimentos), insumos de higiene y *locus* de aprovisionamiento de información, fueron un soporte central del cuidado, soporte que tiene su historia y que se liga a la memoria larga de producción de hábitat, a la participación en la ejecución de políticas sociourbanas y a la lucha por los derechos.

Por su parte, Antonia Muñoz nos brinda un panorama sobre los comités barriales de emergencia [CBE] surgidos durante la pandemia en General Pueyrredón (Argentina). Los CBE son esfuerzos intercomunitarios para la contención y el tratamiento de situaciones de emergencia social en el contexto de crisis sanitaria con un alto porcentaje de participación femenina. Los CBE constituyeron un avance en el bienestar de la población y un fortalecimiento de la vida política y social del municipio y arrojaron la posibilidad de mejorar las

condiciones de vida de los sectores más vulnerables en relación con un conjunto de alertas y problemáticas, distinguiéndose la asociada a la violencia de género.

Por último, el trabajo de Inés Iglesias permite conocer la experiencia del Consejo Social de la UNLP, particularizando en algunos hitos relacionados con tramas estatales, movimientos sociales y espacialización de las políticas públicas. El proceso transitado durante la pandemia da cuenta de la necesidad de poner en valor el conocimiento y la voluntad de los actores organizados en los barrios, los que muchas veces cuentan con las propuestas de lo que hay que hacer, restando construir la manera de dialogar con los distintos niveles del Estado. De todos modos, es necesario no dar por sentado que los movimientos sociales son depositarios de una suerte de responsabilidad respecto a las condiciones socioterritoriales de sus comunidades.

Parte I

***Estrategias y resistencias
de los movimientos socioespaciales
y socioterritoriales en América Latina***

Apuntes sobre conflictos socioambientales y sus expresiones territoriales en Argentina

Lucrecia Wagner

1. Introducción y notas conceptuales

Este trabajo indaga sobre las expresiones territoriales de las disputas entre diversos actores sociales en el marco de la conflictividad ambiental en Argentina. Para ello, abordamos algunos ejemplos de conflictos recientes, donde la delimitación del territorio para ciertos usos ha tomado relevancia como eje de disputa en torno a ciertos proyectos extractivos, en especial de minería a gran escala, socialmente cuestionados.

Es relevante analizar los aspectos en común de los conceptos conflicto territorial y conflicto ambiental. Ya en 1997, Francisco Sabatini definía a los conflictos ambientales como “conflictos sociales por el control de los territorios” (Sabatini, 1997, p. 78). Este autor los describía como conflictos originados por cambios en los usos del suelo, por la esencia del desarrollo urbano, y la distribución de las externalidades derivadas de esos cambios, es decir, un fenómeno territorial.

Desde la geografía, Mariana Arzeno et al. (2018) entienden al conflicto social como aspecto inherente al proceso de desarrollo, y una de las manifestaciones de este conflicto son las disputas generadas por el control y uso del territorio, lo que definen como conflictos

territoriales. Estos autores también destacan el carácter público de estas disputas entre distintos actores por recursos o condiciones de producción y seguridad ambiental. Desde esta perspectiva, la concepción de territorio está asociada a “las relaciones de poder que se establecen entre los actores que viven o confluyen en un mismo ámbito espacial, configurándolo e imprimiéndole una dinámica específica” (Arzeno et al., 2018, p. 128).

Por su parte, Gabriela Merlinsky destaca que

[...] los conflictos ambientales representan focos de disputa de carácter político que generan tensiones en las formas de apropiación, producción, distribución y gestión de los recursos naturales en cada comunidad o región. Ponen en cuestión las relaciones de poder que facilitan el acceso a esos recursos, que implican la toma de decisiones sobre su utilización por parte de algunos actores y la exclusión de su disponibilidad para otros actores. Se trata de situaciones de tensión, oposición y/o disputa en la que no solo están en juego los impactos ambientales. (Merlinsky, 2013, p. 40)

Como puede observarse, ambos conceptos toman como base las disputas por la apropiación, uso, gestión, control o distribución de recursos naturales o condiciones de producción. Joan Martínez Alier, con su concepto de conflictos ecológicos-distributivos, hace hincapié en que “no todos los humanos son igualmente afectados por el uso que la economía hace del ambiente natural. Unos se benefician más que otros, unos sufren mayores costos que otros, de ahí los conflictos ecológico-distributivos o conflictos de ‘justicia ambiental’” (Martínez Alier, 2004: 21).

Otro elemento común entre estos conceptos es la preminencia de las relaciones de poder que configuran estos usos, control, distribución, etcétera, de los recursos naturales y, por ende, también configuran el territorio. Es decir, es la configuración y la dinámica territorial la que se “tensa” ante un conflicto que pone en juego las relaciones de poder existentes hasta entonces. Gabriela Merlinsky (2013) afirma que “en muchas ocasiones, la dinámica y evolución del proceso

contencioso lleva a poner en evidencia dimensiones económicas, sociales y culturales desatendidas. Cuando estas disputas están espacialmente localizadas, se trata de conflictos territoriales en los que se expresan contradicciones entre el espacio económico y el espacio vital” (Merlinsky, 2013, p. 40).

En este trabajo adherimos al concepto de conflicto ambiental, porque los actores de los conflictos elegidos emergieron en la escena pública esgrimiendo argumentos ambientales. En este sentido coincidimos con Merlinsky (2013), quien destaca que la nominación ambiental se establece cuando en la dinámica contenciosa los actores utilizan argumentos ambientales, aun si estos no son los prevalecientes. Partimos de considerar que en Argentina asistimos, especialmente en las dos últimas décadas, a lo que Henri Acselrad (2010) define como la “ambientalización de las luchas sociales”. La noción de ambientalización puede designar tanto el proceso de adopción de un discurso ambiental genérico por parte de los diferentes grupos sociales, como la incorporación concreta de justificativas ambientales para legitimar prácticas institucionales, políticas, científicas, entre otras.

En resumen, conflicto ambiental y conflicto territorial son conceptos utilizados para caracterizar procesos de conflictividad social que acontecen en territorios específicos, haciendo hincapié en diferentes dimensiones de un mismo proceso. Reconocemos el aporte de las investigaciones desde la geografía que, al destacar la relevancia de las huellas territoriales generadas por estos conflictos, permiten visualizar los impactos en la configuración y en la dinámica territorial de los procesos en los que se despliegan los argumentos ambientales que analizamos.

Finalmente, queremos destacar el uso, como sinónimo de conflictos ambientales, de un término surgido de los propios movimientos que resisten en sus territorios a proyectos extractivos: conflictos socioambientales. En la Argentina, gran parte de los movimientos sociales que surgieron de conflictos ambientales aceptan o autoproclaman la denominación “socioambiental”. Este término fue tomado

por diversos colectivos del país, en su mayor parte por asambleas de vecinos autoconvocados, para hacer hincapié en la imposibilidad de separar las problemáticas que afectan al ambiente del perjuicio social que implican, por un lado, y de la estructura social y política que las origina, por otro (Wagner, 2014).

2. Fragmentación jurídica del territorio, zonificaciones e invisibilizaciones

En los conflictos socioambientales se vienen desplegando, en las últimas décadas, estrategias estatales y empresariales que tienden a fragmentar jurídicamente el territorio en función del interés en desarrollar proyectos extractivos. Estos actores estatales y empresariales intentan que aquellas regiones que resultan de interés para ciertos proyectos, por ejemplo, de minería a gran escala, queden fuera del alcance de la legislación ambiental vigente. Para ello, usan estrategias como las “zonificaciones” o la excepción de un departamento / distrito / partido (según la división jurisdiccional de la provincia) ante cierta legislación.

Tomaremos como ejemplos dos conflictos por minería a gran escala, que acontecieron en las provincias de Chubut y Mendoza, y se iniciaron hace alrededor de dos décadas. En ambas provincias existe legislación que restringe la actividad minera, prohibiendo ciertas sustancias como cianuro o ácido sulfúrico, leyes que fueron producto de masivas movilizaciones contra proyectos de megaminería. De las veintitrés provincias argentinas, siete poseen este tipo de legislación, y otras dos (La Rioja y Río Negro) tuvieron estas legislaciones y fueron posteriormente derogadas o anuladas (ver Imagen 1).

En Chubut y Mendoza, estas legislaciones conviven con zonas de interés para el desarrollo de proyectos mineros. En la meseta patagónica chubutense se encuentra el proyecto Navidad, uno de los más grandes proyectos de extracción de plata del mundo. En Mendoza, algunos proyectos mineros esperan que la Ley 7 722 sea modificada

para poder avanzar, como el proyecto minero de oro “La Cabeza”, luego renombrado “Don Sixto”, en el departamento de Malargüe, entre otros.

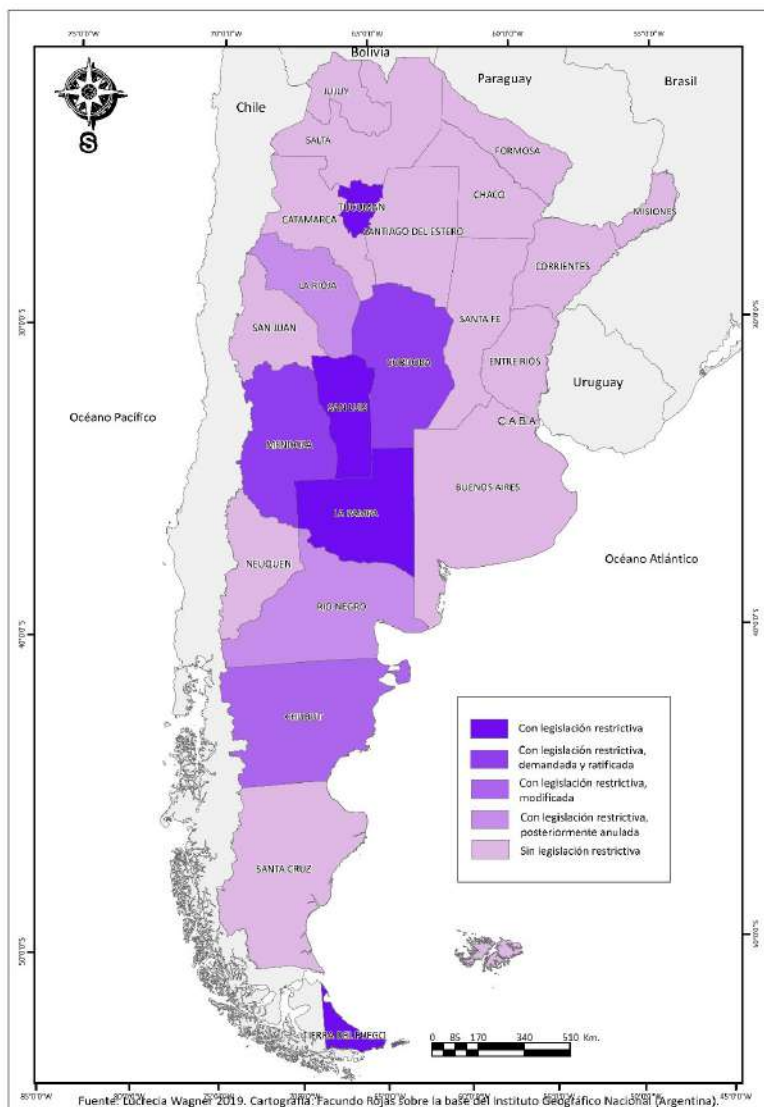
En Chubut, el proyecto de Ley 128/20, presentado por el propio gobernador y sus ministros, tuvo como objetivo establecer áreas exceptuadas de la ley existente, donde se habilitaría la explotación a cielo abierto de minería metalífera, manteniendo algunas prohibiciones, como el uso del cianuro. Se trata precisamente de la zona de interés del proyecto Navidad.

En Mendoza, el intendente de Malargüe, al sur de la provincia, y algunos legisladores oriundos de este departamento, proponen exceptuar a este departamento del área de aplicación de la Ley 7 722. Malargüe es uno de los departamentos donde más dificultades ha tenido la oposición a la megaminería, ya que se trata de una región con historia minera, y de perfil extractivo derivado principalmente de la explotación petrolera y algunas minas que funcionaron aproximadamente entre las décadas de 1920 y 1970, de manera intermitente y principalmente de minería no metalífera, con fuerte impulso estatal.

En ambos casos puede observarse que, luego de los conflictos socioambientales y las masivas movilizaciones organizadas por vecinos autoconvocados y otras organizaciones sociales, las empresas y Gobiernos intentan zonificar los territorios en función de sus intereses. Ante la imposibilidad de avanzar en todo el territorio provincial, resignan aquellas zonas que concentran mayor posibilidad de movilización y visibilización pública de las demandas, y se concentran en permitir la megaminería en determinadas zonas, privilegiando los proyectos que poseen mayor interés para el sector minero, y donde la reacción social, por diversos motivos, no es tan masiva como en otras partes de la provincia.

Así, se decide sacrificar zonas en función de intereses privados y de la capacidad de movilización de los pobladores locales sobre los que, en algunos casos, se realizan estrategias de promoción de empleos y otros beneficios que podrían derivar de los proyectos mineros.

Imagen 1. Mapa de provincias argentinas en relación con la existencia de legislación restrictiva para la actividad minera



Fuente: Wagner, 2019. Cartografía: Facundo Rojas.

Estos son solo dos casos que muestran en la práctica lo que Henri Hacsclrad ha denominado “Chantaje locacional”.

Esgrimiendo frente a los Gobiernos locales sus posibilidades de generación de empleos y de ingresos, las grandes empresas procuraron obtener ventajas fiscales y normativas como condición necesaria para la localización de sus inversiones. [...] Este chantaje de localización tiene dos resultados: en primer lugar, las normas sociales y ambientales de las localidades que ceden a las presiones empresariales son revocadas, atenuadas o burladas; y también, los movimientos sociales pierden parte de su base de apoyo, acusados de plantear exigencias que dificultan la llegada de capitales y la supuesta dinamización de la renta y del empleo. (Hacsclrad, 2006, p. 239)

Otro caso en el que se muestra este traslado de los costos y daños ambientales a territorios con legislación ambiental y laboral más laxa fue cuando el proyecto minero San Jorge, de cobre y oro, que pretendía localizarse cerca de la localidad de Uspallata, en Mendoza, fue rechazado por la legislatura mendocina, y entonces se planificó realizar la lixiviación (prohibida en Mendoza) en la provincia vecina de San Juan, ya que el proyecto se pretendía localizar a pocos kilómetros del límite entre ambas provincias.

Otra estrategia utilizada es la negación de la existencia “del otro” en el territorio. Así, las empresas ingresan en territorios indígenas sin realizar la consulta previa exigida por la legislación vigente, e intervienen sobre las prácticas y formas de vida de las comunidades. Por ello, en el caso de las explotaciones vía *fracking* de hidrocarburos no convencionales en la provincia de Neuquén, comunidades mapuche ocuparon pozos de petróleo para ser reconocidas y poder entrar en la mesa de negociación. “Estos mecanismos, al afectar de cerca el funcionamiento de las empresas, generan impactos directos para los poderes políticos y económicos que muchas veces llevan a que acepten el diálogo con las comunidades” (Maraggi, 2017).

La intervención de las empresas cerca territorios sin considerar los impactos sobre las actividades ya existentes, como la limitación

del pastoreo, veranada o invernada de comunidades crianceras (Wagner, 2019; Hadad et al., 2020), el aumento del tráfico en pequeñas poblaciones (Mastrangelo, 2004) o la llegada de un importante número de trabajadores a una localidad específica, especialmente hombres, en algunos casos acompañados de la instalación de casinos y prostíbulos, generando preocupación en las familias locales por los cambios en las formas de vida (Wagner, 2012).

3. Las expresiones territoriales de formas organizativas y estrategias de acción

Las estrategias de acción varían según la capacidad de movilización social y las oportunidades políticas existentes en diversos territorios. Sin caer en un determinismo del contexto político, determinadas situaciones particulares, como un Gobierno criminalizador de la protesta social, un cerco mediático que evita problematizar un proyecto, o una gran expectativa por parte de los pobladores locales sobre los beneficios que el proyecto podría acarrear, entre otros factores, pueden disminuir las posibilidades de movilización social.

Sin embargo, los conflictos ambientales en Argentina demuestran una gran capacidad, por parte de los colectivos movilizados, de visibilizar sus demandas, atraer el apoyo de las sociedades y pasar de las escalas locales a las provinciales y nacionales a través de acciones de coordinación y desarrollo de redes de apoyo entre diversos movimientos como asambleas locales, organizaciones campesinas, comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos, entre otras.

En un trabajo realizado junto a Mariana Walter (Wagner y Walter, 2020), analizamos las estrategias más utilizadas por los movimientos sociales que se oponen a la megaminería en Argentina (ver Imagen 2). La mayor parte de estas estrategias se concentran en visibilizar y difundir la problemática hacia la población en general. La realización de actos públicos de denuncia, y de murales, pintadas y monumentos en algunas localidades que fueron territorios claves del conflicto,

configura el espacio público de algunos poblados como escenarios donde estas disputas y debates están presentes (Imágenes 3, 4 y 5).

Imagen 2. Formas de movilización contra la megaminería



Fuente: Wagner y Walter (2020)

Imagen 3. Mural pintado en la entrada de la Municipalidad de General Alvear durante las movilizaciones de 2007 que permitieron la sanción de la Ley 7 722



Fuente: archivo personal.

Imagen 4. Mural que plasma la lucha en defensa de la Ley 7 722, San Martín, Mendoza



Fuente: <http://tiempodeleste.com/la-7722-es-del-pueblo-el-nuevo-mural-en-el-ingreso-a-san-martin/>

Imagen 5. Monumento a la Ley 7 722, inaugurado en General Alvear, Mendoza, a los 10 años de la sanción de esta ley



Fuente: <https://alveardiario.com/general-alvear-inauguro-el-monumento-a-la-ley-7722/>

Otra estrategia muy utilizada son las marchas y movilizaciones en el espacio público. Algunos lugares se vuelven espacios emblemáticos de movilización social, como las plazas en poblados pequeños, por ejemplo, en Famatina en La Rioja o en Jáchal en San Juan; el corte de camino que evita la llegada de insumos a los campamentos mineros, como Peñas Negras, en Famatina, o los alrededores de las legislaturas provinciales o casas de gobierno, en momentos donde lo que se reclama es una decisión gubernamental, como en Mendoza cuando fue modificada la Ley 7 722, en diciembre de 2019. Como los alrededores de la legislatura se habían convertido en un espacio de movilización contra la modificación de esta ley, un día antes de la sesión en la que la legislatura sancionó esta modificación, el Gobierno provincial ordenó cercar con vallas este edificio, algo que resultó muy simbólico para la población de Mendoza (ver Imágenes 6 y 7). “La Legislatura de Mendoza se prepara para la aprobación de las modificaciones a la Ley 7 722 con un gran despliegue policial. Las calles aledañas a la Legislatura, rodeando a la Plaza Independencia, están cortados y hay vallados con una gran presencia policial. Además, el tránsito está cortado en la zona y todas las líneas del Mendotran se han desviado”, detallaba uno de los medios provinciales más importantes de la provincia, el 20 de diciembre de 2020.

Este intento de frenar la movilización e impedir el ingreso a un espacio que simbólicamente era muy importante, colaboró con crear una imagen negativa del proceso (una votación en una legislatura cercada) y, tras la sanción de la modificación, se realizó una masiva concentración en la Casa de Gobierno de Mendoza. Una caravana partió de la localidad de San Carlos un día antes, caminando y en automóviles, recorriendo 100 Km para llegar a la Casa de Gobierno de la capital provincial (ver Imagen 8). Esta acción fue conocida como “la marcha más grande de la historia”, siendo recibida por cada localidad por la que pasaba y con una recepción masiva en la ciudad de Mendoza. Las asambleas por el agua de Mendoza circularon un afiche con el recorrido a realizar, que unía el nacimiento de la oposición a la megaminería en Mendoza, a inicios de la década de 2000 (Valle de Uco), con la capital provincial.

Imagen 6. Exterior de la Legislatura de Mendoza, diciembre 2020



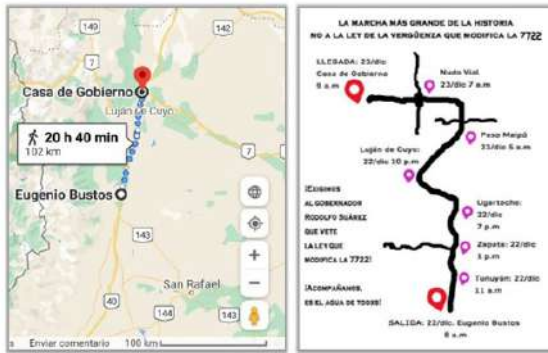
Fuente: <https://canalabierto.com.ar/2019/12/20/mendoza-las-mineras-van-por-el-agua/>

Imagen 7. Exterior de la Legislatura de Mendoza, diciembre 2020



Fuente: <https://seniales.blogspot.com/2019/12/mendoza-se-rebelo-y-bajan-la-ley-del.html>

Imagen 8. Recorrido de “La Marcha más grande de la historia”



Fuente: Google Maps y afiche realizado por AMPAP, publicado en diario *Los Andes* <https://www.losandes.com.ar/articulo/view/?slug=vecinos-de-san-carlos-iniciaron-la-marcha-contr-la-modificacion-de-la-7722>

Imagen 9. Masiva manifestación contra la modificación de la Ley 7 722 en la Casa de Gobierno de la ciudad de Mendoza



Fuente: <https://www.pagina12.com.ar/238117-mendoza-multitudinaria-marcha-contr-la-megamineria>

Imagen 10. Presencia del conflicto en medios de prensa internacionales



Fuente: Diario *El País* (España) y *The Guardian* (Reino Unido).

Esta movilización, coordinada por las asambleas mendocinas por el agua pura (AMPAP), alcanzó repercusión nacional e internacional por la masividad de la protesta (ver Imágenes 9 y 10), ampliando las escalas del conflicto.

Finalmente, otra estrategia de los movimientos es resignificar los espacios que son disputados entre poblaciones locales y proyectos extractivos. Lo que para empresas y Gobiernos es un corte de ruta que impide el paso hacia el proyecto que quieren desarrollar, para los movimientos sociales son espacios de esperanza que, en algunos casos, como en la defensa del cerro Famatina ante proyectos mineros, significan como “la barrera de la vida” (Imagen 11) y “el “corte de la dignidad” (Imagen 12).

La resignificación de sitios históricos que eran considerados ejemplos de modelos de desarrollo, como el cable-carril en Famatina, La Rioja, hacia ejemplos del saqueo que permanece en el territorio, y al cual se oponen las comunidades, es una de las maneras de resignificar el espacio en el que habitan (Rojas et al., 2020).

Imagen 11. La barrera de la Vida, Famatina, La Rioja



Fuente: <https://lavidadeviaje.com/el-agua-vale-mas-que-el-oro/>

Imagen 12. Corte de la Dignidad, Famatina, La Rioja



Fuente: <https://lavidadeviaje.com/el-agua-vale-mas-que-el-oro/>

Imagen 13. Testimonios sobre la resignificación de las “ruinas” de proyectos mineros, en perspectiva histórica



Fuente: Rojas, Wagner y Ruiz-Peyré (2020).

Además, el desarrollo de redes ha ampliado el alcance de las acciones colectivas, especialmente al aumentar la escala de las estrategias posibles y su grado de visibilización. A las acciones desplegadas por diversos colectivos en comunidades locales se sumaron estrategias organizadas entre diferentes movimientos a escala regional. Entre estas acciones, se destaca la organización de bloqueos simultáneos a los camiones de insumos mineros que tenían como destino al proyecto La Alumbarrera, en Catamarca, realizado por asambleas socioambientales de diferentes provincias en 2011. La acción conjunta permitió bloquear gran parte de los caminos posibles. Es importante destacar que, en el caso argentino, con excepción de estos bloqueos a insumos mineros, los bloqueos generalmente son cortes de rutas y calles de forma intermitente (solo en momentos muy complejos se ha llegado al bloqueo total) y se denominan cortes de ruta informativos, porque están acompañados de distribución de folletería y otro material explicativo a quienes circulan por estas vías de transporte (Wagner y Walter, 2020). Las redes han permitido ampliar la escala de las demandas, y visibilizar impactos de un mismo proyecto en diferentes provincias, o el traslado de una provincia a otra de actividades potencialmente contaminantes (ver Imagen 14).

Imagen 14. Bloqueos simultáneos a insumos de empresas mineras, y visibilización de la estrategia empresarial de mudar actividades prohibidas en una provincia (Mendoza), a la provincia vecina (San Juan)



Fuentes: fotografías tomadas durante trabajo de campo y material brindado por las asambleas de la Unión de Asambleas de Comunidades [UAC].

4. Reflexiones finales: límites, potencialidades y desafíos de las luchas para el cambio socioespacial y ambiental

En cuanto a las potencialidades, las acciones de estos movimientos sociales han permitido ampliar las escalas de sus demandas, y su visibilización. En algunos casos, sus pedidos han llegado a instancias institucionales nacionales, que se hicieron eco, por ejemplo, de la denuncia sobre la falta de integralidad en el análisis ambiental de proyectos mineros que atraviesan el territorio de diferentes provincias. En la Resolución 108/2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación:

[...] a- que se expida en el análisis de los impactos ambientales integrales, acumulativos e interjurisdiccionales del emprendimiento minero Potasio Río Colorado; b- que intervenga en las Evaluaciones de Impacto Ambiental de aquellos emprendimientos de similares efectos ambientales interjurisdiccionales; y c- que, para ello, establezca un Comité de Evaluación de Impactos Interjurisdiccionales con las autoridades ambientales de las provincias y con el COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente). (Wagner y Giraud, 2011).

Además, como puede observarse en los casos mencionados, han logrado impulsar legislación que aumenta la protección ambiental de territorios más amplios que los lugares donde se organizó la resistencia a un proyecto extractivo, y que ha inspirado a otros territorios a avanzar también en materia de legislación ambiental. Sumado a ello, han colaborado en reescribir la historia de regiones donde se siguen impulsando modelos de desarrollo que no son aceptados por las comunidades locales, y han permitido evidenciar las características comunes de problemáticas a las que diversos pueblos se enfrentan localmente, pero que responden a condiciones impuestas provincial, nacional o internacionalmente. En resumen, contestan las configuraciones y dinámicas territoriales que les son impuestas, reconfigurándolas y poniéndolas en tensión.

En cuanto a los límites y desafíos de las luchas, precisamente lo son el lograr que una lucha local se perciba como parte de una problemática de mayor alcance, y que las sociedades en las que se encuentran perciban estas problemáticas como propias, y las apoyen y acompañen. En muchos casos el poder al que se enfrentan estos movimientos fragmenta las comunidades entre quienes se encuentran a favor o en contra de una actividad. Otro límite es el cerco mediático, que lleva a estos movimientos a tener que recurrir a medios de comunicación alternativos y alianzas con otras organizaciones, ya que la lucha es asimétrica y los recursos que poseen suelen ser limitados ante el poder de Gobiernos y empresas, lo cual les implica esforzarse en desarrollar estrategias creativas, sostenerlas en el tiempo y plasmarlas en el espacio público para garantizar su sostenibilidad.

Bibliografía

Acselrad, H. (2006). Las políticas ambientales ante las coacciones de la globalización. En H. Alimonda (comp.), *Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana* (pp. 231-248). Buenos Aires: CLACSO.

Acselrad, H. (2010). Ambientalização das lutas sociais -o caso do movimento por justiça ambiental. *Estudos Avançados*, 24 (68), 103-119.

Arzeno, M., Ponce, M. y Villareal, F. (2018). El análisis de conflictos territoriales: notas teórico-metodológicas a partir de estudios de caso. En H. Castro y M. Arzeno (coords.), *Lo rural en definición; aproximaciones y estrategias desde la Geografía* (pp. 127-148). Buenos Aires: Biblos.

Hadad, M. G., Palmisano, T. y Wahren, J. (2020). *Socio-territorial Disputes and Violence on Fracking Land in Vaca Muerta, Argentina, Latin American Perspectives*. <https://doi.org/10.1177/0094582X20975009>

Maraggi, I. (2017). *Resistir al avance extractivista: Las comunidades Mapuche Paynemil, Kaxipayiñ y Campo Maripe frente a los conflictos territoriales en Loma La Lata y Loma Campana, Neuquén*. [Tesis de grado]. Universidad Nacional de La Plata. <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1476/te.1476.pdf>

Martínez Alier, J. (2004). Los conflictos ecologico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad. *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*, 1, 21-30.

Mastrangelo, A. (2004). *Las niñas Gutiérrez y la mina Alumbreira. La articulación con la economía mundial de una localidad del Noroeste Argentino*. Buenos Aires: Antropofagia.

Merlinsky, G. (comp.). *Cartografías del conflicto ambiental en Argentina 3* (pp. 247-278). Buenos Aires: CICCUS / CLACSO. Rojas, F., Wagner, L. y Ruiz Peyré, F. (28 de febrero al 2 de marzo de 2020). *Cartographies and scars in the territory. Looking to the past of mining projects in order to understand the socio-environmental present. 2nd Austrian Conference on International Resource Politics*. Resources for a social-ecological transformation, Universidad de Innsbruck, Austria. Sabatini, F. (1997). Conflictos ambientales y desarrollo sustentable de las regiones urbanas. *EURE*, XXII (68), 77-91.

Wagner, L. y Walter, M. (2020). Cartografía de la conflictividad minera en Argentina (2003-2018). Un análisis desde el Atlas de Justicia Ambiental. En G. Merlinsky (comp.), *Cartografías del conflicto ambiental en Argentina 3* (247-278). Buenos Aires: CICCUS / CLACSO. Wagner, L. (2019). Propuestas de inversiones chinas en territorio mapuche: resistencias a la minería metalífera en Loncopué. *Estudios Atacameños*, 63, 315-339. <https://doi.org/10.22199/issn.0718-1043-2019-0028>

Wagner, L. (2014). *Conflictos socioambientales: la megaminería en Mendoza, 1884-2011*. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.

Wagner, L. (2012). Uspallata: ecos sociales de la megaminería en un valle andino. *CLAROSCURO*, 11, 191-215.

Wagner, L. y Giraud, M. (2011). El proyecto minero Potasio Río Colorado: Conflicto socioambiental, impactos regionales y falta de integralidad en la evaluación ambiental. En H. Alimonda (coord.), *La Naturaleza colonizada: Ecología política y minería en América Latina* (pp. 261-288). Buenos Aires: CLACSO.

Conflitos, acumulação por espoliação e governo bio/necropolitico do território no contexto de grandes projetos de des-envolvimento

Valter do Carmo Cruz e Bruno Cesar Malheiros

Introdução

O nosso ponto de partida é que os grandes projetos de des-envolvimento são dispositivos territoriais capazes de suspender, em termos políticos, jurídicos e normativos, toda a complexidade e diversidade territorial dos espaços nos quais se instalam. Ao se constituírem pelos signos da modernidade capitalista, expressam, em intensidade, concentração e centralização de capital, os modos mais violentos de expansão de relações capitalistas e, por isso, também expõem, em termos paradigmáticos, a reconfiguração da questão agrária, os limites de nossa democracia e nosso atual modelo des-envolvimento uma vez que a racionalidade territorial desses megaempreendimentos imprimem uma geo-grafia do des-envolvimento que para se realizar, solapa as condições de realização de outras geo-grafias de povos, grupos e comunidades.

Adotamos a escrita de “geo-grafia do des-envolvimento”, ao invés de “geografia do desenvolvimento”, por entendermos, como Porto-Gonçalves (2006), a geografia não como substantivo, mas como

verbo, como ato/ação/práticas de marcar a terra. É desse modo que podemos falar de uma geo-grafia do des-envolvimento em que os diferentes agentes inscrevem lógicas territoriais, marcas, práticas e usos que re-significam o espaço e, assim, com novos signos, grafam a terra, geografam, reconfigurando a sociedade e seus territórios. Já des-envolvimento, para o referido autor, significa tirar o envolvimento (a autonomia) que cada cultura e cada povo mantém com o seu espaço, com o seu território; é subverter o modo como cada povo mantém suas próprias relações de homens e mulheres entre si e destes com a natureza; é não só separar homens e mulheres da natureza, como, também separá-los entre si, individualizando-os. Des-envolver é envolver cada um (os desterritorializados) em uma nova configuração societária, a capitalista, através de técnicas e dispositivos sociais e políticos empregados para promover esse des-envolvimento, tais como os novos cercamentos das terras e dos recursos naturais, ou melhor, a privatização das terras e dos recursos de uso comum (Porto-Gonçalves, 2006).

Esses grandes projetos que são verdadeiros paradigmas dessa geo-grafia do des-envolvimento nos diferentes momentos históricos e como expressão de variados espectros políticos - sem distinção de esquerda e direita - são sempre anunciados e enunciados como inevitáveis (defendidos como estratégicos para segurança e soberania nacional), como uma necessidade política para a garantia das condições materiais do des-envolvimento, uma vez que, quando falamos deles, estamos falando em energia, minérios, petróleo, logística, elementos fundamentais para a sustentação material do modo de vida moderno. Esse discurso da inevitabilidade/necessidade fez com que a sistemática violência aos povos e a devastação da natureza provocados por esse grande projeto se transformassem em detalhes diante de escolhas políticas de governos.

Os grandes projetos de des-envolvimento são máquinas biopolíticas que fazem viver e deixam morrer. Estes grandes projetos têm produzido verdadeiros territórios de sacrifício. Por isso, refletir sobre esses dispositivos territoriais implica em nos interrogarmos acerca

de como são produzidas as condições materiais de reprodução da vida de um cidadão, por exemplo, de uma grande cidade do Brasil. De onde vem os alimentos, a água, a energia, os materiais que constroem os sistemas técnicos que nos oferecem comodidade? Quantas vidas são sacrificadas para o nosso conforto material? Nós temos responsabilidade quando povos desconhecidos, distantes em milhares de quilômetros de nossas vidas cotidianas, são afetados pelos grandes projetos? Nossa ignorância nos isenta de responsabilidade? Qual o peso de nossa indiferença em relação à geografia da violência que opera nesses territórios de sacrifícios? O que contribuiu para que toda a violência praticada por esses megaempreendimentos tivesse menos importância do que a necessidade de mantermos certo padrão moderno (colonial) de vida? Escolhemos, enfim, deixar morrer inúmeros sujeitos, comunidades, povos, apenas porque decidimos nos des-envolver por intermédio de grandes projetos?

Este artigo pretende problematizar a dinâmica de exceção dos processos de territorialização desses grandes empreendimentos de des-envolvimento, a fim de desnaturalizar suas lógicas de violação e questionar os sentidos concretos de sua necessidade. Para isso, esse texto se divide em quatro partes: na primeira sustentamos a hipótese de serem os grandes projetos paradigmas de compreensão do capitalismo contemporâneo no espaço agrário brasileiro; na segunda, discutiremos a realização dos grandes projetos como processos de acumulação por espoliação, regimes de expropriação de terras e cercamentos do comum; em um terceiro momento, entraremos na dinâmica de realização desses megaempreendimentos por meio do governo bio/necropolítico do território, levantando os termos para a compreensão dos processos de territorialização de exceção; e, por fim, faremos algumas considerações finais recuperando alguns elementos desenvolvidos ao longo do texto e fazendo uma síntese do percurso analítico.

Grandes projetos de des-envolvimento como paradigma de compreensão dos conflitos territoriais e ambientais no capitalismo contemporâneo

Experimentamos na América Latina, nas duas últimas décadas, uma espécie de consenso político e ideológico, que aponta a mercantilização da natureza e a exploração intensiva e em grande escala de recursos naturais, como únicas vias legítimas ou possíveis para o des-envolvimento econômico. Esse processo, definido por Svampa (2013) como “consenso das commodities”, entende que a exportação de commodities agrícolas e minerais, como motor de inserção na geoeconomia e na geopolítica global, torna-se um projeto consensual, não importando o espectro político-ideológico dos diferentes governos da região, de esquerda à direita, dos conservadores àqueles com inclinações progressistas. A escolha por um padrão extrativo de acumulação e a participação na divisão internacional do trabalho sustenta-se pela crescente demanda e valorização de certos produtos no mercado internacional, principalmente nos países centrais do capitalismo e também nos países emergentes, como a China, que é um dos principais consumidores de matérias-primas oriundas do continente latino-americano.

A lógica espacial desse modelo vem se materializando através dos “grandes projetos de des-envolvimento”, processos de territorialização corporativos de larga escala que se caracterizam pela concentração, centralização e intensividade espaço-temporal de investimentos (Vainer, 2010). Estes grandes projetos estão concentrados, sobretudo, em alguns setores da economia, basicamente na exploração intensiva de recursos naturais no campo mineiro-metalúrgico, petroquímico, especialmente na cadeia de produção do gás e do petróleo. Outros dois segmentos importantes que concentram grandes projetos são o energético, especialmente com relação à construção de grandes usinas hidroelétricas, e o setor que pensa e viabiliza a logística de transporte, como estradas, portos, hidrovias, ferrovias etcétera.

Essa escolha espacial, política e econômica pela exportação de commodities agrícolas e minerais vem acirrando os conflitos ambientais e territoriais, pois a dinâmica de territorialização desses empreendimentos se realiza através de um processo de “ajuste espacial”, incorporando novas áreas e abrindo novas fronteiras à lógica de acumulação pelos negócios do agro, da mineração, da energia ou da infraestrutura. O capital expande seu domínio territorial sobre espaços que não estavam até hoje plenamente incorporados aos circuitos da acumulação global; esses verdadeiros “fundos territoriais” (Moraes, 2011) se transformam em novas fronteiras nas quais a acumulação se realiza por dispositivos e mecanismos de espoliação, o que significa, entre outras coisas, um violento processo de apropriação e expropriação de recursos naturais, terras e territórios (Harvey, 2005).

Paralelamente, esse “ajuste espacial” demanda um novo meio técnico-científico e informacional, novos sistemas de objetos e de ações para a consolidação de uma base produtiva e logística capaz de imprimir velocidade e fluidez - atributos fundamentais na reprodução do capital (Santos, 1996). Além de uma nova densidade técnica, é necessário criar uma outra densidade normativa, um modo de regulação do território, que implica na flexibilização ou supressão de instrumentos jurídicos, como leis, códigos e zoneamentos (Acsehrad, 2013). Essa desnormatização tem como intuito “alisar” o espaço, ou seja, retirar os “obstáculos” jurídicos para, assim, redefinir o acesso, o controle e os usos do território, de acordo com os interesses corporativos. Dessa forma, criam-se verdadeiros territórios corporativos de exceção, onde ocorre também a suspensão do estado de direito de indivíduos e grupos (direitos ambientais, territoriais, trabalhistas, direitos humanos), minando as garantias fundamentais da vida.

Esses projetos provocam, também, processos de grandes rupturas e fraturas metabólicas que afetam paisagens, ecossistemas e toda a dinâmica geo-bio-física das áreas onde são implantados, promovendo mudanças e reestruturação socioespacial e ambiental na escala local e até regional. A conformação desses grandes projetos tem

como marca um intenso e violento processo de desterritorialização compulsória e precarização territorial das populações onde esses grandes vetores de modernização se realizam. Trata-se da destruição de mundos, pois tal processo afeta, de maneira dramática, os recursos e os modos de vida de camponeses, indígenas, quilombolas e dos povos e comunidades tradicionais, em geral, resultando em intensos conflitos ambientais e territoriais, o que gera milhares de “refugiados do desenvolvimento” (Vainer, 2010). Entretanto, essa geo-grafia dos grandes empreendimentos não é constituída somente a partir dos rastros de violência e das ruínas dos locais onde se instalam, mas também de lutas, conflitividades e antagonismos que se amplificam, expressando-se em uma diversidade de formas de r-existências.

Mas afinal, porque estudar as geo-grafias dos grandes projetos de des-envolvimento? Nossa hipótese de trabalho é que tais projetos, além de outros de mesma natureza, representam casos paradigmáticos da dinâmica particular de territorializações dos processos de acumulação de capital no Brasil.

Por esses termos, acreditamos que determinadas realidades empíricas (como é o caso dos grandes projetos) têm o papel de síntese de processos e realidades mais amplas, pois concordamos com a afirmação de José de Sousa Martins (2013) de que, metodologicamente, existem certas situações, experiências, grupos sociais e territórios que possuem um maior potencial de revelação das lógicas que organizam uma sociedade do que outros, ou seja, há certas entradas privilegiadas na investigação empírica, para compreender e explicar uma sociedade. Existem, enfim, certas plataformas analíticas que oferecem ao pesquisador uma condição especial de observação e análise. Essas realidades empíricas, epistêmicas e metodologicamente privilegiadas, têm a ver com aquelas situações, sujeitos e lugares considerados marginais, liminares que, de algum modo, são vítimas do capitalismo, da modernidade e do colonialismo.

Martins, não está isolado na ideia de que certas situações, certas experiências são, em si, metodológicas. Hanna Arendt (2012), por exemplo, em raciocínio semelhante, fala da sua escolha de estudar

certos “fenômenos extremos” como reveladores da lógica da política. Assim, para analisar tal fenômeno, a filósofa busca compreender experiências extremas da prática política, tais como os regimes totalitários, as revoluções, os movimentos terroristas etc. Essas situações têm a força de revelar com mais profundidade e nitidez a natureza da política e os dilemas das ideias, tradições e instituições. Michel Foucault (1979), na mesma direção, sugere que um dos seus princípios de método é tentar compreender a sociedade ocidental e sua racionalidade política a partir do estudo de “experiências-limites”, tais como a loucura, o crime, a sexualidade etc.

Com grandes afinidades com as ideias anteriores, Giorgio Agamben (2009) fala de “casos paradigmáticos” como recurso metodológico. Para esse autor é possível, metodologicamente, trabalhar com a ideia de que determinados casos empíricos podem exercer um verdadeiro papel de paradigma para a compreensão de um contexto mais amplo. Isto significa dizer que estudar casos extremos, representativos de determinados fenômenos sociais, devido a sua importância e representatividade, podem oferecer elementos de inteligibilidade de um contexto mais ampliado, por intermédio de analogias, iluminações e ressonâncias. Os casos paradigmáticos, apesar de referirem-se a realidades singulares, definem a inteligibilidade do conjunto do qual fazem parte e que, ao mesmo tempo, constituem.

Concordando e inspirados nesses princípios metodológicos, acreditamos que a geo-grafia dos grandes projetos, ou melhor, os processos de territorialização desses empreendimentos, suas contradições, conflitos, as lutas e as r-existências a esses processos constituem uma realidade paradigmática que nos permite compreender um conjunto de dinâmicas fundamentais que atravessam a ordem territorial da sociedade contemporânea.

Lançar o olhar sobre essa realidade nos possibilita problematizar as principais linhas de força que constituem o atual momento do nosso capitalismo periférico e de nossa modernidade colonial: a) um padrão de acumulação por espoliação que avança por sobre os recursos públicos e comuns, estabelecendo uma nova onda de cercamentos,

uma ofensiva que busca disciplinar e regular a sociedade pela lógica do mercado, imprimindo um processo de commoditização em todos os domínios da vida social; b) um padrão de acumulação de natureza extrativista que é predatório do ponto de vista ambiental, pois opera de maneira intensiva sobre os recursos naturais, gerando grandes rupturas e fraturas metabólicas, e coloca em questão os limites materiais do nosso atual modelo de des-envolvimento e civilizatório, em sentido amplo; c) o limite de nossas democracias e do estado de direito, bem como a ascensão do estado de exceção e de uma governamentalidade autoritária do território; d) o conjunto desses processos resulta em um governo bio/necropolítico do território, ancorados em uma visão colonial e em práticas sistemáticas de violência, que administra uma política de morte sobre os grupos mais vulneráveis, como camponeses, quilombolas, povos indígenas e outras comunidades tradicionais.

Grandes projetos: acumulação por espoliação, regimes de expropriação de terras e cercamentos do comum

Os grandes projetos não podem ser compreendidos distantes das dinâmicas de acumulação para os quais são pensados. Nesses termos, de que forma de acumulação, ou melhor, de que capitalismo estamos falando quando estudamos os grandes projetos?

A resposta a tal questionamento só pode ser construída se entendemos, de antemão, que a dinâmica de territorialização desses grandes empreendimentos significa, sobretudo, grandes apropriações de terras, não somente a terra em si, mas apropriação do subsolo, da água, da biodiversidade etc. Na lógica desse capitalismo extrativo, a natureza é vista como matéria-prima, como recurso, como commodity a ser apropriada, transformada, vendida e comprada. A ideia dominante nessa matriz de racionalidade é de uma natureza como obstáculo, o que passa a se tornar a lógica geral, naturalizada por políticas estatais e/ou estratégias corporativas.

Essa corrida por terras rumo as áreas naturais (praias, mares e ecossistemas florestais, rios, serras e montanhas, chapadas, charcos e lagoas) ou rumo às terras ocupadas por lógicas comunitárias (vales e distritos camponeses, terras indígenas, planícies com agricultura familiar, áreas de pesca artesanal, territórios quilombolas etc.), representam um extenso repertório de exemplos de mercantilização, cujo caráter devastador sobre numerosas populações e territórios ameaçam a reprodução da vida em todas as suas expressões (Barcelos, 2018).

Rosa Luxemburgo chega a nos mostrar que o instituto da propriedade privada capitalista é um motor de processos de acumulação pela via da violência, afirmando que a cada expansão do capitalismo há uma “guerra encarnçada” do capital contra outras relações econômico-sociais de povos nativos, além de uma “desapropriação violenta de seus meios de produção e (...) roubo de sua força de trabalho” (Luxemburgo, 1984, p. 33).

Neste sentido, falar da dinâmica de acumulação por intermédio dos grandes projetos exige-nos analisar os novos cercamentos, demonstrando os diferentes mecanismos e dispositivos violentos por meio dos quais se realiza esse tipo de acumulação, dentre os quais podemos citar:

[...] a mercadificação e a privatização da terra e a expulsão violenta de populações camponesas; a conversão de várias formas de direitos de propriedade (comum, coletiva, do Estado, etc.) em direitos exclusivos de propriedade privada; a supressão dos direitos dos camponeses às terras comuns [partilhadas]; a mercadificação da força de trabalho e a supressão de formas alternativas (autóctones) de produção e consumo; processos coloniais, neocoloniais e imperiais de apropriação de ativos (inclusive de recursos naturais); a monetarização da troca e a taxação, particularmente da terra; o comércio de escravos; e a usura, a dívida nacional e em última análise o sistema de crédito como meios radicais de acumulação primitiva (Harvey, 2005, p. 121).

Quando David Harvey (2005) propôs a teoria do ajuste espacial, ele tentou compreender essencialmente a dinâmica fronteira do capital, ou seja, o papel das reconfigurações geográficas no processo de acumulação. Ele afirmava a existência de uma necessidade constitutiva do capitalismo, diante das crises que ocorriam no interior do sistema, de se expandir e criar novas fronteiras, enfim, de se apropriar de realidades espaciais não capitalistas.

O capitalismo sempre se utilizou de fundos de ativos externos a si mesmo para enfrentar problemas de sobreacumulação, tais como apropriação de terra nua, novas fontes de recursos naturais, supressão de direitos coletivos, expulsão violenta de trabalhadores e camponeses (Harvey, 2005 p. 122)

Harvey (2005) investe grande energia teórica para demonstrar o papel contínuo e a persistência desses mecanismos no capitalismo contemporâneo, substituindo, inclusive, adjetivos dados a esse tipo de acumulação, como primitivo e original, pela construção do conceito de acumulação por espoliação. Identifica, ainda, a lógica e racionalidade desses mecanismos em formas contemporâneas de espoliação, como nas questões relacionadas aos direitos de propriedade intelectual; em toda a dinâmica de biopirataria; na mercantilização de formas culturais, históricas e da criatividade intelectual; na corporativização e privatização de bens até agora públicos (universidades, sistemas de saúde, água, terras comuns); e mesmo na lógica do sistema de crédito e capital financeiro, com seu estilo especulativo e predatório (HARVEY, 2005).

Tratando, também, dessa dinâmica de espoliação, Michel Levien (2014) chega a nos advertir que, diferente dos processos de exploração do trabalho, que pressupõem uma dinâmica de alienação e coação permanente do trabalhador, a acumulação por espoliação envolve mudanças traumáticas, processos de desapropriação conflituosos, sendo que é inimaginável pensar nesses processos sem compreender que eles são, na maioria das vezes, empreendidos ou possibilitados pelo próprio Estado, como agente portador do monopólio da violência. A ressalva de Levien (2014, p. 37) também é metodológica, uma

vez que registra a necessidade de pensarmos além do papel funcional ao capitalismo da acumulação por espoliação, para pensarmos pelo conjunto de meios e de arranjos necessários para se efetivar tais relações e práticas, entendidas, desse modo, como regimes de desapropriação, definidos como “o uso de coerção extraeconômica para expropriar ativos não relacionados ao trabalho de um grupo para o benefício de outro”.

Em última análise, a [espoliação] é um processo por meio do qual os detentores de meios de coerção obrigam os detentores de meios de produção ou subsistência (comunal ou privada) a cedê-los a terceiros. [...] a espoliação é uma relação política de redistribuição fundamentada em diferentes configurações de classes e executada por Estados com seus meios específicos de gerar consenso (incluindo os idiomas específicos de justificação) (Levien, 2014, p.45).

No mesmo sentido, Sandra Lencioni (2012) faz distinção semelhante entre espoliação e exploração. Para essa autora, o processo de acumulação primitiva está relacionado à espoliação, enquanto o de reprodução do capital está associado à exploração.

Espoliação significa privar alguém de algo, por meios ilícitos, ilegítimos ou violentos. É esse o sentido dos mecanismos espoliativos, como aquele que nega o direito à posse. Por exemplo, sob o selo da propriedade privada capitalista se arranca da terra, os que vêm nela vem trabalhando há várias gerações. Já a exploração se vincula aos diversos procedimentos que buscam se apossar do lucro, por meio da sujeição da posse e do domínio da propriedade privada (Lencione, 2012, p 3).

Quando falamos em hidrelétricas, da megaexploração de minérios, de megaempreendimentos logísticos de dotação de infraestrutura no território não falamos apenas de dinâmicas de superexploração do trabalho e da natureza, configurando modos específicos de drenagem energética por mecanismos de espoliação, falamos também na expropriação das condições objetivas de vida de múltiplos povos e comunidades, falamos ainda, da confluência de

interesses entre grandes corporações e o Estado. Esse processo não pode ser compreendido apenas na escala da acumulação da dinâmica de divisão internacional do trabalho, nem apenas na escala das trocas desiguais de matéria e energia, mas também na escala do impedimento da vida, do solapamento das condições de existência de diversos grupos, povos e comunidades.

Por isso, a lógica de expansão capitalista por meio dos grandes projetos de des-envolvimento, nesses termos, assume o caráter de um cercamento do comum. “O termo cercamento faz pensar, sobretudo, no açambarcamento de terras e recursos naturais praticado em escala mundial” (Dardot; Laval, 2017, p. 107). Trata-se, portanto, de um cercamento da natureza e dos meios de existência, dos ambientes por onde se realizam as diferenças, dos espaços onde ocorrem distintos processos de produção da vida social, o que dá origem a territorializações voltadas à exploração de recursos.

Essa grande apropriação, em toda a sua variedade de suas manifestações, acarreta fenômenos maciços de exclusão e desigualdade, contribui para acelerar o desastre ambiental, transforma a cultura e a comunicação em produto comercial e atomiza cada vez mais a sociedade em indivíduos-consumidores indiferentes ao destino comum (Dardot; Laval, 2017, p. 109).

Os novos cercamentos surgem como uma progressiva e violenta expropriação do comum, ou seja, como um jogo complexo de disputas sociopolíticas e territoriais em torno do uso, acesso e controle dos bens da natureza, uma espécie de versão contemporânea da separação (clivagem) da sociedade de suas bases materiais de existência (Barcelos, 2018).

Os grandes projetos de des-envolvimento, como expressão desses novos cercamentos - que açabarcam o comum, drenam matéria e energia e destituem de estatuto político aqueles que se colocam em seu caminho - atualizam, dessa forma, a lógica das plantations coloniais, as quais Achille Mbembe (2016) identifica como os paradigmas fundamentais da emergência do estado de exceção, por representarem espaços em que “a soberania consiste, fundamentalmente, no

exercício de um poder à margem da lei (...) e no qual tipicamente a paz assume a face de uma guerra sem fim” (Mbembe, 2016, p. 132). É essa esfera de indeterminação política criada pelos megaempreendimentos que queremos agora compreender melhor.

Grandes projetos e o governo bio/necropolítico do território: os processos de territorialização de exceção

Os métodos violentos por meios dos quais a dinâmica de espoliação via grandes projetos se realiza, implica-nos a pensar que tais processos indicam não apenas uma lógica econômica perversa, mas dinâmicas políticas que desmontam os sentidos básicos que sustentam qualquer ideia de democracia, uma vez que estamos falando da expropriação das condições de existência e energias vitais de grupos, povos e comunidades como lógica legitimada de des-envolvimento.

Há, portanto, um ajustamento das populações aos movimentos econômicos, isto é, uma divisão que garante que a morte regulada de alguns, signifique a vida regulada de outros, como nos aponta Foucault (2008). E não estamos falando de monarquias absolutistas, pelo contrário, assim como Agamben alerta, essas técnicas de governo, inscritas num “patamar de indeterminação entre a democracia e o absolutismo” (Agamben, 2004, p.13), colocam-se como um paradigma constitutivo de toda nossa ordem jurídica, agora, de exceção, que, nesses termos, pode ser pensada como uma ordem que inclui para excluir.

Quando, por exemplo, os indígenas entram em cena no debate público em torno de um grande projeto, geralmente a imagem que os é reservada é a de entrave. Suas vidas são menos importantes que a necessidade do des-envolvimento, sua inclusão na política é justamente para justificar sua exclusão. Por isso, essa geografia de exceção que se realiza por grandes projetos, deixa morrer “aquilo que não pode ser incluído no todo ao qual pertence e não pode pertencer ao conjunto no qual está desde sempre incluído” (Agamben, 2002, p. 32).

A racionalidade desses megaempreendimentos, portanto, expõe uma nova tragédia: “se ontem, o drama do sujeito era ser explorado pelo capital, a tragédia da multidão hoje (...) é ser relegada a uma ‘humanidade supérflua’, entregue ao abandono, sem qualquer utilidade para o funcionamento do capital” (Mbembe, 2018, p. 15, 16). O abandono e a falta de utilidade de grupos, comunidades e povos, tratados como “entraves” ao des-envolvimento, serão motores não apenas biopolíticos, mas necropolíticos, uma vez que, nesse caso, falamos de uma política de morte.

Dessa forma, tal qual compreendemos que os processos de acumulação primitiva, ou de acumulação por espoliação, não se constituem em um momento prévio e preparatório do capitalismo, mas uma marca constitutiva dele, acreditamos ser o estado de exceção e as formas de governo bio/necropolítico do território também constitutivos dos regimes democráticos. Nesse sentido, se os grandes projetos se expressam como dinâmicas de realização da espoliação no capitalismo contemporâneo, eles só se realizam tornando a exceção a regra em seus processos de territorialização.

Os grandes empreendimentos são, portanto, paradigmas fundamentais na compreensão do estado de exceção na contemporaneidade, uma vez que compreendem processos capitalistas que se realizam suspendendo vidas, estruturando uma maneira específica de governo corporativo do território, que interliga discursos, instituições e disposições espaciais fora do ordenamento jurídico, produzindo situações nas quais a suspensão da lei torna-se a própria lei. Esses mecanismos esvaziam de direitos os espaços onde se territorializam esses empreendimentos, criando zonas de indiferença. Assim, territórios antes preenchidos de simbolismo, vida e cultura são, simplesmente, transformados em espaços nulos, desprovidos de qualquer regra, vazios de direito, ou seja, espaços para os quais a possibilidade econômica da exploração apaga sua história e geografia (Malheiro, 2019).

Em outras palavras, os espaços onde se territorializam esses grandes projetos, precisam se tornar livres de qualquer regulamentação

para que o Estado possa usar a prerrogativa de exercer formas de regulação especial, de acordo com os contextos e interesses em jogo. Existe claramente uma lógica econômica nisso tudo, que é a de construir regimes especiais de exploração a partir de termos e normas também especiais, de modo a garantir lucros extraordinários a partir de processos de acumulação violentos.

Os grandes projetos, nesses termos, constituem-se em uma maneira particular e racional de manipulação das relações de força, pois demonstram uma maneira específica de governo bio/necropolítico do território, estruturando a ação de quem quer que se coloque no caminho a partir de sua racionalidade, definindo todas as oposições como irracionais. Essa maneira de manipular as relações de poder interliga um conjunto de discursos de progresso, uma variedade de instituições, uma forma específica de organização do espaço marcada pelo gigantismo e pela opulência da técnica, além de leis que são criadas ou burladas em nome da execução de tais projetos.

Esses megaempreendimentos não são quaisquer dispositivos, são dispositivos de exceção, pois sempre são colocados pelo signo da segurança ou interesse nacional e, mesmo que em discordância aos marcos legais vigentes, são tomados como necessários. Com base nesses termos, a dinâmica espacial desses grandes projetos pode ser compreendida pelos processos de territorialização de exceção, já descritos por Haesbaert (2014) a partir de uma leitura geográfica da compreensão do campo de concentração como paradigma biopolítico em Agamben. Esses processos, em termos mais concretos, podem ser melhor compreendidos a partir de três dinâmicas complementares, a saber: a criação de mediações espaciais de exceção; a interdição da possibilidade de existência de outras territorialidades e de outros fluxos e usos do território; o ataque sistemático e organizado aos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais.

Em primeiro lugar, entendendo-se que territorializar significa, como nos fala Haesbaert (2004, p. 92), “criar mediações espaciais que nos proporcionem efetivo ‘poder’ sobre nossa reprodução enquanto grupos sociais”, um aspecto a se ressaltar é que a criação de

mediações espaciais, nos processos de territorialização de exceção, passam por dinâmicas de suspensão normativa, seja através da criação de regimes jurídicos especiais, por rearranjos institucionais e pela projeção de um sentido privado a instrumentos jurídicos pretensamente criados para um sentido coletivo, seja pela desregulação dos sistemas normativos vigentes, o que permite que o exercício do poder e a dinâmica de territorialização se realize legalmente fora da lei (Malheiro, 2019).

Em segundo lugar, as relações de poder que definem os processos de apropriação/dominação do espaço (Haesbaert, 2004) poderiam ser melhor descritas nos processos de territorialização de exceção como dinâmicas de governamentalização do espaço, ou seja, são práticas espaciais agindo sobre a possibilidade de existência de outras práticas espaciais, ou ainda, são ações que agem sobre a possibilidade da ação de outros, uma forma de estruturação/definição/interdição do campo de ação dos outros (Foucault, 1995). Isso se traduz como a estruturação de um conjunto de instituições, procedimentos, discursos e cálculos estatísticos de exercício do poder, tendo como alvo a população, ou os cortes populacionais, ou em termos mais geográficos, processos territoriais que interditam a possibilidade de existência de outros territórios e territorialidades. Por essas vias, os processos de territorialização de exceção são, também, processos de interdição da possibilidade de existência de outras territorialidades e de outros usos do território (Malheiro, 2019).

Se tomarmos essa transformação dos espaços necessários à produção, circulação e exportação de commodities - as zonas de extração, espaços inundados, estradas de ferro, rodovias, portos, dentre outros - em territórios administráveis para a viabilização dos processos de acumulação de uma corporação, temos que admitir que não apenas os espaços mercantis precisam ser disciplinados empresarialmente, mas também os espaços não mercantis transformam-se em territórios de atuação dos processos de segurança corporativa (Acselrad, 2018) que, nesse quadro de referência, preocupam-se com dois elementos básicos que garantem um estado de relações

normalizado: a garantia do uso do território como recurso e o controle dos fluxos de seus sistemas logísticos.

Assim, os grandes projetos não são mais enclaves espaciais em uma definição puramente econômica, pois que essa leitura desconsidera a relação violenta desses megaempreendimentos com suas regiões de abrangência, desconsidera, enfim, que tais projetos funcionam racionalizando seus entornos por suas lógicas de territorialização.

A terceira marca fundamental dos processos de territorialização de exceção pode ser descrita pela definição de um recorte racial e étnico por esses processos de territorialização, que, desse modo, podem ser descritos como uma campanha de desterritorialização, nos termos definidos por Almeida (2010). Ou seja, os processos de territorialização de exceção podem ser lidos como um ataque sistemático e organizado aos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais

Não sem razão são mais de 4 mil requerimentos de processos minerários em terras indígenas entre 1969 e 2016 no Brasil (Pública, 2016), são, também, mais de um milhão de pessoas deslocadas pelas mais de duas mil hidrelétricas já construídas (Mab, 2004), entre os desalojados, milhares de povos e comunidades tradicionais; sem contar o processo sistemático de desregulação de direitos territoriais conquistados e inscritos na Constituição de 1988, para viabilização da expansão da indústria mineral, do agronegócio, do hidronegócio, dentre outras formas de mercantilização da natureza (Freitas, 2018).

Em linhas gerais, o que parece extremamente evidente na realidade dos grandes projetos é que eles representam uma lógica de pensar moderno-colonial, ou seja, para a realização de seus processos de territorialização, precisam excluir de sua racionalidade outras territorialidades. Isso corresponde a uma ideia de des-envolvimento, como crescimento econômico, fundamentada numa visão predatória quanto ao uso de recursos naturais e também racista, em relação às diferentes lógicas de agir e de se relacionar com a natureza. Trata-se de um modo de expansão capitalista que se manifesta pela

criação dos “inimigos” do des-envolvimento, aqueles cujos territórios precisam ser tomados para a acumulação se realizar.

O espólio produzido/deixado pelos grandes projetos de des-envolvimento nos/aos territórios de povos indígenas, quilombolas, de camponeses, ribeirinhos, de quebradeiras de coco babaçu, bem como de diversas outras comunidades e povos tradicionais define uma distribuição das populações em distintos domínios de valor e utilidade, delimitando práticas de controle/violação dos povos afetados pelos grandes projetos.

Por esses três caminhos de análise propostos, chegamos a termos mais precisos, entendendo a territorialização de exceção como processos em que a criação de mediações espaciais, que proporcionem acesso a recursos e/ou domínio de terras, passam por dinâmicas de suspensão normativa, criando dispositivos, com claros recortes raciais e étnicos, de gestão de populações, numa lógica de ação que estrutura/define/interdita o campo de ação e a possibilidade de criação de mediações espaciais de outros grupos sociais, os quais, definidos por um menor valor, tornam-se politicamente matáveis e territorialmente invisíveis e dispensáveis (Malheiro, 2019)

Olhar a dinâmica territorial dos grandes projetos pela lógica da exceção é ver o espaço a contrapelo, isto é, não apenas como acúmulo progressivo de estruturas e relações novas, mas também como ruína, libertando a geografia do messianismo de análises que, apesar da boa pretensão, esmagam vidas por não enxergá-las. Esse exercício de fazer falar ruínas onde, até então, só se representavam grandes construções, apresenta-se por termos teóricos, mas se revela, também, como uma tarefa metodológica, muito inspirada em Walter Benjamin (1993), que é a de repor, no mapa dos conflitos territoriais, as territorialidades insurgentes, de modo a reorganizar esses fragmentos de geo-grafias de r-existências em uma leitura de conjunto que seja estratégica para as lutas do presente.

Considerações finais

Esse artigo, tomando as geo-grafias dos grandes projetos de des-envolvimento como paradigmas de compreensão do capitalismo contemporâneo no espaço agrário, construiu uma análise com três ideias-força que são chaves de leitura a serem retomadas aqui. A primeira delas é que os grandes projetos de des-envolvimento, mesmo diante da radicalização da divisão da sociedade, que, no Brasil, é acirrada após as eleições de 2018, são escolhas econômicas que atravessam os vários espectros da política, demonstrando que, mesmo diante das mais abissais diferenças ideológicas, eles continuam a ser os dispositivos territoriais a movimentar as principais engrenagens da acumulação. A segunda chave é a compreensão desses projetos como processos de acumulação por espoliação, regimes de desapropriação (de terras, territórios e recursos) e cercamentos do comum, ou seja, como um dispositivo racional do atual momento do neoliberalismo. Essas duas primeiras chaves analíticas nos levam a uma terceira, que vem a ser a compreensão desses empreendimentos por sua racionalidade territorial, ou ainda, por seus mecanismos concretos, o que nos levou a pensá-los pelos termos da territorialização de exceção, não apenas por serem resultantes de processos de suspensão normativa ou por criarem mecanismos de controle de populações, mas também por se constituírem em verdadeiros ataques sistemáticos e organizados aos territórios de povos e comunidades tradicionais.

Apesar dos grandes projetos se constituírem por processos de territorialização de exceção, a geo-grafia por eles esboçada é, também, uma geo-grafia marcada por lutas, conflitividades, antagonismos, r-existências. Os grupos atingidos/afetados não são passivos, ao contrário, são protagonistas de lutas e enfrentamentos e demonstram sua força construindo táticas de resistências, movimentos, organizações, redes, alianças, repertórios de ações coletivas, ou seja,

reinventando outras possibilidades de vida, mesmo diante de condições precárias em contextos de exceção.

A luta dos povos e comunidades em defesa dos rios, das florestas, da terra, das riquezas minerais é uma luta em defesa da vida, que tenciona e politiza os processos e os sentidos de apropriação da natureza. Essas lutas exigem-nos um deslocamento de nossas referências espaço-temporais para pensarmos mais em envolvimento e criação de vínculos e menos em des-envolvimento. Não nos parece haver horizonte de futuro sem debatermos como garantiremos as condições materiais da vida, e são essas lutas que tencionam nossa atual crise civilizatória, são essas lutas que nos fazem repensar os processos de produção e consumo e os limites da natureza. Suas agendas, portanto, ultrapassam suas particularidades e, nelas, outros horizontes de sentidos se constroem como uma aposta pela vida

Quando tais grupos reivindicam o direito aos seus territórios, estão reivindicando uma autonomia material e simbólica. O direito a um território próprio significa o direito às formas próprias de produzir materialmente sua existência e, também, a valorização e o respeito às suas peculiares formas de dar sentido ao mundo através de uma memória, de uma linguagem, de um imaginário, de formas de saberes que constituem sua existência, sua cultura e cosmologia. O território agrega uma espessura, uma densidade, pois traz os conteúdos históricos e existenciais desses grupos, uma vez que é suporte material da cultura, da memória, da ancestralidade e dos saberes acumulados ao longo do tempo. O direito ao território é uma espécie de condensador de outras formas de direitos (CRUZ, 2013) como o direito à terra, à água, aos recursos naturais, à produção, assim como, à memória, à ancestralidade, à identidade etc. A luta pelo direito ao território restitui o estatuto político daqueles cuja humanidade é tornada supérflua pelos grandes projetos, reposicionando, com isso, nossas referências e nos apontando outros horizontes de sentido.

Referências

- Acselrad, H. (2013). Desigualdade ambiental, Economia e Política. In: Revista Astrolábio Nueva Época. Nº 11, pp. 105-123.
- Acselrad, H. (2018). Territórios do capitalismo extrativista: a gestão empresarial de 'comunidades'. In: ACSELRAD, H. Políticas Territoriais, empresas e comunidades. Rio de Janeiro: Garamond, p. 33-60.
- Agamben, G. (2002). Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: Editora UFMG.
- Agamben, G. (2004). Estado de exceção. São Paulo: Boitempo.
- Agamben, G. (2009). Signatura rerum: sobre o método. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora
- Almeida, A. W. B. (2010). Agroestratégia e desterritorialização: direitos territoriais e étnicos na mira dos estrategistas dos agronegócios. In: ALMEIDA, A. W. B. (et. alii.) Capitalismo globalizado e recursos territoriais. Rio de Janeiro: Lamparina, p.101-144.
- Arendt, H. (2012). Origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras.
- Barcelos, E. A. S. (2018). Geografia e Grandes Projetos: ecologia, política e economia no capitalismo de fronteira. Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Geografia. Niterói/RJ: POSGEO/UFF.
- Benjamin, W. (1993). Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política. 6ª Ed. São Paulo: Editora Brasiliense.
- Brasil. (1980). Decreto-Lei 85.387 de 24 de novembro de 1980.

Brum, E. (2014). Belo Monte: a anatomia de um etnocídio. Coluna El País. 01/12/2014. https://brasil.elpais.com/brasil/2014/12/01/opinion/1417437633_930086.html

Cruz, V. C. (2013). Das Lutas por Redistribuição de Terra às Lutas pelo Reconhecimento de Territórios: uma nova gramática das lutas sociais? In: Cartografia social, terra e território.1 ed. Rio de Janeiro: IPPUR / UFRJ, v.1, p. 119-176.

Dardod, P.; laval, C. (2017). Comum: ensaio sobre a revolução no século XXI. São Paulo: Boitempo.

Fanon, F. (2005). Os condenados da terra. Juiz de Fora: Ed. UFJF.

Fernandes, B. M. (2008). Questão agrária: conflitualidade e desenvolvimento territorial. In: Buainain, Antônio M. E.d., Luta pela Terra, Reforma Agrária e Gestão de Conflitos no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, p. 173-224.

Freitas, C. (2018). As Agroestratégias Ruralistas de Desterritorialização de Povos Indígenas e Quilombolas: redefinindo Marcos Legais e Usos Territoriais. Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Geografia. Niterói/RJ: POSGEO/UFF.

Foucault, M. (1979) Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal.

Foucault, M. (1995). O sujeito e o poder. In P. Rabinow e H. Dreyfus, Michel Foucault: uma trajetória filosófica (para além do estruturalismo e da hermenêutica). Rio de Janeiro:Forense Universitária, p. 231-249.

Foucault, M. (2008). Segurança, território, população. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

Foucault, M. (2010). Em defesa da Sociedade: Curso no Collège de France do ano 75/76. São Paulo: Martins Fontes.

Giffone, R. (2015). *Dos riscos da política às políticas do risco: um estudo sobre os riscos sociais corporativos e suas formas de gestão*. Tese de Doutorado. Instituto de Planejamento Urbano e Regional. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IPUR.

Golder associates. (2009). *RIMA Projeto Ferro-Carajás S11D. Canaã dos Carajás: VALE*.

Harvey, D. (2005). *O Novo Imperialismo*. São Paulo: edições Loyola.

Harvey, D. (2013). *Para entender O capital: Livro I*. São Paulo: Boitempo.

Haesbaert, R. (2004). *O mito da desterritorialização*. Rio de Janeiro: B. Brasil.

Haesbaert, R. (2014). *Viver no limite: território e multi/transterritorialidade em tempos de in-segurança e contenção*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.

Levien, M. (2014). *Da acumulação primitiva aos regimes de desapropriação*. In: Revista

Sociologia e Antropologia, volume 04, p. 21-53.

Lencioni, S. (2012). *Acumulação primitiva: um processo atuante na sociedade contemporânea*. *Confins (Paris)*, v. 14, p. 1-17.

Luxemburgo, R. (1984). *A acumulação de capital: contribuição ao estudo econômico do imperialismo*. Tomo II. São Paulo: Abril Cultural.

Movimento dos atingidos por barragem. (2004). *Ditadura contra as populações atingidas por barragens aumenta a pobreza do povo brasileiro*. <https://www.alainet.org/pt/active/5807>

Malheiro, B. C. P. (2019). *O que Vale em Carajás? Geografias de exceção e r-existência pelos caminhos do ferro na Amazônia*. Tese de

doutorado. Programa de Pós-Graduação em Geografia. Niterói/RJ: POSGEO/UFF, pp. 439.

Martins, J. S. (2013). *A sociologia como aventura: memórias*. São Paulo: Contexto.

Mbembe, A. (2016). Necropolítica. In: *Arte & Ensaio*. Revista do PP-GAV/EBA/UFRJ. n. 32.

Mbembe, A. (2018). *Crítica da Razão Negra*. São Paulo: N-1 Edições.

Moraes, A. C. R. (2013). *Geografia Histórica do Brasil: capitalismo, território e periferia*. São Paulo: Ed. Annablume.

Porto-gonçalves, C. W. (2006). *A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Pública. (2016). Em terra de índio mineração bate à porta. <https://apublica.org/2016/06/em-terra-de-indio-a-mineracao-bate-a-porta-2/>

Quijano, Anibal. Colonialidade do poder e classificação social. En Souza Santos, B; Meneses, M. P. (Orgs.). *Epistemologias do Sul*. São Paulo: Cortez, 2010.

Santos, M. (1996). *A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção*. São Paulo: Hucitec.

Svampa, M. (2013). Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América Latina. In: *Nueva Sociedad*, n. 244, pp. 30-46.

Toledo, V. (2013). El metabolismo social: una nueva teoría socioecológica. In: *Revista Relaciones* 136, pp. 41-71.

Vainer, C. B. (2010). Os refugiados do desenvolvimento também têm direitos humanos? En Ferreira, A. P.; Vainer, C.; Neto, H. P.; Santos, M. O. (Org.). *A Experiência Migrante: entre deslocamentos e reconstruções*. Rio de Janeiro: Garamond.

Convergiendo movimientos y geógrafes

Tácticas para navegar la brecha del idioma

Sara Koopman

Es esencial que como movimientos mejoremos nuestras interpretaciones orales y traducciones escritas para entretrejer solidaridades más transformadoras y menos coloniales que así tengan más poder para construir los otros mundos más justos con que soñamos. Buena interpretación y traducción cambia no solo quien puede hablar con quién, pero qué y cómo podemos pensar y luchar juntas. Como académicas comprometidas con movimientos también es esencial ser más estratégicas con la traducción. En este capítulo comparto varias tácticas nuevas para ello.

Yo soy gringa, con el privilegio de ser bilingüe por haber vivido en Colombia de niña. Antes de reinventarme como geógrafa me gané la vida por muchos años en Seattle, en los Estados Unidos, como traductora e intérprete independiente, certificándome como intérprete de servicios sociales, después intérprete médica, jurídica y, eventualmente, jurídica federal. Usé ese trabajo para financiar mi trabajo como activista. Trabajé como organizadora para el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador [CISPES], el comité en solidaridad con Colombia en Seattle, y por muchos años fui parte del núcleo que organiza la interpretación en la protesta anual para cerrar la Escuela

de las Américas, donde el ejército estadounidense entrena a ejércitos latinoamericanos (Koopman, 2008a).

Hay varios comités e iglesias en Seattle haciendo trabajo de solidaridad internacional y terminé sirviendo como intérprete voluntaria para muchas giras de líderes de Guatemala, El Salvador, Cuba, Colombia, etcétera. Pero yo sola no pude interpretar para todos los eventos, y una frustración mía ha sido que diferentes comités gastan tanta energía y plata para llevar líderes a los Estados Unidos para hablar de sus luchas y hacer conexiones, pero no gastan en conseguir interpretación buena. Muchas veces ni siquiera entienden la diferencia entre la traducción (que es escrita) y la interpretación (que es oral) y buscan a personas que quizás han traducido algo, pero nunca han interpretado; o se piensa que cualquier persona bilingüe lo puede hacer. Es desesperante que líderes latinoamericanos hacen todo el esfuerzo para ir a los Estados Unidos para contar su historia y después sus palabras quedan en el aire o son tergiversadas porque el comité de solidaridad no ha entendido la importancia de la interpretación. Pasa algo parecido en la otra dirección, cuando delegaciones de estadounidenses y canadienses van a Latinoamérica para aprender de movimientos sociales y hacer conexiones, pero la interpretación no es la mejor. Organizaciones como Acción Permanente por la Paz, que organiza delegaciones, han ido mejorando un poco en entrenar a sus coordinadores en técnicas de interpretación, pero siguen teniendo condiciones de trabajo que hacen que sea muy difícil para cualquiera ser buen intérprete.

El desafío no es simplemente que hay pocos recursos en los movimientos sociales para la interpretación y la traducción, sino que no se entiende lo difícil y lo importante que es hacerlo bien. No se valoriza, así que no se crean sistemas para proveer mejor comunicación aun con recursos limitados. Mi pequeño aporte a esta situación ha sido ofrecer recursos para el entrenamiento de intérpretes de movimientos en mi blog personal de terminología relacionada con temas de cambio social (spanishforsocialchange.com), que he mantenido desde el 2007 y que tiene cuatrocientas noventa y cinco

entradas sobre términos como procesos y *people of color*. Pero como movimientos necesitamos mucho más entrenamiento en técnicas de interpretación que simplemente aprender términos claves. Es importante que las personas que van a interpretar tengan práctica y aprendan trucos, como qué notas tomar y dónde pararse al lado del ponente para frenarlo sutilmente cuando habla extendido. Pero también es importante que el movimiento en general entienda conceptos básicos como la diferencia entre la interpretación simultánea y consecutiva (donde primero se habla en el idioma fuente, después la intérprete lo pasa al idioma destino), y cómo hablar para que funcione bien para la interpretación consecutiva. La gente suele hablar en trozos muy largos, pero a veces en trozos demasiado cortos. También se suele pensar que la interpretación simultánea es mucho más difícil, pero con práctica puede ser más fácil para la intérprete, y definitivamente hace la comunicación más fluida y rápida. Pero para ello los movimientos necesitan invertir en recursos como un sistema de auriculares y transmisores para la interpretación simultánea. Estos son los mismos que algunas iglesias usan para los que tiene problemas de audición y muchas veces los he pedido prestados de iglesias para eventos, pero también los hemos armado tipo *hacker*, con pequeños radios piratas.

Hay otros *hacks* que podríamos usar más. Cuando yo escucho en portugués y respondo en castellano los lingüistas lo llaman discurso no convergente, pero puede ser una herramienta para converger más nuestros movimientos y para converger como académicos comprometidos con ellos. Somos muchos los que entendemos un idioma suficientemente bien para escucharlo, pero no tanto como para hablarlo con confianza. Esta táctica se suele usar más entre portugués y castellano, pero podríamos usarlo más con el inglés también. Para los que hablan portugués les es más fácil entender el castellano hablado que en la otra dirección. En cambio, para los solo hispanoparlantes es más fácil entender el portugués escrito. Por lo tanto, en el Encuentro de Geógrafos de América Latina [EGAL] en Bolivia en 2017 noté que muchos brasileños fueron generosos en poner todo el texto

de su presentación en la pantalla. Generalmente es lo último que uno quisiera hacer para una presentación dinámica, pero en estos casos vuelve la presentación mucho más entendible para algunos. Aunque no es tan clave para otros idiomas y otras direcciones, esto es algo que se podría también hacer más, por ejemplo, los que presentan en inglés en contextos donde para muchos de los oyentes no es su primer idioma. Idealmente se podría presentar con dos pantallas, una con imágenes y pocas palabras que resalten puntos clave y otra con una transcripción completa de lo hablado.

Esto claramente es mucho más fácil en línea. Zoom ahora provee un texto autogenerado para conversaciones en inglés en todas las cuentas, aun las más básicas. Claro, por ser mecánico tiene errores, pero igual ayuda bastante. Muchas veces estos se llaman subtítulos en castellano, aun cuando son en el idioma de la persona que está hablando. Esto puede causar algo de confusión, ya que en inglés el cognado (*subtitles*) refiere solamente a los que son una traducción a otro idioma. Cuando son en el idioma hablado, en inglés se llaman *closed captions*, por lo tanto, el ícono para estos en Youtube y muchas plataformas está marcado CC. De hecho, Youtube ahora no solo provee una transcripción autogenerada, sino también traducciones a varios idiomas. Hay que prender primero la transcripción usando el icono de CC, después ir al icono de engranaje a la derecha de la de CC y escoger subtítulos, después autogenerado, y aparecerá una lista de idiomas para escoger. Para que esto funcione en YouTube en vivo, los que estamos transmitiendo tenemos que prender *closed captions* dentro de la configuración, y es importante establecer en qué idioma estamos hablando.

Recién participé en un evento donde estaban hablando en español, pero habían prendido la transcripción sin especificar eso y seguro el sistema estaba tratando de entender en inglés y lo que salió no tenía sentido. Está también la opción en YouTube de proveer una transcripción propia, si uno está leyendo un texto, en vez de prender la transcripción automática. Ya que la transcripción está prendida en un evento en vivo, los videntes podrán por sí mismos prender

la traducción automática de la manera descrita arriba. Esta herramienta hasta se podría usar para eventos en persona, que podrían también ser transmitidos (podría ser una transmisión privada) y una pantalla en el evento podría mostrar la transmisión con los subtítulos prendidos. Vuelvo a enfatizar que estos serán autogenerados y por lo tanto llenos de errores, pero igual pueden ayudar. En este uso pueden especialmente servir cuando uno más o menos entiende el idioma hablado, pero necesita un poco de apoyo con ciertos términos.

Ahora bien, hay que volver a decir que, en general, hay muchos problemas con la traducción automática. Yo antes siempre decía que la traducción automática solo se debería usar con textos no tan importantes que venían hacia uno (*inbound texts*) para tener una media idea que decían en ese correo electrónico del hotel donde uno se iba a quedar en otro país, por ejemplo, pero nunca para textos que uno emitía (*outbound texts*) como el anuncio de un evento, y particularmente no los que iban a reflejar en la imagen de uno, ya que solo dan una idea general (*the gist*) y están llenos de errores. Pero lo cierto es que la traducción automática es cada vez mejor, particularmente para ciertas combinaciones de idiomas más comunes. Está basada en traducciones hechas por humanos, y el banco de datos que usa es cada vez mayor, ya que las Naciones Unidas y la Unión Europea están compartiendo todas sus traducciones con la memoria abierta de traducciones en la que las traducciones automáticas están basadas. Igual sigue lleno de errores, y muchas veces se equivoca con ideas teóricas y expresiones culturales.

Obviamente en un evento sería mucho mejor tener interpretación simultánea profesional, pero cuando eso no es posible, las herramientas de YouTube nos pueden dar algo de idea de lo que se está diciendo. Esta herramienta, con todos sus errores, hasta puede ser más útil que presionar en el momento a personas bilingües que no tienen experiencia ni entrenamiento para que interpreten. Ayuda si todos vienen al evento, como dicen Desbiens y Ruddick (2006), predispuestos a la comunicación multilingüe y entendiendo que

esto requiere paciencia y flexibilidad. Es importante pedirles a los ponentes que hablen más despacio, con una enunciación más clara, y eviten el uso de poemas, lemas, chistes y modismos, ya sea si se está usando intérpretes verdaderos o robots. Puede ser muy difícil para ponentes acordarse de estas pautas cuando se emocionan con un tema, y recomiendo un truco que uso como intérprete simultánea: tener un letrero anaranjado que dice *slow* de un lado y despacio del otro que la organizadora del evento puede levantar cuando sea necesario.

Aunque los términos se suelen mal usar y confundir, vuelvo a enfatizar que la interpretación es oral y la traducción es escrita. Es importante usar los términos bien ya que son dos habilidades distintas. Igual que alguien que escribe bellezas puede ser un terrible ponente, alguien que puede traducir no puede necesariamente interpretar en vivo, o viceversa. La distinción también vale para los robots. Yo todavía no recomiendo usar la traducción automática para documentos importantes, o a lo menos no usarlo sin editarlo. La mayoría de las traducciones humanas profesionales hoy en día son realmente traducciones hechas con la ayuda de traducción automática (*machine assisted translation*). Hay varias plataformas que ayudan a la traductora frase por frase, primero acordándola si esa frase o una parecida la ha traducido ella antes y existe en su memoria de traducciones (*translation memory*) y después ofreciendo traducciones automáticas de tres diferentes servicios (como Google, Microsoft y DeepL) entre las cuales la traductora escoge la mejor y edita sus errores a mano. Una versión gratis de la plataforma Wordfast para este proceso se encuentra en [freeTM.com](https://www.free-tm.com). Las traducciones profesionales generalmente después pasan por un proceso de edición, donde otra traductora humana compara frase por frase el original con la traducción y recomienda cambios a la traductora original, y después (o a lo mínimo) un proceso de corrección de pruebas (*proofreading*) donde alguien que habla el idioma de la traducción como su lengua más fuerte lee simplemente la traducción para ver si suena bien en ese idioma. Uso el termino lengua más fuerte en vez de lengua materna

porque hay gente que siempre ha hablado dos idiomas, como es mi caso, pero que ha hecho la mayoría de sus estudios en uno.

Otra tremenda frustración mía es que la gran mayoría de las traducciones son del, en vez de hacia, el inglés. Es común decir que solo 3 % de los libros vendidos en los Estados Unidos son traducciones al inglés, basado en un estudio hecho en el 1999 (Heilbron) y otro mirando libros entre 1980 y 2000 (Sapiro, 2016). Un estudio de los libros publicados en Reino Unido e Irlanda hecho en 2012 también encontró un nivel 3 %, aunque en el resto de Europa niveles de traducciones a sus idiomas nacionales son típicamente entre 30 % a 60 % (Heilbron 1999). No encontré estudios confirmándolo, pero en mi experiencia en la mayoría de librerías en Latinoamérica uno fácilmente encuentra esos niveles o más. La UNESCO en el 1932 estableció un índice para compilar todas las traducciones hechas en el mundo, pero tristemente parece no haber sido mantenido desde el 2012 y la página web ya no funciona bien (Index Translationum - World Bibliography of Translation, n. d.). Sin embargo, estudios usando ese índice encontraron que el porcentaje de las traducciones en el mundo que iban del inglés a otros idiomas subió de 45 % en los años ochenta a 59 % en los años noventa (Sapiro 2016). Es muy probable que ahora es aún mucho más alto, ya que Globish (inglés supuestamente global, un poco simplificado, sin modismos) se ha vuelto más y más la norma en las comunicaciones globales.

No hay estadísticas para la traducción de artículos académicos, pero en mi experiencia son muchísimo menor que 3 % los que son traducidos al inglés, por lo menos abiertamente. Es muy posible que autores que no hablan inglés como primer idioma escriben su artículo primero en otro idioma y paguen ellos mismos (reforzando la desigualdad económica) o hagan su propia traducción antes de presentarla, sin decir que es una traducción. En geografía ha habido una serie de artículos (irónicamente en inglés) sobre la hegemonía anglo en la disciplina (Garcia-Ramon, 2003; Kitchin, 2005; Paasi, 2005; Desbiens y Ruddick, 2006; Best, 2011; Husseini de Araújo et al., 2016). Recién se volvió a confirmar con un estudio por Müller (2021) sobre qué

tan internacionales son las revistas académicas en geografía, que encontró que 90 % de los editores, 82 % de los de las mesas directivas y 70 % de los autores están basados en países anglófonos. Para la literatura propia de los movimientos sociales tampoco hay estadísticas, pero en mi experiencia hay aún menos traducciones escritas hacia el inglés. Hay mucha más interpretación en vivo, pero, como señalé arriba, esta muchas veces es hecha por personas no calificadas y se pierde parte del mensaje.

Ahora bien, yo estoy más consciente de este fenómeno de la falta de traducciones al inglés como traductora certificada por el American Translator's Association para traducciones del español al inglés. En contraste a la interpretación que, generalmente, fuera del contexto de las Naciones Unidas, se suele hacer en ambas direcciones, las traductoras profesionales solo vamos en una dirección, hacia nuestra lengua más fuerte. Pero obviamente esto es mucho más que un problema personal. Impacta qué y cómo podemos pensar y actuar juntos, para un mundo mejor. Traducir más libros y artículos hacia el inglés no es idea nueva, fue propuesto en el contexto de la geografía hace dos décadas por García-Ramón (2003).

Hay unos esfuerzos nuevos en geografía para cambiar estas dinámicas que quiero celebrar. Recién la revista *Antipode* publicó traducciones hacia el inglés de Beatriz Nascimento hechas por Christen Smith, Archie Davies, y Bethânia Gomes (2021). En 2017 publicaron una traducción de un manifiesto escrito por Milton Santos con sus estudiantes (Bernardes et al. 2017), junto con una introducción al manifiesto y su impacto (Melgaço 2017), y un foro de diez comentarios nuevos sobre el manifiesto, traducidos también al inglés ("Symposium-Introducing Milton Santos and "The Active Role of Geography", 2017). Como aparte, es espeluznante que aún Santos casi no haya sido traducido al inglés. Por muchos años solo existió la traducción de su libro *The Shared Space* (Santos, 1979). En 2017 salió la traducción *Toward an Other Globalization* (Santos, 2017) junto con un libro editado en inglés sobre el trabajo de Santos que incluye la traducción de su ensayo "O Retorno do Território" (Melgaço and Prouse, 2017).

En 2021 salió *The Nature of Space* (Santos 2021). Pero regresando a las revistas, *Antipode* ha establecido un fondo para traducciones y esta activamente buscando otros ensayos claves para traducir. El proceso de revisión por pares se hará en el idioma original por pares que hablan tanto ese idioma como inglés y pueden sugerir cambios no solo de argumento, sino también para adaptarlo a normas de estructura y estilo del inglés. Ya que está aceptado se pagará por la traducción. Yo estoy en la mesa consultiva internacional de *Antipode* y abogué por este flujo de trabajo. Si se traduce un artículo antes del proceso de revisión es una inversión riesgosa, ya que podría ser rechazada o requerir muchos cambios.

La otra revista académica que ha empezado a hacer traducciones de esta manera es *Journal of Latin American Geography* [JLAG], donde aceptan en inglés, español, y portugués, y ahora regularmente comisionan traducciones de algunos artículos aceptados que tienen la potencial de hacer contribuciones amplias y duraderas a la disciplina, explícitamente para cambiar las dinámicas coloniales de geografía (Finn et al., 2020). Las versiones en español y portugués son de acceso abierto por un año. Algo que aprecio mucho de JLAG es que publican las traducciones con el artículo en el idioma original, aunque las páginas de los dos todavía no están muy claramente ligadas en línea (hay que abrir el PDF y buscar la nota después del título). Los artículos traducidos incluyen “Território(s) numa perspectiva latino-americana” (Haesbaert, 2020); “Geografías feministas na América Latina: desafios epistemológicos e a decolonialidade de saberes” (Silva y Ornat, 2020); “Imaginando territorios plurales de vida: una lectura feminista de las resistencias en los movimientos socio-territoriales en el Ecuador” (Vela-Almeida et al., 2020); “Cuerpos, fronteras y resistencia: mujeres conjurando geografía a través de experiencias desde el otro lado del muro” (Geobrujas, Comunidad de Geógrafas, 2021); y “Cuba, protestos e caminhos da revolução” (Salém Vasconcelos, 2021), todos ellos traducidos al inglés por Mason-Deese.

La revista *Acme: an International Journal for Critical Geographies* también acepta artículos y puede hacer revisión de pares en inglés,

francés, italiano y español. A veces aceptan en otros idiomas (han publicado en alemán, por ejemplo), pero piden primero una consulta con los editores. *Acme* generalmente simplemente ha publicado estos artículos en sus idiomas originales, sin traducción, pero también están en un empuje nuevo de hacer más traducciones, aunque como una revista de fuente abierta no tienen acceso a los fondos para pagarlos que otras revistas tienen. Yo tuve la gran suerte de que Sara González, la editora a cargo del artículo que publiqué en *Acme* (Koopman, 2008b) sobre el movimiento para cerrar la Escuela de las Américas, me ayudó con la traducción del inglés al español (Koopman, 2008) y publicaron los dos juntos. Tristemente la revista todavía no tiene una manera en su página de web de encontrar fácilmente todos los artículos en otros idiomas, mucho menos las traducciones. Esto les ha sido más complicado por usar una plataforma más rígida de fuente abierta, pero lo mismo es cierto para *Antipode*, y aunque en *JLAG* se pueden encontrar por idioma, no hay buena manera de encontrar las traducciones ni están claramente ligadas las traducciones con las originales. También falta todavía hacer los cambios en la programación de los sitios web para que cuando uno baje los artículos a un sistema de manejo de referencias, como Zotero o Endnote, la traductora queda identificada como traductora y no como autora.

Claramente, las revistas todavía están en un proceso de aprendizaje, pero aprecio muchísimo el esfuerzo que están haciendo estas tres en particular. No sé de otras revistas académicas de geografía basadas en el Norte que tengan la habilidad de hacer revisión de pares en varios idiomas, ni que hayan dedicado fondos para traducir artículos al inglés. Ojalá se vuelva más común. Esto seguramente va a requerir presión. Mientras tanto, hay muchas revistas basadas en Latinoamérica que regularmente publican en inglés, portugués y castellano. He escuchado de revistas que pagan para hacer traducciones al español, pero no conozco ninguna que regularmente traduzca al inglés. Una excepción es el número de la revista *Terra Brasilis* “*Políticas e geopolíticas de tradução: Circulação multilíngue do conhecimento e histórias transnacionais da geografia*”, editado por Guilherme Ribeiro,

Laura Péaud y Archie Davies, el cual incluye dos traducciones comisionadas, uno hacia y otra del inglés. Davies argumenta que traducir hacia el inglés no se hace solo para los anglófonos, sino también para conectar con los muchos lectores multilingües que hablan, digamos, finlandés y también inglés (Davies, 2021).

Otro reto en este proceso es que muchos autores hablan algo de inglés, aunque no se sienten quizás cómodos haciendo su propia traducción, y he visto que después de la traducción los autores hacen sus propios cambios que pueden a veces ser drásticos y pueden cometerse errores en el inglés tales que después la traductora no quiere poner su nombre al documento. Pero también he experimentado este fenómeno del otro lado cuando contraté un traductor hacia el español para un artículo mío y fue alguien que no entendía bien los conceptos, quizás, y mucha terminología clave tuve que corregirla. Lo ideal es que haya un intercambio continuo entre autora y traductora durante el proceso sobre terminología, y que la autora, si habla suficiente del idioma al que se está traduciendo, haga un repaso completo usando el seguimiento de cambios (*track changes*) para que la traductora pueda ir aceptando o rechazando, y que hablen de cada rechazo. Obviamente eso implica un tremendo compromiso de tiempo.

Algo que ayudaría mucho sería cambiar nuestras normas y culturas académicas para darle más crédito a académicos por hacer traducciones. Mi impresión es que a veces las traducciones han sido hechas por personas fuera del campo, que no están empapadas de la literatura y la terminología, porque los geógrafos generalmente no reciben mucho crédito por hacer traducciones. De hecho, aunque yo tengo la certificación para traducciones al inglés y viví de la interpretación y traducción por muchos años, hice traducciones jurídicas y no académicas (con la excepción de unos capítulos sobre feminicidio —Fregoso y Bejarano, 2010— cuando era estudiante de doctorado). De profesora mi trabajo ha exigido un enfoque en publicaciones y no he podido dedicar tiempo a traducciones. Pero en geografía tenemos la suerte de tener a Liz Mason-Deese, traductora con doctorado en

geografía, que tradujo todos los artículos al inglés para *JLAG* mencionados arriba. No obstante, para ampliar las traducciones tenemos que cambiar no solo sistemas en las revistas, sino también en nuestras instituciones, en particular los requisitos para trabajos académicos. *Acme* está buscando traducciones de ensayos claves, o entrevistas después traducidas con autores claves, donde la traductora también escribe una introducción que los pone en contexto y explica por qué son claves. Ojalá esto pueda darle más crédito académico a la traductora. También podría ser un pequeño paso para contrarrestar las dinámicas de expropiación epistémica que Halvorsen (2018) argumenta siempre son un peligro con estos esfuerzos. Como dice él, es importante no romantizar estos viajes de Sur a Norte.

¿Estas dinámicas académicas por qué importan para movimientos socioterritoriales? Académicos comprometidos juegan un papel clave en la creación y mantenimiento de conexiones entre movimientos, compartiendo análisis y prácticas y trazando líneas contra-topográficas entre ellas, para usar el término de Katz (2001). Yo dejé de trabajar tiempo completo como intérprete, traductora y activista para hacer un posgrado, en gran parte por mi frustración de que mi movimiento, que solemos llamar simplemente “el movimiento de solidaridad”, es decir, el Movimiento Estadounidense en Solidaridad con Luchas Latinoamericanas por Paz y Justicia, a veces parecía más un movimiento de caridad que de solidaridad. Los patrones coloniales son tan fuertes que aun sin querer entran a casi toda relación Norte-Sur. Fui a la universidad para estudiar esas dinámicas, y contribuir al movimiento fomentando espacios de reflexión sobre cómo luchamos. Mi meta, como activista, intérprete y académica, siempre ha sido fortalecer las conexiones entre movimientos para que podamos construir mejor el mundo justo y con paz que queremos. Mi otro blog, que he mantenido desde el 2008, se llama *Descolonizando la Solidaridad*, y son muchas las maneras que podemos resistir y cambiar esos patrones. Ser astutos con la interpretación y la traducción es una manera clave. Nos ayuda a cambiar quién puede hablar con quién y cómo, quién puede estar presente en qué espacios, qué ideas

y qué corporalidades están formando nuestros movimientos, cómo nos movemos y en qué espacios, y cómo nos entretajemos, con qué solidaridades. Impacta qué y cómo podemos pensar y actuar juntos, para construir un mundo mejor.

Bibliografía

Bernardes, A.; Zerbini, A.; Gomes, C.; Bicudo, E.; Almeida, E.; Betioli Contel, F.; Grimm, F.; Nobre, G.; Antongiovanni, L.; Bueno Pinheiro, M.; Xavier, M.; Silveria, M. L.; Montenegro, M.; Ferreira da Rocha, M.; Santos, M.; Arroyo, M.; Borin, P.; Ramos, S.; De Lima Belo, V. (2017). The Active Role of Geography: A Manifesto. *Antipode*, 49 (4), 952-958. <https://doi.org/10.1111/anti.12318>.

Best, U. (2011). La Periferia Inventada: Debates Sobre Anglo-Hegemonía Geográfica. *Geografía en español*, Traducciones (6). http://www.geografiaenespanol.net/Best_GeE_6.pdf.

Davies, A. (2021). The Politics and Geopolitics of Translation. The Multilingual Circulation of Knowledge and Transnational Histories of Geography: An Anglophone Perspective. *Terra Brasilis*, (15). <https://doi.org/10.4000/terrabrasilis.8004>

Desbiens, C. y Ruddick, S. (2006). Speaking of Geography: Language, Power, and the Spaces of Anglo-Saxon “Hegemony”. *Environment and Planning D: Society and Space*, 24 (1), 1-8.

Finn, J. C.; Bell, M.; Seemann, J.; Valdivia, G., Carter, E. (2020). Introducing JLAG Em Tradução / JLAG En Traducción. *Journal of Latin American Geography*, 19 (1), 246-57. <https://doi.org/10.1353/lag.2020.0001>

Fregoso, R. L., y Bejarano, C. (2010). *Terrorizing Women: Feminicide in the Americas*. Durham: Duke University Press.

Garcia-Ramon, M. (2003). Globalization and International Geography: The Questions of Languages and Scholarly Traditions. *Progress in Human Geography*, 27 (1), 1-5. <https://doi.org/10.1191/0309132503ph409xx>

Geobrujas – Comunidad de Geógrafas. (2021). Bodies, Borders, and Resistance: Women Conjuring Geography through Experiences from the Other Side of the Wall. [Traducido por Liz Mason-Deese]. *Journal of Latin American Geography* 20 (2), 168–78. <https://doi.org/10.1353/lag.2021.0033>

Haesbaert, R. (2020). Territory/ies from a Latin American Perspective. [Traducido por Liz Mason-Deese]. *Journal of Latin American Geography*, 19 (1), 258-68. <https://doi.org/10.1353/lag.2020.0005>

Halvorsen, S. (2018). Cartographies of Epistemic Expropriation: Critical Reflections on Learning from the South. *Geoforum*, 95, 11-20. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.06.018>

Heilbron, J. (1999). Towards a Sociology of Translation: Book Translations as a Cultural World System. *European Journal of Social Theory*, 2 (4), 429-44.

Husseini de Araújo, S.; Germes, M., y Germes, M. (2016). For A Critical Practice of Translation in Geography. *ACME: An International Journal for Critical Geographies*, 15 (1), –14.

Index Translationum - World Bibliography of Translation. (s. f.). Consultado el 17 de noviembre de 2021. http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Katz, C. (2001). On the Grounds of Globalization: A Topography for Feminist Political Engagement. *Signs*, 26 (4), 1213-34.

- Kitchin, R. (2005). Commentary: Disrupting and Destabilizing Anglo-American and English-Language Hegemony in Geography. *Social & Cultural Geography*, 6 (1), 1-15. <https://doi.org/10.1080/1464936052000335937>
- Koopman, S. (2008a). Cutting Through Topologies: Crossing Lines at the School of the Americas. *Antipode*, 40 (5), 825-47. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2008.00639.x>
- Koopman, S. (2008b). El Imperialismo Adentro: ¿Pueden Las Herramientas Del Amo Derribar El Imperio? *ACME: An International E-Journal for Critical Geographies*, 7 (2), 308-34.
- Koopman, S. (2008c). Imperialism Within: Can the Master's Tools Bring Down Empire. *ACME: An International E-Journal for Critical Geographies*, 7, 283-307.
- Melgaço, L. (2017). Thinking Outside the Bubble of the Global North: Introducing Milton Santos and "The Active Role of Geography". *Antipode*, 49 (4), 946-51. <https://doi.org/10.1111/anti.12319>
- Melgaço, L., y Prouse, C. (2017). *Milton Santos: A Pioneer in Critical Geography from the Global South*. Springer.
- Müller, M. (2021). Worlding Geography: From Linguistic Privilege to Decolonial Anywheres. *Progress in Human Geography*, enero (030913252097935). <https://doi.org/10.1177/0309132520979356>
- Paasi, A. (2005). Globalisation, Academic Capitalism, and the Uneven Geographies of International Journal Publishing Spaces. *Environment and Planning A*, 37 (5), 769-89. <https://doi.org/10.1068/a3769>
- Salém Vasconcelos, J. (2021). Cuba, Protests, and Paths of Revolution. [Traducido por Liz Mason-Deese]. *Journal of Latin American Geography*. <https://doi.org/10.1353/lag.0.0173>

Santos, M. (1979). *The Shared Space: The Two Circuits of the Urban Economy in Underdeveloped Countries / No. 2875*. London: Routledge.

Santos, M. (2017). *Toward an Other Globalization: From the Single Thought to Universal Conscience*. Springer.

Santos, M. (2021). *The Nature of Space. Translated by Brenda Baletti*. Durham: Duke University Press Books.

Sapiro, G. (2016). How Do Literary Works Cross Borders (or Not)?: A Sociological Approach to World Literature. *Journal of World Literature*, 1 (1), 81-96. <https://doi.org/10.1163/24056480-00101009>

Silva, J. M., y Ornat, M. J. (2020). Feminist Geographies in Latin America: Epistemological Challenges and the Decoloniality of Knowledge. [Traducido por Liz Mason-Deese]. *Journal of Latin American Geography*, 19 (1), 269-77. <https://doi.org/10.1353/lag.2020.0004>

Smith, C., Davies, A., y Gomes, B. (2021). "In Front of the World": Translating Beatriz Nascimento. *Antipode*, 53 (1), 279-316. <https://doi.org/10.1111/anti.12690>

Symposium - Introducing Milton Santos and "The Active Role of Geography". (15 de marzo de 2017). *Antipode Online*. [Blog]. <https://antipodeonline.org/2017/03/15/introducing-milton-santos-and-the-active-role-of-geography/>

Vela-Almeida, D.; Zaragocín, S.; Bayón, M., y Arrazola, I. (2020). Imagining Plural Territories of Life: A Feminist Reading of Resistance in the Socio-Territorial Movements in Ecuador. [Traducido por Liz Mason-Deese]. *Journal of Latin American Geography*, 19 (2), 265-87. <https://doi.org/10.1353/lag.2020.0041>

***Experiencias de movimientos
socioterritoriales***

Movimientos socioterritoriales en la lucha por la soberanía alimentaria en la ciudad de Caracas

Luis Enrique Ortuño Hernández

Introducción

Venezuela, tierra de grandes desafíos donde todos los días se defiende a la patria, un país con un proyecto claro y firme que se construye desde abajo hacia adentro y hacia arriba, el cual ha dado lecciones al mundo entero de lucha y resistencia. En el contexto actual, las grandes potencias lideradas por las extremas derechas de la región sudamericana y el Gobierno imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica intentan socavar las bases del proyecto popular revolucionario a través de la guerra híbrida: guerras económicas, bloqueo económico, guerra psicológica, por mencionar algunas. Para la Revolución bolivariana muchos han sido los frentes de lucha donde ha tocado dar batalla. Una de las principales líneas de acción ha sido la soberanía alimentaria, esta ha sido un verdadero reto: acelerar la concreción de la Venezuela potencia.

En medio de la crisis mundial del capitalismo que enfrenta el mundo y afecta a la población mundial en ámbitos como la salud, educación y, sobre todo, la alimentación, están los movimientos sociales luchando y resistiendo ante esta barbarie. El papel que juegan

los movimientos socioterritoriales y socioespaciales en todos los ámbitos es crucial y sobre todo en el derecho sagrado a la alimentación. Es por ello que la soberanía alimentaria constituye un reto trasversal, no solamente en hecho de producción de alimentos para la población, sino para la producción de un nuevo modelo civilizatorio.

En este sentido y como objetivo de este artículo será mostrar como los movimientos socioterritoriales y socioespaciales de Venezuela, específicamente de la ciudad de Caracas, han avanzado con experiencias concretas en la producción de alimentos y formas de distribución local, aglutinadas en el Plan Siembra Caracas como métodos de construcción hacia la soberanía alimentaria.

Caracas y su potencialidad agrícola

Caracas es la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, una de las más importantes del país, donde están establecidas las sedes principales de todos los poderes públicos del Estado (Legislativo, Judicial, Electoral, Moral y Ejecutivo). Tiene una relevancia geohistórica y geopolítica muy importante; es la ciudad natal del padre de la patria, El Libertador Simón Bolívar, y de muchos ilustres que realizaron aportes de vital importancia para el desarrollo del país en diferentes periodos históricos. Ha sido escenario de los principales cambios y transformaciones políticas del país, tanto, que el Himno de la República tiene un verso referido a la ciudad “seguid el ejemplo que Caracas dio” (Landaeta, 1810).

Caracas se ubica en el norte-centro del país, limita al norte con el estado La Guaira, al este y al sur con el estado Miranda, al oeste con el estado Aragua y La Guaira. Es un territorio sagrado que está cercado por un conjunto de montañosas, valles y cordilleras, al norte se levanta la sierra del Ávila, cadena de montañas con alturas superiores a los 2 000 m s. n. m., como el Topo Infiernito (1.839 m s. n. m.) y el pico Naiguatá (2 765 m s. n. m.) (Información del Instituto Nacional de Parques); al sur, se alinea una serie de pequeñas montañas y colinas

correspondientes a la Cordillera Central y es entre esos dos cuerpos montañosos que se extiende el valle de Caracas con una altura que ronda de los mínima (900 m s. n. m.), máxima (1 150 m.s.n.m). Mantiene una temperatura promedio de 19° C mínima y 28° C máxima.

Estas características ambientales le dan al valle de Caracas las condiciones idóneas para el desarrollo de la agricultura, esta práctica se desarrolló a media escala teniendo como principal cultivo café y cacao como rubros comerciales desde inicios del siglo XVI hasta los finales de XIX (Cunill, 2012). Pero de acuerdo al crecimiento exponencial de la ciudad y de la población esta práctica fue quedando abandonada desde el inicio del siglo XX, al asumirse como modelo de desarrollo el capitalismo exportador de petróleo. Solo muy pocas áreas con experiencias productivas agrícolas quedaron en la ciudad, que se convirtió en la principal ciudad consumidora del país (Figueroa, s. f.).

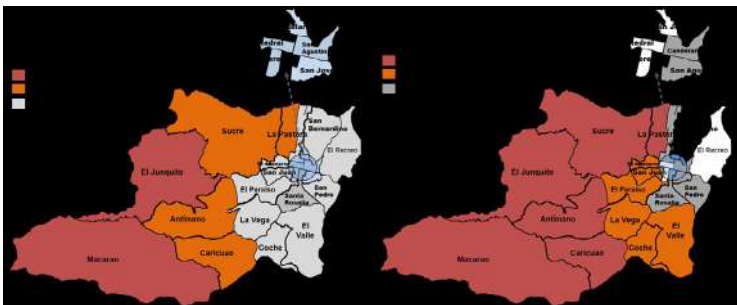
El cambio de paradigma de una Caracas de concreto y dependiente de la producción del interior de país hacia una Caracas con capacidad real de producir sus propios alimentos llega desde los primeros años de la Revolución bolivariana; a partir del año 2001, el Comandante Hugo Chávez, en su ejercicio como presidente de la república, desarrolló e impulsó una estrategia de producción de alimentos en las ciudades del país y en especial Caracas; desde patios productivos, huertos organopónicos, gallineros verticales, entre otras formas. Con una estrategia permanente se fue avanzando en esta dirección, pero no es hasta finales del 2015 que dicha concepción se desarrolló con mayor fuerza y fue acogida desde los movimientos socioterritoriales como una acción militante frente al escenario de bloqueo económico.

En la actualidad (año 2021), según datos del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana y haciendo un cruce con los datos de Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador / Oficina Control Urbano, podemos aseverar que el crecimiento de la actividad agrícola ha venido aumentando considerablemente produciendo los rubros de guerra, de acuerdo al decreto 3824 (2019) mediante el cual

se declaran como cultivo y cría de guerra algunas especies vegetal y animal por su alta productividad y valor nutritivo, y su adaptación a las características edafoclimáticas de cada región. Encontramos, especies vegetales: frijol, topocho, plátano, caraotas, maíz, papa, quinchocho, yuca, ocumo, ñame, auyama, apio, plantas medicinales. Especies animales: caprino, cunícola, avícola, ovino y porcino. Esto ha permitido el crecimiento de la actividad agrícola en el país y un crecimiento a través de la agricultura urbana en Caracas.

En la siguiente imagen podemos apreciar cómo es la incidencia de la agricultura urbana en la ciudad:

Imagen 15. Territorios con incidencias de AUP. Imagen del autor



Fuente: Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador / Oficina Plan Siembra Caracas.

Plan Siembra Caracas

El Plan Siembra Caracas nace en la imperiosa necesidad de crear un plataforma que aglutine las fuerzas productivas entre el Gobierno nacional y local con los movimientos socioterritoriales de Caracas para la articulación del ejercicio productivo en el ámbito agrícola territorial aprovechando el potencial agrícola de la ciudad, con el objetivo de contribuir con la soberanía alimentaria del país, a través de la implementación de Áreas de Producción Agroalimentaria [ARPA]

fortaleciendo a su vez el desarrollo productivo local con base a la promoción de ciudades y comunidades sostenibles (Objetivo Número 11 de los ODS de la agenda 2030 de la ONU).

Este plan tiene como vértices integrales para el desarrollo de la política productiva en la ciudad tres aspectos fundamentales:

1. Organización productiva: Fortalecimiento del sistema de producción agro-urbano de la ciudad, vinculado con los corredores productivos y todas las fuerzas vivas del poder popular anclado a estructuras existentes en el territorio, hacia una Caracas soberana agroalimentaria.
2. Formación política y productiva: Empoderamiento por parte de los productores y las productoras del conocimiento técnico político para el aceleramiento de las capacidades productivas en la concepción de una nueva cultura producción que ponga como centro el abastecimiento local y soberano. En alianza estratégica con los sectores académicos, institucionales y centros de formación en producción agrícola y pecuaria urbana.
3. Protección social: Reconocer el trabajo a los productores y las productoras garantizando atención integral al individuo y a la familia.

Este plan es construido desde la plataforma por todos los actores gubernamentales nacionales y locales con competencia agrícola y con la participación protagónica de los movimientos socioterritoriales y actores individuales que se van incorporando al ejercicio productivo y tienen conocimientos prácticos y teóricos en este campo. La plataforma brinda un acompañamiento integral antes durante y después de la actividad productiva con el objetivo de garantizar la producción en todas sus etapas.

En la siguiente imagen podemos observar el aprovechamiento de las áreas productivas en Caracas:

Imagen 16. Territorios ARPA. Imagen del autor



Fuente: Alcaldía del Municipio Bolivariano
Libertador / Oficina Plan Siembra Caracas.

Los principales rubros que se producen en la ciudad y en estos territorios podemos encontrar: caraotas, yuca, plátano, cambur, café, cilantro, cebollín, ají, tomate, pimentón, pepino, calabacín, lechosa, mango. Esta producción es distribuida en mercados populares que se realizan en articulación con los productores del ARPA y otro porcentaje son distribuidos por los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, el poder popular, los movimientos socioterritoriales en conocimientos de las necesidades de la población cumplen una labor invaluable en la distribución de alimentos casa a casa.

Una de las características del Plan Siembra Caracas es la formación pueblo a pueblo, los movimientos socioterritoriales con experiencias exitosas en la producción agrícola se incorporan al programa de formación para ayudar a otros productores a desarrollar las capacidades productivas en su territorio. Es una labor hermosa ver como pueblo a pueblo se entre ayudan e intercambian no solamente alimentos sino intercambio de saberes populares en el hecho productivo, esto ha sido un elemento fundamental en este proceso.

Sistema de fuerza, el papel de los movimientos socioterritoriales en la producción de alimentos.

Heroínas y héroes anónimos I

(A los guerreros y guerreras de la parroquia 23 de enero, Caracas)

Y del pueblo surgieron hombres y mujeres valerosas y valientes,
hombres y mujeres que construyen a diario su verdad con tal heroísmo
y pasión que te enamoran y te conectan con la biota,
se cuestionan, te cuestionan, indagan y buscan resolver el peo,
en medio de la pandemia crean su propia
resiliencia y se hacen invencibles.

Todas y todos a producir,

convocan a los sabios sabias

y espíritus inmortales del campo venezolano

un caudal de conocimiento germina desde los corazones,

alguien dice con toque caraqueño:

“venimos de ahí y sabemos que lo que”

se activa la red de productores,

hombres y mujeres todos a producir

techos verdes activos desde los bloques históricos del 23,

la lucha continúa y la pelea es produciendo.

Los vientos huracanados vienen bio-fertilizados con el sudor del pueblo
llenos de esperanza y alegría.

Se inventa el propio método,

se rompe la lógica impuesta,

los agrotóxicos los destruimos desde pensamiento

la agroindustria ahora bailará la salsa al ritmo de los viejos revolucio-
narios que resucitados andan chambeando con uno,

los combatientes de antes y los de ahora son conuqueros

agroecólogos y tecnólogos

y entre todos nos apoyamos en un solo canto.

Hombres productivos, mujeres productivas, Casas productivas,

es lo mismo decir patria soberana,

combatientes desde la costa con hijo de pesca y bayoneta al hombro,

combatientes desde el 23 escardilla al hombro semilla en mano patria
productiva con fusil cruzado, que nadie se equivoque.
Cada uno con una tarea concreta
desde la recolecta de semilla
los insumos
el diseño del plan
cada uno en su trinchera pariendo ideas
De todos los rincones surge un espacio,
Sobran razones y esfuerzos
Días tras día se suman uno diez cien,
millones a producir
no fallaremos
nos observa el gigante Chávez desde la Montaña,
el horizonte se extiende y la victoria es nuestra.

Poema de Luis Ortuño, Caracas 2020.

Inspirado en una reunión y recorrido productivo en la combativa parroquia del 23 de enero, donde participaron las fuerzas vivas del territorio activados en la producción agroalimentaria. Este poema describe de forma más sencilla y sublime como se desarrolla el trabajo organizativo territorial por los movimientos socioterritoriales de Caracas en la misión asumida por todos y todas de producir soberanía alimentaria, como establece Vía Campesina que la soberanía alimentaria es un “derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica”.

Caracas, específicamente el municipio Libertador, tiene un ordenamiento territorial de veintidós parroquias dentro del primer territorio, existen a su vez ciento diecinueve ejes de gobierno comunitario, existen además ciento ocho comunas y dos mil seiscientas comunidades con Comité Locales de Abastecimiento y Producción [CLAP] en el segundo territorio, que disputan el primero territorio como espacios de gobernanza que impulsa tanto el movimiento popular y la Alcaldía de Caracas. Estas instancias de Gobierno local son una expresión de la organización de los movimientos socioterritoriales donde se aterrizan las políticas públicas del Gobierno nacional

y local en fusión de resolver los problemas comunitarios, en vía hacia el desarrollo local de la comunidad (Datos suministrados por la Alcaldía del Municipio Liberador). “La soberanía del Estado está garantizada por la soberanía de las múltiples fuerzas sociopolíticas que garantizan el Estado” (Fernandes, 2009).

Existe además el Sistema de Fuerzas Caribe, llamado así por voluntad de sus integrantes, un concepto que retoma la fuerza como principio de movimiento y las luchas del pueblo Caribe de las tribus que inicialmente ocupaban el territorio de Caracas, es una instancia que vincula el poder popular (comunidades, movimientos socioterritoriales, movimientos sectoriales), el Gobierno municipal, articulados bajo un solo plan donde participan e inciden en la transformación integral de la ciudad. Lo integran movimientos de mujeres, juveniles, trabajadores, profesionales y técnicos, motorizados, transportistas, ecologistas, animalistas, productores, campesinos, partidos políticos, médicos, consejos comunales, comunas, comité de tierra, comité de servicios, comité de salud, movimientos de familias, movimientos pobladores y viviendo venezolanos, movimientos de las misiones y grandes misiones socialistas.

Estas instancias tanto los ejes de gobierno comunitario, el Sistema de Fuerzas Caribe, Las Comunas, los Comité Locales de Abastecimiento Producción, constituyen una ofensiva revolucionaria en la mudanza y construcción desde Estado actual hacia el Estado Comunal, que sin duda pasa por la transformación radical del territorio. Es una estrategia por la hegemonía en el territorio, hacia una nueva geometría del poder. En este proceso de transformación territorial se gesta acción tras acción, esta transformación, pasa por entender la concepción de territorio que está presente en la realidad de Caracas constantemente (Fernandes, 2009). Cada uno de estos territorios tiene sus propias relaciones, interacciones, controversias, disputas, “nos muestran las múltiples territorialidades” (Fernandes, 2008). Comprender esto para por entender cada uno de los territorios, sus formas y componentes. He ahí una fortaleza de los movimientos socioterritoriales.

En la vía hacia la Caracas productiva y comunal, los movimientos socioterritoriales son un pilar fundamental en esta construcción, la

relación entre poder popular y Gobierno son una dupla en perfecta unión, que permite sobrepasar y agudizar las contradicciones y los conflictos territoriales (Fernandes, 2008). Estas contradicciones y conflictos dan paso a nuevas formas, relaciones e interacciones desde el territorio. La territorialización de las políticas públicas hacia la soberanía alimentaria y en la construcción de las comunas, son ejemplo de avances y de conquistas socioterritoriales que trascienden la formas y relaciones establecidas, dando paso poco a poco de lo nuevo, el Estado comunal.

En este campo de la producción, la mejor experiencia se ha constituido en la capacidad organizativa y compromiso que tienen los movimientos socioterritoriales para resistir los embates del capitalismo salvaje que en Venezuela tiene sus repercusiones a través de la guerra económica la transformación de una Caracas consumidora hacia una Caracas productiva, de capitalista a socialista implica “transformar as relações sociais e de produção no campo e na cidade” (Rosset y Barbosa, 2019, p. 46). La distribución pueblo a pueblo, ya sea con distribución programa casa a casa o a través de redes de mercados populares constituye un cambio en las relaciones de producción donde prima la necesidad de la población y no la necesidad del mercado. Y esto pasa con la unión de todos, hombres y mujeres, en la conquista de ese sagrado derecho a la alimentación a la vida.

En estas luchas por la soberanía alimentaria podemos encontrar algunas experiencias que permiten avanzar con la soberana certeza de que caminamos rumbos de libertad, el Frente Francisco de Miranda [FFM] es una organización sociopolítica territorial que tiene presencia en los veintitrés estados del país y el Distrito Capital, es una de las organizaciones más jóvenes nacidas en revolución en el años 2003 creadas por el comandate Chávez y por el comandate Fidel, que agrupa a hombres y mujeres de todas las edades, principalmente jóvenes convencidos y convencidas en la consolidación de la Revolución bolivariana y toma como sí el proyecto revolucionario expresado en el Plan de Patria.

Imagen 17. Equipo productivo del FFM de la parroquia El Valle en Caracas, en una experiencia productiva de agricultura urbana en el Urbanismo Hugo Chávez



Fuente: imagen tomada por el autor.

Imagen 18. Experiencia productiva de agricultura urbana en el Urbanismo Hugo Chávez FFM de la parroquia El Valle en Caracas, siembra de cilantro, cebollín, lechuga¹



Fuente: imagen tomada por el autor.

¹ Espacio de producción Urbanismo Hugo Chávez, ubicado en la entrada de Caracas al suroeste, este proyecto ha sido recuperado e impulsado por el Frente Francisco de Miranda con participación de los y las integrantes de la comunidad, donde gracias al

Imagen 19. Experiencia productiva de agricultura urbana en el Urbanismo Ojos de Chávez en la parroquia Santa Rosalía en Caracas, siembra de cilantro, lechuga²



Fuente: imagen tomada por el autor.

esfuerzo colectivo la producción es distribuida por el Comité Local de Abastecimiento y Producción del Urbanismo a precios solidarios y sin intermediarios directo al pueblo.

² El Movimiento Agrourbano Siembra Venezuela es un movimiento socioterritorial que articula su trabajo organizativo y productivo en comunidades con pequeñas extensiones de terreno para el desarrollo de agricultura urbana. Este movimiento desarrolla un proyecto de integración comunitaria y producción agroalimentaria en el corazón de la ciudad de Caracas, llamado, “Arpa Colectiva 2020” haciendo agricultura sustentable con enfoque agroecológico. Ubicado en el urbanismo Ojos de Chávez.

La producción de este espacio es distribuida en la comunidad, con el lema producimos dignidad este proyecto, no solamente produce alimentos sí que es se transforma en un espacio de formación en el punto círculo, y funge demás como una tienda agroecológica donde se distribuye semillas y bioinsumos. Se constituye a su vez en aula productiva abierta permanentemente y funge como articulador entre los diferentes movimientos agroecólogos en la ciudad.

Imagen 20. Experiencia productiva de agricultura urbana en el ARPA Cacique Tiuna en la parroquia Coche en Caracas³



Fuente: imagen tomada por el autor.

³ El Área de Producción Agroalimentaria Cacique Tiuna es una experiencia que expresa el mejor esfuerzo vinculado entre poder popular y Gobierno local, está ubicada en la entrada noroeste de la ciudad, en el punto y círculo del Urbanismo Cacique Tiuna. Cuenta con una superficie de 26 hectáreas aproximadamente, las cuales están en proceso productivo 16 hectáreas. Esta comunidad producto de la guerra económica se vio en la necesidad de volver al campo productivo, y volcaron a transformar el territorio en ocio en territorios productivos. En esta experiencia ya tienen 5 años que iniciaron el proyecto y ya hoy son referencia a escala nacional de agricultura urbana. Los movimientos socioterritoriales que participan en el mismo son siete Guerrero de la Montaña, Colinas de Cacique, La Esperanza, Ezequiel Zamora, La Quebradita, Cómetsela Sembrando, Juventud productiva, Clap Cacique Tiuna, los cuales se aglutina en el Consejo de Campesino Cacique Tiuna, donde planifican actúan y evalúan cada una de las acciones a desarrollar en el territorio.

Imagen 21. Rubros producidos por los productores y productoras del ARPA Cacique Tiuna, entrega de rubros a los hospitales centinelas que atiende a la población afectada por el covid-19⁴



Fuente: imagen tomada por el autor.

Imagen 22. Vivero de la Escuela Agrocológica Luis Rodríguez Araque del FFM⁵



Fuente: imagen tomada por el autor.

⁴ Esta producción es distribuida en la comunidad en ferias comunales directo del productor al consumidor, y otra parte es distribuida en los Hospitales Sanitarios instalados en Caracas para la atención de las personas contagiadas por la corona virus. De tal manera que hay un fuerte sentido del momento histórico y deseo de cooperar por parte de los productores del Arpa Cacique Tiuna.

⁵ El Vivero de Escuela Agrocológica Luis Rodríguez Araque, ubicado en la parroquia Caricuao al suroeste de la ciudad, este espacio es destacado para plantulación

Imagen 23. Experiencia de agricultura urbana en la parroquia El Paraíso, en la azotea del urbanismo OPPE 56⁶



Fuente: imagen tomada por el autor.

de semillas de ciclo corto que son distribuidas en el Plan Agricultura Familiar bajo la modalidad agricultura urbana para la producción y autoconsumo de las familias. También se produce abonos y biofertilizantes orgánicos que son distribuidos en la ciudad, además de dar talleres de formación sobre todo lo referente a la producción agroecológica y agrourbana a la población de Caracas.

⁶ Esta experiencia es muy emblemática ya que se desarrolla en la terraza del edificio entregado por la Gran Misión Vivienda Venezuela, lo impulsa el Partido Socialista Unido de Venezuela que también se ha sumado a la batalla productiva con proyectos pequeños como estos para el consumo local y familiar. En este proyecto la producción cae del cielo, ya que cuando cosechan los rubros sembrados van bajando piso a piso entregando casa a casa la producción a las familias del urbanismo.

Heroínas y héroes anónimos II

(A los Luchadores Sociales Bolivarianos del Frente Francisco de Miranda de la Escuela Agroecológica de Caricuaio)

Vamos entre bromas risas y cuentos
nos acercamos irreverentes,
la alegría es nuestro primer acto de rebeldía ante el sistema.
No cumplimos una tarea sino cientos de tareas
Dada la orden la hacemos nuestra
medimos el terreno evaluamos,
soñamos,
nuestro presente tiene una simbiosis
pie en tierra y pensamiento en futuro.
Como gran Caribe tenemos mirada periférica
no se escapa nada,
ya ha pasado,
caemos nos levantamos,
nos levantamos avanzamos,
somos así.
Mientras en la escuela
Se combate hongos, bacterias, plagas y demás
buscamos en la ciencia de nuestra cotidianidad la respuesta,
Consultamos entre todos aseguramos el plan-acción.
Manos juntas manos que siembran
manos a la obra.
En un saltico,
Degustamos mangos y ciruelas, respiramos aire fresco,
nos llenamos de aliento,
nos detenemos para contemplar lo construido
admiramos cada gota de sudor y cada esfuerzo.
En las paredes,
en cada planta y cada rinconcito
esta el nombre de uno que es el nombre de todos
Jessica, Oscar, Dariagna, Fernando, Perla, Leonel
es decir
Luchadores Sociales Bolivarianos.

Una mano son miles manos
que juntas
laboran la tierra sembrando patria,
brotamos como la semilla en la tierra,
el proyecto bolivariano es nuestro nutriente
Es el NPK de cada Luchador.
Tomamos el cielo por asalto
no para dominarlo sino para liberarlo del yugo,
Llegamos a él porque estamos alimentados
del amor del pueblo,
nos hacemos gigantes
y damos frutos que alimentan a otros cientos de miles que viene
siguiendo nuestros pasos.
La pelea es produciendo,
Vamos todos y todas con la semilla Chávez
a sembrarlo en el firmamento
diciendo con voz firme
Ordene comandante.

Poema de Luis Ortuño, Caracas 2020.

Inspirado en una reunión y recorrido productivo en la Escuela Agroecológica Alí Rodríguez Araque, con los LSB del FFM de Caracas y los LSB destacados en el espacio.

Bibliografía

Cunill, P. (2012). *Geohistórica de la Caracas Insurgente*. Segunda edición. Caracas: Fundación Centro Nacional de Historia.

Decreto N.º 3824 (17 de abril de 2019). Cultivos y cría de Guerra. Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6450, República Bolivariana de

Venezuela.Fernandes, B. M. (2008). *Entrando nos territórios do Território*. In: *Campesinato e territórios em disputa* (pp. 273-302). São Paulo: Expressão Popular.Fernandes, B. M. (2009). Sobre a tipologia de territórios. En *Territórios e Territorialidades. Teorias, processos e conflitos* (pp. 197-215). São Paulo: Expressão Popular.Figueroa, R. (s. f.). *La agroindustria subordina al campo venezolano*. Buenos Aires: Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Instituto de altos estudios del pensamiento del comandante supremo Hugo Chávez. (s. f.). Intervención del comandante presidente Hugo Chávez en la inauguración del programa cultivos Organopónico. <http://www.todochavezenlaweb.gob.ve/>

Instituto Nacional de Parques. (s. f.) Parques Nacionales y Monumentos Naturales. <http://www.inparques.gob.ve/cms/main/galeria#features>

Landaeta. (1810). *Gloria al Bravo Pueblo, Himno de Venezuela*. Archivo General de la Nación.

Chávez, H. (2012). Plan de Patria. *Biblioteca Digital Todo Chávez*. Machín Sosa, B.; Roque Jaime, A. M.; Ávila Lozano, D. R., y Rosset, P. M. (2011). *Revolución agroecológica: el Movimiento de Campesino a Campesino de la ANAP en Cuba. Cuando el campesino ve, hace fe*. Vía Campesina.

Venezuela tuya. (s. f.). chrome-extension://efaidnbmninnipcbajpgclclefindmkaj/https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_4/7/Revolucion_Agroecologica.pdf

Pitanga Rosa: olhares a partir da experiência do movimento de mulheres camponesas – Brasil

Marilete Molinari e Zenaide Collet

Lutei pelo bom, pelo justo, pelo melhor do mundo.

Olga Benário

Introdução

O presente texto tem por objetivo compartilhar alguns aspectos sobre a experiência da Associação Pitanga Rosa na perspectiva e olhares do Movimento de Mulheres Camponesas do Brasil – MMC, conforme fora apresentado no II Encontro Latino Americano de Movimentos Sociais e Socioterritoriais. Organizamos didaticamente o texto em quatro subitens: 1. Movimento de Mulheres Camponesas: contextos de muitas histórias, onde apresentamos brevemente alguns elementos históricos dos processos e percursos formativos, organizativos e do trabalho de base realizado pelo MMC, por compreendermos que este espaço do Movimento constitui-se uma das fontes pela qual as mulheres da Associação Pitanga Rosa encontram

as razões e fundamentos que deram origem à sua experiência concreta; 2. A importância do Programa de Sementes Crioulas do MMC mostrando como o trabalho de recuperação, produção de sementes e mudas crioulas de plantas, ervas medicinais e produtos artesanais e fitoterápicos serviu de motivação na continuidade enquanto Associação Pitanga Rosa; 3. Do Programa de Sementes Crioulas ao horto municipal; e, 4. Do Horto Municipal à Associação Pitanga Rosa: A semente plantada, germina, nasce e dá frutos. Para isso, utilizamos documentos publicados pelo MMC, como Mezdri et al (2020), e outras elaborações; Caderno e cartilha publicadas pela Associação Pitanga e autores(as) como Gaspareto (2018), que escreveu sobre o programa de recuperação e produção de sementes crioulas do MMC, cujo debate contribuiu e desafiou as mulheres a ousarem buscar alternativas potencializando a produção de alimentos. Além disso, trazemos depoimentos das associadas concedidos à Marilete Molinari no dia 2 de dezembro de 2021.

Queremos destacar que algumas mulheres militantes do MMC fazem parte da Associação Pitanga Rosa, assim como integram mulheres participantes da Pastoral da Saúde. Estas mulheres estão comprometidas com a preservação dos conhecimentos das ancestralidades e, pelo processo de formação e práticas, compartilham saberes, aprendizados que muito contribuí com essa experiência e fortalecem a produção do conhecimento feminista camponês popular, que, por sua vez, agrega valores nas práticas e experiências concretas anteriormente vivenciadas por essas mulheres no MMC.

1. Movimento de Mulheres Camponesas: contextos de muitas histórias

No final da década de 1970 e início de 1980 vivíamos no Brasil um processo crescente de lutas do povo trabalhador do campo e da cidade pelo fim da ditadura militar, contra a carestia, por redemocratização e direitos. Entre as parcelas da classe trabalhadora que

se mobilizavam foram surgindo movimentos populares e sociais, sindicatos combativos e partidos políticos de esquerda, pastorais sociais, entre outros tantos. Na região Oeste do estado de Santa Catarina – Brasil, os povos do campo contavam com o apoio do bispo da Igreja Católica D. José Gomes.¹ A formação de lideranças era amplamente trabalhada tendo como principais fundamentos a Teologia da Libertação, que também aglutinava elementos do movimento de Educação Popular (Lorenzoni et al. 2020).

Foi neste contexto que as mulheres camponesas começaram a pensar sobre si mesmas e sobre o papel que ocupavam socialmente. Estudos de Casagrande (1991) mencionam uma reunião no dia 25 de julho de 1981, Dia do Agricultor, cujo “objetivo inicial era organizar os agricultores para conquistarem a direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapecó” (Casagrande, 1991, p. 38). Um dia em que as mulheres tornam público a indignação expressando a exclusão, pois não podiam votar, nem ser votadas. O estatuto sindical não contemplava o direito de associar-se. Essas mulheres ali presentes não desistiram, continuaram e chamaram outras para juntarem-se e assumir a luta pelo direito à participação sindical.

Quanto mais se encontravam, mais evidente ficava que vivíamos no anonimato, uma vez que muitas não tínhamos sequer a Carteira de Identidade ou CPF. Além disso, no Registro Civil de Casamento não tínhamos profissão, constava como “do lar” e vivíamos submissas ao marido. Não que essa situação tenha sido abolida totalmente, mas quem fez e faz a luta enfrenta de forma diferente as múltiplas faces da dominação, da discriminação, da exclusão das mulheres. Gradativamente viemos tomando consciência e refletindo que no trabalho na lavoura não opinávamos e nem tínhamos parte da renda, entre

¹ Neste ano celebramos o centenário de seu nascimento. Com um pé no Vaticano II, em Medellín e Puebla, outro na realidade dos marginalizados e empobrecidos, não só do oeste catarinense, mas do Brasil e do mundo, juntamente com Pastores(as) da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – IECLB, orientavam suas comunidades cristãs a partir da Teologia da Libertação Latino Americana, dando novo rumo à caminhada da Igreja Diocesana, na perspectiva da Teologia da Libertação e das CEBs

tantas outras situações. Na medida em que começamos a nos reunir e conversar em torno de nossa realidade, fomos percebendo que muitos problemas que enfrentávamos no cotidiano eram comuns.

A participação na comunidade, nos encontros de sindicatos, entre outros eventos, contribuiu para percebermos que os espaços que ocupávamos eram os de menor importância. Para nós sobrava cozinhar e limpar, enquanto os homens ocupavam-se do debate, do planejar e tomar decisões. O processo formativo foi importante para compreender que essas relações desiguais não são naturais, pelo contrário, são produtos da estrutura do sistema patriarcal, racista, capitalista.

No MMC estudamos e aprendemos que o sistema capitalista é uma estrutura complexa como explicou Saffioti (2015, p. 134) através da metáfora do nó envolvendo a relação “patriarcado-racismo-capitalismo. [...] O capitalismo também mercantilizou todas as relações sociais [...]” que combinado com o sistema patriarcal, isto é, “suas hierarquias, sua estrutura de poder contaminam toda a sociedade, o direito patriarcal perpassa não apenas a sociedade civil, mas impregna também o Estado” (Saffioti, 2015, p. 135).

Para a autora, o patriarcado se baseia no controle e no medo, atitude/sentimento que formam um círculo vicioso” (Saffioti, 2015, p. 129) de violências sobre as mulheres, de dominação-exploração presente no cotidiano que se agrava nas relações de raça/etnia.

O processo formativo de luta e organização no MMC vem contribuindo para compreender que o patriarcado e o racismo se reproduzem sob quatro pilares, que são: violência contra a mulher, não autonomia econômica, falta de acesso aos direitos e a não participação política da mulher na sociedade. Olhando hoje para nossas vidas, relações e experiências por nós construídas, compreendemos a importância de termos um Movimento autônomo. É fundamental para nos fortalecer e a partir de nossas realidades, cada uma de seu jeito e também unidas, repensar nosso agir. Aos poucos os trabalhos apontadas como de responsabilidade das mulheres no contexto familiar: cozinhar, lavar, cuidar de filhos(as), doentes, idosos, o cultivo

da horta, o trato dos pequenos animais entre outros que impediam as mulheres de participar mais, foram sendo por nós reorganizados.

Evidente que a reorganização do trabalho doméstico não ocorreu sem conflitos.

Avançamos, mas muito ainda precisamos caminhar. A estrada é longa. Reafirmamos que as oportunidades que o MMC nos proporcionou foram e são de grande importância para que tomássemos consciência da realidade que vivíamos. Por isso temos que lembrar sempre daquele primeiro de maio de 1983, no distrito de Nova Itaberaba, município de Chapecó - Santa Catarina/Brasil, onde as mulheres constituíram a Organização de Mulheres Agricultoras – OMA, a célula embrionária que mais tarde seria conhecida como MMC. Esse passo de criar a organização autônoma foi e está sendo fundamental para o processo de libertação de muitas mulheres que foram se integrando ao processo de luta. Salientamos a grandeza e a lucidez daquelas mulheres camponesas em se organizar, estudar e lutar.

Aos poucos foi sendo possível o encontro com mulheres de outras regiões e estados que tinham os mesmos objetivos. Assim, organizamos pautas de lutas coletivas. Realizamos muitos abaixo-assinados, marchas, mobilizações, audiências, plenárias até conquistar o reconhecimento da profissão de trabalhadoras rurais, a condição de seguradas especiais, direito à documentação, direitos a seguridade social saúde, assistência e previdência, como o direito da aposentadoria, salário maternidade, entre outros.

Essa trajetória de lutas conjuntas, processos de debates, formação, organização de base para somar força nas lutas resultou em um lindo processo de consolidação do Movimento de Mulheres Camponesas do Brasil em março de 2004. (MMC, 2004).

O MMC é o primeiro Movimento Nacional Autônomo de Mulheres do Campo. É um Movimento autônomo, de base, de classe, de luta, camponês, feminista e socialista. Nossa missão é a libertação das mulheres de todas as formas de opressão, dominação, exploração e violências; de luta pela construção do projeto popular de agricultura

camponesa a partir dos princípios da agroecologia e pela transformação da sociedade (MMC, 2008).

A forma como cada mulher camponesa vivencia a missão do MMC nesse imenso Brasil é diferente. Estamos construindo nossa identidade na diversidade que perpassa a divisão sexual e social do trabalho doméstico, (MEZADRI, et al. 2020). Além disso, destacamos os quintais produtivos que de acordo com Gaspareto (2018, p. 148) são “território das mulheres” onde elas têm conquistado autonomia de organizar a produção diversificada de alimentos, plantas medicinais e ornamentais, criação de pequenos animais, cultivo de plantas frutíferas, proteção de água, preservação da cultura e políticas públicas.

Principalmente neste tempo de pandemia e de crises, as camponesas estão se apropriando das redes sociais e de seu quintal produtivos intensificando a articulação com os movimentos, organizações dos povos do campo, das águas e das florestas para reivindicar ao governo federal políticas públicas para a agricultura camponesa familiar através do Projeto de Lei 823-2021, vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas seguimos em luta e articulação enquanto mulheres e povos organizados pressionando deputados(as) e senadores(as). Foi assim que conquistamos a derrubada do veto acima mencionado.

Agora segue a luta para a implementação dessa Lei que contempla a agricultura camponesa familiar. No trabalho produtivo as mulheres têm uma contribuição grande em preservar e cultivar a diversidade de espécies de vegetais e animais que no MMC denominamos de quintais produtivos. Umas dedicam-se mais à produção de sementes, outras ao cultivo de plantas medicinais, à criação de pequenos animais ou no cultivo de frutíferas, como também na prática das agroflorestas, entre outras. Esse processo feito de lutas e aprendizados originou diferentes experiências e iniciativas concretas a exemplo do Programa de Sementes Crioulas

2. A importância do Programa de Sementes Crioulas do MMC

Carregamos conosco as marcas do processo de reflexão e luta pela construção do projeto popular de agricultura camponesa na perspectiva da agroecologia. Este é um dos projetos assumidos pelo MMC juntamente com a classe trabalhadora. A contribuição das mulheres do MMC na efetivação do projeto popular de agricultura a partir de 2002 ficou conhecida como “programa de recuperação, produção e melhoramento de sementes crioulas de hortaliças” (Gaspareto, 2018, p. 148).

Este programa envolve inúmeras ações articuladas em torno das sementes. Sementes que se transformam em símbolo de vida, esperança, preservação, alimento, resistência, luta, amor e tantas outras expressões que perpassam o fazer agricultura pelas mulheres. “Expressa a identidade de luta das mulheres camponesas que, como sementes, nos multiplicamos, brotamos e fazemos nascer a vida e a esperança nos mais sombrios tempos e terrenos” (Silva y Rauber, 2020: pp. 104). Nasce contraditoriamente, em tempos difíceis em que a ciência, a tecnologia são empregadas para espalhar monocultivos, transgênicos, agrotóxicos, quebrando ciclos e interferindo demais nos ecossistemas, levando à extinção de variedades de espécies de vegetais e animais.

Ao mesmo tempo em que se inteiravam do processo formativo e na prática de produzir alimentos saudáveis, as mulheres foram fazendo leituras da realidade de seu entorno. As dificuldades que vivenciavam no cotidiano aos poucos são melhor compreendidas. Questionam-se sobre as doenças entre familiares, amigas(os), vizinhas(os), as mudanças nos hábitos alimentares observando o crescimento do consumo de alimentos industrializados, o fazer agricultura com base de agroquímicos sintéticos, agrotóxicos, transgênicos, entre outros. Tudo isso e muito mais confrontava com a perspectiva da agroecologia, provocando as mulheres a pensarem outras iniciativas.

3. Do Programa de Sementes Crioulas ao horto municipal

Está na memória das mulheres a luta vivenciada junto ao Poder Público Municipal de Chapecó/SC relacionada ao Horto Medicinal pensado e organizado pelas mulheres e lideranças de organizações do campo popular que reivindicaram junto ao poder público municipal na gestão popular (2000–2004) a implantação do horto medicinal e laboratório de fitoterápicos. Foi uma luta intensa com muitos debates, formulação de projeto lei para apreciação do legislativo, apresentado pelo vereador professor Euclides, que seguiu todos os tramites legais até a aprovação e sua implementação.

Lá havia muitas pessoas contrárias à iniciativa. Mas aos poucos o projeto foi se efetivando com destinação de recursos para estrutura física (terreno, cercado, sementes/mudas de plantas medicinais, equipamentos para laboratório de fitoterápicos). Houve a contratação de Rosalina Nogueira da Silva para coordenar o projeto e organizar as mulheres com o trabalho de prevenção e partilha dos conhecimentos das plantas medicinais e uso dos chás e da alimentação saudável, além de profissionais da área da saúde. Além dos intercâmbios em outros municípios que também tinham experiência em fitoterápicos na saúde pública.

Porém, como a vida é contraditória, na disputa eleitoral de 2004, o grupo de esquerda foi derrotado pelo Partido da Frente Liberal, onde seus líderes já no processo de transição anunciaram que iriam encerrar o projeto do horto medicinal. Nesse contexto, as mulheres se reuniram com lideranças do campo popular e construíram outros caminhos para redimensionar a experiência.

Quando o contrato venceu, a gestão sucessora não renovou e também não assumiu a continuidade do projeto (Ben, 2016). De fato, a administração repassou para a Universidade Comunitária da Região de Chapecó – Unochapecó os equipamentos dos laboratórios que, segundo Rosalina, eram de última linha, e transformou o local para um projeto de abatedouro. Posteriormente, vimos todo aquele

investimento sucateado como foi denunciado pelo vereador Marcelino Chiarello.² Rosalina lembra com tristeza de ter visto aquela experiência desmoronando e conta que foi muito difícil a continuidade. Lembra ainda que conversaram no grupo familiar, com pessoas da comunidade e com a direção do MMC. Que fazer? “Pelo MMC, veio aqui a Sirlei Kroth Gaspareto e a Ivanilde Gris Conte e fomos olhar o local para fazer o horto medicinal. Vimos junto com o Nésio.

E a Carmem sempre dizia “vamos fazer o horto nosso e não depender da prefeitura” (Depoimento de Rosalina para Marilete Molinari, em 2 dezembro de 2021).

Foi, então, que junto às mulheres intensificamos a recuperação das plantas e ervas e organização do horto medicinal coletivo que pudesse preservar a diversidade de plantas os conhecimentos e ajudar na melhoria da saúde das pessoas. Houve um processo de reorganização da unidade de produção para fazer do local um espaço pedagógico de estudo e prática em saúde integral. “O que confirma a ideia de território enquanto espaço de conflito, de tensionamento e não de passividade” (Gaspareto, 2018, p. 106). Neste caso, referimo-nos aos conflitos de projetos de sociedades aprendidos na militância no MMC e na Pastoral da Saúde que proporcionaram e redimensionaram a apropriação de conhecimentos em relação ao uso, plantio, manejo, processamento de plantas e sementes crioulas para gerar saúde e produção de alimentos saudáveis. Além de somar na luta nacional de integrar os fitoterápicos como políticas públicas de saúde.

Vale ressaltar ainda que a luta do campo popular resultou em 2006 na criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde – Sistema Único de Saúde - SUS.³ Essa Lei sofreu alterações em 2017. Agora são 29 práticas integrativas que podem ser disponibilizadas no SUS, entre elas:

² Vereador do PT-SC, morto no dia 11.11.2011, por denunciar esquemas de corrupção em Santa Catarina.

³ Foi publicada na forma das Portarias Ministeriais nº 971 em 03 de maio de 2006, e nº 1.600, de 17 de julho de 2006

fitoterápicos, massoterapia, reike, homeopatia, entre outras (MMC, 2021).

O reconhecimento público das plantas medicinais entre outras práticas integrativas na prevenção e tratamento à saúde, valoriza o conhecimento das mulheres e suas práticas nos quintais produtivos – “território das mulheres” (Gaspareto, 2018, p. 148). Para Saquet e Silva, (2008, p. 37), “o território corresponde ao palco onde se realizam as atividades criadas a partir da herança cultural do povo que o ocupa; é também uma fração do espaço local articulada ao mundial”. É o projeto popular de agricultura camponesa na perspectiva da agroecologia se concretizando e as mulheres se constituindo “guardiãs de sementes”, da vida, da sabedoria, dos conhecimentos. “Nós mulheres em nossas diferentes características de camponesas enquanto guardiãs de resistência, ao guardar as sementes multiplicamos a esperança e o conhecimento popular ancestral que é também conhecimento científico” (MMC, 2020, não paginado). Tais motivações, vivências, práticas e experiências possibilitaram a criação da Associação Pitanga Rosa.

4. Do Horto Municipal à Associação Pitanga Rosa: A semente plantada, germina, nasce e dá frutos

A Associação Pitanga Rosa foi criada oficialmente em 2016. Tem sua sede localizada na comunidade de Faxinal dos Rosas, zona rural do município de Chapecó, estado de Santa Catarina. É formada por um coletivo de mulheres camponesas, militantes do MMC, outras engajadas na Pastoral da Saúde na Diocese de Chapecó, que reivindicaram junto ao poder público municipal na gestão popular 2000 – 2004 a implantação do horto medicinal e laboratório de fitoterápicos, conforme descrito anteriormente.

Neste sentido, a Associação Pitanga Rosa é uma expressão do acúmulo dessas experiências como expressa seu objetivo: “Dedicar-se ao estudo e pesquisa alternativa na produção, plantio, processamento e

conservação das plantas medicinais, e sementes crioulas, como também a formação e divulgação, para o bem comum, da utilidade das plantas para prevenção da saúde e da biodiversidade” (Fossá, Ben y Frigo, 2020, p. 06). E o lema: “Vivenciar os conhecimentos ancestrais no uso das plantas medicinais para cuidar e transformar vidas” (Fossá, Ben y Frigo, 2020, p. 10).

Podemos dizer que esse conhecimento continua sendo transmitido de geração em geração como expressa Sofia, 9 anos, neta de dona Rosalina: “O Pitanga Rosa é importante pra mim, porque quando estou com gripe, o remédio me salva e quando a vó está ensinando as mulheres eu aprendo junto também”. (Sofia. Depoimento concedido a Marilete Molinari em 2 dezembro de 2021).

Esse processo transformou a unidade de produção de Rosalina. Lá encontramos um território de resistência camponesa, cabocla, das mulheres, da agroecologia e principalmente de cultivo das plantas medicinais e alimentícias como uso terapêutico. Uma das metas da Associação Pitanga Rosa é proporcionar cursos de capacitação e formação primando pelos princípios da metodologia prática-teoria-prática da educação popular. Ao mesmo tempo em que desenvolvemos habilidades nos apropriamos do conhecimento tanto para identificação das plantas e seus princípios ativos, quanto para manipulação artesanal dos fitoterápicos. Outra ação é a produção e distribuição de mudas de plantas e sementes de forma a beneficiar as famílias da comunidade e do entorno, sensibilizando para preservação das variedades e do ambiente.

Associação Pitanga Rosa é também um espaço educativo de conservação e apropriação dos conhecimentos que vem sendo ressignificados. Recebem lideranças, estudantes desde o ensino fundamental, ensino médio, graduação e pós-graduação. Dona Rosalina diz que ao receber as(os) visitantes tem sempre uma mística de acolhida, um pouco da história da Associação, troca de conhecimentos envolvendo a teoria e prática, degustação de sucos e lanches produzidos pelas mulheres com os produtos da época e trilha do conhecimento na unidade de produção mostrando as plantas medicinais e alimentícias.

Atualmente as mulheres estudam, aprofundam e colocam em prática outros conhecimentos. Aprendem e sabem preparar tisanas, tinturas, calmantes, olinas, xaropes, sucos, spray, pomadas, óleos, comprimidos, repelentes, cremes, revitalizantes, travesseiro medicinal, sabonetes, receitas para controle biológico de bichinhos, receitas de alimentação e outras (Fossá, Ben y Frigo, 2020). Também a Associação Pitanga Rosa disponibiliza material impresso como folders, cadernos, cartilhas com reflexões e orientações.

Cerca de 35 mulheres estão diretamente envolvidas na experiência da Associação Pitanga Rosa e estão organizadas em escala para o trabalho voluntário. Os encontros de trabalho e formação são semanais e envolvem o plantio, cultivo, colheita, secagem, processamento, armazenamento e estudo. A seguir, descrevemos o depoimento de Loriva, Tereza e Eni, concedidos à Marilete Molinari no dia 2 de dezembro de 2021. Assim, leitor e leitoras poderão tirar suas conclusões e fazer suas próprias interpretações sobre.

Loriva, vizinha de Rosalina, diz: “Eu gostei de trabalhar no Pitanga porque a gente se encontra, se reúne, faz remédio e trabalha tudo juntos”. Dona Tereza, do município de Xaxim/SC, expressa: “O Pitanga Rosa foi uma luz. Na época que estava com problemas de depressão e problema sério de saúde. Eu vim aqui me fortaleci. Tomei os medicamentos nossos naturais e hoje, graças a Deus, estou com uma saúde ótima.”

Dona Eni de Menezes Barp, da Linha Simoneto, também disse: “Eu venho aqui na Rosa, no Pitanga, trabalhar, ajudar, porque eu acho muito importante. Os remédios naturais é a primeira coisa que a gente precisa se agarrar mesmo. Uma vez quando éramos pequeno na casa do pai era esses remédios que a gente se salvava. [...]. Venho porque gosto e acho importante”. Por fim, dona Rosalina diz: “O que fizemos no Pitanga é trabalhar com o interesse social, que as pessoas estejam bem, utilizem as nossas técnicas de trabalho como um meio de ajudar a vida das pessoas”.

Considerações finais

A Associação Pitanga Rosa, além de se constituir enquanto espaço que atua permanentemente com terapias integrativas, trabalhos sobre o cuidado das plantas, do solo, dos alimentos, dos fitoterápicos, é da mesma forma um lugar onde as mulheres se reúnem para fazer tinturas, compostos, florais, homeopatias. Ali se dá uma troca de experiência nas três áreas: humana, animal e vegetal. Elas enfrentam coletivamente os conflitos e desafios. Fazem medicamentos fitoterápicos para prevenir e tratar doenças, lidam com situações humanas de ansiedade, criam práticas diversas a exemplo do uso das pedras, dos minerais, florais, massoterapias, entre outros.

No fazer-se da Associação a grandeza e valor das relações humanas, do compromisso e empoderamento social das mulheres, da colaboração e voluntariado, da preservação da vida e da biodiversidade. É um espaço que vai oportunizando às pessoas mais saúde e mais vida. Na Associação Pitanga Rosa nós mulheres produzimos nossos próprios remédios, nossa própria alimentação, a busca pelo bem viver e a felicidade!

Referências

AMTR-SUL. Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais da região Sul do Brasil. (2008) Mulheres camponesas em defesa da vida. Gráfica Passografic. Chapecó/SC.

Bem, F. (2016) Pitanga Rosa: sabedoria tradicional aplicada ao cultivo e processamento de plantas medicinais no oeste catarinense. Pinhalzinho: Catavento.

Casagrande, Jacir Leonir. (1991) Movimentos Sociais do Campo: Mulheres Agricultoras em Santa Catarina. Mestrado em

Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis.

Fossá, A. S.; Ben, Fy Frigo, D. (org.) (2020) Pitanga Rosa: Agroecologia, saúde e qualidade de vida. Pinhalzinho Arcoires Produções.

Gaspareto, S. A. K. (2018) Pedagogia da Semeadura: a Construção de Saberes pelo Movimento de Mulheres Camponesas no Programa de Sementes Crioulas”. Ed. dialogar. São Paulo, SP.

Lorenzoni, et al. (2020) Movimento de Mulheres Camponesas: Veredas de muitas histórias. en Mezdri, A. et al. (Org.) Feminismo Camponês Popular Reflexões a partir de experiências do Movimento de Mulheres Camponesas. Outras Expressões. 1ª edição. São Paulo/SP pp. 13 – 32.

Mezdri, A. et al. (Org.) (2020) Feminismo Camponês Popular Reflexões a partir de experiências do Movimento de Mulheres Camponesas. Outras Expressões. 1ª edição. São Paulo/SP.

MMC. Movimento de Mulheres Camponesas. (2020) Sementes de resistência: Camponesas semeando esperança, tecendo transformação. Folders.

Saffioti, H. (2015) Gênero, patriarcado, violência. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular.

Saquet, M. A.; Silva, S. S. (2008) Milton Santos: concepções de geografia, espaço e território. Geo UERJ. Ano 10, v.2, n. 18, pp. 24-42.

Silva E. R.; Rauber, A. C. (2020) Sementes de resistência: caminhos para a produção

de alimentos saudáveis en Mezdri, A. et al. (Org.) Feminismo Camponês Popular Reflexões a partir de experiências do Movimento de Mulheres Camponesas. Outras Expressões. 1ª edição. São Paulo/SP, pp. 100 – 110.

***Problematizando las geografías
afrodescendientes***

La diáspora africana y la espacialización de los territorios quilombola en Brasil*

Rafael Sanzio Araújo dos Anjos

Introducción

El territorio visto como “instancia concreta de las acumulaciones desiguales de diferentes épocas” es el principal revelador de los espacios oficialmente visibles, es decir, los aceptados y formalizados por el sistema dominante, y los invisibles, que corresponden a territorios usados que no deben ser mostrados en cartografía y paisaje geográfico oficial, asociados a expresiones peyorativas de territorialidad, como las favelas, la gente de la periferia, los pobres, los mocambos, los quilombos, entre otros (Anjos, 2014). En el “bulto de estos dos Brasil” (formal / informal o incluido / excluido) se encuentran poblaciones y territorios de origen africano, durante siglos al margen de los proyectos del país, con tratamiento “residual” y políticas de invisibilidad, donde “no existen” es una de las estrategias mejor fundamentadas. En este sentido, las exigencias para comprender esta complejidad son grandes y hay pocas disciplinas

* Este capítulo es una parte sintética de la conferencia dictada en portugués en el II Encuentro Latinoamericano de Movimientos Socio-Espaciales y Socio-territoriales. Traducción al español: Pamela Elisabeth Morales Arteaga. Hay algunos conceptos que el autor utiliza fueron mantenidos en la traducción como los originales diferenciados por modo itálico

mejor ubicadas que la geografía y la cartografía para ayudar en la representación e interpretación de las innumerables cuestiones de esta primera mitad del siglo XXI.

La geografía sigue siendo

[...] el mejor instrumento para observar lo sucedido, porque presenta las marcas de la historicidad espacial; de lo que está sucediendo, es decir, ha registrado los agentes que actúan en la configuración espacial actual y lo que puede suceder, es decir, es posible captar las líneas de fuerzas de la dinámica territorial y señalar las posibilidades de la estructura espacial en el futuro cercano. (Anjos, 2011)

La

[...] geografía afrobrasileña de la que nos ocupamos en esta oportunidad no es un trozo de una subdivisión geográfica, sino que tiene la perspectiva de ser un componente estructural y revelador de la geografía real, que rescata a uno de los principales “Brasil invisibles” durante siglos, es decir, pueblos y territorios que existieron y siguen sobreviviendo, pero de manera marginal, extraoficial y residual, es decir extraoficial en su totalidad. (Anjos, 2020) Recuerdo que en el concepto de territorio se agregan sentimientos de apropiación de una porción de espacio, así como en cuanto a su límite, su frontera. “¡El territorio es el sostén de la existencia humana! En esencia, es un hecho espacial y social ligado a una dimensión política, permeado por la identidad, posible de categorización y dimensionamiento” (Anjos, 2011).

En esta dirección, en el

[...] territorio afrobrasileño se registran las referencias culturales y simbólicas de las matrices africanas en su colectividad, es decir, es el espacio de múltiples escalas (catastral, urbano, municipal, regional y nacional) construido y materializado desde sus referentes identitarios y de pertenencia territorial, donde su población tiene un rasgo de origen étnico y social predominante. (Anjos, 2020) Los mapas, producto principal de la cartografía,

[...] son representaciones gráficas e interpretaciones del mundo real, que se erigen como herramientas efectivas en la lectura del territorio, permitiendo revelar las construcciones sociales y los rasgos naturales del espacio y, por tanto, mostrar los hechos geográficos y sus conflictos. (Anjos, 2011)

En este sentido,

[...] la cartografía afrobrasileña es ante todo una herramienta estratégica básica para la ciudadanía que ha sido negada durante siglos, ya que este instrumento, en cierto modo, habla y hace visible el Brasil africano que muchas y muchos no quieren oír ni ver, ¡pero su construcción y existencia es posible! Por eso la cartografía no es solo un dibujo: produce documentos, es decir, puede mostrar cómo funciona la sociedad, cómo está la ciudad, el municipio, el Estado, la nación, dónde están los excluidos e incluidos en el sistema. (Anjos, 2011)

La fotografía como registro documental es otro recurso estratégico en el proceso del conocimiento geográfico, especialmente por las representaciones e interpretaciones del tiempo, el espacio, la sociedad, que no cristalizan y no son estáticas. En el “registro fotográfico de un entorno o una matriz cultural es posible ver los referentes de una estructura social que nos permite observar si es rica o pobre, justa o discriminatoria, entre otras posibilidades de interpretaciones espaciales” (Anjos, 2011). Por tanto, entendemos la foto como un instrumento fundamental en el proceso de conocer qué pasó y qué pasa en un territorio afrobrasileño.

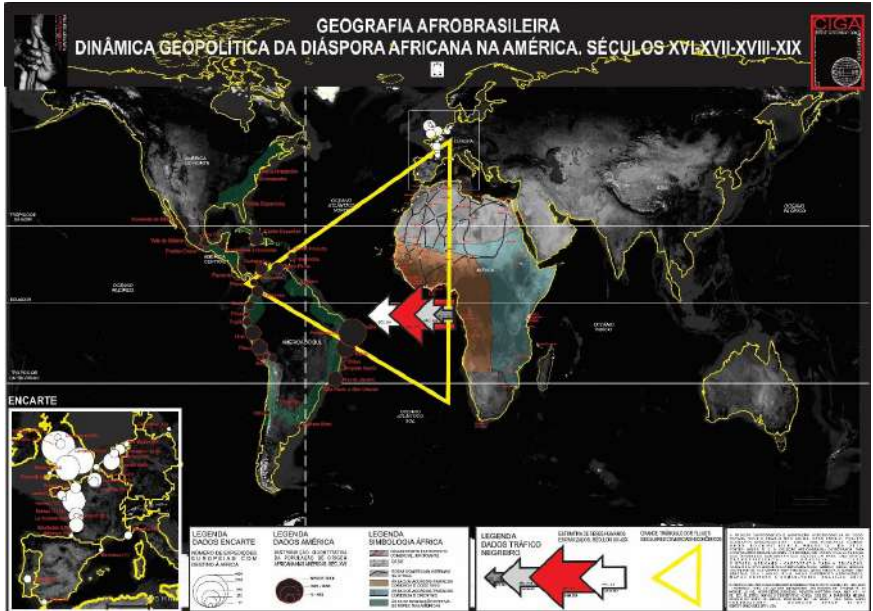
En este trabajo buscamos ayudar en la expansión del conocimiento y la información sobre las conflictivas referencias geopolíticas del Brasil africano contemporáneo, así como traer otros elementos geográficos al entendimiento de las configuraciones espaciales y la gobernanza de los territorios quilombolas del país.

1. Referencias espaciales de la geopolítica del Brasil colonial y los quilombos

“La cartografía y la geografía mundial se modificaron profundamente a lo largo de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX”, especialmente por los nuevos territorios incorporados, las “nuevas” fronteras establecidas e impuestas y la importante evolución de las técnicas. Este largo período de la historia de los seres humanos se caracterizará por una nueva fase de relaciones entre ellos y la naturaleza, y es en este contexto que la Ciencia Geográfica desarrollará y servirá al gran proyecto de dominación global justificada. El gran triángulo de flujos económicos y comerciales del siglo XV al XIX que involucró a Europa, África y América tenía al Océano Atlántico como un gran espacio de conexión y por sus mares navegaban las mercancías de Europa, Oriente, las colonias y los “barcos” “esclavistas” que salieron de la red de puertos europeos y del litoral en frente al litoral del continente africano (Anjos, 2010).

El Mapa 01 a continuación muestra las principales referencias territoriales de origen en África en los siglos del tráfico y la Geografía de la Diáspora que se configuró y estructuró a partir de la dinámica del sistema esclavista en las costas atlántica y pacífica y en el interior del continente americano, incluso con contradicciones sociales, políticas y económicas.

Mapa 01. Geografía afrobrasileña. Dinámica geopolítica de la diáspora africana en América. Siglos XVI-XIX.



Elaboración: Geog. Rafael Sanzio A. dos Anjos (2020). Proyecto GEOAFRO - UnB. Brasília. Fuente: Actualización del Registro Técnico de Registros Municipales de Territorios Quilombolas en Brasil, Informe preliminar. Brasília, febrero de 2020.

El proceso de pulverización de las diferentes matrices africanas en el territorio colonial brasileño por parte del Estado esclavista también tuvo como estrategia para obstaculizar la organización social, extinguir la lengua de origen e imposibilitar la continuidad de las culturas, es decir, se crearon dispositivos reales para que las poblaciones de África perdieran sus referencias de identidad y, en consecuencia, hubo una dilución de la identidad étnica africana. Este es otro factor geográfico que contribuye a la falta de una referencia ancestral de origen de la población afrobrasileña, con profundas interferencias en su ciudadanía y en el sentimiento de pertenencia territorial.

En la

[...] América esclavista, el quilombo significó la expresión geográfica concreta y más significativa de los conflictos con el sistema dominante y fue una reconstrucción y elaboración de un tipo de organización territorial existente en África Austral que se consolidará en el territorio. La gran extensión de las aldeas “libres” que se desarrollarán en las costas brasileñas del Océano Atlántico tienen en común la referencia de un espacio seguro y protegido, no necesariamente aislado, con igualdad de condiciones en la mayoría de las relaciones comunitarias, de libertad de acceso a la tierra, y una posible base de conflictos y guerras. (Anjos, 2010)

Las imágenes 24, 25 y 26 recrean con gran propiedad la geografía quilombola de los territorios de la antigua resistencia. En este sentido, el quilombo africano y el estadounidense tienen similitudes fundamentales.

Estos sitios africanos en América eran un hecho espacial de extensión continental y tenían un deseo colectivo de resistir la sociedad de opresión y exclusión. En Uruguay y Brasil fueron y se llaman mocambos, calhambo y quilombos; en Colombia, Ecuador, México y Cuba son los palenques; cumbes en Venezuela; marrons en Haití, el Caribe, Suriname, las Guianas, Estados Unidos y Jamaica; Cima-rrons en varias otras partes de América que hablan español y Bush Negrões en la Guayana Francesa. (Anjos, 2010)

Imagen 24. Aspectos de la tipología y distribución de la vivienda en el exquilombo del Brasil Colonial. Espaço do Quilombo, Museo del Cerrado. Goiania-GO. Geog. Rafael Sanzio, 2007



Fuente: Anjos (2010), *Quilombos*.

Imagen 25. Referencias de la estufa y horno de leña en el antiguo quilombo del Brasil colonial. Espaço do Quilombo, Museo del Cerrado. Goiania-GO. Geog. Rafael Sanzio, 2007



Fuente: Anjos (2010), *Quilombos*.

*Imagen 26. Aspecto del cementerio en el exquilombo del Brasil colonial.
Espaço do Quilombo, Museo del Cerrado. Goiania-GO.
Geog. Rafael Sanzio, 2007*



Fuente: Anjos (2010), *Quilombos*.

En el Brasil colonial, estos territorios étnicos organizados, independientes y numerosos constituían una amenaza para la estabilidad de la clase señorial y, precisamente por ello, fueron duramente reprimidos, fomentando la creación de capitanes forestales y expediciones para destruir sus territorios. La cartografía del Mapa 02,

[...] con el registro de los movimientos sociales de territorializados de los pueblos africanos y sus descendientes, revela la magnitud de la concentración de quilombos en el territorio de dominación portuguesa, puntuada y con parches regionales de las diversas manifestaciones contra el sistema esclavista. (Anjos, 2010)

Mapa 02. Geografia afrobrasileña. Principales zonas y sitios de quilombos y movimientos sociales del pueblo africano y sus descendientes. Siglos XVI - XIX



Fuente: Anjos (2010), *Quilombos*.

Cabe recordar que

[...] el Brasil colonial fue el que importó por la fuerza a seres humanos africanos de diferentes orígenes étnicos y culturales y el último en salir del sistema esclavista, resuelto institucionalmente con la firma de la Ley Áurea (1888), debido a las presiones internacionales y en un contexto de tensión interna entre segmentos con intereses diferentes a la sociedad dominante y con consecuencias traumáticas en el territorio brasileño en estos 132 años “portando” las referencias de la esclavitud criminal. (Anjos, 2019)

Es evidente que la ley “Dorada” apuntó a consolidar una

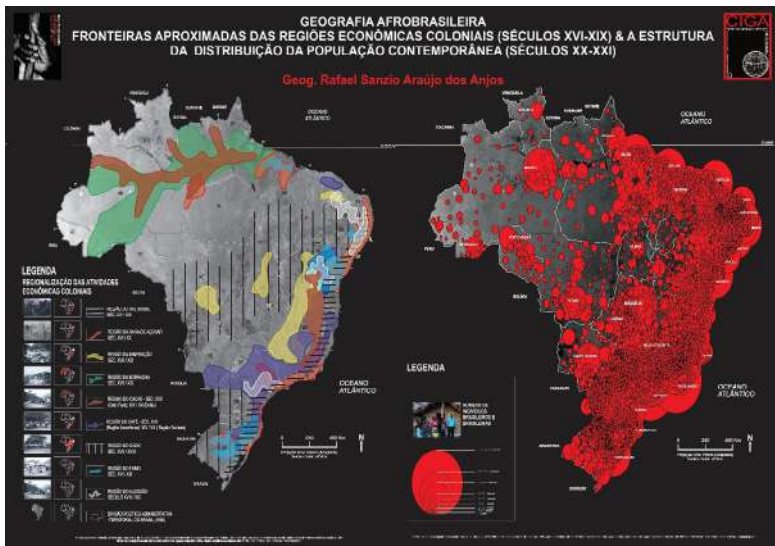
[...] Geografía Oficial de Desigualdades al “establecer” una estructura de privilegios seculares. En este sentido, los hitos de la Ley 001 de 1837 que institucionalizó que los africanos y sus descendientes no pudieran estudiar y les prohibió asistir a las escuelas públicas; la primera Ley de Tierras (Ley 601 del 18 de septiembre de 1850) que tenía como premisa geopolítica imposibilitar la posibilidad de propiedad y compra-adquisición de tierras para los pueblos africanos y sus descendientes; la Ley Saraiva Cotegipe (1885) que impone que el analfabeto no tiene derecho a voto; la Ley Vadiagem (1890) que institucionalizó el uso de la violencia, y la “Política de Blanqueamiento” extraída de los resultados del 1.º Censo Demográfico (1872) y oficializada por el Estado brasileño en el Congreso Internacional de Razas (Londres, 1911), son referencias jurídico-temporales que apuntaron a promover la extinción de las personas de origen africano por el hambre, la falta de educación, la desterritorialidad y la inexistencia en el sistema dominante. (Anjos, 2020)

En las relaciones espaciales de las regiones de producción colonial y la distribución de la población de Brasil hoy, el hallazgo espacial más evidente señalado es que la “dispersión” de nuestro pueblo cuantificado (IBGE, 2010) aún se procesa en los mismos espacios coloniales, es decir, los demás territorios quedan bajo el control o por ser controlados por los segmentos dominantes y el ineficaz sector de toma de decisiones

(el Estado) no puede cambiar esta Geografía Colonial estructural, perversa y aún dominante expresada en los Mapas 03 y 04.

Aquí es una de las grandes paradojas geográficas del país, por un lado, un Brasil con un sistema agrario-exportador sostenido durante algunos siglos por la mano de obra esclava con la tecnología africana más evolucionada en los trópicos, formado por un selecto grupo de comandantes de Europa. Ascendencia (dueños de capital financiero, industrial y territorial), con control de espacios de alta productividad de monocultivos y altamente tecnológicos en su proceso productivo (previamente, apoyado por seres humanos esclavizados), basado en la mecanización de acciones y trámites (destierro del trabajo manual) y un tratamiento con métodos coloniales para posibles conflictos en el territorio utilizado o en la frontera no deseada, es decir, aquí está “Brasil desarrollado” del primer mundo. (Anjos, 2014)

Mapas 03 y 04. Geografía afrobrasileña. Fronteras aproximadas de las regiones geoeconómicas coloniales (siglos XVI-XIX) y estructura de la distribución de la población contemporánea (siglos XX-XXI)



Fuente: Anjos (2010), *Quilombos*, y Anjos (2014), *Atlas geográfico: AFRICABRASIL*.

Algunas consideraciones sobre la geografía quilombola con sus expresiones espaciales y los conflictos institucionales en Brasil se tratan en el siguiente ítem.

2. Geografía quilombola y Brasil contemporáneo en conflicto

Dentro de la “geografía africana invisible en el Brasil contemporáneo” destacamos el olvido intencionado de los territorios quilombolas descendientes de los cuatro siglos del Sistema Esclavo oficial y los cien años del siglo XX de la “República Brasileña de Mentalidad Colonial”. La historia y la gobernanza brasileñas siguen asociando a la población de origen africano con una imagen de “esclavizados” y los quilombos siempre como algo del pasado, como si no fueran parte de la vida contemporánea del país, implementando sistemáticamente una estrategia social de “inexistencia” territorial. En este sentido, las acciones del sector decisorio son conflictivas y contradictorias, a pesar de las disposiciones constitucionales (1988) y la obligación de algunos órganos oficiales de resolver las demandas de los quilombos contemporáneos, es decir, es posible ver, en una manera casi estructural, que el contexto ha tenido un tratamiento caracterizado por acciones episódicas y fragmentarias. Es como si una parte significativa de Brasil (población, territorio, estructuras, sociales y políticas) continuara en el siglo XIX (Anjos, 2011). Es importante recordar que “en Brasil, comunidades negras tradicionales, vestigios de quilombos, mocambos, comunidades negras rurales, quilombos contemporáneos, comunidades quilombolas o tierras negras hacen referencia a un mismo patrimonio territorial y cultural invaluable, con sus saberes ancestrales parcialmente conocidos y que solo recientemente comenzó a tener interés en la academia y una atención “aparente (fragmentaria y hostil) del Estado con evidencia de baja prioridad en la gobernanza oficial” (Anjos, 2010).

Las comunidades quilombolas en el espacio brasileño tienen una variedad de tipologías habitacionales y patrones de estructuras

espaciales, sin embargo, con supervivencias y similitudes registradas en casi todo el territorio nacional, hechos que las unen en una identidad arquitectónica y urbana ancestral común. Las casas quilombolas tienen el referente de ser núcleos, con diferentes usos y ocupaciones en el terreno, con una importante interacción con el paisaje y una marcada integración con las necesidades y creencias cotidianas. El Mapa 05 y las imágenes 27 y 28 representan gráficamente y fotográficamente un terreno tradicional en la Comunidad da Ema en el Territorio Kalunga en Goiás, el área territorial más grande del país.

Llama la atención la función comunitaria, productiva y agregado de las actividades en los espacios, hechos que otorgan al territorio quilombola autonomía e independencia en la supervivencia. Esta arquitectura quilombola en el espacio de los quilombos contemporáneos revela el pasado resistente, pero sobre todo el tipo de técnicas utilizadas en las edificaciones y la naturaleza de los materiales utilizados, que siguen siendo los mismos que los de sus antepasados. (Anjos, 2010)

En este sentido, tratar a las comunidades quilombolas

[...] en el contexto geográfico nacional significa enfrentar una lucha política histórica y territorial actual y, sobre todo, un proceso de conocimiento científico aún en construcción. De ahí la necesidad de un concepto geográfico “más amplio” del quilombo, como segmento social-espacial, por lo tanto, territorializado y sobreviviente-resistente en la estructura de la mentalidad colonial-racista dominante en la sociedad brasileña contemporánea. Estos territorios afrobrasileños tienen como problema geográfico estructural la fragilidad de sus marcos jurídico-constitucionales que descuidan sus derechos de facto y plenos para la definición oficial de sus fronteras. Este hallazgo ha comprometido la dirección de una política eficaz para resolver sus problemas fundamentales, es decir, su reconocimiento dentro del sistema social brasileño y la demarcación y titulación de los territorios ocupados. El modelo institucional dispersivo que se practica en el país para la problemática de los territorios tradicionales

excluidos revela la fragmentación de las responsabilidades gubernamentales para resolver efectivamente las demandas de los quilombos. Entre los daños reales en este contexto de desinterés del Estado se encuentra el debilitamiento del movimiento quilombola organizado y la fractura de acciones concretas en la implementación de políticas públicas de reparación. (Anjos, 2011)

Una de las consecuencias de este complejo panorama de

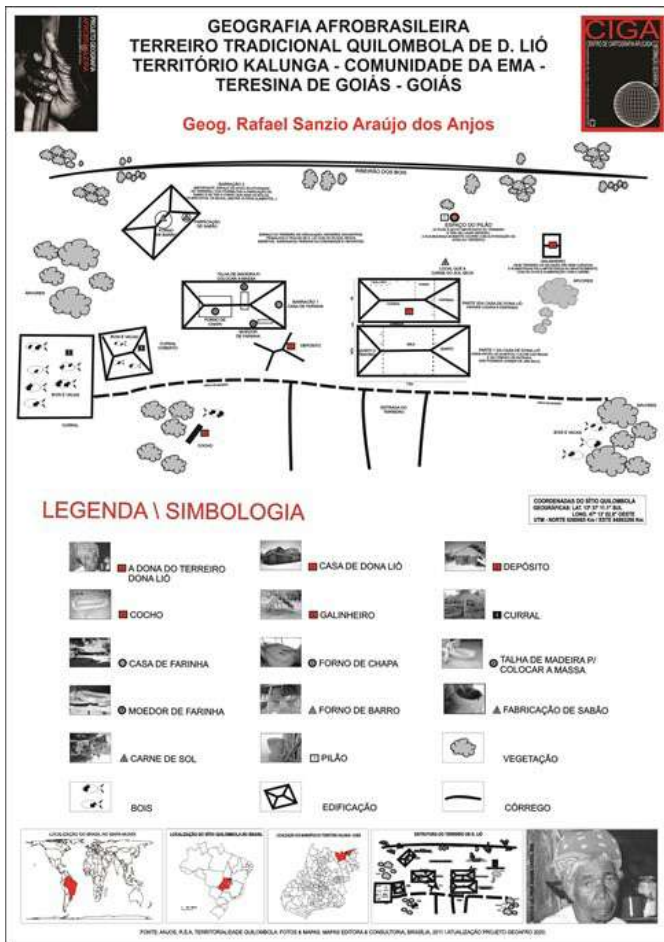
[...] la inexistencia en la estructura del Estado es evidente en la ausencia de una cartografía quilombola oficial. Este componente fundamental, el mapa como registro gubernamental de decisión e intervención, puede ser una herramienta estratégica de acciones para cambiar este modelo operativo. (Anjos, 2020)

En este contexto, quedan sin resolver varias otras preguntas, además del mapa oficial de los territorios quilombolas del país: ¿quién es el responsable de la Base de Datos Afrobrasileña en el país? ¿Su actualización y difusión? ¿Y el mapeo del Estado de la población de origen africano de donde forman parte los quilombolas? Son preguntas fundamentales que quedan sin respuestas satisfactorias, es decir, continúa la opción por mantener el esquema institucional fragmentado que permite la ausencia de una cartografía esclarecedora e informativa para los diversos segmentos de la sociedad y la gobernanza pública y privada.

El Mapa 05 muestra la cuantificación de registros de quilombolas en el país, elaborado por el Proyecto GEOAFRO (www.projetogeoafrobrasil.com), a pesar de esta significativa expresión espacial no oficial, “los quilombos contemporáneos se encuentran en una situación de riesgo social y físico y su ausencia es una prioridad evidente en la gobernanza oficial y en el ejercicio de su autoridad como responsable de la formulación de políticas correctivas” (Anjos, 2020). En ese sentido, la falta de una política de estado, consistente y duradera, y no una política de gobierno, puntual y cosmética, es un factor de imprudencia para que un proceso de extinción y caracterización errónea de estos territorios étnicos, erróneamente vistos como “espacios

problemáticos”, pero que se puede ver desde otra perspectiva, es decir, “territorios de soluciones” para muchas demandas sociales y económicas de la nación. Algunas recomendaciones básicas se describen a continuación.

Mapa 05. Geografía Afrobrasileña. Tradicional Quilombola Terreiro de D. Lió - Território Kalunga, Comunidade da Ema, Teresina de Goiás, Goiás



Fuente: Anjos (2020), *Territorialidad Quilombola: Fotos y Mapas*.

Imagem 27. Casa Principal no Terreiro Tradicional de D. Lió. Território Kalunga, Comunidade da Ema, Goiás

GEOGRAFIA AFROBRASILEIRA
A CASA PRINCIPAL NO TERREIRO TRADICIONAL
QUILOMBOLA DE D. LIÓ - TERRITÓRIO KALUNGA -
COMUNIDADE DA EMA - TERESINA DE GOIÁS - GOIÁS.

Geog. Rafael Sanzio Araújo dos Anjos


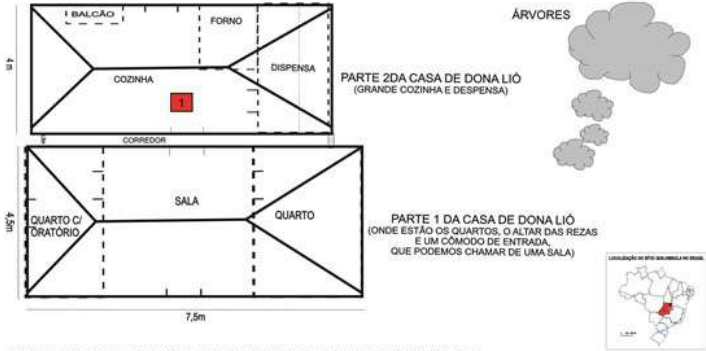


FOTO: PROF. RAFAEL SANZIO DOS ANJOS, 2009



ÁRVORES

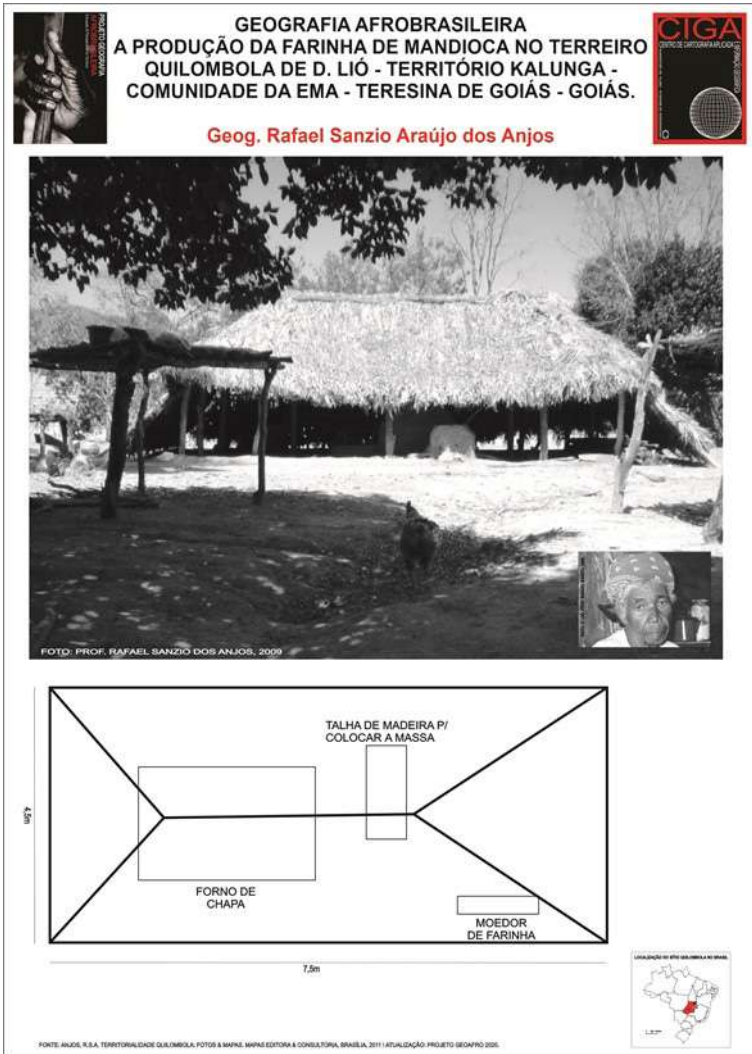
PARTE 2DA CASA DE DONA LIÓ
(GRANDE COZINHA E DESPENSA)

PARTE 1 DA CASA DE DONA LIÓ
(ONDE ESTÃO OS QUARTOS,
O ALTAR DAS REZAS
E UM CÔMODO DE ENTRADA,
QUE PODEMOS CHAMAR DE UMA SALA)

FONTE: ANJOS, R.A., TERRITORIALIDADE QUILOMBOLA: FOTOS E MAPAS. MAPINS EDITORA & CONSULTORIA, BRASÍLIA, 2011 (ATUALIZAÇÃO PROJETO GEOMATRO 2008).

Fuente: Anjos (2011), *Territorialidad Quilombola: Fotos y Mapas.*

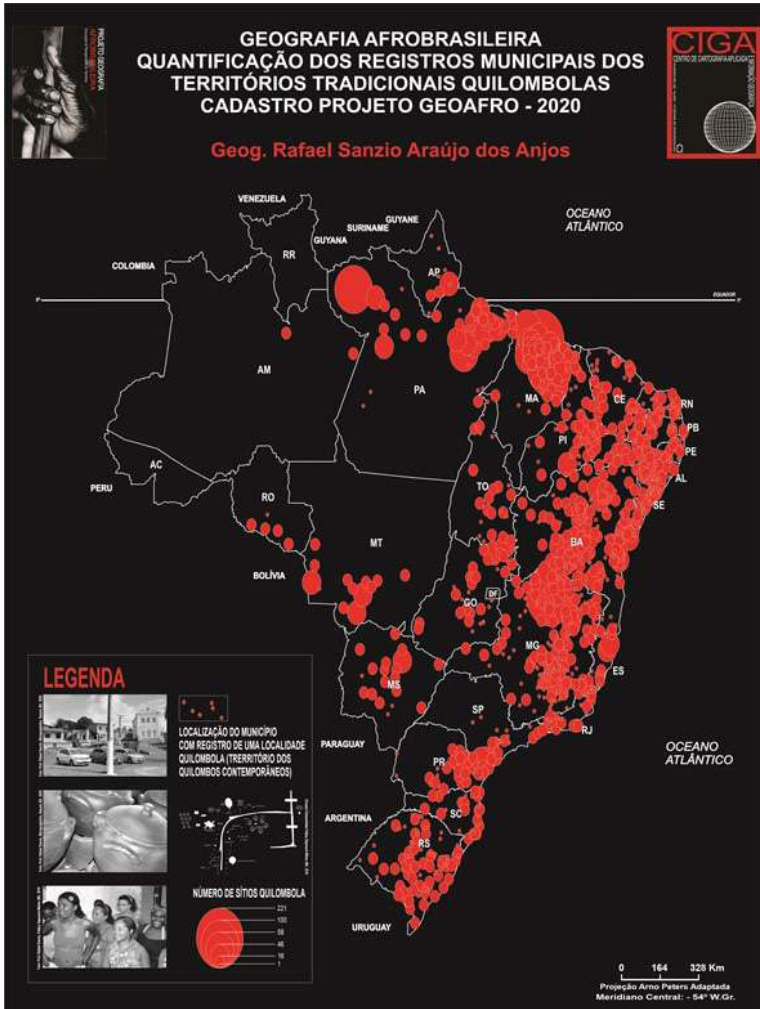
Imagem 28. Produção de farinha de yuca en el tradicional Terreiro de D. Lió - Território Kalunga. Comunidade Ema, Goiás



Fuente: Anjos (2011), *Territorialidad Quilombola: Fotos y Mapas*.

3. Conclusiones y recomendaciones básicas

Mapa 06. Geografia Afrobrasileña. Cuantificación de registros municipales de territorios quilombolas. Registro del proyecto GEOAFRO 2020



Fuente: Anjos (2020), *Informe de investigación*.

Tomando como referencia que no se agotan las construcciones analíticas y especulaciones, concluimos y recomendamos lo siguiente:

- El mantenimiento de la

[...] desinformación de la población brasileña con respecto al continente africano sigue siendo un obstáculo estructural para una perspectiva real de la democracia racial del país. No podemos perder de vista que entre los principales obstáculos que crea el sistema para la inserción de la población de origen africano en la sociedad brasileña está su inferioridad en el sistema escolar con un daño inconmensurable a las generaciones sucesivas, ya que se trata de un orden que está institucionalizado desde hace más de un siglo en el país. (Anjos 2019);

- La geografía afrobrasileña permite “ver” lo que muchos no quieren ver, incluso utilizando artificios como la negación de la realidad. En este sentido, las cuestiones geográficas conflictivas no quieren callar: en verdad, ¿quién se ve y quién no se ve en territorio brasileño? La geografía oficial del país, al no tratar adecuadamente la geografía afrobrasileña, configura una forma explícita de discriminación en el racismo estructural de cinco siglos. Este es sin duda uno de los principales desafíos geográficos del siglo XXI (Anjos, 2020);
- El tema de las comunidades quilombolas en territorio brasileño ya no puede ser tratado con acciones puntuales, esporádicas ni obstaculizado por conflictos de atribuciones institucionales presentes de manera significativa, en esta primera mitad del siglo XXI y con signos de mantenimiento. El modelo actual en la gestión de las demandas quilombolas en el país se está desagregando y se puede cambiar cuando tenemos una perspectiva real de cambio en la política de Estado del país, con un enfoque en las reparaciones y pagos de deudas seculares con afrobrasileños. Las Imágenes 29 y 30 son representativas de estas dos perspectivas, la primera revela la

agresividad de la exclusión y la negación de la necesidad de reparación por parte del Gobierno y la segunda trae la existencia territorial-comunitaria y la resistencia secular ancestral;

Imagen 29. Daños a la placa oficial del Programa Quilombola Brasil, SEPPPIR, Gobierno Federal en la Comunidad Mesquita, Ciudad Oeste, Goiás



Fuente: Prof. Rafael Sanzio dos Anjos (2009).

- Tomamos como premisa

[...] que la información por sí sola no significa conocimiento. Sin embargo, nos revelan que con la ayuda de la ciencia y la tecnología podemos colaborar con el conocimiento geográfico en la modificación de acciones y políticas recurrentes puntuales y superficiales en la nación. En este sentido, la geolocalización oficial como política pública, es decir, información espacial precisa, eficaz, automatizada y reveladora sobre el territorio utilizado y la población real se configura como el principal instrumento de visibilidad en el país de invisibilidades por el racismo estructural y todos sus aspectos. Mecanismos del Estado Conservador. La ubicación geográfica garantizada con seguridad institucional (respetando la Ley General de Protección de Datos [LGPD] y el Marco Civil da Internet) a todos los segmentos de la estructura social del país es una “puerta concreta” para apoyar la adopción

de las medidas consiguientes para cambiar las situaciones de emergencia de las poblaciones y territorios del Brasil africano. (Anjos, 2020)

Imagen 30. Momento de agregação e perspectiva da Comunidade Quilombola de Tapuio, Queimada Nova, PI



Fuente: Prof. Rafael Sanzio dos Anjos (2005).

Bibliografía

Anjos, R. S. A. (2009) *Quilombos: Geografia Africana-Cartografia Étnica-Territórios Tradicionais*. Brasilia: Mapas Editora y Consultoría. Anjos, R. S. A. (2010) *Quilombos: Geografia Africana-Cartografia Étnica-Territórios Tradicionais*. Brasilia: Mapas Editora y Consultoría.

Anjos, R. S. A. (2011) *Territorialidade Quilombola: Fotos y Mapas / Quilombola Territoriality: Photos & Maps*. Brasilia: Mapas Editora y Consultoría .

Anjos, R. S. A. (2012) *Geopolítica da Diáspora África-América-Brasil. Séculos XV-XVI-XVII-XVIII-XIX. Cartografia para Educação*. Brasília: Mapas Editora y Consultoría .

Anjos, R. S. A. (2013) A Territorialidade dos Quilombos no Brasil Contemporâneo: Uma Aproximação. En Silva, T. D. y Goes, F. L. (orgs.), *Igualdade Racial no Brasil – reflexões no Ano Internacional dos Afrodescendentes* (pp. 137-152). Brasília: IPEA.

Anjos, R. S. A. (2014a). *Atlas Geográfico ÁFRICABRASIL*. Brasília: Mapas Editora y Consultoría.

Anjos, R. S. A. (2014b). *O Brasil African-Algumas Referências dos Séculos XVI-XXI: Cartografia para Educação*. Brasília: Mapas Editora y Consultoría.

Anjos, R. S. A. (2017) Diversidade étnica no Brasil invisível-visível: Apropriações-usos dos territórios y conflitos sócio-espaciais. En Suertegaray, D. M. A., Silva, C. A., Pires, C. L. Z. y Paula, C. Q. (orgs.). *Geografia e conjuntura brasileira* (pp. 275-309). Porto Alegre: Consequência Editora / Anpege.

Anjos, R. S. A. (2019) O Brasil africano invisível-visível e geografia secular perversa. *Revista Humanidades*, (6), 75-99.

Anjos, R. S. A. (2020a) *Atualização do Cadastro Técnico dos Registros Municipais dos Territórios Quilombolas do Brasil- Relatório Preliminar*. Brasília: Projeto GEOAFRO \ CIGA-UnB.

Anjos, R. S. A. (2020b). Territórios invisíveis do Brasil Africano: cartografias y tensões sócio-espaciais nos terreiros religiosos. En Rego, N., Azevedo, A. F. y Kozel, S. (orgs.), *E-book Narrativas, Geografias, Cartografias - para viver, é preciso espaço e tempo* (pp. 39-64). Volumen I. Porto Alegre: Editora Compasso Lugar-Cultura / Editora IGEO-UFRGS. Piketty, T. (12 de diciembre de 2017). Brasil tem maior concentração de renda do mundo e o 1 % mais rico. *El País*.

Microfísica de la reacción

Hacia una teoría de los quilombos afroargentinos

Norberto Pablo Cirio

Philosophiæ naturalis principia mathematica –usualmente *Principia*– es un libro de Isaac Newton (1687) que marcó el campo de las ciencias duras por sus descubrimientos en cálculo y mecánica al plantear el primer modelo cosmológico científico en el cual la gravedad es el centro explicativo. La adjetivación de dura para ciertas disciplinas tiene su contraparte en blanda para otras y obedece a un criterio de apariencia inapelable, los resultados de aquéllas no son opinables, o sea son objetivos al inferirse de leyes absolutas. Por el contrario, la antropología es blanda pues, al ser humanista, sus teorías y métodos son peregrinos según sean sus épocas y contextos. Thomas Kuhn (1962), al dar cuenta de cómo avanza la ciencia, explica que tal dicotomía nunca fue tal, es más un deseo pues toda ciencia es humanamente entendible al ser instrumentada por científicos no exentos de pasiones y miserias, además de que la nacionalidad, el género, el color de piel, la religión, etcétera, inciden en su financiación, reconocimiento y difusión. En el campo de estudios afro un caso controversial es la teoría de las razas, invención política sin sustento científico pero que fue instrumental al programa de dominación metropolitana para desnivelar a la humanidad en razas, a favor de la blanca —entre otros sinónimos consolidados en la modernidad (Michaud,

2017) —y, así, justificar su apropiación territorial-económica a la par que, cruz mediante, perpetraba genocidios con fin eugenésico. Aunque hace tiempo se la recatalogó pseudociencia el racismo es su fruto, flagelo que sigue alimentando prejuicios y desniveles (Segato, 2007; Mbembe, 2016; Michaud, 2017).

La dicotomía entre ciencias duras y blandas tiene vasos comunicantes. Estas toman de aquellas teorías y métodos, directamente o con adaptaciones. La antropología se vale de algunos conceptos y métodos duros que, por su temprana naturalización, suele olvidarse su origen. Trabajo de campo, por ejemplo, tomado de la física y la química, pues campo es por campo de experimentación: las hipótesis diseñadas en gabinete desde cierta teoría son sometidas a experimentación en el campo social para su falsación. Otro concepto es el de resiliencia, de la mecánica que, aplicado a las culturas afroamericanas, permite abordar los procesos de resignificación ante presión entrópica (otro concepto duro, de la termodinámica). El estudio de esta resiliencia tiene creciente aplicación al relevar una teoría fundacional que entendía que los esclavizados y sus descendientes solo podían retener sus patrones culturales originales —africanismos— a fuerza mantenerlos intactos o puros, sino los perderían o contaminarían en correlación a su mestizaje biológico —léase blanqueamiento— y tránsito en la modernidad, lo cual se consideraba, antes que tarde, inexorable y sin retorno (Herskovits, 1941; Bastide, 1982).

Con la teoría a desarrollar aquí procuro un diálogo interdisciplinar entre ciencias “duras” y “blandas” para abordar un fenómeno intrínseco a la trata esclavista, el quilombo, que aún repercute en la Argentina, recorte espacial de mi interés. La primera parte del título de este artículo, “Microfísica de la reacción”, emula al del libro *Microfísica del poder*, de Michael Foucault (1992). Como no hay poder sin resistencia, esta dialéctica me posiciona, desde la descolonialidad del poder (Quijano, 2014), en un lugar provocativo para visitar aquella estrategia de supervivencia solidarizándome con el “débil”, que entrecomillo porque tenía poder pero lo manejaba desde otra

ontología, métodos y fines. No deseo extrapolar de modo mecánico la teoría newtoniana a este campo pero la entiendo fecunda para abordar los quilombos argentinos, tema que la academia recién comenzó a abordar y de modo casuístico. En América estos espacios reactivos existieron con diferentes nombres prácticamente desde el inicio de la invasión europea, como palenque en Colombia o mocambo y quilombo en el Brasil, incluso generando un subgrupo, los “seminoles negros” en La Florida durante el dominio español (Schwartz, 2001; Landers, 2003; Faccio, 2017; Zavala Guillén, 2021). En la Argentina lo hubo al menos desde mediados del siglo XVII hasta principios del XX, reconfigurándose algunos en localidades, aunque la historia “olvidó” tal origen.

Desde la comodidad del escritorio... Newton, su teoría y la esclavitud

El siglo XVII fue vergonzoso y notable para Occidente pues, como advirtió Walter Benjamin “No hay documento de cultura que no sea, al tiempo, de barbarie” (Benjamin, 2008, p. 309). Todas las metrópolis estaban, en mayor o menor medida, implicadas en el tráfico esclavista (Thomas, 1998) para potenciar la extracción de riquezas de América —el comercio triangular del Atlántico negro— (Gilroy, 2014). Ello incrementó la exploración con avances de todo tipo, incluso epistemológicos, pues se consolidaron los métodos científico y filosófico, generando una nueva imagen de la realidad librada del designio divino, una realidad dominable para entenderla y modificarla, propia de una mentalidad burguesa ya plenamente operativa (Romero, 1987, p. 81). En este marco, no debe olvidarse que ese no fue un período más de la historia del mundo, fue cuando las elites europeas tomaron conciencia de sí al advertir la relativa facilidad y las enormes ganancias económicas, pero también cínicas, de su conciencia planetaria instrumentando el tándem explorar-conquistar (Pratt, 2010, p. 44). Ello cobró dimensiones nominalistas por ejemplo

con la clasificación de Linneo, no pudo haber sido más exitosa sin el lubricante económico de la esclavitud, que, por entonces, alcanzaba su cenit. Este dominio del Otro permitió experimentos masivos de ingeniería social y de disciplina en el sistema de plantaciones y minería (Pratt, 2010, p. 80). Es por eso que la ganancia de la etnoclase esclavócrata no estuvo exenta de glamur. En 1663 Inglaterra comenzó a acuñar una moneda que llamó guinea para recordarse que de allí provenía la mayor parte del oro de sus arcas, sustancia de su materialidad y cuya asociación reforzaba grabando en algunas un elefante. Eso fue veintidós años antes de que Newton publique el libro citado, coincidiendo ese período con el que necesitó para redactarlo. ¿Cómo se solventó? (In)directamente con la trata ya que fue custodio de la Royal Mint (1696-1699) y director hasta su muerte, en 1727, así como accionista de la South Sea Company, fundada en 1711 para proveer de esclavizados a españoles en puertos como el de Buenos Aires, donde esta logró un asiento por el Tratado de Utrecht (1713-1715). Como accionista no le fue bien, el perder veinte mil libras en la crisis de la compañía en 1720 lo malhumoró tanto que sus allegados sabían que no debían mencionarla por el resto de su vida (Thomas, 1998, p. 239).

Lo dicho alcanza para explicar cómo el avance científico no pudo posicionar a Europa a la vanguardia mundial sin su capacidad para sostener guerras allende sus fronteras por largos períodos, lo que incluye los tres siglos y medio de la trata, o sea hasta 1807 cuando Inglaterra, con aguda visión de futuro, la abolió y se proclamó monitora de su abolición porque veía inminente un cambio de paradigma, su revolución industrial, hija de los avances científicos y la acumulación de capital generada por el esclavismo, por lo que en ese inminente nuevo orden el esclavizado sería innecesario y debía reconvertirlo en obrero para consumirlo consumidor. Por supuesto fue un largo y sinuoso camino (Moulier-Boutang, 2006), pero el crédito de este cambio de paradigma lo inició Inglaterra. En ese ajedrez fáctico-ideológico en 1813 dejó de acuñar la guinea y las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamaron en la Asamblea del Año XIII su primera medida abolicionista, la “libertad de vientres”. Aunque

fue menos un beneficio para el esclavizado que intención de deseo, lo hizo en obediencia a la orden inglesa. Para entonces Newton estaba muerto, pero había gozado del título real de sir. Buenos Aires también, pero como apócope de sirviente de los ingleses, como demostró sin vergüenza durante la mayor parte del siglo XIX y la primera mitad del XX. Este viraje de significado es una genial observación de Augusto Roa Bastos en su novela coautoral, *Los conjurados del Quilombo del Gran Chaco*, que retomo luego.

Los quilombos desde las teorías de Newton y Foucault

La interdisciplinariedad planteada entre física, historia, geografía, musicología y antropología sobre la esclavitud busca optimizar el estudio de nuestros quilombos siguiendo la tradición comunicante entre ciencias “duras” y “blandas”. Michael Foucault y Gilles Deleuze, en una entrevista sobre los intelectuales y el poder, este explica que la academia transita un nuevo modo de relacionar teórica y práctica (Foucault, 1992, pp. 78-88). La práctica no es la mera aplicación o fruto de la teoría ni su fuente inspiradora, por lo que no hay un proceso de totalización que las subsuma. Su relación es parcial, fragmentaria, porque la teoría es siempre local en tanto relativa a cierto campo del saber, más puede tener aplicación en otros. Cuando una teoría se incrusta en su dominio aparecen obstáculos que deben relevarse por otro tipo de discurso. Por el contrario, la práctica es la conexión entre teorías, o sea esta permite empalmar a aquélla de modo plausible. Como ninguna teoría se desarrolla sin toparse con alguna barrera es la práctica la que permite traspasarla para que siga operativa.

Reseño la teoría de Newton de interés porque este es un artículo para un público no necesariamente familiarizado con la física. La edición original de *Principia* fue en tres tomos después de dilaciones por temor al plagio. Lo que me interesa son las leyes del movimiento: la de la inercia, la de la fuerza y la de la acción y reacción, pilares de la mecánica, y, en concreto, la tercera: “con toda acción

ocurre siempre una reacción igual y contraria: O sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas” (Newton, 1998, p. 94). Desde la interdisciplinariedad que caracteriza a la comunicación entre científicos me inspiré en ella porque permite explicar mejor los sitios quilombolas por estar en dialéctica con los sitios de esclavitud concomitantes. Así, la dinámica de la acción y reacción del movimiento en la física y la trata esclavista deviene compatible. Para fundamentar introduzco la teoría de la microfísica del poder de Foucault que explica, como por un espejo invertido, la de la resistencia. En perspectiva newtoniana ella permite entender cómo los esclavizados lograron sobrevivir a la atomización instrumentando reacciones concretas de índole contraria, por ejemplo ideando el quilombo como estrategia de autonomía subversiva. Este viraje sitúa al campo de los estudios afroargentinos en un lugar sensible a la capacidad de agencia de los esclavizados en un medio totalmente hostil, lo que habla de una trama de acciones ideológicamente lejos de la pasividad y armonía de convivencia con que la academia ortodoxa usualmente la describe (aunque este topoi está en retirada en las últimas décadas). Así se está reestudiando el Quilombo de Palmares al desplazar la visión sustantivista a la procesal, entendiendo a los fugados ya no como esclavos a recapturar sino como sujetos o agentes capaces de negociar par a par con el imperio portugués (Faccio, 2017). La pasividad y armonía señaladas en los estudios afroargentinos clásicos, basados en criterios impresionistas y lectura acrítica de fuentes secas que presentaban al esclavizado satisfecho, alegre, sintiéndose casi de la familia del amo pues se lo trataba bien, lo que Lucas Regalito (2014) llama “esclavitud benigna”. Aunque hubo investigadores que no suscribieron a tal benignidad, este topoi no solo es fruto de un discurso refractario al sentir del Otro, halla su justificación en la benignidad de la esclavitud por esclavistas quienes, aunque reconocían la inhumanidad del sistema, aliviaban su culpa creyendo que salvaban a los africanos del paganismo, del canibalismo y de la esclavitud intralocal que, a menor corto plazo aún, los mataría (Thomas, 1997, p. 132).

En microfísica del poder Foucault dice que todo surgimiento se produce en un determinado estado de fuerzas. Así, la pseudociencia del racismo impuso una diferencia de valores entre humanos para declarar mejor a un tipo sobre el resto, como el subsahariano, a quien rotuló negro. En tal teatro social en que se distribuyen las fuerzas estas operan de modo desigual, discontinuo, aleatorio, y fueron imprimiendo, entre otros valores, el de libertad. Es posible acceder al guion ocultado de la hhistoria, porque interpretar los hechos es apoderarse de un sistema de reglas sin significado intrínseco ni dirección pues solo es solícito al poder, locus desde donde se designa qué es legal. Como dijo Iván Jablonka respecto al historiador ante la escritura, “la idea de que los hechos hablan por sí mismos es una muestra del pensamiento mágico” (Jablonka, 2016, p. 18), pues él es responsable de articular en una perspectiva coherente lo que investiga en cierta teoría, asumiendo que el acto de escritura de la historia tiene valor performativo al ser indisoluble de su trama. El devenir de la humanidad puede interpretarse incesantemente porque nunca es singular y el saber no está al servicio de la comprensión sino para hacer tajos en las redes de lo naturalizado, de lo historizado con gravitación teleológica, racionalista, unívoca, genealógica y documentalista, todo lo cual es funcional al statu quo. Levantando la mirada del escritorio se vislumbra la lejanía de lo incontado, lo que puede, desde una sensibilidad discrepante, subvertir lo que se creía tenía un orden. Volver a barajar los hechos indica que la suerte nunca estuvo echada, invita a atender lo desatendido, a solidarizarse con los Olvidados de la Historia, haciendo callar al silencio porque este nunca fue tal sino la materialización negativa de las voces de ciertos sujetos sociales licuadas hacia lo incomprensible, “el molesto ruido de los perdedores” (Appadurai, 2007, p. 59). Dicho esto, como la historia no es neutra, mejor declarar de qué lado se posiciona uno para no ser preso de la física del poder, servil a la hegemonía (Foucault, 1992, p. 80).

En la arena de la política moderna el poder hegemónico se caracteriza porque raramente se manifiesta de modo directo sino desde la

insinuación, la amenaza, lo indirecto, con pequeños gestos, estrategia que Foucault llama microfísica del poder pues es de índole capilar, microscópica, que rige de modo múltiple lo social estableciendo relaciones de autoridad-sumisión en distintos niveles, con apoyos complementarios. La revolución es el modo en que tales relaciones se modifican si la opresión es tal que hace vecina la muerte al dominado. Su interpretación del poder está en la antípoda del enfoque que solo consideraba las relaciones contractuales y de dominación. Foucault lo aborda desde abajo problematizando los mecanismos sutiles por los cuales funciona en organización reticular porque no hay centro rector, por eso las personas son medios y no fines que permiten, (in)conscientemente, que el poder fluya de tal modo que rige sus vidas de modo naturalizado. Hasta donde sé no estudió el poder en contexto de esclavitud, por lo que estos lineamientos no son plenamente aplicables pero sirven de inspiración para explicar por qué, cómo y a dónde huía el esclavizado, en tanto acción subversiva al orden racial impuesto que, desde su horizonte, que es el que me interesa, era caos y mala vida, o sea desorden.

Territorios de ausencia: los quilombos argentinos (asediando al binarismo)

Río Negro (2 o más), Santa Fe (2), Santiago del Estero (2 o más), Córdoba (1), Buenos Aires (1), Entre Ríos (1), Jujuy (1), Chaco (2 o 3), Misiones (3), La Pampa (1) y, quizá, La Rioja (1) y Corrientes (1) tuvieron quilombos y algunos siguen como enclaves urbanos. Este punteo no es exhaustivo pero sirve para comenzar a analizar el tema desde lo teórico, de ahí que no provea el aparato erudito de estos, aunque reseño algunos para reforzar mi propuesta.

La palabra quilombo es africana y hace siglos se emplea en el país. Su primer reconocimiento académico está en Eurindia, de Ricardo Rojas, de 1924, junto a otras del español local que considera herencia africana (Rojas, 1980, p. 39). Usual en el lunfardo, está reseñada

en estudios sobre esta lengua, como el libro de Oscar Conde (2014, p. 213) que, por considerarlo el más logrado, tomo de guía. Dice que es de origen quimbundo y significa unión, su uso fue por influencia brasileña pero como sinónimo de prostíbulo y, luego, de lío, barullo, gresca y desorden. La cita más antigua que documenté en la primera acepción local es una nota interna de la Policía de Buenos Aires de 1827 que dice que fueron encarceladas ocho mujeres “por haber sido halladas reunidas en la casa Quilombo de Maria Tomasa Casao” (Trelles, 1859, p. 237). Con todo, su uso en el sentido primigenio se remonta al menos dos siglos. Según el historiador Juan Pablo Ferreyro esclavizados de Jujuy se fugaban a un quilombo sito entre Humahuaca y El Carmen, donde al parecer convivieron con otras etnias. La fuente es un manuscrito de mediados del siglo XVII, por lo que el sitio era contemporáneo al Quilombo dos Palmares, liderado por Tata Zumbi, el más importante del Brasil y que, en red con otros, funcionó por casi un siglo y llegó a albergar unas veinte mil personas (Faccio, 2017).

Los quilombos surgieron como síntoma del esclavizado al procurar una condición de vida digna porque la ley, al fraguarse a conveniencia metropolitana, casi siempre fallaba en su contra y la maquinaria de la esclavitud seguía tribunaliciamente aceiteada pues “la fuerza hace la ley y la ley tiene por contenido la fuerza en sí misma” (Mbembe, 2016, p. 109). Sin embargo, hubo juicios favorables, incluso a su iniciativa y por motivos tan diversos como obtener su libertad, luchar contra la segregación o para que el amo reconozca al domingo día de descanso, Señor mediante. Los quilombos empezaron en varias partes de América en el siglo XVI. Como en Cuba (Barnet 1966), aquí su poblador era llamados cimarrón. Para Joan Corominas (1996, p. 150) es un americanismo, su cita más antigua es de 1535 y significa “alzado, montaraz’, aplicado a los indios, negros y animales huidos, ‘salvaje, silvestre’, probablemente derivado de cima, por los montes adonde huían los cimarrones; compárese cerril y cerero”. En este tema la etimología permite acceder al horizonte conceptual de aquellos subversivos al lograr orden al desorden

impuesto porque no solo los atomizaba, los mataba. Si su promedio de vida era una década y para el esclavista era más fácil reemplazarlo que mejorar su vida (Thomas, 1997, p. 132), se comprende que su tiempo corría a descuento. La etimología de Conde de quilombo como unión es correcta pero incompleta. Según los diccionarios de lenguas bantúes elaborados durante la trata el término se desagrega en el prefijo qui (gran o buena) y el radical lombo (unión), resultando gran unión o buena unión (Dias, 1697, pp. 32 y 37; De Cannecatim, 1804, p. 714), lo que dice mucho de esta política que era, a un tiempo, salvacionista y sabotadora de la maquinaria de la esclavitud.

El estado del arte del tema demuestra que no interesó hasta hace poco y su abordaje es casuístico (Salas, 2017; Negruzzi, 2020), interés se retrotrae al 2000, cuando Daniel Schávelzon plantea en *The Historical Archaeology of Buenos Aires* si el sitio arqueológico santafesino de Arroyo Leyes pudo haber sido un quilombo. Con todo, el tema está estudiado por los afroargentinos del tronco colonial. Para deconstruir el monopolio blanco de la generación del conocimiento, el artículo “Aportes de africanos y afrodescendientes a la identidad nacional argentina”, del matrimonio de Lucía Dominga Molina y Mario Luis López (2010), aborda dos quilombos santafesinos y la afrorionegrina Cecilia Palma (2021) plantea el origen quilombola de la desaparecida Colonia de Negros en su provincia. Según mi etnografía, muchos saben de aquella dinámica independentista, algunos dicen descender de cimarrones —y la evidencia (in)material documentada así lo indica—, e, incluso, viven en el mismo lugar. Al menos dos de los quilombos que identifiqué siguen habitados, uno como pueblo y otro como paraje, de apariencia similar a otras localidades para los no sensibilizadas con su historia profunda. En algunos afroargentinos su memoria oral se remonta a la América del siglo XVI y al África ancestral, saber tan rico como inexplorado dado el favoritismo —por no decir exclusivismo— académico por las fuentes secas, pese al avance de la historia oral y la microhistoria (Portelli, 1991; Levi, 1999).

Mi aproximación es una desobediencia epistémica sensible a la categorización y la antropología colaborativa (Rappaport y Ramos

Pacho, 2005), construyendo con ellos saberes sobre cómo sus ancestros se proclamaron libres. El giro descolonial del poder es la teoría que da sentido a mi enfoque pues rompe el binarismo caro a Occidente, como esclavitud-abolición (Guzmán y Ghidoli, 2020) que, por naturalizar la perspectiva blanca de la historia, producen textos interesantes pero que no buscan romper el monopolio académico. Así, los afroargentinos no solo cuentan otra historia, también la cantan y danzan desde otra metodología a la hegemonizada por el pensamiento científico (Cirio, 2019), la oralidad viva y corporizada —epistemológica— y otra episteme desobediente a la occidental, la afroepistemología. Ello lo propone el afrovenezolano Jesús Chucho García (2010) para hacer tajos al conocimiento estructurado, como señalan Foucault y Deluze. Aquí sabiduría es superior a fuerza y el saber práctico-holístico del afro releva al libresco del académico ortodoxo.

¿Cómo se poblaron los quilombos afroargentinos? Con fugados, como testimonian avisos en la prensa, leyes, expedientes policiales y convenios internacionales pidiendo su delación, captura y devolución. La teoría newtoniana —en concreto la tercera ley del movimiento, la de acción y reacción— permite explicar que no los crearon arbitrariamente, su emergencia guardó correspondencia espacial con la fuente centrípeta del poder inmediato. Poder y resistencia se entrelazaban en tanto zona de contacto (Pratt, 2010, p. 31): “espacios sociales donde culturas dispares se encuentran, chocan y se enfrentan, a menudo dentro de relaciones altamente asimétricas de dominación y subordinación, tales como el colonialismo, la esclavitud, o sus consecuencias”. Tal zona permitía cercanía para contactarse con parientes, colaboradores y amigos para abastecerse de vituallas y alerte de peligro, cercanía porque el radio de maniobra era corto por huir a pie, incluso engrillados. Ese fue el caso de un quilombo que estudié en profundidad, literalmente, La Capilla (Entre Ríos), pues mis dos trabajos de campo, en 2019, fueron coordinando un equipo de arqueólogos. Comenzó hacia 1860 con esclavizados fugados del Brasil, uniéndose con afroentrerrianos y afrouruguayos

que vivían allí y empezaron a autodenominarse manecos, por Manuel Evangelista, jefe de familia afrobrasileña, etnónimo vigente. Hasta entrado el siglo XX eran plurilingües, lo que incluía una jergonza propia. La memoria oral documentada incluye relatos sobre cómo los afrobrasileños escaparon engrillados al menos doscientos kilómetros cruzando el río Uruguay por Concordia y eligieron afincarse allí por la protección que les brindaba la selva de Montiel. Así vivieron las primeras décadas hasta que la zona comenzó a poblarse con inmigrantes a iniciativa de la Jewish Colonization Association en 1892, funcional al ideario nacionalista de traer ultramarinos —léase europeos— para potenciar al país, tal como aún avala el artículo 25 de la Constitución Nacional. Para ello se crearon colonias y, también, se radicaron en localidades existentes, como, justamente, La Capilla, más su impronta fue tal que en 1968 la rebautizaron Ingeniero Miguel Sajaroff en homenaje a un ideólogo del programa (Freidenberg, 2013). La mayoría de los testimonios indican que la convivencia multiétnica —pues también había criollos e indígenas— fue buena. Como las demás colonias judías, hacia 1940 comenzó a declinar. Para entonces la mayoría de los inmigrantes murió y su descendencia, como los manecos, se mudaron a ciudades como Rosario, Buenos Aires y San Miguel (Provincia de Buenos Aires), buscando trabajo. Cuando hice mi etnografía la memoria oral cimarrona halló su contraparte arqueológica, siendo el primer sitio del país en que se hizo una excavación sobre la diáspora africana en un área rural y en el terreno que siguen habitando sus descendientes (Richard et al., 2022). Este caso se explica, desde Newton, la emergencia de un sitio quilombola en reacción con la acción esclavista del lindante Brasil, último país en abolirla, en 1888. Los manecos debieron manejar información valiosa al saber a dónde ir para liberarse pues el río Uruguay ya era frontera internacional.

La Capilla no fue el único quilombo fronterizo con el Brasil. Se conoce que los afrobrasileños formaron al menos tres en la selvática sierra central misionera. Si bien fueron contemporáneos a La Capilla, su emergencia se debió a la fuga de soldados afro en la Guerra de

la Triple Infamia pues la base de operaciones estaba en esa provincia (Salas, 2017).

Otra emergencia quilombola que puedo explicar desde Newton es el de la Boca de la Travesía (Río Negro). Su cercanía a la desemboadura del río Negro no es casual. Allí Fernando Alfaro tenía una factoría de esclavizados capturados por corsarios argentinos al Brasil durante la guerra con él (1825-1828), contando como clientes a otro esclavista, Luis Vernet, quien en 1828 compró treinta y uno para poblar Puerto Luis en las Islas Malvinas (Martínez de Gorla, 2003; Cirio, 2018; Frazzi, 2019).

Retomando mi glosa a Roa Bastos sobre la apócope sir de sirvienta para la obsecuencia del país al imperativo inglés, en Chaco hubo uno o dos quilombos. Uno lo citó Richard Burton en *Letters from the Battlefields of Paraguay* (1870), en la que plasmó sus vivencias en ese país en los dos años previos a dicha guerra: “Pasados’ (desertores) de toda clase andan vagando en las inmediaciones y se dice que, del lado opuesto, en el Gran Chaco, existe un amplio quilombo o establecimiento de fugitivos, donde brasileños y argentinos, orientales y paraguayos viven juntos en mutua amistad y en enemistad con el resto del mundo” (Burton, 1998, p. 528).

Planteada mi teoría desde un enfoque transdisciplinario entre física, historia, geografía, musicología y antropología procuro sentar las bases para abordar un fenómeno intrínseco a la trata. Al ser un concepto teórico posee cualidad predictiva. Por ejemplo, por la envergadura de la esclavitud en Córdoba, debió tener más de un quilombo, en vista al detectado por Guido Andrés Negruzzi (2020) en la localidad Casa Bamba, siendo bamba voz bantú, sugerente marca de presencia afro como, en la misma provincia, el pueblo Cabinda, el río Candonga. Si bien el concepto de microfísica de Foucault suma, hago la salvedad de que también había dinámicas que condicionaban los recorridos de quienes, al aprender estas dinámicas, podían utilizarlas. Así, la teoría de Newton es pertinente pero extrapolar la mecánica de la física a la sociedad no es, valga la redundancia, mecánica. Los humanos reaccionan de diferentes maneras según contextos, épocas

y regiones. Esto es fundamental porque sus itinerarios hacia la libertad pudieron variar según el margen de maniobra. Con todo, mi propuesta desea atender la demanda planteada por Negruzzi (2020, p. 237), la nominal inexistencia de quilombos en el país es como un impensable no por falta de evidencia sino por falta de herramientas para conceptualizarlos. Ergo, la teoría es más que un modo de analizar lo real, es el modo de configurar lo empírico para que sea interesante al pensamiento científico, cuyo fin es resolver problemas (Schuster, 2005).

En vista a lo presentado cabe dar, de modo tentativo, una definición de quilombo geosocialmente acorde a las relaciones locales de poder esclavista-esclavizado, pues el término no es necesariamente equivalente al de otras partes de América, aunque su emergencia fue la misma. A los fines prácticos elijo este término por sobre otros contemporáneos y referencio a su población no como cimarrona. Por su escaso estado del arte y la necesidad de revisar y crear fuentes limita entenderlo emic, aunque en el caso estudiado de La Capilla se mantiene oralmente. El gentilicio elegido responde al español de la Argentina y la documentación histórica y etnográfica lo demuestra. Aunque quilombo es un término usual hoy socialmente su significado alude a desorden o prostíbulo. No ocurre así con cimarrón, que se aplica a la flora y fauna salvaje, al mate amargo y a quien huía de lo urbano al “desierto”. Dicho esto, en contexto afroargentino entiendo por quilombo a un grupo de esclavizados autoliberados por fuga conviviendo en un espacio despoblado, poblado por indígenas o blancos disconformes con el *establishment*. El enclave estaba lo suficientemente distante del lugar de acción esclavista para mantenerlos a salvo, más la distancia era fruto de las condiciones materiales de la fuga, la orografía y la necesidad de no cortar ciertos lazos para mantenerse informados, aprovisionarse y seguir en contacto con parientes, amigos y colaboradores. La aplicación a este fenómeno social de la tercera ley del movimiento de Newton —a cada acción corresponde una reacción igual y contraria— permite explicar dónde estuvieron emplazados e inferir dónde pudo haber habido otros,

por formarse en díadas con el centro esclavista del que reaccionaban, pues no fueron creados arbitrariamente. Se trata de una visión fluida y amplia de resistencia que, siguiendo a Negruzzi (2020), sumaría el acto iniciático y, agregado, armonizador, en tanto ese espacio liberado era también, en perspectiva afrocentrada, liberador.

Hacia... las conclusiones

Este capítulo es el primer trabajo publicado del proyecto “Ocupando un lugar (físico) en el imaginario social: la presencia afro en la geografía argentina”, desarrollado en mi Cátedra desde 2019. En él busco trazar una cartografía social del olvido pues el país se pobló de muchos modos y su representación espacial tiene intersticios que permiten problematizar topónimos que dan cuenta de lo afro. La complejidad conceptual para su abordaje es tal que, primero, conviene atenderla para, en sucesivos trabajos, tomar estudios de caso, de los que di aquí un paneo de los, al menos, dieciséis detectados. Es por ello que inicio su teorización con la procedente preposición “hacia” del título. En su diccionario sobre mestizajes François Laplantine y Alexis Nous la tratan fecunda por no dar cuenta de un estado ni una cualidad sino como acontecimiento:

[...] un pensamiento de la mediación que se juega en los intermedios, los intervalos y los intersticios a partir de cruzamientos e intercambios, no puede reducirse al y, al entre, y al intervalo, que son categorías espaciales. Contrariamente a la mezcla y lo compuesto, es un pensamiento de la tensión, es decir, un pensamiento resueltamente temporal, que evoluciona a través de las lenguas, los géneros, las culturas, los continentes, las épocas, las historias y las historias de vida. No es un pensamiento de la fuente, la matriz, ni la filiación simple, sino de la multiplicidad nacida del encuentro. Es un pensamiento dirigido hacia un horizonte imprevisible que permite devolver toda su dignidad al devenir. (Laplantine y Nous, 2007, p. 349)

De esto me ocupo al mapear la historia del país con historias que asedian al binarismo pues, previo al abolicionismo, hubo esclavizados que se liberaron privándole al poder de su principal mano de obra, haciendo quilombo. El refinamiento de mi teoría quizá permita comprender mejor, y de modo compartido con los olvidados de la historia cómo pudieron, en condiciones asimétricas de poder y recursos, empoderarse para el máximo bien del que estaban privados, la libertad. Era la vida o la muerte, como plasmó Darwin en su diario de viaje en el Beagle. Al llegar en 1832 a Río de Janeiro vio a negros fugitivos cultivando en la cima de una montaña. Al ser descubiertos un grupo de soldados capturó a todos menos a una anciana que eligió lanzarse al vacío. Su reflexión alecciona cómo la libertad es apreciada por todos, pero el teatro de la historia sabe a quiénes consagrar protagonistas: “En una matrona romana, eso hubiera sido considerado el noble amor de la libertad; pero en una pobre negra, solo brutal obstinación” (Darwin, 2019, p. 59). El hecho lo afectó y, como liberal, era abolicionista, a diferencia de su capitán, Fitz Roy, conservador, suscitando una discusión tal que Darwin casi abandona la expedición.

Si, como dice Aníbal Quijano (2014, p. 47), “en la realidad social, el espacio no es solo una categoría física sino, sobre todo, una relación de poder”, siguiendo a Merleau-Ponty (1964, citado en Lois, 2018, p. 107), “ver es poseer la distancia”. Por intrusión española muchos poblados aborígenes se resignificaron en localidades. Hubo localidades fundadas por el Estado, por proyectos de colonización y otras las crearon afros autoliberados. Esto abre el juego a pensar de manera múltiple nuestra historia poblacional porque, como en el resto de América, la Argentina fue esclavista y ello nos repercute.

Bibliografía

Burton, R. F. (1998 [1870]). *Cartas desde los campos de batalla del Paraguay*. Buenos Aires: El Foro.

Corominas, J. (1996 [1961]). *Breve diccionario etimológico de la lengua castellana*. Tercera edición. Madrid: Gredos. Darwin, C. (2019). *Los viajes del Beagle: Diario y observaciones: (1832-1836)*. Buenos Aires: Eudeba.

De Cannecatim, B. M. (1804). *Diccionario da lingua bunda ou angolense*. Lisboa: Impressão Regia.

Dias, P. (1697). *Arte da língua de Angola*. Lisboa: Oficina de Miguel Deslandes.

Hernández, J. (1872). *El gaucho Martín Fierro*. Buenos Aires: Librería Martín Fierro.

Roa Bastos, A.; Maciel, A.; Prego Gadea, O., y Nepomuceno, E.

(2001). *Los conjurados del Quilombo del Gran Chaco*. Buenos Aires: Alfaguara.

Trelles, R. (1859). *Índice del archivo del Departamento General de Policía, desde el año de 1812*. Buenos Aires: La Tribuna.

Appadurai, A. (2007). *El rechazo de las minorías: Ensayo sobre la geografía de la furia*. Barcelona: Tusquets.

Barnet, M. (1966). *Biografía de un cimarrón*. La Habana: Instituto de Etnología y Folklore, Academia de Ciencias de Cuba.

Bastide, R. (1982). Los cultos afroamericanos. En Henri-Charles Puech (dir.), *Historia de las religiones* (pp. 51-79). Madrid: Siglo XXI.

Benjamin, W. (2008). *Obras*. Madrid: Abada.

Cirio, N. P. (2018). *Tras su manto de neblinas... Presencia de afroargentinos del tronco colonial en las Islas Malvinas en el siglo XIX*. Actas de las VII Jornadas de Historia Regional de La Matanza (pp. 54-83). San Justo, Universidad Nacional de La Matanza..

Cirio, N. P. (2019). La memoria oral sobre la esclavitud de los porteños descendientes de negros esclavizados. Un queloides cultural. *[In]visibles*, 11-33. San Isidro: Municipalidad de San Isidro.

Conde, O. (2014). *Lunfardo: Un estudio sobre el habla popular de los argentinos*. Buenos Aires: Taurus.

Faccio, Y. (2017). Escravos fugidos, mocambos y palmares: territorios en disputa y construcción discursiva de un enemigo interno en la Relação das guerras feitas aos Palmares nos tempos do Governador D. Pedro de Almeida (1675 a 1678). *Exlibris*, 6, 54-63.

Foucault, M. (1992). *Microfísica del poder*. Madrid: La Piqueta.

Frazzi, P. (2019). *La vida cotidiana en un comedor del siglo XIX: Consumo suntuario de la familia Alfaro en San Isidro*. Buenos Aires: Centro de Arqueología Urbana, UBA.

Freidenberg, J. (2013). *La invención del gaucho judío: Villa Clara y la construcción de la identidad argentina*. Buenos Aires: Prometeo.

García, J. C. (2010). Afroepistemología y afroepistemológica. En S. S. Walker (comp.), *Conocimiento desde adentro: Los afrosudamericanos hablan de sus pueblos y sus historias* (pp. 69-87). La Paz: Fundación Pedro Andavérez Peralta. Gilroy, P. (2014 [1993]). *Atlántico negro: Modernidad y doble conciencia*. Madrid: Akal.

Guzmán, F., y Ghidoli, M. L. (eds.). (2020). *El asedio a la libertad: Abolición y posabolición de la esclavitud en el Cono Sur*. Buenos Aires: Biblos.

Herskovits, M. J. (1958 [1941]). *The Myth of the Negro Past*. Boston: Beacon Press.

Jablonka, I. (2016). *La historia es una literatura contemporánea. Manifiesto por las ciencias sociales*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Landers, J. (2003). Cimarrones africanos e indios en la frontera española con los Estados Unidos. El caso de los Seminole negros de La Florida. *Memoria y Sociedad*, 15, 25-36. Laplantine, F., y Nouss, A. (2007 [2001]) *Mestizajes. De Arcimboldo a zombi*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Levi, G. (1999 [1991]). Sobre la microhistoria. En P. Burke (ed.), *Formas de hacer historia* (pp. 119-143). Madrid: Alianza.

Lois, C. (2018). *Terrae incognitae. Modos de pensar y mapear geografías desconocidas*. Buenos Aires: Eudeba.

Martínez de Gorla, D. N. (2003). La presencia de negros en la nor-patagonia. 1779-1837. *Memoria y Sociedad*, 15, 177-192.

Mayo, Carlos A. (1985) Los renegados de la frontera bonaerense (1750-1810). *Todo es Historia* 220: 67-71. Buenos Aires.

Mbembe, A. (2016) *Crítica de la razón negra*. Buenos Aires: Futuro Anterior Ediciones.

Michaud, É. (2017). *Las invasiones bárbaras. Una genealogía de la historia del arte*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Molina, L. D. y López, M. L. (2010). Aportes de africanos y afrodescendientes a la identidad nacional argentina. En S. S. Walker (comp.), *Conocimiento desde adentro. Los afrosudamericanos hablan de sus pueblos y sus historias* (pp.89-144). La Paz: Fundación Pedro Andavérez Peralta.

Moulier-Boutang, Y. (2006). *De la esclavitud al trabajo asalariado. Economía histórica del trabajo asalariado embridado*. Madrid: Akal.

Newton, I. (1998 [1687]). *Principios matemáticos de la filosofía natural*. Madrid: Alianza.

Negruzzi, G. A. (2020). Casa Bamba: una historia impensable. Un quilombo en las sierras de Córdoba. *Intersticios de la Política y la Cultura*, 15, 223-247. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.

Palma, C. (2021). *Un punto negro en el mapa de la Patagonia. Racismo y colonialidad en las puertas del Atlántico*. <https://yenerevista.com/2021/01/27/un-punto-negro-en-el-mapa-de-la-patagonia-racismo-y-colonialidad-en-las-puertas-del-atlantico/?fbclid=IwAR1ibMJYfBUtKn5ZLpXJhKV7D-q1wLOlxifQh7W-s7-3UrcbEeoUrMOKJ44>

Pratt, M. L. (2011). *Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Portelli, A. (1991). Lo que hace diferente a la historia oral. En D. Schwarzstein (Introd. y Selec.), *La historia oral*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, pp. 36-52.

Quijano, A. (2014). *Aníbal Quijano. Textos de fundación*. [Compilado por Zulma Palermo y Pablo Quintero]. Buenos Aires: Ediciones del Signo.

Rappaport, J., y Ramos Pacho, A. (2005). Una historia colaborativa: retos para el diálogo indígena académico. *Historia Crítica*, 29, 39-62.

Rebagliati, L. (2014). ¿Una esclavitud benigna? Una historiografía sobre la esclavitud rioplatense. *Andes*, 25 (2). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12738569005>

Reguera Rodríguez, A. T. (2001-2002). Newton y Feijóo. Un episodio en la divulgación de las ideas científicas (I y II). *Contextos*, (37-40), 283-344. León: Centro de Estudios Metodológicos e Interdisciplinarios de la Universidad de León.

Richard, A.; Pablo Cirio, N., y Lallami, C. (2022 [en prensa]). Oralidades y materialidades afrodescendientes de Ingeniero Miguel Sajaroff (exLa Capilla), Entre Ríos. Una aproximación antropológica. *Tefros*, 20 (1). Río Cuarto: Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto. Rojas, R. (1980 [1924]). *Eurinda, Ensayo de estética sobre las culturas americanas*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Romero, J. L. (1987). *Estudio de la mentalidad burguesa*. Buenos Aires: Alianza.

Salas, P. S. (2017). Asentamientos afrodescendientes en el territorio de la provincia de Misiones (1865-1930). En E. Lamborghini, M. C. Martino y J. F. Martínez Peria (comps.), *Actas de las Quintas Jornadas de Geala* (pp. 127-137). Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

Schávelzon, D. (2000). *The Historical Archaeology of Buenos Aires: A City at the End of the World*. New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers.

Schuster, F. G. (2005). *El método en las ciencias sociales*. Buenos Aires: Editores de América Latina.

Segato, R. (2007). *La nación y sus Otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de la Identidad*. Buenos Aires: Prometeo.

Schwartz, S. B. (2001). *Escravos, roceiros e rebeldes*. Bauru: Edusc.

Thomas, H. (1998). *La trata de esclavos. Historia del tráfico de seres humanos de 1440 a 1870*. Barcelona: Planeta.

Zavala Guillén, A. L. (2021). Afro-Latin American Geographies of in-betweenness; Colonial Marronage in Colombia. *Journal of Historical Geography*, 72, 13-22.

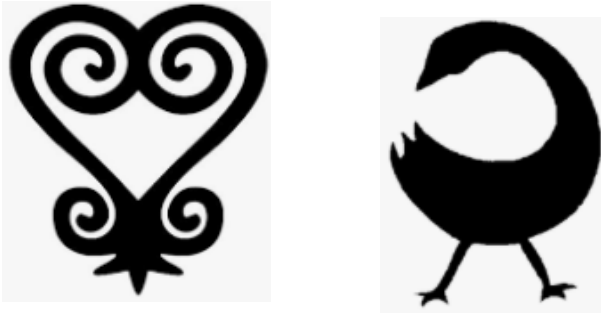
As lutas por lugares de memória no combate ao racismo e a antinegritude

Denilson Araújo de Oliveira

Introdução

O objetivo deste artigo é analisar as heranças das formas espaciais do antigo Cais do Valongo e dos cemitérios de Pretos Novos na área central da cidade do Rio de Janeiro. Nossa hipótese é que essas heranças espaciais da escravidão racial são a expressão racial de um desejo de apartheid (Mbembe, 2017) que permanece e se renova no atual contexto neoliberal. Nossa metodologia envolveu visitas de campo e nossos referenciais conceituais são os conceitos de lugar de memória (Nora, 1993) e desejo de apartheid (Mbembe, 2017).

Memórias de Lutas contra Antinegritude



Os ideogramas acima, apesar da diferença, têm o mesmo nome e significado. Eles são denominados de sankofa. Sua origem vem dos povos de língua Akan da África Ocidental na atual Gana, Togo e Costa do Marfim. Ele é geralmente traduzido como: “não é tabu voltar e buscar o que esqueceu”. Ele faz parte de um conjunto de símbolos denominados adinkras. Infelizmente poucos estudos foram feitos sobre eles, mas se sabe que são discursos ocultos (Scott, 2000) dos grupos que foram escravizados e levados ao trabalho forçado da África para o Brasil.

O símbolo da sankofa coloca um debate muito caro na sociedade brasileira, isto é, o debate sobre memória. O debate acerca da memória da escravidão e das suas diferentes formas de enfrentamento no Brasil se constitui num terreno bastante espinhoso para várias instituições como o Estado e a Igreja Católica no Brasil. A luta histórica por memória das inscrições espaciais do tráfico de pessoas escravizadas se constituiu como uma política de responsabilização de crimes da história cometidos por essas instituições. O silêncio das marcas espaciais das lutas contra a escravidão tem a politização dos ideogramas dos povos Akan como uma das marcas de r-existências

(Porto-Gonçaves, 2012). Inscritos nas paisagens por escravizados que trouxeram e recriaram, no novo mundo, suas línguas, costumes, hábitos, sistemas filosóficos, os adinkras conta histórias subalternizadas pelo projeto moderno-colonial. A memória torna-se um campo de disputa na construção de outros horizontes de sentido. Dar dimensão espacial a memória significa que algo do passado permaneceu fixo em algum lugar. A luta pela sua visibilização expressa as disputas de poder de acerca da geograficidade da história.

A escravidão racial durou mais 300 anos no Brasil. Os múltiplos processos de enfrentamentos se expressão em formas espaciais. Os adinkras são expressão de recriação dos mundos africanos num contexto colonial aonde isso era interditado. Os lugares de memória corporificados (Oliveira, 2020) por histórias afrodiaspóricas são heranças de antigas formas espaciais que contam um passado sombrio de nossa história, mas também das r-existências afrodiaspóricas.

Le Goff (1990), afirma que a construção de memórias vai muito além da recuperação de lembranças. Elas se constituem como ferramenta de disputa de significação e interpretação do real influenciando as lutas das novas gerações.

Mas a memória coletiva é não somente uma conquista, é também um instrumento e um objeto de poder. São as sociedades cuja memória social é, sobretudo, oral ou que estão em vias de constituir uma memória coletiva escrita que melhor permitem compreender esta luta pela dominação da recordação e da tradição, esta manifestação da memória (Le Goff, 1990: p. 476).

Por sempre envolver escolhas do que se quer lembrar do passado, as memórias estão sempre envolvidas em relações de poder (Halbwachs, 2006). Inscrever a memória na paisagem é defini-la como um fixo espacial (Santos, 1978), ou melhor, produzir uma apropriação material e simbólica da paisagem, inscrevendo nos objetos geográficos (símbolos em antigas casas, prédios, viadutos, infraestruturas urbanas, escolas, logradouros, cemitérios, etc) (Idem) tem se constituído como significados antirracista. A memória é uma forma de subjetivação que está em constante disputa territorial no enfrentamento

a antinegritude (Vargas, 2020). Construir políticas territoriais de memórias não é só recuperar e (re)construir lembranças, mas é também criar ferramentas políticas que influencia as sociedades no presente e a construção de representações e identidades de grupos sociais (Le Goff, 1990) para outros vir-a-ser. Refletir sobre a dimensão espacial da memória e os seus significados raciais nos ajuda compreender uma das dimensões da luta do movimento negro no Brasil acerca das r-existências na escravidão e no pós-escravidão.

O Cais do Valongo na cidade do Rio de Janeiro foi o maior porto de escravizados da história planetária (Pereira, 2007). Ele foi construído a partir do desejo de apartheid (Mbembe, 2017) da elite branca carioca, que não se horrorizava com a instituição escravidão, mas se horrorizava com escravizados nus e doentes chegando nas proximidades das suas casas, no antigo Cais que ficava situado na região hoje conhecida como Praça XV (Pereira, 2007). A elite branca escravocrata de tanto pressionar o Estado para a transferência do Cais para o subúrbio da cidade na época teve o seu desejo realizado com a criação do novo Cais do Valongo fora das imediações de suas residências. O desejo racial da branquitude de não se misturar e de separar dos escravizados se institui na forma como a cidade do Rio de Janeiro foi forjada. Em 1769 foi criado o Cais do Valongo no subúrbio da cidade no atual bairro da Gamboa (Idem).

De forma concomitante, transferiu o cemitério de pretos novos que estava nas cercanias da atual Igreja de Santa Rita para a atual rua Pedro Ernesto, aonde se jogava o lixo da cidade (Idem). As formas espaciais se constituindo como símbolo das hierarquias sociais. Vê que nem depois de mortos, os corpos racializados e escravizados, eram vistos de forma digna e tratados com humanidade. Lembremos Fanon (2008) e Mbembe (2014), o conceito de humanidade, produzido pelo eurocentrismo, serviu a branquitude e os negros não habitariam esse mundo (vivos ou mortos). Os corpos dos escravizados que chegavam mortos e/ou que morriam rapidamente eram jogados nesta localidade, misturado com o lixo da sociedade. Os corpos não tinham jazigos individuais, não existia praticamente nenhum ritual

fúnebre e ficavam a flor da terra (Pereira, 2007). Várias reclamações do enorme cheiro e dos corpos expostos em estágio de putrefação foram feitas na época de seu funcionamento (1769-1831). Os grupos responsáveis e protagonistas da escravização racial (os proprietários de escravizados, o Estado e a Igreja Católica) não se viam como assassinos (Agamben, 2004). Observamos que mecanismos que sustentaram processos de desumanização de corpos negros no passado ainda hoje se reproduzem cotidianamente pois nem mesmo quando morrem aos milhões, negros geram comoção (Oliveira, 2015). O racismo antinegro busca produzir perpetuamente o negro como “não-ser”. São “não-seres” que se encontram em “desagências”, cujo “o nada infeste o ser [negro]” (Sartre, 2007). “Dizemos que se encontra desagência em qualquer situação na qual o africano [e os negros fora da África] seja descartado como ator ou protagonista em seu próprio mundo [e/ou em diáspora]” (Asante, 2009: p. 95).

Esses “cemitérios” eram a expressão espacial da zona do “não-ser”, uma região árida e estéril, isto é, desprovida de sensibilidade, dignidade e respeito. Esses corpos chegavam pelo Cais do Valongo. Alguns estudiosos chegam a estimar que pelo Cais do Valongo cerca de 01 milhão de pessoas escravizadas passaram no seu período de funcionamento (Asante, 2009). Os escravizados quando chegavam no Brasil eram classificados de duas formas. Os pretos novos ou boçais eram os escravizados que haviam acabado de chegar em terras brasileiras e que não tinham sido adestrados para instituição escravidão (Asante, 2009). Já os ladinos eram escravizados que já estavam em processo de adestramento a instituição escravidão. O sequestro na África e o período no navio negreiro já se constituíam como primeiras etapas de exercício do poder racial disciplinar da branquitude. O Cais do Valongo e o Cemitério de Pretos Novos emergem como lugares de horror, de continuidade de desumanização e de reterritorialização desses escravizados que passavam meses nos porões dos navios negreiros.

No início do século XX, a região portuária passou a ser chamada pelo artista Heitor dos Prazeres de Pequena África. Durante quase todo o século XX as heranças desse nosso passado foram aterradas

por reformas urbanísticas que visavam trazer para os trópicos o mundo europeu, isto é, branquear a paisagem e o território (Santos, 2018; Oliveira, 2014). Transpor paisagens emblemáticas das grandes cidades europeias, particularmente Paris (França), com o intuito de fantasiar um mundo similar a Europa. Contudo, essa fantasia foi um exemplo de política de destruição das memórias afrodiaspóricas que continua no presente agora com as obras do Porto Maravilha .

No Rio de Janeiro, celebra-se o futuro com a arquitetura pós-moderna, com o Museu do Amanhã e o MAR (Museu de Arte Rio) apagando o passado dos patrimônios negros. Lembremos que aonde foram construídos esses museus, e em seu entorno, é apontado por arqueólogos e historiadores como parte de um grande cemitério de negros escravizados que chegavam mortos ou morriam logo após a travessia pelo atlântico. Algumas estimativas falam em milhares de corpos que não tiveram a dignidade respeitada pois eram jogados em grandes buracos, não possuindo o direito de sepulcros individuais. O riquíssimo material encontrado pelos arqueólogos dos patrimônios negros permanece encaixotado em contêineres, não sendo usados para problematizar as violências produzidas contra os negros escravizados e as suas consequências hoje.

Hoje para embranquecer a paisagem desta localidade, bulevares foram construídos (restituindo novamente a paisagem do mundo civilizado nos trópicos, como já teria feito Pereira Passos a 100 anos atrás) e estátuas dos Deuses Minerva, Marte, Ceres e Mercúrio, que no passado foram usados para europeizar a paisagem com a chegada da princesa, foram recolocados hoje nos Jardins Suspensos do Valongo, destituindo de qualquer simbologia afro-diaspórica. As perguntas que se colocam são: Por que não estatuas de orixás já que estamos falando da região conhecida como Pequena África? Por que os patrimônios negros estão encaixotados? Por que não se discute as consequências do modelo colonial hoje?

Os patrimônios negros continuam não tendo a dignidade respeitada. Tornaram-se atrativo turístico despolitizado. O cais do Valongo, esse lugar de horror aonde seres humanos eram vendidos, é hoje

transformado pela burguesia racista carioca, em sua parceria com o Estado, em uma expressão do passado descolado do presente transformado em marketing para o turismo (Oliveira, 2016).

A luta durante o pós-abolição teve a região da Pequena África como alvo com construção de espaços de encontros e produção de novas subjetividades negras que fez desta região o berço do samba, territórios das religiões afro-brasileiras, quilombos urbanos como a Pedra do Sal que se constitui como espaço de luta negra e habitações populares, majoritariamente negras, dos trabalhadores do porto do Rio de Janeiro e da primeira favela no Brasil no morro da Providência.

[...] essas memórias subterrâneas que prosseguem seu trabalho de subversão no silêncio e de maneira quase que imperceptível afloram em momentos de crise em sobressaltos bruscos e exacerbados. A memória entra em disputa. Os objetos de pesquisa são escolhidos onde existe conflito e competição entre memórias concorrentes (Pollak, 1989: p. 4).

Atualmente o movimento negro utiliza da regionalização da Pequena África para afirmar essa região como espaço de luta e re-existência. Contudo, as obras do Porto Maravilha inauguram novas disputas de regionalização. A regionalização histórica do movimento social da Pequena África que articula a região com a diáspora africana e o debate das políticas de reparações vê hoje frente a regionalização do capital neoliberal que reafirma novas políticas segregacionistas, e fazem da Pequena África, um roteiro despolitizado da violência racial estruturante da formação sócio-espacial brasileira.

Assim como no passado, os monumentos de civilização, com as obras do Porto Maravilha, têm se revelados como monumentos da barbárie (Benjamin, 1986) com remoções forçadas, políticas de expulsão dos moradores pobres, majoritariamente negros, gentrificação dos espaços e reafirmação do desejo de apartheid do capital imobiliário que busca se instalar na região, apartada em condomínios fechados de luxo e/ou prédios com sistema de vigilância 24h para receber grandes empresas.

A partir da luta do movimento negro pela reconstrução de lugares de memória (Nora, 1993) o Cais do Valongo e o Cemitério dos Pretos Novos foram transformados em Patrimônio da Humanidade. Essa ação revela uma política de escala do movimento negro frente os capitalistas raciais. Por capitalistas raciais entendemos por agentes modeladores do espaço urbano que instituem uma forma organização do espaço concedendo vantagens e privilégios a determinados grupos raciais de status social, posto ideologicamente como superior. Os capitalistas raciais buscam definir um espaço a favor da branquitude. Inventar-se uma ideia de sensação racial de segurança como sistema de proteção desses espaços (Oliveira, 2014). O papel destes agentes não é novo nas cidades brasileiras. Pelo contrário, são imanentes as primeiras cidades desde o contexto colonial escravocrata. Esse padrão racializado de produção do espaço, marcado pelas políticas de branqueamento que emergiram no final do século XIX, incorporaram nos anos 1930, e continua até hoje, a ideologia da democracia racial e do povo cordial (Oliveira, 2014). A chamada democracia racial expressa uma ideologia construída por intelectuais brancos que dissimula a violência racial histórica de nossa formação para afirmar uma pretensa harmonia de nossas relações raciais. Essa ideologia é exportada para o mundo que o Brasil, em particular o Rio de Janeiro, é uma cidade maravilhosa sem grandes conflitos raciais na sua história.

Com as obras do Porto Maravilha no início do século XXI, as marcas pretéritas do capitalismo racial foram expostas. Mas dissimula-se com a difusão da ideologia da democracia racial. Essas obras tornaram visível na paisagem as topografias da crueldade e violência (Alves, 2011) desumanizadoras da antinegitude do nosso passado escravocrata. Ademais, mais de 100 mil objetos foram encontrados nas escavações dos sítios arqueológicos que ainda se encontram encaixotados.

As obras do Porto Maravilha sobre a Pequena África são semelhantes a vários megaempreendimentos e projetos neoliberais em regiões portuárias em todo o mundo. A região portuária do Rio de

Janeiro tornou-se alvo da regionalização do capitalismo neoliberal. Obras monumentais em poucos anos foram construídas como o Museu do Amanhã, prédio de arquitetura pós-moderna assinada por um arquiteto reconhecido mundialmente para inserir o Rio de Janeiro no mercado mundial de cidades. Ademais, criou-se Aqua Rio, refuncionalizou casarões antigos, criou-se o Museu Arte Rio, o bulevar olímpico, foi feito o aprofundamento do calado do porto para receber navios transatlânticos para turistas internacionais, a Rio Star (uma roda gigante semelhante a feita na revitalização em Londres), VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), entre outros. Todas essas obras no contexto dos grandes eventos da Copa do Mundo de futebol de 2014 e Olimpíada de 2016.

Pacheco (2016) afirma uma necessidade “de uma espécie de ‘imperativo’ ético gerado a partir da memória” (Pacheco, 2016: 106) pois “a memória grita pela interpretação do que houve outrora” (Idem: 107). É justamente esse local aonde hoje está o Museu Amanhã que foi aterrado que para alguns arqueólogos aonde poderia estar novos sítios arqueológicos da diáspora africana.

Uma ética da memória buscaria não a imposição, mas a construção de um presente comum, que torna a afirmação de sua lembrança a negação da repetição dos seus excessos – que alienou sujeitos, que subjugou identidades, que destruiu histórias, que negou existências, que perseguiu diferentes, que invisibilizou pobres, que excluiu estranhos, que suprimiu direitos, que calou com morte (Pacheco, 2016: 107)

A região do Valongo, onde o Museu do Amanhã está de pé, enterra a maioria dos corpos negros que já colocaram os pés no continente americano. Sim, você não sabia? Mais de meio milhão de escrav[izad]os e escrav[izad]as que por aqui passaram, adentraram pelo Valongo, onde está o Museu do Amanhã. Seus corpos estão ali embaixo – sob a terra, ou lançados ao mar [...]

Alguém aqui imagina a construção de um Museu do Amanhã no território dos campos de concentração em Auschwitz? Nunca. Ao

contrário, na Alemanha, todo estudante alemã deve – eu disse ‘deve’, é obrigatório – visitar ao menos dois campos de concentração ao longo de sua vida escolar (Pacheco, 2016: 202).

Vemos na mesma região da Pequena África a renovação da política de apartheid com o Porto Maravilha ao estabelecer uma política de esquecimento dos patrimônios da diáspora africana com: 1- o desfinanciamento desses patrimônios; 2- obstáculo no acesso a documentos históricos; 3- dificuldades nas políticas de preservação; 4- o não reconhecimento de que um crime da história (imprescritível segundo as Nações Unidas) foi cometido; 5- políticas para apagar e branquear o território com a transposição de paisagens derivadas do mundo considerado civilizado para ser imposta nesta região com as obras do Porto Maravilha. Desta forma, apesar do fim do colonialismo a mais de um século nunca deixamos de ser uma sociedade colonial (Quijano, 2000).

Vemos aí a necessidade de debatermos os conteúdos políticos das rugosidades do espaço, isto é, as heranças do passado inscritas nas formas espaciais no presente (Santos, 1978). Recuperar o sentido político das rugosidades tem se constituído uma luta do movimento negro na região da Pequena África. Essas lutas buscam afirmar a santuarização do território (Mbembe, 2014), como no caso dos cemitérios de escravizados, isto é, restituí-los como campo santo afirmando a dignidades dos corpos que foram desumanizados. São lutas por respeito, homenagem e reconhecimento espacial das histórias que tentaram ser apagadas. Uma “consciência [espacial] negra do Negro” (Mbembe, 2014, p. 62). Politizar essas mortes pretéritas, converte-se numa estratégia de resistência e r-existência frente a política de esquecimento do Estado (Alves, 2020) quanto da sensibilização e combate das políticas assassinas de Estado no presente. Tais conflitos com o Estado demonstra que a formação sócio-espacial brasileira foi estruturada por um “regime racializado de cidadania” (Alves, 2020).

Assim, as ações do Movimento Negro têm criado múltiplas escalas do agir político como: 1) a restauração simbólica dos mundos

africanos que se desreterritorializaram na região da Pequena África; 2) políticas de escalas que tem transformado os patrimônios da diáspora em patrimônios da humanidade, reconhecidos pela UNESCO; 3) a afirmação do quilombo urbano como instrumento de preservação de patrimônios negros da diáspora, como a Pedra do Sal; 4) usos políticos do espaço através da realização de atos antirracistas e visitas guiadas a estilo de “museu a céu aberto”, cortejos religiosos e celebração da ancestralidade afro-brasileiras; 5) a politização dos lugares de horror, de tortura e de violência contra a população negra em lugares de memória e de produção de consciência das violências raciais com fim de produzir políticas reparatórias; 6) circuitos espaciais de uma economia da diáspora africana através de feiras de produtos de países africanos e itinerários gastronômicos diaspóricos; e 7) espaços de encontro e celebração da cultura afro-brasileira através de rodas culturais de samba, capoeira e jongo. Essa “consciência espacial negra” do negro repõe outra escrita da história dos lugares tanto dos silêncios quanto dos discursos ocultos (Scott, 2004).

Considerações Finais

O objetivo deste artigo foi buscar compreender como as formas espaciais da diáspora africana no Brasil são reveladoras tanto da violência quanto das lutas sociais. As disputas na construção de lugares de memória expressa uma ação do movimento negro de problematização da nossa história para pressionar o Estado para criação de políticas de reparação. As tensões entre a regionalização da Pequena África e do Porto Maravilha revelam disputas de projetos societários que tem a questão racial como um dos seus centros.

Bibliografia

Alves, J. A. (2011) Topografias da violência: necropoder e governamentalidade espacial em São Paulo. Revista do Departamento de Geografia – USP, Volume 22 (2011), p. 108-134.

Alves, J. A. (2020) Biopólis, necrópolis, 'blackpolis': notas para un nuevo léxico político en los análisis socio-espaciales del racismo. Geopauta. V. 4, n.1.

Agamben, G. (2004). Estado de exceção: homo sacer. São Paulo: Boitempo.

Asante, M. (2009). Afrocentricidade: notas sobre uma posição disciplinar. In Nascimento, E. (org.). Afrocentricidade: uma abordagem epistemológica inovadora. São Paulo: Selo Negro.

Benjamin, W. (1986). Documentos de cultura, documentos de barbárie. São Paulo: Cultrix/USP.

Fanon, F. (2008). Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA.

Guimarães, R. (2014). A utopia da pequena África. Rio de Janeiro: Editora FGV.

Halbwachs, M. (2006). A memória coletiva. São Paulo: Centauro.

Le Goff, J. (1990) História e Memória. São Paulo: Editora da Unicamp.

Mbembe, A. (2014). Crítica da razão negra. Lisboa: Antígona.

Mbembe, A. (2017). Política da Inimizade. Lisboa: Antígona.

Nora, P. (1993). Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, n. 10, p. 7-28.

Oliveira, D. (2014). O marketing urbano e a questão racial na era dos megaempreendimentos e eventos no Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*, v. 16, n. 1, p. 85-106. <https://doi.org/10.22296/2317-1529.2014v16n1p85>

Oliveira, D. (2015). Gestão racista e necropolítica do espaço urbano: apontamento teórico e político sobre o genocídio da juventude negra na cidade do Rio de Janeiro. *Anais do Copene Sudeste*.

Oliveira, D. (2016) O Negro Drama e Revoltas nas Mentalidades. In: <https://www.geledes.org.br/o-negro-drama-e-revoltas-nas-mentalidades/>

Oliveira, D. (2020). Do espaço ao contra-espaço: a luta antirracista decolonizando o urbano carioca. In Zanotelli, C., Albani, V., & Barros, A. (orgs). *Geografia Urbana: cidades, revoluções e injustiças: entre espaços privados, públicos, direito à cidade e comuns urbanos*. Rio de Janeiro: Consequência.

Pereira, J. (2007). *À flor da terra: o cemitério dos pretos novos no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Garamond/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

Pacheco, R. (2016). *Ocupar, Resistir, Subverter*. Brasília: Novos Diálogos.

Pollak, M. (1989). Memória, esquecimento, silêncio. *Estudos Históricos*, v. 2, n. 3, p. 3-15.

Porto-Gonçalves, C.W. *Reinvenção dos territórios na América Latina/Abya Yala*. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Sociales, mayo 2012.

Quijano, A. (2000) Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In: LANDER, E. (org.). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.

Sánchez, F. et. al. (2004) Produção do sentido e produção do espaço: convergências discursivas nos grandes projetos urbanos. Revista paranaense de desenvolvimento, Curitiba, n. 107, p.39-56, jul./dez.

Santos, M. (1978) Por uma Geografia nova. São Paulo: Hucitec-Edusp.

Santos, M. (2002). A natureza do espaço – tempo e técnica, razão e emoção. São Paulo: Edusp.

Santos, R., Silva, K., Ribeiro, L., & Silva, N. (2018) Disputas de lugar e a Pequena África no Centro do Rio de Janeiro: reação ou ação? Resistência ou r-existência e protagonismo? In: Natacha Rena; Daniel Freitas; Ana Isabel Sá; Marcela Brandão. (org.) Seminário Internacional Urbanismo Biopolítico. 1ª. Ec. Belo Horizonte: Fluxos, v. 1, p. 464-491.

Sartre, J. (2007). O Ser e o Nada. Petrópolis: Vozes.

Scott, J. (2004). Los dominados y el arte de la resistencia. México: Era.

Vargas, J. (2020). Racismo não dá conta: antinegritude, a dinâmica ontológica e social definidora da modernidade. EM PAUTA, Rio de Janeiro - n. 45, v. 18, p. 16 – 26. Revista da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Parte II

***Producción colectiva y autogestiva
de la vivienda y la ciudad***

Autogestión colectiva del hábitat y construcción de ciudad

La experiencia uruguaya en el cooperativismo
de vivienda

Cristina Fynn

Contexto político de Uruguay

En Uruguay el primero de marzo del 2020 asume el gobierno una coalición constituida por los partidos que representan a las familias ideológicas más conservadoras del espectro político uruguayo, de corte neoliberal, con un modelo económico excluyente y con mayoría parlamentaria. Desplaza así al Frente Amplio, después de tres períodos de gobiernos progresistas, que tuvieron una serie de logros, expresados en crecimiento económico sostenido, conquistas en la agenda de derechos y una serie de reformas importantes en el Estado, como el sistema de salud, la reforma impositiva, la negociación colectiva en las relaciones laborales, la regularización del cannabis, implementación del sistema de cuidados, plan ceibal, acceso a la conectividad de las TIC para los sectores más vulnerables y la reforma del Sistema Público de Vivienda, como veremos más adelante.

Este Gobierno asume en los umbrales de la emergencia sanitaria frente a la expansión del covid-19 y lo hace con el blindaje de los medios de prensa y de las agencias publicitarias, funcionales a sus

intereses, se conforma un Gobierno autárquico, reforzando la figura presidencialista.

La emergencia sanitaria encuentra al país con una situación preexistente con un fuerte sistema nacional integrado de salud; reservas económicas para hacer frente a la crisis, un sólido sistema de protección social, un buen posicionamiento a nivel internacional que permitió campear la pandemia en los primeros meses. El actual Gobierno promueve una política de aislamiento social, con una excelente respuesta de la sociedad toda, lo que permitió tener pocas personas con covid-19 durante el primer semestre del 2020.

El aumento de contagios se disparó posteriormente debido a la ausencia de medidas de contención y protección social hacia la población más vulnerable.

En esta situación del país, el Gobierno presenta al Poder Legislativo para su aprobación una Ley de Urgente Consideración [LUC], sin debate parlamentario, una ley antidemocrática, regresiva en el ejercicio de derechos, que reduce el rol del Estado como garante, en el momento que más se precisa un Estado fuerte y protector de los derechos ciudadanos. Se producen recortes en el gasto público y las políticas públicas, con el objetivo de lograr la reducción presupuestal.

Cohérente con el modelo neoliberal impulsado por el Gobierno, el presupuesto quinquenal se realiza con recortes salariales a la previsión social, a la educación y a la vivienda en referencia al último período que el Frente Amplio estuvo en el Gobierno. Se vuelve así a las políticas habitacionales vivendistas, sin una visión territorial y ambiental en el campo de la política habitacional. Se promueven programas de “pobres para pobres”. El sistema cooperativo de vivienda se ve afectado porque los recursos para financiar los préstamos vuelven a ser insuficientes.

Como en la mayoría de los países ha ocurrido, la crisis ha generado en Uruguay una caída de la economía en 5,8 % en 2020, surgimiento de más de cien mil nuevos pobres y la pérdida de más de sesenta mil puestos de trabajo, disminución de ingresos de los hogares, mil personas más en situación de calle y cientos de ollas

populares, sostenidas sobre la solidaridad de la gente en los barrios, fundamentalmente de las mujeres, cifras que para la escala de nuestro país es enorme.

La falta de medidas del Gobierno para mitigar los impactos producidos por la emergencia sanitaria ha profundizado la crisis económica y social en el país.

No es posible abordar el análisis del tema que nos convoca sin encuadrarlo en el contexto que brevemente hemos descrito, porque más allá de los problemas sanitarios, la pandemia ha generado una caída de la actividad económica que trajo como consecuencia una crisis social, a escala global, sin precedentes.

Antecedentes y transformaciones en el sistema público de vivienda uruguayo

Cuando el Frente Amplio asume el gobierno en el 2005 tiene que realizar una profunda reforma del sistema público de vivienda, para poder llevar adelante el programa de gobierno aprobado por la ciudadanía.

El Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente [MVOTMA], creado en la década del noventa, atendía a los sectores de menores ingresos a través de la construcción de Núcleos Básicos Evolutivos con áreas de 32 m² implantados en las periferias críticas de las ciudades, fundamentalmente en Montevideo, y el acceso a la vivienda estaba vinculado más al clientelismo político que al derecho consagrado en la Constitución de la República.

El MVOTMA era, así, más un productor de vivienda que diseñador y orientador de la política habitacional.

El Banco Hipotecario del Uruguay [BHU] cumplía con la función de promotor, constructor y financiador de los promotores privados y otorgaba préstamos para compra de vivienda nueva y usada a aquellas familias de ingresos medios.

En síntesis una política habitacional regida por el mercado y en el marco del achicamiento del Estado. En el año 2005 el BHU tenía un importante desfinanciamiento, periodo este de largos conflictos con el movimiento popular y con el movimiento cooperativo de vivienda fundamentalmente con FUCVAM.

La reforma del Sistema Público de Vivienda requirió redefinir el rol del MVOTMA. Se otorgó a la Dirección Nacional de Vivienda el rol de diseñador de la política habitacional, se creó la Agencia Nacional de Vivienda, a quién se le asignó la cartera social del BHU para su administración bajo la figura de fideicomisos del Ministerio de Economía y Finanzas y ejecutor del plan quinquenal de vivienda.

El BHU volvió a su función del otorgamiento de crédito público para el acceso a la vivienda.

Agencia nacional de vivienda: institución nueva para resolver problemas viejos

La Agencia Nacional de Vivienda [ANV] se crea en el año 2007, (Ley 18 125), como un organismo descentralizado y comienza a administrar una cartera social del BHU. En esta cartera se encontraban más de setenta mil deudores individuales y complejos habitacionales construidos en la década del setenta y ochenta como obra pública, en la mayoría de los casos con un deterioro edilicio importante, con habitantes en situación de irregularidad dominial y con serios problemas de habitabilidad por falta de mantenimiento de los servicios comunes.

Se transfirieron también a la ANV para su recuperación obras inconclusas del sector privado, financiadas en su momento por el BHU, que estaban paralizadas desde las crisis del 2002, con el consecuente impacto negativo sobre el entorno social y urbano donde se emplazaban.

Como se puede apreciar la ANV llega como institución nueva para resolver problemas muy viejos y estructurales del *stock* habitacional construido por obra pública, ubicados mayoritariamente en

áreas de precariedad urbana concentrada, fundamentalmente en las periferias de Montevideo y de las ciudades del interior, donde no solo están implantados los asentamientos irregulares, sino que son áreas formales de la ciudad que tienen déficits urbano-habitacional de gran importancia.

Durante la gestión del Frente Amplio, se trabajó con el horizonte de contribuir a transformar los procesos de fragmentación socioterritorial y de exclusión social que padecen miles de habitantes de nuestro país.

En ese marco uno de los objetivos centrales de la ANV fue lograr el acceso y la permanencia en la vivienda de quienes allí habitaban. Esto implicó una política de quitas sobre las deudas con el BHU, possibilitando que miles de familias pudieran volver al circuito de pago, logrando bajar la morosidad del 60 % que tenía el BHU al 5 %, generando obligaciones y derechos hacia la población que mantenía deudas vinculadas al pago de los créditos hipotecarios.

Se trabajó en una política habitacional integral para promover la permanencia en las viviendas, a través de la regularización jurídico notarial de la propiedad horizontal de los grandes complejos habitacionales en la cancelación de deudas, en la recuperación de viviendas vacías que se comercializaron a través de llamados públicos que aseguraban la transparencia de la gestión, rompiendo así con el círculo perverso del clientelismo político.

Se fortalecieron las comisiones administradoras de dichos complejos y se mejoró y reparó los servicios comunes.

Se realizaron llamados a licitación pública para la terminación de las obras inconclusas.

Se ejecutaron los programas de vivienda que en ese período 2010-2015, tuvieron como prioridad los sectores de mayor vulnerabilidad, a través de relocalización de asentamientos ubicados en zonas inundables y sobre suelos contaminados, como también una gran apuesta al sistema cooperativo. Este plan quinquenal fue refrendado por la Comisión Asesora de Vivienda integrada por más de cincuenta organizaciones sociales y empresariales del sector público y privado.

Con respecto al sistema cooperativo, el MVOTMA elaboró una nueva reglamentación (2008) y se mejoró la gestión de todo el proceso institucional para la aprobación de los préstamos, mejorando los plazos del estudio de viabilidad para su otorgamiento de cincuenta y cuatro meses a veinticuatro. Recordemos que durante los gobiernos de los partidos tradicionales tuvieron algunas cooperativas que esperar entre diez y dieciséis años para poder comenzar a construir.

La ANV es responsable del estudio de todo el proceso para la obtención de las viviendas en el sistema cooperativo: Estudio de la Personería Jurídica, viabilidad del terreno, anteproyecto, proyecto, escrituración del préstamo, seguimiento de la obra, supervisión de los Institutos de Asistencia Técnica [IAT] y recuperación del préstamo.

La Agencia construyó su institucionalidad para poder llevar adelante la política habitacional. Los funcionarios provenían del BHU, institución financiera cuya tarea principal estaba asociada al otorgamiento de créditos y su recupero. Se requirió de una reconversión del rol bancario en el de “servidor público” y a considerar al “cliente” como “usuario” de la política habitacional.

Todo este proceso no estuvo ajeno a tensiones y conflictos, pero es de destacar que como trabajadores no perdieron ninguno de los derechos conquistados históricamente por la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay [AEBU].

La ANV ejecutó también el decreto ley de la vivienda promovida (Ley 18 795, 2011) con incentivos al capital privado para la construcción de viviendas destinadas al sector de población de ingresos medios.

Es así que en el Departamento de Montevideo el MVOTMA, la ANV y el Gobierno Departamental definieron excluir las áreas de la costa y de la periferia para la inversión privada con los beneficios de la ley.

Este programa generó un impacto territorial importante porque se construyó en áreas vacías de la ciudad consolidada, en padrones donde hacía setenta años no se construían viviendas. No obstante no

deja de ser un instrumento anticíclico de la economía que estuvo y está regido por las reglas del mercado.

Características y prácticas de las organizaciones y movimientos sociales uruguayos

Uruguay tiene una rica trayectoria en el campo popular con la presencia de movimientos sociales, representantes de la sociedad civil, que ha tenido profundas transformaciones en las últimas décadas.

Una característica de nuestro país y que lo hace tener ciertas particularidades en relación a otras experiencias de América Latina tiene que ver con la existencia de una única central de trabajadores, el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores [PIT-CNT], que nuclea a funcionarios del sector público y privado.

La existencia de un movimiento estudiantil con una larga trayectoria de luchas y reivindicaciones no solo vinculado a la temática del área de la educación, sino referidos a temas del quehacer nacional, a través de sus organizaciones como la Federación de Estudiantes de Secundaria [FES], como los estudiantes de la Universidad de la República, nucleados en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay [FEUU] y sus luchas por su autonomía.

Las federaciones de cooperativas de vivienda, Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua [FUCVAM], Federación de Cooperativas de Vivienda de Ahorro Previo [FECOVI], Cooperativas de Vivienda de Propietarios [COVIPRO] han tenido y tienen desde su creación, una movilización sostenida y organizada de lucha por el derecho de acceso al hábitat digno, como lo establece la Constitución de la República.

A nivel político la mayoría de las organizaciones de izquierda están nucleadas en el FA con un programa común.

En ese escenario, dado el nivel de organización de estos movimientos sociales, con una sólida base territorial, se pudo enfrentar

el golpe de Estado en 1973, con una huelga general e irrestricta, con ocupación de fábricas, de lugares de trabajo durante quince días se paralizó el país. Los barrios fueron una base territorial de solidaridad con el movimiento obrero organizado.

Con una cultura profundamente civilista de nuestra sociedad, después de años de resistencia y de lucha, se hizo posible volver al sistema democrático en el año 1985. En esta etapa surgen nuevas organizaciones sociales vinculadas a la defensa y reivindicación de los DDHH y más particularmente a la búsqueda de verdad y justicia sobre el pasado reciente, tras la consigna del “Nunca Más”, con un rol protagónico de las organizaciones de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y la organización de expresos políticos (CRYSOL), entre otras.

Se destaca el rol de los movimientos feministas, que ponen en la agenda temas de la política pública, generalmente no visibilizados.

En la década del noventa, con la asunción del FA al Gobierno Departamental de Montevideo, se inicia el proceso de Descentralización de la gestión de la Intendencia Municipal con la creación de dieciocho Servicios Centros Comunales Zonales [CCZ], llevando así los recursos públicos a los habitantes de los diferentes territorios que componen el Departamento.

Se triangula el ámbito político local, social e institucional, como componentes sustanciales del proceso de Descentralización del Departamento.

En el año 2005 se aprueba la ley de descentralización a nivel nacional y se crea el tercer nivel de gobierno que son los municipios, gobiernos de cercanía, con la figura del alcalde.

La mayoría de estos movimientos trascendieron la defensa de derechos sectoriales participando de plataformas de lucha a nivel nacional, en defensa por ejemplo del patrimonio estatal, en contra de las políticas económicas neoliberales y de reformas privatizadoras de las empresas públicas y consecuentemente del vaciamiento del Estado de bienestar. Así se conforma una intersocial integrada por distintos movimientos, que resistieron los embates del desmantelamiento

del Estado y enfrentaron las grandes crisis que tuvieron como consecuencia el desempleo y la precarización laboral.

En los comienzos del siglo XXI los movimientos sociales se movilizan con mucho énfasis, en pro de lograr leyes que generan derechos tales como ley del matrimonio igualitario, ley de interrupción voluntaria del embarazo, la igualdad de género, ley contra la violencia de género, la diversidad, etcétera.

También de las transformaciones en el mundo del trabajo, durante los Gobiernos neoliberales surgen los movimientos sociales “informales”, como son la ocupación de tierras, la economía informal: vendedores ambulantes, artesanos callejeros, ollas populares, huertas comunitarias, en general, que se organizan en procura de un objetivo, pero una vez logrado este, rápidamente se disuelven.

Varios estudios (Espósito, 2007; Bauman, 2003; Krause, 2001) dan cuenta de una tendencia actual de generar agrupamientos de tipo red, menos centrados en el origen y más en los intereses y finalidades comunes específicas, menos estables en el tiempo y más abiertos.

Implicancias territoriales, modalidades de apropiación del espacio, conflicto con otros usos: experiencia del movimiento cooperativo uruguayo

Hemos seleccionado para este trabajo la experiencia de FUCVAM como movimiento social, en la autogestión del hábitat colectivo y la construcción de ciudad.

Existe abundante bibliografía al respecto, sobre la historia del cooperativismo de vivienda en nuestro país, en cuanto a una política habitacional para los trabajadores organizados. En el sistema cooperativo de vivienda se da el protagonismo de la población organizada durante todo el proceso de formación, construcción de las viviendas y en la post obra, con financiamiento estatal, y con el asesoramiento de un Instituto de Asistencia Técnica.

La Ley de Vivienda de 1968 (Ley 13 728 del 13/12/2021) incorpora también la figura de la propiedad colectiva en las cooperativas de usuarios, mediante el otorgamiento al socio del derecho de uso y goce sobre su vivienda, reservándose la cooperativa el derecho a la propiedad de la misma.

Las cooperativas se construyen con dos proyectos paralelos, la obra física y la construcción social del grupo cooperativo. Estas dos condiciones son intrínsecas al propio sistema y no existe ninguna otra alternativa de vivienda con estas características.

Las primeras cooperativas de vivienda, preferentemente, construyeron grandes conjuntos, conformados por más de cuatrocientas viviendas cada una, las llamadas Mesas Cooperativas o Zonas, donde se nuclearon varios sindicatos y se implantaron en la periferia de las ciudades por razones fundamentalmente del precio de la tierra. Así surge el primer vínculo del cooperativismo con el territorio y es el de construir ciudad, llevando servicios de infraestructura a áreas de la ciudad que no estaban urbanizadas, así como equipamiento de servicios sociales y comunitarios que implican los primeros ejemplos de apropiación del barrio, del espacio público, y la construcción de lazos solidarios y de inserción con la comunidad del entorno.

Una breve síntesis nos permite recordar que FUCVAM surge en la década del setenta, promovida por distintas corrientes de cristianos, técnicos y militantes de partidos tradicionales y de izquierda. Surge del ámbito sindical y territorial. El primero por la capacidad de organización de los sindicatos, así surgen las primeras cooperativas de vivienda textiles, de curtiembres, metalúrgicas, de la construcción, de postales, ferroviarios y de todo lo vinculado al aparato productivo de entonces. La segunda modalidad fueron las cooperativas territoriales, conformadas por lazos de cercanía en el espacio de los barrios y de agrupamiento por intereses comunes, preexistentes entre sus miembros.

A lo largo de su historia, FUCVAM ha luchado en contra de una ley de propiedad horizontal, por el presupuesto, por cartera de tierras con predios en el área urbana consolidada de la ciudad y no solo

en la periferia y forma parte de las luchas populares contra las reformas neoliberales del Estado, etcétera.

La Federación ha jugado un rol fundamental en todo este proceso, desde sus primeros pasos junto con los técnicos, en la promoción de las cooperativas gremiales y territoriales, en la implementación de la primera central de suministros de materiales durante el auge de la construcción de los grandes complejos habitacionales y en la defensa irrestricta de los derechos y las reivindicaciones por el acceso a la vivienda y el hábitat.

Hoy con más de cincuenta años de vida, con una trayectoria atravesada por los distintos momentos históricos del país, de la región y a nivel global, refleja también diferentes hitos de movilización y reivindicación de derechos en materia de hábitat y urbanismo. El modelo cooperativo sigue estando dentro de las mejores políticas habitacionales, porque logra la mejor calidad social y urbana en materia de hábitat, en el país

El desmantelamiento del mundo del trabajo generó y genera exclusión de amplios sectores de la sociedad y esto se refleja en la segregación socioespacial de nuestros territorios y el deterioro y la precarización del hábitat urbano, en las periferias críticas de las ciudades.

En esa complejidad de los nuevos escenarios territoriales, las cooperativas en la periferia, no están exentas de los procesos de fragmentación territorial y segmentación residencial y social.

Estos fenómenos que generan violencia e inseguridad en los territorios han hecho que las cooperativas hayan cercado el perímetro de los complejos de viviendas, generando un aislamiento con el entorno. Esta realidad pone en cuestionamiento al propio sistema porque decae uno de los principios básicos del cooperativismo, su integración con el entorno, lo cual genera una fuerte tensión y disputa del espacio construido en los territorios.

Otra tensión que podemos identificar, es que al tiempo que la política de vivienda (2010-2015) se basó en una fuerte decisión de utilización del FONAVI (FONDO NACIONAL DE VIVIENDA) dirigido

a los sectores más vulnerables y al sector organizado a través de la modalidad cooperativa para el acceso a la vivienda, posibilitó la incorporación en estos programas de una población con perfiles sociales diferentes a quienes históricamente constituyeron el sistema cooperativo. Esto se hizo posible por una fuerte política de subsidios a la cuota, al tiempo que generó mayor heterogeneidad social de los miembros de las cooperativas, lo cual genera nuevos conflictos y tensiones para adaptarse a una estructura de funcionamiento diseñada hace más de cincuenta años.

¿Cuáles son las tensiones con otras formas institucionales de apropiación del espacio, conflicto con otros usos?

La presencia del Estado como garante siempre es imprescindible y el vínculo con los movimientos sociales es siempre tenso y conflictivo. Por un lado, se produce la defensa y reivindicaciones sectoriales y por otro quién está ejerciendo una responsabilidad de gobierno tiene que arbitrar demandas de distintos sectores e intereses, muchas veces antagónicos.

Nuestra gestión no estuvo ajena a estas tensiones y a estos conflictos. En el caso que estamos analizando de FUCVAM entiendo que tuvo la virtud de no perder su independencia de clase, cuando gobernó el FA, siendo muchos de sus integrantes fundadores y militantes de esta fuerza política. Y desde los responsables de la política habitacional siempre se tuvo la capacidad de escuchar sus reclamos y en aquellos casos en que no existió hay que evaluarlo como un grave error, porque esos lugares y roles políticos se ejercen porque la gente lo decidió y somos representantes de la ciudadanía. No siempre los logros son posibles, pero la negociación Estado-sociedad civil es un estamento fundamental del sistema democrático y este intercambio requiere de fuertes interacciones de todos los actores involucrados.

La Sociedad Civil organizada fortalece el Estado, sus luchas y reivindicaciones mejoran sus políticas públicas. Esta participación

promueve la triangulación del conocimiento experto con el experimentado y la voluntad política de quienes gobiernan se vuelve central para lograr un gobierno democrático y de cercanía con la ciudadanía.

Las políticas públicas se construyen y requieren en el campo del acceso a la vivienda, de la movilización y la lucha por la conquista de derechos al hábitat digno, que tiene que tener por objetivo la sensibilización de quienes conducen las instituciones de gobierno y de todo el espectro político para que actúen en consecuencia.

En materia de conquista de derechos, siempre hay que negociar, pero lo que no puede haber es un Gobierno que no dialogue con los trabajadores y sus sindicatos, con la sociedad civil organizada.

Los movimientos sociales son por naturaleza emancipadores. Cuando se convierten en un brazo disciplinado de un partido o de un Gobierno pierden su esencia.

El desafío de los movimientos sociales hoy, es trabajar por el derecho a la Ciudad, con una visión global e integral del territorio, fortalecer la organización social y la práctica en el ejercicio de derechos frente a los fenómenos de gentrificación que ocurren con los megaproyectos que hacen que la ciudad y la vivienda sean tomadas como mercancía para la reproducción del capital privado

La pandemia ha tenido efectos muy negativos, nos encerró, nos aisló, pero también hemos convertido las adversidades en oportunidades, con procesos de introspección y búsqueda, que nos abre espacios para nuevos desafíos.

En esta realidad, el hábitat, el territorio, el Estado, el mercado y la sociedad, constituyen una unidad que no puede fragmentarse ni en su análisis ni en sus prácticas, por esa razón queremos dejar esta visión de David Harvey que nos refleja en lo que hemos querido expresar:

El derecho a la ciudad no es simplemente el derecho a lo que ya existe, sino el derecho a cambiarlo a partir de anhelos profundos. El derecho a rehacernos a nosotros mismos creando un entorno urbano

cualitativamente diferente es el máspreciado de los derechos humanos. (Harvey, 2008, p. 11)

Bibliografía

Recalde, S. (2016). *Precariedad Habitacional Dispersa. Contribución a una realidad oculta en Montevideo*. [Tesis Doctoral]. Universidad de San Pablo, Brasil.

Harvey, D. (2008). The right to the city. *En International Journal of Urban and Regional Research*, 27 (4). [Traducido por Gerardo Pisarello]. Centro Cooperativista Sueco-TRILCE. (2011). *El Camino Posible, Producción Social del Hábitat en América Latina*.

Di Paula, J. (2019). *Fraternidad para construir*. Producción Editorial Susana Aliano Casales.

Nahoum, B. (comp.). (2008). *Una historia con quince mil protagonistas: Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua uruguayas*. Segunda edición. Montevideo: Intendencia Municipal de Montevideo / Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transporte. Machado, G. (2017). *Habitar las experiencias de aprendizajes y sociabilidad comunitaria en las cooperativas de vivienda en Uruguay*. [Tesis Doctoral]. Paraná, Argentina.

Posibilidades y desafíos de la institucionalización de la participación social en el consejo provincial de vivienda y hábitat de la provincia de Buenos Aires

Ana Pastor

Gestación y conquista de la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires

En primer lugar, quiero contarles la experiencia de gestación y conquista de la Ley de Acceso Justo al Hábitat [LAJH] de la provincia de Buenos Aires, que se aprobó en 2012 tras cuatro años de reflexión y análisis político sostenido por un amplio colectivo de organizaciones sociales, políticas y miembros de universidades públicas y de intensas discusiones en muy diversos foros.

En el año 2004, el nuevo presidente Néstor Kirchner lanzó el Programa Federal de Vivienda, una gran política que movilizó las expectativas de muchas de las organizaciones y movimientos de lucha por la tierra, la vivienda y el hábitat, que decidieron abrir espacios de reflexión para opinar sobre su aplicación en la provincia y ofrecer su aporte. Este debate —que reunió a más de quinientos dirigentes en distintos espacios zonales— dio origen al Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la provincia de Buenos Aires [FOTIVBA], conformado por organizaciones de base, organizaciones

de segundo grado, organizaciones de apoyo técnico, universidades, gremios y funcionarios del campo popular. Desde esta nueva institucionalidad, se avanzó en el análisis y la reflexión política, con el objetivo de realizar propuestas al Gobierno provincial y que estas se plasmasen en políticas públicas de hábitat. Es desde el FOTIVBA, que luego se escribiría, militaría y conquistaría la LAJH.

Desde un primer momento, en esos debates se visualizaba que el mayor problema habitacional en la provincia no estaba ligado a la falta de políticas de vivienda, sino a una política de uso del suelo potenciada desde la dictadura militar de los setenta, que beneficia a los sectores de alto poder económico y deja fuera del acceso a sectores trabajadores, quienes con el tiempo generan las tomas de tierra. La concepción del suelo y del territorio como bien de cambio, supliendo a la concepción de bien de uso, lleva a la concentración de la tierra en pocas manos y como consecuencia cada vez más personas quedan fuera del derecho a habitar con dignidad. La principal conclusión de aquellos debates fue que el problema del acceso a la vivienda no radica en la pobreza, sino en una profunda y creciente desigualdad en la apropiación de la renta urbana por parte de sectores privilegiados. La entrega del territorio a la lógica del mercado es lo que produce la desigualdad, entonces, una gestión justa del territorio puede permitir una distribución equitativa.

Cuando nos dimos cuenta de que, si unos teníamos poco o nada para poner al menos un ranchito, era porque otros andaban especulando con la tierra, para ni siquiera usarla y encima subiendo los precios, y que el Estado podía hacer algo y no lo hacía, eso nos dio fuerza para ir por la política de justicia en el hábitat. (Mónica Mendoza, Mutual Primavera, José C. Paz)

A partir de estas conclusiones, se empezó a puntear lo que luego sería la LAJH, que plantea un cambio en las condiciones de reproducción de la desigualdad socioterritorial. El FOTIVBA pretende cambiar la dinámica de concentración de suelo que sigue en aumento y, con

ello, acrecienta las restricciones de amplios sectores para acceder a un barrio o a una vivienda dignos y seguros.

Desde el convencimiento de que el territorio es fuente de riqueza, en gran medida potenciada por las acciones del Estado (obras y habilitaciones que valorizan zonas, por ejemplo) y de que los beneficios de la valorización se privatizan y quedan en pocas manos, se generó la LAJH en base a cuatro “principios rectores”: el derecho a la ciudad y a la vivienda, la función social de la propiedad, el reparto equitativo de las cargas y los beneficios de los procesos de urbanización y la gestión democrática de la ciudad.

El eje principal de la ley es fortalecer la capacidad estatal (provincial y municipal) y de las organizaciones sociales para intervenir en los procesos de desarrollo territorial. Para ello crea cuatro grandes grupos de instrumentos y dispositivos de gestión:

- Apoyo a las iniciativas de autogestión popular: promoción de procesos de producción social del hábitat, programa de urbanizaciones planificadas, integración socio urbana de barrios populares, microcréditos para la mejora del hábitat, entre otros.
- Fortalecimiento de la capacidad municipal de conducción de los procesos territoriales: consorcios urbanísticos, reajuste de tierras, parcelamiento o la edificación obligatoria de los inmuebles urbanos baldíos.
- Dispositivos fiscales y extrafiscales para la obtención y administración de recursos en tierra, dinero y obras: participación municipal en las valorizaciones inmobiliarias, gravamen municipal progresivo en el tiempo sobre los inmuebles ociosos, creación de un fondo fiduciario.
- Mecanismos de participación popular: Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, Consejos Locales en los municipios y Mesas de Gestión en cada barrio donde se intervenga.

Movilizaciones por la aprobación de la LAJH

Cambiar las condiciones para lograr mayor equidad ha generado grandes resistencias tanto de los agentes especuladores como de la burocracia estatal, que se resiste a cambiar los cursogramas aprendidos y a hacer del planeamiento territorial un espacio participativo y creativo. Se pudo comprender que para que este cambio se diera era fundamental institucionalizar la participación y generar un espacio multisectorial para la difusión, el monitoreo de las acciones y la plena aplicación de la LAJH en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Por eso se incluyó la creación del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat como un órgano multiactoral en el que tengan representación diferentes actores involucrados en el tema, de organismos estatales, de organizaciones sociales y universidades públicas, así como la conformación de los Consejos Locales a nivel municipal y las Mesas de Gestión en cada barrio que se proponga llevar adelante cualquier mejora de su hábitat.

La conquista de la ley fue dándose como proceso, a partir de una necesidad de plasmar en una Ley los avances, experiencias, crecimiento y las luchas por acceder al hábitat. Algo que en principio parecía una utopía (Daniel Molina, Colectivo Hábitat).

Durante cuatro años, la LAJH fue presentada y discutida en toda la provincia; de esos debates fueron saliendo aportes que la enriquecieron y, luego de diecisiete versiones, fue presentada en la Legislatura provincial, sancionada el 29 de noviembre de 2012, promulgada el 9 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial el 7 de octubre de 2013.

Del territorio a la acción política y a la institucionalización de la participación

Ya tenemos la pala, ahora hay que pensar en hacer los cimientos y es ahí donde es muy importante la visión de todos, los que nos pusimos la ley al hombro para que se apruebe, somos los que la tenemos que llevar siempre encima para que se aplique. (Rosa Yapura, Cooperativa Claudia Falcone, Hurlingham)

La lucha por el hábitat tiene historia y en cada contexto histórico va asumiendo nuevas institucionalidades. En el conurbano bonaerense el problema del acceso a un lugar donde vivir se potenció desde la dictadura de los setenta, cuando se terminaron los créditos accesibles para la construcción de viviendas y, además, como consecuencia de la sanción del Decreto Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, que impuso condiciones al submercado de subdivisión de suelo que significaron el fin del mercado de loteos populares al tiempo que iban generándose loteos cerrados o *countries*. La consecuencia fue el aumento de familias sin posibilidades de acceso a la vivienda, la densificación de las villas y las tomas de tierra, respuesta autogestiva popular a la injusticia de las políticas de mercantilización del territorio.

Distintos ámbitos de difusión y consenso en la lucha por la LAJH

Se conformaron redes de asentamientos en los distintos distritos, tales como el Consejo de Asentamientos en Quilmes y en Morón, el Movimiento de Barrios de Moreno, el Consejo de Villas de Merlo, entre otros. Institucionalidades que lucharon y consiguieron las ordenanzas que les permitieron regularizar la tenencia de las tierras ocupadas. Muchas de aquellas organizaciones, con nuevas formas, formaron parte años después del FOTIVBA, aportando su

experiencia en la propuesta que dio origen a la LAJH y sus instrumentos, por ejemplo, la generación de programas de lotes con servicios y de mejoramiento de viviendas por autogestión en los que existía una gran trayectoria de las organizaciones de apoyo técnico.

Una ley no hace la política, desde las organizaciones debemos hacer presente el poder popular para defender los derechos de toda la población. De allí, fue surgiendo el FOTIVBA como una nueva institucionalidad desde la que se luchó por la ley y por la institucionalización de la participación. Gracias a la presión de este Foro de organizaciones, se conformó el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat. Creado por el artículo 60 de la LAJH, se constituye como un organismo de participación, deliberación, concertación, asesoramiento, elaboración, análisis, evaluación y determinación de prioridades de iniciativas y proyectos, como así también de difusión, debate y facilitación de instrumentos y herramientas de políticas de hábitat.

Actualmente está integrado por treinta y seis representantes de diferentes sectores involucrados: el Poder Ejecutivo provincial, las organizaciones sindicales, movimientos sociopolíticos y organizaciones de apoyo técnico, los colegios profesionales (de arquitectos, escribanos y agrimensores), los municipios del conurbano y del interior provincial, las universidades públicas con asiento en la provincia y el Poder Legislativo (ambas cámaras).

El Consejo funciona como espacio de resonancia de conflictos, demandas, novedades y propuestas para el territorio. El trabajo se despliega en comisiones y en un plenario mensual, ambos espacios son abiertos, todo/a participante tiene voz y, si ante la falta de consenso hubiera que votar, lo hacen solo lo/as consejero/as.

Plenario del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat de la provincia de Buenos Aires

A modo de ejemplo, se mencionan algunas acciones del CPVyH:

- Sobre lo normativo: extensión de la suspensión de desalojos de asentamientos registrados; protocolo para la gestión de relocalizaciones; protocolo de actuación judicial frente a desalojos y declaración de inconstitucionalidad del Código Procesal Penal sobre desalojos exprés y compulsivos; proyecto de ley que eleva el impuesto a los inmuebles baldíos para generar un fondo para pagar suelo adquirido mediante expropiaciones; impulso a una resolución provincial que impide el uso de agrotóxicos en áreas cercanas a la población.
- Difusión y capacitación: sistematización de ordenanzas e instrumentos de la LAJH; generación de materiales didácticos y de facilitación de la gestión de la ley para capacitación de agentes municipales y miembros de organizaciones sociales; promoción de los Consejos Locales.
- Relevamiento del estado de aplicación de la ley: pedidos de informes anuales y de criterios de asignación de recursos; creación del sitio web oficial del Consejo donde se publican las resoluciones y actas de las reuniones, y del Observatorio de la LAJH.
- Pronunciamientos públicos ante medidas gubernamentales: el Consejo denunció una resolución para darle agilidad a la aprobación de los barrios suntuarios utilizando figuras de la LAJH y sin las habilitaciones necesarias.

Potencialidades y limitaciones de la institucionalización de la participación multiactoral

La creación por ley del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat —y la incorporación de múltiples actores en él— supone nuevas posibilidades de actuación, así como dificultades y tensiones. Entre las posibilidades, se rescatan:

- Aportar a la política de hábitat de la provincia.
- La institucionalidad dificulta el “ninguneo” dado el marco de legitimidad y posibilita una base política de presión con mayor autoridad.
- El Consejo es un ámbito de intercambio de información, tanto de los conflictos en el territorio como de las acciones y políticas de respuesta a acciones gubernamentales.
- La intersectorialidad permite a las organizaciones la visión más integral de los problemas y la mayor efectividad de las respuestas.

Entre las dificultades y desafíos a superar, se destacan cuestiones de diferente tenor, por un lado, las que hacen a la participación y representatividad de las organizaciones en el Consejo y, por otro, las tensiones con las diferentes gestiones del Gobierno provincial.

Las organizaciones que integran en Consejo, además de ser un canal de transmisión entre problemas y posibles soluciones, tienen el desafío de actuar más allá de la “trinchera propia” para hacerlo desde la “trinchera de todos”. En ocasiones, la participación de las organizaciones en el CPVyH aumenta las expectativas de las poblaciones en conflicto sobre las respuestas que se pueden dar desde ese ámbito, que no siempre son satisfechas. Y en este punto, una cuestión a resolver es la de la “representatividad” de las organizaciones que integran el Consejo respecto de las demandas del conjunto de organizaciones.

Pero lo que parece más complicado de superar es la resistencia de los/las funcionario/as provinciales y municipales para realizar cambios en el modo de gestión socioterritorial. Vale señalar que el Consejo pasó por distintas tensiones con el Gobierno provincial desde su creación y en cada una de las etapas de gestión de Gobierno. Durante la gobernación de Daniel Scioli (2007-2015) se enfrentó la fuerte resistencia a conformar el Consejo con presiones, movilizaciones, denuncias y cabildos abiertos. Finalmente, tres años después de sancionada la ley, se logró la creación del CPVyH. Pero inmediatamente

cambió de manos la conducción del Gobierno de la provincia y, con María Eugenia Vidal como gobernadora (2015-2019) y un Gobierno neoliberal resistente a los cambios que impulsa la LAJH, se mantuvieron las reuniones, pero la realidad de la política pasaba por otro lado. En ese periodo hubo varios cambios en las autoridades de aplicación de la LAJH sin acciones concretas de implementación de la ley, en una dinámica del “como si”. Las organizaciones sociales, las universidades públicas y algunos colegios profesionales denunciaron la situación a través de declaraciones públicas y protestas, como la realizada ante la atomización de la gestión del territorio por la desarticulación de la Subsecretaría de Tierra, Vivienda y Hábitat y el traslado de sus competencias a diferentes dependencias del Gobierno, impidiendo las acciones integrales.

Con la asunción de Axel Kicillof como gobernador de la provincia en 2019, la primera tensión versó sobre la falta de visión acerca de la importancia del hábitat en la política de la provincia, tal como lo demostraron las tomas de tierra en los primeros meses de la pandemia de covid-19. El Consejo avanzó en una propuesta a modo de programa de acciones territoriales urgentes que también incluye unificar la gestión territorial para hacer posible la generación de políticas integrales, y se logró que el gobernador genere una Unidad de Coordinación de Políticas de Tierra, Vivienda y Hábitat en el Ministerio de Gobierno.

Otro gran desafío que encara el CPVyH desde su creación, es la reticencia de muchas gestiones municipales a asumir un rol activo en la gestión socioterritorial. Una preocupación que está siendo abordada con convenios con diferentes entidades para la difusión de los instrumentos de la ley, la formación y capacitación de recursos humanos municipales.

***Experiencias populares y prácticas
estatales durante la pandemia covid-19***

Ninguém solta a mão de ninguém

A ampliação do repertório de práticas organizativas de comunidades de baixa renda de Porto Alegre na pandemia de covid-19

Betania de Moraes Alfonsin, Pedro Prazeres Fraga Pereira, Paulo Eduardo Berni, Pedro Acosta Oliveira, Fernanda Madalosso Guimarães, Flávia Segat, Debora Carina Lopes y Vitória Alvarez Montanari

Introdução

O artigo apresenta uma investigação sobre os processos de resistências locais ao desmonte da Política Urbana brasileira e aos impactos da covid-19. A investigação é voltada às resistências exercidas por populações de baixa renda do município, em três territórios distintos em Porto Alegre: Ocupação 20 de Novembro, Vila Tronco e Restinga.

Um conjunto de questões foi colocado para orientar a pesquisa, mas a problematização foi assim sintetizada: Em um ambiente que promove a necropolítica e acentua a precarização da vida das populações de periferia, a que recursos recorrem, que alianças constroem, que bandeiras defendem, que inovações organizativas experimentam e que resultados alcançam as comunidades de assentamentos de Porto Alegre em seus processos de resistência ao desmonte da política urbana e à covid-19?

As três comunidades e territórios foram escolhidos em função de escalas distintas, tradição de mobilização e por enfrentarem diferentes temas em seus processos de resistência. Enquanto a Cooperativa 20 de Novembro é uma ocupação que envolve menos de 20 famílias, a Vila Tronco abrange, ao todo, 3.178 famílias. Por fim, a Restinga é um bairro de aproximadamente 60.000 habitantes.

A investigação buscou responder a problemática através da realização de entrevistas, com produção direta de dados. As entrevistas qualitativas focaram em bandeiras de luta, conquistas históricas e estratégias concretas de resistências e de proteção à saúde. Após as primeiras entrevistas, decidiu-se pela ampliação das propostas teórico-metodológicas da etnografia e número de pessoas entrevistadas.

É um daqueles casos em que há uma “(...) categoria de entrevistados que interessa ao pesquisador por pertencer a um grupo específico”, de modo que “a entrevista invariavelmente se interessa por entender essa identidade e as ações e representações de mundo que daí decorrem” (XAVIER, 2017, p. 153).

A partir dos aportes provenientes da etnografia urbana, evitou-se olhar para essas comunidades periféricas sob uma perspectiva jurídico-normativa abstrata, que pensa as periferias de forma passiva, focada apenas na privação, ignorando suas dinâmicas. Isto é, perceber, a partir da ótica dos próprios atores que habitam os territórios, o repertório de práticas e instituições que lhes servem e condicionam. Nesse intuito, e com técnicas próprias para produção de conhecimento de caráter descolonial, buscou-se dialogar com questões suscitadas nas “epistemologias do sul” (SANTOS, 2019). Valorizar os conhecimentos populares, construídos pelas lideranças, ao contar suas experiências, rompendo com a lógica da colonialidade do saber.

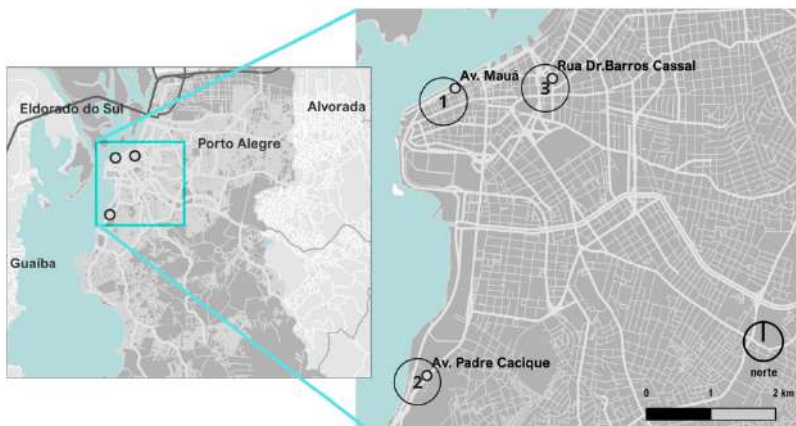
Ocupação 20 de Novembro

A Ocupação 20 de Novembro, localizada no Centro de Porto Alegre, na região conhecida como 4º Distrito, é uma ocupação para fins de moradia iniciada pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM). Segundo Ezequiel Moraes, um dos líderes da ocupação e entrevistado, o primeiro local ocupado foi um prédio na esquina da Avenida Mauá com a Rua Caldas Júnior.

A ocupação nesta localização, possui longa história: em 2005, foi feita uma ocupação de denúncia; em 2006, uma nova ocupação no dia da consciência negra, 20 de novembro (nomeando a ocupação e a cooperativa), a qual seria objeto de uma reintegração de posse executada em 2007 ; e, em 2011, quando as famílias já se encontravam assentadas ao lado do Estádio Beira-Rio, em um terreno pertencente ao Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB), uma última ocupação desse prédio foi feita pelas famílias do MNLM, pretendendo denunciar que o imóvel, após quatro anos, seguia sem atender sua função social .

Em 2007 as famílias foram deslocadas para o lado do estádio Beira-Rio. Com a escolha de Porto Alegre, pela FIFA, como cidade-sede da Copa do Mundo de 2014, o terreno ocupado se tornaria, em breve, um estacionamento. Com a necessidade de realizar as obras no entorno do estádio, a União cedeu um prédio abandonado à Cooperativa, anteriormente ocupado pelo MNLM em ações diretas. É neste local que as famílias se encontram hoje:

Mapa 01 - Itinerário cartográfico do Assentamento 20 de Novembro: primeira localização na Avenida Mauá, esquina Caldas Júnior; segunda localização na Av. Padre Caciue, nº 1345; terceira localização na Rua Barros Cassal, esquina com Av. Farrapos.



Fonte: SANTOS, 2020.

O Assentamento 20 de Novembro é uma ocupação do MNLM e faz parte da Confederação Nacional de Associações de Moradores (CONAM). Nessa configuração, os moradores se organizaram enquanto cooperativa e se habilitaram no Programa Minha Casa Minha Vida a fim de reformar o prédio ocupado.

A cooperativa contratou o escritório “Ah! Arquitetura Humana” para elaboração de projeto arquitetônico sustentável, e outros para os projetos complementares de instalação predial (elétrico, hidrosanitário e de prevenção e combate à incêndios). O desenvolvimento do projeto se deu com a participação das famílias. Técnicos ouviram suas aspirações, necessidades, e apresentaram as possibilidades projetuais aos moradores. Nessa troca fortaleceu-se a confiança e garantiu-se que a espera de dois anos e meio até a aprovação não gerasse desconforto recíproco.

Imagem 01 - Projeto arquitetônico de autoria do escritório “Ah! Arquitetura Humana” para o prédio que está ocupado pela Cooperativa 20 de Novembro.. Localizado na Rua Barros Cassal, esquina com a Avenida Farrapos.



Fonte: Escritório “Ah! Arquitetura Humana”.

Após a aprovação do projeto arquitetônico e atualização das planilhas orçamentárias para a Caixa Econômica Federal, a Cooperativa aguarda o recurso para iniciar as obras. Conforme referido por Ezequiel, se o recurso já estivesse liberado, muitas famílias poderiam ter trabalhado durante o período de pandemia na reforma dos seus apartamentos. Eles estariam ganhando para isso e resguardando sua vida e a de outras pessoas durante a crise sanitária.

Como forma de resistência aos ataques ao direito à moradia, a Cooperativa elaborou um documento relatando o descaso em relação ao direito de receber o recurso conquistado junto ao governo federal. A 20 de Novembro irá judicializar caso a pressão administrativa não seja suficiente, já que o financiamento é essencial para garantir a conquista da moradia.

Ainda que articulados e buscando manter a organização do movimento, os assentamentos urbanos sofreram com a pandemia do covid-19. Ezequiel é assertivo ao referir que “a pandemia é o desastre,

mas é a partir do desastre que temos que construir uma evolução”. Desse modo, há um reagrupamento, contrário do que se espera em um momento de isolamento social. O entrevistado explica que “quando tu fala de pós [pandemia], como vai ser a questão da política de desenvolvimento urbano daqui pra frente? Ela vai continuar sendo a mesma?”. A liderança entende que as redes de solidariedade foram retomadas. Para ele, “a resistência está fundada na questão sobre o direito de ter acesso aos serviços e condições. Atualmente, estamos lutando pelo direito de existir”.

Demonstrou-se a essencialidade da conversa entre diferentes movimentos relacionados ao direito à cidade, para a discussão acerca de questões concernentes aos resultados da pandemia. A comunidade cria e se apropria de ferramentas para iniciar uma disputa dentro do mundo virtual através da produção de podcasts e incidência em redes sociais.

A organização comunitária foi essencial para evitar a perda de mais vidas. Nesse momento de pandemia, a compreensão de que é necessária a construção de uma lógica de solidariedade comunitária contrasta com práticas de assistencialismos governamentais. A Cooperativa desenvolveu a prática da autogestão, como facilitador de renda e pequenas ações locais, como a doação de sabão, de produção própria, além da articulação com outras entidades, visando apoiar pessoas em situação de rua. Se somam a isso, a produção de garrafinhas de água para “bike” e confecção de máscaras para doação aos catadores. Portanto, como discorre Ezequiel, a rearticulação é marca da 20 de Novembro: “acho que a gente tem um objetivo: essa questão do fortalecimento comunitário”.

Vila Tronco

A Vila Tronco faz parte da região “Grande Cruzeiro”. Constituída a partir de “[...] processos de auto-organização, descolados do planejamento usual na cidade [...]” (ÁVILA e ARAÚJO, 2006, p. 17), a região

se formou na conjugação da passagem do tempo com o modo contingente e arbitrário de ocupação dos espaços urbanos. Constituído por ocupações irregulares, o território é uma das áreas mais populosas da capital (ÁVILA e ARAÚJO, 2006, p. 35-37), englobando cinco bairros e quarenta vilas.

Nos anos 1990, a construção da Avenida Tronco obrigou a remoção e relocação de 97 casas em vilas próximas (LEITE, 2016, p. 46). O desenvolvimento do território é agravado com a escolha de Porto Alegre como uma das cidades-sede dos jogos da Copa de 2014 e a obra de duplicação da referida Avenida .

Em 2010, foi criado, então, o Comitê Popular da Copa (CÔMITE POPULAR, 2014, p. 94), com o objetivo de dar algum protagonismo à ação popular, alçando-a à condição de ator político resistente e propositivo na reivindicação de maior diálogo e transparência na condução das obras.

O DEMHAB instalou escritório na Vila Tronco para pressionar os moradores a aceitarem as ofertas de desocupação das moradias. Havia duas opções: bônus moradia no valor de R\$ 52.340,00, aplicável apenas a imóveis registrados no Registro de Imóveis; ou o aluguel social, no valor de R\$ 500,00, para os demais casos. Uma vez assinados os documentos, as casas poderiam ser derrubadas imediatamente, sem notificação prévia (SILVA, 2016, p.71). Na tentativa de resistir à brutalidade estatal, em 2010, a ação popular organizou o movimento “Chave por Chave”, defendendo a entrega da habitação apenas mediante a entrega da chave da nova residência.

As obras de duplicação da Avenida Tronco, iniciadas no ano de 2012, não foram concluídas e permanecem paradas desde 2016 (RBS TV, 2019). Quase uma década após o anúncio dos preparativos para os jogos na cidade, o legado da Copa para os moradores da Vila Tronco foi uma fratura urbana, cujos reflexos ainda se fazem presentes.

Na Vila Tronco, foram realizadas entrevistas com lideranças que, embora possuam trajetórias distintas, estão envolvidas com o movimento comunitário da região . Dois desses entrevistados, Bruna

Rodrigues e Lídio Santos, desenvolveram trajetórias políticas mais abrangentes, devido sua atuação no território, incluindo a conquista de mandatos como vereadores da capital. A terceira é Elisângela de Fátima Lima Rosanelli, agente comunitária de saúde.

A primeira questão que aparece nos relatos desses atores é a omissão do Poder Público em garantir suporte aos moradores no enfrentamento à pandemia. Tanto na oferta de auxílio material (como cestas básicas e álcool gel), quanto à adequada informação sobre a disseminação da covid-19 e cuidados preventivos. O Estado pouco se fez presente, com consequências graves na disseminação do vírus nesses territórios.

A partir desse contexto de abandono, os entrevistados relatam que houve um retorno a pautas essenciais para a comunidade, centrando suas reivindicações na defesa do sistema público de saúde, emprego e da renda, bem como na acessibilidade do transporte e oferta de vagas em creches e escolas. Nas palavras de Bruna Rodrigues, “aqueles chavões ‘luta pela saúde, pela educação e pela moradia’ voltam a ser bandeiras centrais, em um sentido ressignificado e renovado”. Esse processo de retorno a reivindicações emergenciais não deriva exclusivamente da pandemia, mas de uma percepção mais ampla sobre os recentes retrocessos experimentados na política econômica e na política urbana.

Ainda segundo o relato de Bruna:

A pandemia veio trazer requintes de crueldade, porque se antes as mulheres faziam faxina para comer à noite, trabalhar de dia para comer à noite, hoje não temos trabalho. Eu acho que tem um aprofundamento da desigualdade social e o indivíduo se movimenta, se coloca como protagonista e tenta fazer alguma coisa.

A pandemia evidencia um processo já existente de precarização socioeconômica desses corpos periféricos. No entanto, é a partir da emergência sanitária e da omissão do Poder Público, que os entrevistados identificam uma rearticulação do tecido social comunitário e a ampliação das redes de solidariedade. Embora seja difícil antever

o alcance dessa rearticulação associativa, as entrevistas ressaltaram a profundidade do fenômeno que sucedeu um período de letargia da organização comunitária. Tal rearticulação promoveu uma renovação das lideranças e retomou a credibilidade do movimento comunitário no território, atenuando de maneira significativa os efeitos deletérios da pandemia.

Restinga

O terceiro território pesquisado é o Bairro Restinga. Realizou-se levantamento bibliográfico sobre o bairro e de informações em redes sociais sobre ações organizadas pela comunidade para prevenção à covid-19, além de entrevista.

A Restinga se diferencia dos demais territórios pela escala, já que possui aproximadamente 60 mil habitantes, segundo as estatísticas oficiais (OBSERVAPOA, 2010), e por estar localizada no extremo sul da cidade. Não se trata apenas de um afastamento físico da área central, mas de modelo de Política Habitacional baseado na construção de moradias em regiões que ainda não são cidade (ALFONSIN, 2000, p. 144), intensificando a exclusão sócio territorial desta população, dada a precariedade e custo do transporte público.

O isolamento geográfico não foi uma casualidade do desenvolvimento urbano da Restinga, mas resultado da política de expulsão dos indesejados - a população pobre da favela da Ilhota - das regiões mais valorizadas da cidade, em plena Ditadura Militar. Essa operação não escondia em seu lema seus objetivos mais perversos: “remover para promover” (ALFONSIN, 2000, p. 144).

Recuperar a origem da Restinga é relevante para compreendermos como o bairro se encontrava no momento em que emerge a pandemia. São duas as lutas: aquelas por melhores condições de vida (água encanada, energia elétrica, saúde, educação) e as que buscam conectar a região ao restante da cidade (transporte público).

A prática associativa e as lideranças comunitárias tiveram especial importância no pleito por melhores condições de vida para os moradores, no ciclo conhecido como “Orçamento Participativo”. Márcia Kovaski refere que “era um instrumento de luta e de conquista importante, pela transparência, por discutir com a comunidade o que era prioridade”.

As primeiras demandas do orçamento participativo na Restinga centravam-se no asfaltamento de ruas, iluminação pública, saneamento e moradia. A conquista desses equipamentos urbanos foi o que possibilitou o acesso a outros equipamentos e serviços públicos, como atendimento médico de emergência (ambulâncias) e transporte público (BONETTO, 2014, p. 88-89).

A reivindicação pela Escola Técnica Federal de Porto Alegre na Restinga, iniciada em 2006, e a criação do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, em 2010, assim como a construção do Hospital Restinga e Extremo Sul, finalizada em 2014, retratam lutas e conquistas para aquela área. Segundo a liderança, “o hospital tem conseguido, na pandemia, ser um suporte para a comunidade.” E o Instituto Federal contribuiu para a organização de ações de prevenção. Contudo, não é possível verificar se tais ações foram coordenadas pelo Poder Público, cuja atuação foi caracterizada pela “fragilidade das ações, a ausência de orientações, somadas à já existente precariedade nos bairros pobres da cidade” (SOARES et. al., 2020, p. 370).

Perguntada quanto a atuação governamental na Restinga durante a pandemia, Márcia respondeu que “Tem um distanciamento. [...] E a gente vê que não tem diálogo. [...] Tem um vácuo muito grande nisso”. O que se observou foi a precarização do atendimento à população, com diminuição dos horários dos ônibus (apesar da mobilização comunitária), fechamento de postos de saúde e escolas, aumentando a insegurança alimentar, tendo em vista que refeitórios também foram fechados.

Os movimentos “Acorda, Restinga” e “Casa Emancipa”, construíram parcerias com redes pré-existentes, como escolas municipais,

para desenvolverem ações de distribuição de alimentos, cestas básicas e máscaras e orientação preventiva para população.

Destaca-se as dificuldades de articulação comunitária, fruto do distanciamento social e da desigualdade na inclusão digital. Embora ressalte que “a gente tem até aprendido”, mas “a gente não tem muito conhecimento das ferramentas tecnológicas de comunicação”. O que transparece é um desejo de retorno a um passado de associativismo e participação comunitária: “Parece que falta alguma coisa nessa mobilização para conseguir resgatar isso de volta, [...] acho que foi um período fundamental, onde a gente conseguiu várias conquistas aqui para o bairro e para a cidade”.

Conclusões

Conclui-se, inicialmente, que essas comunidades atravessam conscientes um período de brutal retrocesso em termos de efetivação de direitos, diminuição dos espaços institucionais e fechamento de equipamentos públicos importantes nos territórios. A ausência do Poder Público no enfrentamento à emergência sanitária, àqueles territórios foi uma avaliação unânime nos territórios.

Ressalta-se o contexto de abandono e precarização acentuado nos últimos anos, representando um ciclo de retrocessos, em relação a períodos de maior diálogo com o Poder Público, como o Orçamento Participativo, referenciado com saudosismo pelas lideranças. As conquistas obtidas nacionalmente pelo movimento de reforma urbana, como a promulgação do Estatuto da Cidade, também são mencionadas como marcos de um ciclo encerrado que contrastando com a recente desfiguração e desdemocratização da ordem jurídico-urbanística brasileira.

A pandemia expõe um processo de precarização socioeconômica das periferias que antecede a pandemia. É justamente em função desse ciclo de retrocesso que os entrevistados identificam uma rearticulação política do tecido comunitário nesses territórios. A

investigação aponta para uma ampliação do repertório de práticas, bandeiras de luta, incorporando questões de gênero e raça, alianças políticas, comunicação e renovação geracional das lideranças. A mobilização revitaliza o tecido social e apresenta maior agilidade na comunicação, com o uso de plataformas como “WhatsApp” e “Facebook”. por exemplo.

Finalmente, constatou-se empatia da sociedade civil no apoio às comunidades, como no abaixo-assinado da Comunidade 20 de Novembro para liberar verbas do “Programa Minha Casa, Minha Vida entidades”, a capacidade de mobilização da comunidade da Vila Tronco na campanha para eleger Bruna Rodrigues como vereadora na eleição de 2020 e, finalmente, o engajamento de professoras da rede pública no apoio ao coletivo “Acorda Restinga”.

A pesquisa sugere que as comunidades de baixa renda encontram, na ampliação do seu repertório político, uma forma consistente de resistir à covid-19, sem abrir mão de bandeiras estratégicas de luta por uma cidade mais justa para todo/as.

Bibliografia

Alfonsin, Betânia de Moraes (2000). Da invisibilidade à regularização fundiária: a trajetória legal da moradia de baixa renda em Porto Alegre – Século XX. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/3135>

Alfonsin, Betânia de Moraes; Berni, Paulo; Pereira, Pedro Pereira (2020). O paradoxo da covid-19 nas periferias: a retomada da cultura associativa como forma de resistência à necropolítica. In: Luiz César Queiroz Ribeiro. (Org.). As metrópoles e a covid-19: dossiê nacional. 1ed. Rio de Janeiro: Observatório das Metrópoles,

v. 1, pp. 21-29. https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/wp-content/uploads/2020/07/Análise-Nacional_O-paradoxo-da-covid-19-nas-periferias.pdf

Alfonsin, Betânia de Moraes; Lopes, Débora Carina; Mariussi, Ivone Fátima; Madalosso, Fernanda; Berni, Paulo; Pereira, Pedro Prazeres Fraga (2020). Descaracterização da política urbana no Brasil: desdemocratização e retrocesso. *Revista Culturas Jurídicas*, v. 7, pp. 229-254. <https://periodicos.uff.br/culturasjuridicas/article/view/45337/26015>

Alfonsin, Betânia De Moraes; Pereira, Pedro Prazeres Fraga; Lopes, Débora Carina; Rocha, Marco Antônio; Boll, Helena Corrêa (2019). Da função social à função econômica da terra: impactos da Lei nº 13.465/17 sobre as políticas de regularização fundiária e o direito à cidade no Brasil. *Revista de direito da cidade*, v. 11, pp. 140-158. <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/37245>

Araújo, Neila Prestes (2019). Qual a sensação de ver a tua casa fora do lugar? *Matinal Jornalismo*, <https://matinal.news/neila-prestes-araujo-qual-a-sensacao-de-ver-a-tua-casa-fora-do-lugar>

Ávila, Fátima, Araújo, Jeferson Rasquim (2006). *Vilas da Grande Cruzeiro*. Porto Alegre: Unidade Editorial/SMC.

Bonetto, Helena (2014). Lugares invisíveis do bairro Restinga: a participação política das lideranças comunitárias no orçamento participativo de Porto Alegre. *Para Onde!?*, Porto Alegre, RS, v. 8, n. 2, pp. 85-92 <https://seer.ufrgs.br/paraonde/article/view/61581/36413>

Comitê Popular da Copa de Porto Alegre. *Copa do Mundo FIFA 2014 e as Violações de Direitos Humanos em Porto Alegre* (2014) Porto Alegre: Editora <https://bit.ly/3mM1ayd>

Feltran, Gabriel de Santis (2010) Periferias, direito e diferença: notas de uma etnografia urbana. *Revista de antropologia*, v. 53, n. 2, pp. 565-610.

Larangeira, Sônia M.G. (1996) *Gestão Pública e Participação a experiência do orçamento participativo em Porto Alegre*. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, n. 10. v. 3, pp. 129-137. <https://bit.ly/3gfVgmv>

Leite, Ana Luiza Grehs (2016). *Formas do acolhimento na Vila Tronco: entre rastros, restos e curvâncias do espaço*. 2016. 133 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/151119>

Magnani, José Guilherme Cantor (2002). De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana. *Revista brasileira de ciências sociais*, v. 17, n. 49, pp. 11-29.

MEC. Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023. (2018) Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Resolução nº 84, p. 84-85.

Moraes, Aldovan de Oliveira (2011). *Poder Público Municipal e Habitação de Interesse Social em Porto Alegre*. DEMHAB/PMPA: Porto Alegre.

Negreiros, Fabiano Almeida (2019). *Uma análise do papel de líderes comunitários, a partir de seus discursos, em face da desmobilização política de suas comunidades*. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/204456>

Observapoa. Porto Alegre em análise: sistema de análise e gestão de indicadores. Bairro Restinga (2010). <http://portoalegreemanalise.procempa.com.br/?regioes=93,0,0>

Porto Alegre. Legado da Copa Para Porto Alegre. (2019) Porto Alegre: PROCEMPA, <https://bit.ly/36IcPIY>

RBS TV. (2019) Obras na Avenida Tronco, em Porto Alegre, dependem da remoção de mais de 60 famílias. In: G1.Porto Alegre. <https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/06/03/obras-na-avenida-tronco-em-porto-alegre-dependem-da-remocao-de-mais-de-60-familias.ghtml>

Santos Junior, Orlando Alves dos (2019). Participação e Insurgências: ideias para uma agenda de pesquisa sobre os movimentos sociais no contexto da inflexão ultraliberal no Brasil. Revista e-metropolis, v. 39, pp. 13-25. http://emetropolis.net/system/artigos/arquivo_pdfs/000/000/304/original/emetropolis39_art1.pdf?1580756166

Santos, Alexandre Pereira (2020). Mapa do itinerário da Cooperativa XX do Novembro em Porto Alegre.

Santos, Boaventura de Sousa (2019). O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do sul. Belo Horizonte: Autentica.

Silva, Gabriela Costa (2016). O legado da Copa do Mundo de 2014 a partir de diferentes olhares: a questão das remoções na cidade de Porto Alegre/RS. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Universidade Federal de Pelotas. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Pelotas. <http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/5222>

Soares, Paulo Roberto Rodrigues; Augustin, André Coutinho; Campos, Heleniza Ávila; Bem, Judite Sanson de; Siqueira, Lucimar Fátima; Lahorgue, Mário Leal; Waismann, Moisés; Ugalde,

Pedro Azevedo de; Marx, Vanessa. (2020) A pandemia de covid-19 no Rio Grande do Sul e na metrópole de Porto Alegre. En: Ribeiro, Luiz Cesar de Queiroz (Org.). As metrópoles e a covid-19: dossiê nacional. 1. ed. Rio de Janeiro: Observatório das Metrópoles.

Xavier, José Roberto Franco (2017). Algumas notas sobre a entrevista qualitativa de pesquisa. En: Machado, Maíra Rocha (Org.). Pesquisar empiricamente o direito. 1. ed. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, pp. 119-158.

Los barrios de la periferia del Gran Buenos Aires y las organizaciones sociales en la pandemia

Algunas líneas para entender su estatuto

María Maneiro

Presentación

Hoy nos encontramos a un año del comienzo de la pandemia, hemos pasado más de ocho meses de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio [ASPO] y cuatro de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio [DISPO], vivimos múltiples incertidumbres, como así también el aumento y la profundización de las vulnerabilidades sociales en los barrios populares. Sufrimos un momento excepcional, un acontecimiento que nos transforma, que trasmuta las sociabilidades y expresa las desigualdades de manera más clara y tajante. Este acontecimiento traza nuevas normativas, designa nuevos riesgos, pero también actualiza viejas vulnerabilidades e injusticias e interpela memorables tramas para dar respuesta a la contingencia.

Nuestro equipo trabaja hace muchos años investigando las formas de vida, las características de los trabajos, los modos de aprovisionamiento, las formas de ejercicio de los derechos, las organizaciones sociales y los itinerarios de las políticas sociourbanas en los barrios populares del sur del Gran Buenos Aires. El acontecimiento de la

pandemia inhibió los lazos presenciales y los trabajos en el campo. Los referentes de las organizaciones nos demandaron información sobre sus barrios. Es así como yuxtapusimos un nuevo plan de trabajo a nuestras investigaciones de más larga data y, por ello, emprendimos diversas investigaciones sobre el devenir de la pandemia en los nueve municipios que conforman la Región Sanitaria Sexta al sur del Gran Buenos Aires (estos son Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría). Estos informes, anclados en la desigualdad sociourbana posibilitaron la actualización sostenida del lazo con los referentes de los barrios, las instituciones de Gobierno y los trabajadores de los efectores de salud.

En esta presentación trataremos de dar cuenta de las características que asume este acontecimiento en los barrios populares y, a su vez, buscaremos generar un vínculo que comprenda esta actualidad en una memoria más larga. Para ello comenzaremos por los resultados del trabajo sobre la pandemia para luego ir hacia una revisión a contrapelo de mayor densidad histórica.

Los barrios populares en la pandemia

Acá no podremos profundizar en los resultados de las investigaciones realizadas, pero sí mencionaremos una serie de aspectos centrales:

El mandato “quédate en casa” intentó ser cumplido durante los primeros meses de aislamiento, incluso en los barrios populares en los cuales la infraestructura hogareña resultaba deficitaria para la reproducción de la vida, la infraestructura barrial era insuficiente y los recursos dinerarios absolutamente exiguos para la reproducción. El déficit estructural de agua potable y de redes cloacales asumió otra centralidad, dificultando el aseo. El hacinamiento crítico, tan extendido en los barrios populares, fue un límite objetivo para la permanencia.

En los barrios populares, luego de un intento fallido de que el ejército se hiciera responsable de la asistencia alimentaria territorializada, el programa “El Barrio cuida al Barrio” formalizó lazos barriales de sostén y se consintió una “cuarentena comunitaria” que suponía la habilitación de tránsitos intrabarriales de aprovisionamiento.

Para mediados-fines de mayo los focos de Barrio Azul (Quilmes-Avellaneda) evidenciaron la resonancia de estos déficits en el territorio. Los entramados habitacionales en los cuales primaba el hacinamiento crítico poseyeron focos más altos y con una temporalidad acotada (Maneiro et al., 2021), a su vez solo en ellos se propuso una política de cerco sanitario (garantizado por las fuerzas de seguridad). Claramente, si bien las iniciativas estatales fueron múltiples, solo es mediante la intervención de las organizaciones sociales -la línea cero del cuidado- que se logró llevar adelante acciones territorialmente eficaces de cuidado y contención.

A pesar de que se diseñaron nuevas políticas de transferencias de ingresos y hubo un fortalecimiento de las políticas preexistentes, el resultado fue que estas fueron extensas en su magnitud, pero escasas en sus montos dinerarios. Casi un cuarto de la población nacional recibió alguna de las tres cuotas del Ingreso Familiar de Emergencia [IFE], pero el monto se mostró, muy escaso para garantizar la reproducción de sus beneficiarios; también hubo aumento en la Asignación Universal por Hijo y en las tarjetas Alimentar, pero pese al esfuerzo, estas iniciativas se tornaron insuficientes para garantizar el aprovisionamiento mínimo de las personas sin empleo, de los desocupados, los subempleados, los trabajadores informales, los inactivos sin cobertura previsional y los beneficiarios de programas sociales. Estos debieron movilizarse—desobedeciendo las restricciones— para aprovisionarse, de forma mínima. Los datos de nuestro octavo reporte muestran una suba significativa de la movilidad entre los meses de julio y agosto; esta suba es mayor entre los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, es decir de las adultas jóvenes sin trabajo formal, con niñez a cargo.

La pandemia mostró una crisis en las redes de cuidados, manifestó desigualdades de género y de clase, ancladas socio-espacialmente. Las distancias territoriales e institucionales respecto del acceso de derechos se hicieron más expresivas y los cuidados parentales —altamente feminizados— sobrecargaron a las mujeres jóvenes. Es en este contexto que reaparecen, una vez más, las organizaciones sociales para el reparto de mercadería (alimentos), insumos de higiene y locus de aprovisionamiento de información. Son los miembros (más precisamente las referentes femeninas de las organizaciones comunitarias) sin reconocimientos salariales, ni protecciones sociales las que garantizaron muchas de las tareas reproducción de la vida. Ahora, no solo se les solicitan conocimientos socioespaciales y alimentarios, sino también recursos para el cuidado de salud. Entonces, con escaso reconocimiento, con responsabilidades importantes y sin capacidad de decisión, ellas, aparecen en la pandemia en los espacios más empobrecidos colaborando en la atención de la salud, alimentaria y de la niñez.

Reactualizar este estado de situación en una memoria situada

¿Cómo entender esta forma de organización de la vida durante la pandemia en los barrios populares? ¿Qué elementos dotan de condiciones de posibilidad para la emergencia de este rol de las organizaciones sociales y de esta distancia con las modalidades institucionales clásicas de garantías de derechos?

Proponemos entender lo mencionado previamente a partir de un doble prisma. Por un lado las formas particulares de producción del hábitat popular en las periferias urbanas del Gran Buenos Aires y por otro, la mutación del vínculo de ciudadanía, que transformó los roles para la gestión de las demandas en los espacios marginalizados

Comencemos por el primer punto. La Región Metropolitana de Buenos Aires es heterogénea y desigual en múltiples sentidos: en torno a la solidez de sus infraestructuras y el acceso a servicios, a

las posibilidades de movilidad y a la adecuación de sus viviendas; a su vez esto se liga a una distribución espacializada de los estratos socioeconómicos que la habitan. Sintéticamente, se pueden diferenciar cuatro entramados residenciales diferentes: las centralidades clásicas, en las que se encuentran las cabeceras de partidos, ligadas a la tradicional red ferroviaria; los barrios surgidos por loteos, fundamentalmente entre los años 1930 y 1970 de la mano del proceso de sustitución de importaciones, los espacios marginalizados que dieron como resultado las “villas” tramas habitacionales en terrenos residuales, generalmente, ocupados por goteo, sin planificación urbana; los asentamientos, que surgen en una mixtura de las dos formas anteriores, pues en la década del ochenta con la crisis del loteo popular, se llevan a cabo ocupaciones de tierras que sí respetan en trazado urbano y que configuran un nuevo patrón de urbanización popular y, finalmente las nuevas urbanizaciones periféricas para los estratos medios-altos en *countries* y barrios cerrados . Hasta la década del setenta la mayor parte de estos trazados fueron producto de la acción del mercado —más o menos formalizado— a pesar de que el surgimiento de las villas es precoz. Claramente, a posteriori de esta década se generó una segmentación socioespacial, que “toleró” la ocupación de tierras en las zonas periferias, degradadas e inundables en muchos municipios de la región.

Dentro de estos procesos de habitabilidad diferenciados, la creación de las infraestructuras urbanas supuso un rol activo de las organizaciones de vecinos. Las sociedades de fomento fueron las organizaciones clásicas que mediaron entre los vecinos de los barrios y las instituciones estatales para lograr la provisión de servicios. Cabe decir, entonces, que aún en la actualidad las redes de cloacas y de gas son altamente deficitarias en la región. Estos nodos organizacionales de vinculación entre la sociedad y el Estado constituyen un elemento central para comprender el dinamismo temprano de las organizaciones de vecinos como, también, la relevancia de lo comunitario para la resolución de problemas. Esta modalidad fue preponderante

hasta la década del setenta y ochenta y permeó las formas de demanda socioespacial hacia el Estado en tiempos posteriores.

Para comienzos de la década del ochenta se abre otra forma de ocupaciones de tierra en la periferia, las tomas de San Francisco Solano, Quilmes y las de La Matanza, invocan otros imaginarios para pensar la ciudad al construir desde su armado una planificación de la cuadrícula urbana formal. Estos asentamientos y sus organizaciones —fuertemente fomentadas por las Organizaciones Eclesiales de Base—, a su vez, van generando una nueva forma de vinculación con el Estado. La producción de hábitat va produciendo creación de lazos, de instituciones, traducción y actualización de saberes y replanteos en torno a las responsabilidades de los vecinos y de las jurisdicciones estatales. Diferentes a las villas, los asentamientos intentan reproducir el trazado urbano formal. La construcción de las organizaciones de base de los vecinos son una puerta hacia el derecho al hábitat, una puerta que inicia un proceso aletargado e inconcluso.

Ahora bien, este proceso de aprendizaje, de gestión y de transmisión de saberes se confronta con un Estado en mutación. La modificación del vínculo de ciudadanía no supone la ausencia de estatalidad en los barrios periféricos, sino un Estado que retoma lo más dinámico de los lazos comunitarios y promueve su resignificación. Estado asistencial-participativo, lo llamó Svampa (2005). El vínculo de ciudadanía rompe con la idea del ciudadano universal para sugerir dos aspectos: el primero es que son los vecinos de los barrios populares los que tienen la responsabilidad de generar sus propias instituciones y gestionar y garantizar sus instituciones y, segundo, fomenta un enfoque del problema de la informalidad habitacional centrado en la formalización de la tenencia. Esta es comprendida como el zócalo de la acción individual de mejora hogareña.

Volvamos ahora a las memorias barriales. Si en la primera década de la reconstrucción democrática, con idas y venidas, se retoman las iniciativas de los pobladores desde algunos órganos del Gobierno, a fines de esa década, la crisis de la hiperinflación muestra la versatilidad de los lazos barriales y las embrionarias organizaciones

sociales: son ellas las que crean ollas populares, comedores y demás formas de asistencia alimentaria para la población. La ocupación de La Sarita, donde se produce un proceso represivo de envergadura, a mediados de los noventa es el hito que abre esta nueva forma de intervención estatal (Nardin, 2018).

La Ley 24374, de Régimen de Regularización Dominial, conocida como “Ley Pierrri”, posibilita cierta regularización de las ocupaciones y, bajo la hipótesis del emprendedurismo inspirada en De Soto, espera que los vecinos de los barrios profundicen las mejoras en el hábitat ya que tienen mayor seguridad de tenencia, no obstante, la crisis social generada por un aumento sideral del desempleo y el empobrecimiento de la población imposibilitaron la concreción de esta idea. Ante semejante crisis, las organizaciones sociales se resignifican en una doble acción de hábitat, que ya venían desarrollando y de organizaciones de desocupados, una novedad para las organizaciones colectivas.

En pleno ciclo neoliberal nuevas ocupaciones de tierra va tomando centralidad, la política se territorializa y, con más o menos éxito, tiende a apropiarse de los lazos comunitarios y las formas organizativas de los barrios; sin embargo este proceso nunca es total, la vitalidad de los barrios populares tiene densidad. Todos estos temas aparecen en la bibliografía como el problema del clientelismo, pero esta categoría es más lo que oscurece que lo que ilumina. Nosotros tenemos una mirada diferente, queremos resaltar que muchas de las redes territorializadas tienen larga data y que se articulan con organizaciones de fomento, con ollas populares, con organizaciones del sindicalismo, con viejas y nuevas organizaciones de defensa del hábitat y nuevas organizaciones barriales. Tampoco podemos negar que también se tejen con redes partidarias espacialmente sostenidas, más o menos vinculadas con las instituciones públicas y de Gobierno y que en casos aislados existen vínculos con redes de ilegalismos verticales y horizontales o con barras bravas. Pero hay que ser prudentes en no confundir un caso con el todo. A su vez, muchas de ellas tienen lazos más aceitados con la política institucional y otras se van

acercando con más timidez y desconfianza y, por último, también hay otras que mantienen una autonomía muy fuerte.

Durante los Gobiernos kirchneristas un segmento de estos entramados se valoraron y muchos también se tensionaron; competencias entre organizaciones, tradiciones y lealtades fueron moneda corriente en los barrios. Así, las intersecciones entre las organizaciones comunitarias, políticas socioespaciales y Estado se tornaron más asiduas y complejas. Las formas institucionalizadas de gestión de políticas primaron en algunos momentos y el retorno a los lazos territorializados primó en otros tantos. Referentes de algunas organizaciones entraron al Gobierno nacional, de otras al provincial, varias tuvieron representación en el poder legislativo nacional o en el de la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, por ejemplo, se logra la aprobación de una ley central, ampliamente solicitada por las organizaciones socioterritoriales de larga data, nos referimos a la Ley 14 449 de Acceso Justo al Hábitat sancionada en 2012 en la Provincia de Buenos Aires.

Más allá de lo que sucediera en “el palacio”, en los barrios se consolidaron los Centros de Desarrollo Infantil, los Centros Culturales, es decir aquellos que habían surgido como comedores, se ampliaron en sus funciones y en sus recursos, aunque sin embargo, la mayoría de los trabajadores comunitarios no lograron un reconocimiento como trabajadores con derechos. Desde el Estado, en sus diversas jurisdicciones y en ámbitos interjurisdiccionales se pusieron en marcha vastas iniciativas. El PROMEBA, programa de mejoramiento barrial que ya había surgido a fines de la década del noventa, pero durante la crisis y luego, adquiere otras potencias se constituye en un ámbito de articulación —no sin dificultades— entre las organizaciones barriales y las distintas jurisdicciones del Estado. En nuestra zona de referencia se inscribe como un espacio no solo relacional sino también una institución con un espacio físico que condensa múltiples lazos organizativos de larga data.

Algunos de estos lazos mostraron cierta modularidad con el cambio de Gobierno, la eficacia de las organizaciones sociales de base

para gestión de las dificultades de los barrios y para generar formas de inserción estatalmente enraizadas se mostró con gran nitidez. Mientras se restringían derechos sustanciales, se reamaba otra forma de vínculo con las organizaciones sociales.

La memoria corta

Todo lo antedicho nos permite resituar lo comentado arriba acerca del papel de las organizaciones sociales en la pandemia e interrogarnos por la forma en que se construye el vínculo entre los barrios, las organizaciones y el Estado.

Vayamos a esa memoria más reciente, con la finalización del Gobierno kirchnerista que, con sus disputas, sus complejidades y sus tensiones posibilitó algunos avances en ciertas áreas, se preveía una limitación en la capacidad de escucha de las organizaciones sociales. No obstante, en el contexto de una política de ajuste de los ingresos de los trabajadores y una tentativa de limitar los derechos laborales, la victoria de la Alianza Cambiemos en 2015 en la mayoría de las jurisdicciones municipales, provinciales y en el Gobierno nacional supuso una nueva forma de vínculo que tomó nota del estatus de las organizaciones de base; la matriz asistencial-participativa asumió una nueva envergadura sobre todo bajo el ancla de organizaciones más pragmáticas y de las nuevas organizaciones. Muchas organizaciones, que desde la crisis de fin de siglo participaban de políticas sociales, adquirieron durante el kirchnerismo una experiencia mucho más sólida en gestión de recursos, en planificación y puesta en marcha de políticas, en negociaciones con las distintas jurisdicciones del poder ejecutivo y en los debates en el legislativo (Maneiro y Núñez, 2020). Todo este conocimiento fue puesto en juego en la gestión subsiguiente. En torno a aspectos sociourbanos, muchas organizaciones defendieron sus proyectos barriales en el seno del mencionado PROMEBA, y otras organizaciones lograron conformar una red para el registro de los barrios populares. El RENABAP aparece como una

puerta de acceso que se abocó a ubicar, caracterizar y comprender la magnitud del problema de los barrios populares. Con escasos recursos, pero con mucha capacidad de acción, se confeccionó el registro de barrios populares en todo el territorio nacional; el Gobierno nacional tomó esos datos para promocionar un nuevo trámite que se presenta como un paso hacia la regularización la tenencia: la confección de los certificados de vivienda (Núñez, 2020).

Dentro de un enfoque liberal de las políticas socioterritoriales la política de distribución de certificados tuvo una enorme amplitud y en ella se vincularon intereses disímiles. Desde las representaciones de los vecinos se la comprendió como un progreso en la seguridad de la tenencia, desde las representaciones mercantilizantes se la comprendió como un mojón para el acercamiento de estos espacios habitados a los mecanismos de mercado (más o menos formalizados).

Sin embargo, el RENABAP no solo tuvo este objeto, sino pues con la nueva autoridad nacional y provincial del Frente de Todos (2019), se propuso la puesta en marcha de un programa de provisión de servicios básicos para muchos de estos barrios, no obstante la capacidad de acción de los proyectos se vio ralentizada tanto por la pandemia y el ASPO, como por ciertas disputas en el seno del Ministerio Nacional.

Infelizmente en el AMBA, el Gobierno entrante, mantuvo la política de desalojos hacia las nuevas ocupaciones de tierra. La experiencia de Guernica, ocupación masiva (3 mil personas, aprox.) producida en el tercer cordón del GBA, en espacios en disputa con los grandes emprendimientos para clases medias y altas merece una mención especial. Aquí miles de vecinos sin vivienda ocuparon un predio y resistieron poco más de tres meses mientras se realizaban negociaciones con diversas áreas gubernamentales, pero el 30 de octubre de 2020, un operativo de desalojo violento echó por tierra el trabajo articulador realizado (Maneiro y Nardin, 2020). Muchas de las organizaciones que estaban en la primera fila de cuidado en los barrios eran también las que organizaban estas tentativas de generación de asentamientos populares; las relaciones con algunas de estas

organizaciones sociales, en un contexto de crisis social, económica y sanitaria se resintieron. Este desalojo en el fin del ASPO, puso en el tapete la dualidad de las iniciativas del Gobierno y las contradicciones en el seno del propio Estado. Dos lógicas políticas: la de la integración sociourbana y la de la asistencia en la pandemia, por un lado, y la del desalojo violento, por el otro dejaron a las organizaciones sociales en un lugar incómodo. Pocos días después de este desalojo se da por terminado el ASPO y se autoriza la movilidad que ya se realizaba de hecho, poco a poco comienzan a abrirse otras formas de aprovisionamiento para los habitantes de los barrios populares, sin embargo también ese proceso las organizaciones sociales fueron relevantes.

Palabras finales

Las organizaciones sociales en pandemia fueron un soporte central del cuidado, soporte que tiene su historia y que se liga a la memoria larga de producción de hábitat, a la participación en la ejecución de políticas sociales y sociourbanas y a la lucha por los derechos.

En esta presentación intentamos construir un argumento que haga inteligible el rol de las organizaciones sociales en la pandemia desde un prisma memorialmente más amplio. Como pudimos reseñar, estas no solo fueron relevantes en esta situación, sino que tuvieron un peso sustantivo en la propia producción del hábitat y la reproducción de la vida en los barrios populares.

En la actualidad las políticas de integración sociourbana están dando algunos pasos en la provisión de infraestructura de servicios en los barrios degradados sin embargo la política de hábitat popular sigue siendo escasa y segmentada. Como equipo de trabajo asistimos en el eje social a varios proyectos en curso en barrios de la zona sur del Gran Buenos Aires y entendemos que esta es una política necesaria, mas no suficiente. Vamos siempre por más inclusión y más derechos.

Bibliografía

Azparren, A. L. (2021). Desigualdades territoriales y trabajos de cuidado comunitario: lo esencial no es invisible en la pandemia. *Revista Sociedad*, (42), 45-58. <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/revistasociedad/issue/view/653>

Cravino, M. C. (2006). *Resistiendo en los barrios. Acción Colectiva y movimientos sociales en el Área Metropolitana de Buenos Aires*. UNGS.

Di Virgilio, M. M. (2012). Participación social y organizaciones sociales en la implementación de políticas orientadas a la producción social del hábitat en el área metropolitana de Buenos Aires, Argentina. *Revista de la SAAP*, (1), 14-35.

Di Virgilio, M.; Guevara, T., y Arqueros Mejica, S. (2015). Evolución territorial y geográfica del conurbano bonaerense. En Gabriel Kessler (dir.), *El Gran Buenos Aires* (pp 73-102). EDIPE / EDHASA.

Izaguirre, I., y Aristizabal, Z. (1988). *Las tomas de tierra en la zona sur del Gran Buenos Aires. Una experiencia de poder popular*. Buenos Aires: CEAL.

Maneiro, M. (2012). *De encuentros y desencuentros. Estado, Gobiernos y movimientos de trabajadores desocupados*. Buenos Aires: Biblos.

Maneiro, M. (2020). Aislamientos, Pobrezas y Emergencias: ¿Qué nos enseña la Sociología sobre la Pandemia en el Sur del Conurbano? *Anred*. <https://www.anred.org/2020/06/02/aislamientos-pobrezas-y-emergencias-que-nos-ensena-la-sociologia-sobre-la-pandemia-en-el-sur-del-conurbano/>

Maneiro, M.; Farías, A., y Olivera, H. (2021). Espacialidades y temporalidades como lentes para entender la propagación del covid-19 en el sur del conurbano. *Revista Ensamblés*, (13), 43-71.

Maneiro, M. y Farías, A. (2020). Hay que intentar que en los barrios populares las políticas sean situadas, de cuidado, y alimentación. *Notas, periodismo popular*. <https://www.notasperiodismopopular.com.ar/2020/06/01/hay-que-intentar-que-en-los-barrios-populares-las-politicas-sean-situadas-de-cuidado-y-alimentacion/>

Maneiro, M., y Nardin, S. (2020). Tomas de tierras en pandemia: la crisis habitacional en el Gran Buenos Aires y La Plata. *Notas, periodismo popular*. <https://www.notasperiodismopopular.com.ar/2020/08/18/tomas-de-tierras-en-pandemia-la-crisis-habitacional-en-el-gran-buenos-aires-y-la-plata/>

Maneiro, M., y Núñez, J. (2021). Acción colectiva, negociaciones y alianzas tras la Ley de Emergencia Social. *Revista Perspectivas de Políticas Públicas*, (20), 229-257.

Merklen, D. (1997). Organización Comunitaria y Práctica Política. Las Ocupaciones de Tierras en el conurbano de Buenos Aires. *Revista Nueva Sociedad*, (149), 162-177.

Nardin, S. (noviembre de 2018). Sobre las ¿nuevas? ocupaciones de tierras. Notas para una periodización de las tomas en San Francisco Solano, 1981-2002. *I Encuentro de la Red de Asentamientos populares*. Universidad Nacional de Córdoba. https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/13231/nardin_eje%201.pdf?sequence=13&isAllowed=y

Núñez, J. (2021). *Cerrando la brecha. Representaciones sociales de habitantes de asentamientos sobre los modos legítimos y legales de tenencia de la vivienda. El caso de La Matera, San Francisco Solano*. [Tesis de Maestría]. Maestría en Sociología de la Cultura, IDAES / UNSAM.

Vilas, C. (2020) Política social y pandemia. *Revista Cuestión Urbana*, (8-9), 21-25.

Sigal, S. (1981). Marginalidad espacial, Estado y ciudadanía. *Revista Mexicana de Sociología*, (43), 1547-1577.

Svampa, M. (2005). *La sociedad excluyente*. Buenos Aires: Taurus.

Los Comités Barriales de Emergencia

Experiencias de organización popular
en articulación con el Estado frente a la crisis
de producción / reproducción social

María Antonia Muñoz

Introducción

En el contexto de emergencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio [ASPO], en Argentina, organizaciones de los barrios populares, en particular las asociaciones de lxs trabajadorxs en la economía popular, con una importante participación de las mujeres en las bases de las organizaciones, pero también aquellas relacionadas al movimiento de feminista marplatense, propusieron una forma de articulación político social para afrontar la vulnerabilidad de la población en coordinación con agentes claves de diferentes instituciones públicas. Esto se dio a llamar los Comités Barriales de Emergencia (de ahora en más: CBE). Como dispositivos de articulación entre las diferentes organizaciones sociales, redes vecinales e instituciones “barriales” (escuelas, sociedades de fomento, salitas de atención primaria) con las diferentes instancias de los Gobiernos locales, provinciales y nacional, los CBE se despliegan en los barrios populares del Partido de General Pueyrredón (Mar del Plata-Batán) al sur de la Provincia de Buenos Aires.

El presente trabajo fue escrito en el contexto del proyecto de investigación “Impacto territorial de las políticas de articulación local implementadas en el contexto del covid19 en barrios populares del Partido de General Pueyrredón: capacidad de respuesta a las necesidades emergentes y propuestas para su fortalecimiento”, financiado por el Programa De Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología covid-19, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina. Para el mismo se realizaron treinta y dos entrevistas en profundidad a informantes clave de los Comités Barriales de Emergencia, se participó de numerosos procesos asociados a la dinámica de reunión de los CBE y distribución de recursos públicos y comunales, se realizó recopilación de información documental y se analizaron fuentes estadísticas y políticas públicas oficiales.

Los CBE son caracterizados por los entrevistados y entrevistadas como esfuerzos inter comunitarios, de carácter voluntario para la contención y el tratamiento de situaciones de emergencia social en el contexto de crisis sanitaria producto de la pandemia en el 2020 con un alto porcentaje de participación femenina frente a la masculina.

Dos antecedentes son importantes para pensar la formación de los CBE como instancias de articulación entre la sociedad civil y los Gobiernos en materia de reproducción social y comunitaria: los procesos de empobrecimiento y precarización de la vida de una importante parte de la población (y la feminización de la pobreza) y la densidad organizativa a nivel local que tiene respaldo a nivel nacional (con amplia participación de las mujeres sobre todo en sus bases). Comencemos por esto último.

Esta densidad organizativa tiene algunas características: se remonta a los años noventa, son numerosas y heterogéneas en sus formas de funcionamiento y tienen objetivos diferentes, (los cuáles entran en tensión pero son posible de ser negociados y articulados). En resumen, es una experiencia de porosidad entre el Estado y la sociedad civil asociada a las tareas de reproducción social. Podría decirse de otra manera, es un fenómeno que cuestiona las definiciones que delimitan la sociedad civil del Estado y las familias en relación

con las tareas de cuidados de la comunidad así como las distinciones entre producción y reproducción social.

La existencia de los movimientos sociales feministas y de trabajadores y trabajadoras de la economía a nivel nacional tiene su correlato a nivel local y explican en parte el surgimiento de los CBE. Como numerososxs investigadorxs han señalado, las demandas por el reconocimiento y distribución del trabajo en la economía popular sumado a las luchas contra la violencia de género y por el derecho al aborto han sido claves en transformar las instituciones estatales, otorgando un protagonismo a la dimensión local (Maldován Bonelli y Malgarejo, 2019; Muñoz, 2018). Además, las redes institucionales a nivel del barrio también fueron vitales para la rápida organización de los CBE. Estas generaron una valiosa experiencia de articulaciones en los barrios entre las escuelas, las salitas, los espacios de los ministerios de desarrollo social a nivel nacional y provincial, entre otras. Además, las redes de conocimiento y reconocimiento entre referentes sociales y dirigentes políticos con funciones ejecutivas o legislativas en el ámbito de General Pueyrredón, permitió que la articulación institucional fuese rápida y, aunque conflictiva, productiva. Desde los diferentes niveles del Estado participan los representantes en la localidad del Ministerio de Desarrollo Social (Nación) y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad (Provincia), la secretaría de Salud y de Desarrollo Social del Municipio.

El objetivo de los CBE en su proceso de formación fue actuar sobre lo que dieron a llamar como “alertas”: la alimentaria, la de violencia por motivos de género, la violencia institucional, la de salud y la del derecho a la ciudad, las cuáles desarrollaremos más adelante. Es evidente cómo esta experiencia de organización se asocia a las tareas reproductivas y cuidados comunitarios en el contexto de pandemia.

Por ello, se vuelve relevante preguntarse las formas en que se plantearon la relación entre la producción / reproducción en una experiencia de organización social donde son las mujeres las responsables de las tareas de provisión de alimentos y cuidados, pero poca

participación tienen en los espacios de toma de decisiones efectivas a nivel de coordinación general.

Para coordinar con los tres niveles del Gobierno se creó una mesa social, en donde confluyen los funcionarios públicos y diferentes referentes de las asociaciones intermedias. Además, existe una mesa de coordinación con representación solo de las organizaciones y asociaciones territoriales de los diferentes CBE. No obstante, como estrategia para atender las diferentes demandas sociales surgidas o profundizadas por la ASPO se crearon “alertas” y con el paso de los meses coordinaciones de esas mesas específicas de esas alertas y territorios.

Las alertas, las demandas y las alternativas organizativas

La alerta alimentaria fue declarada por los CBE en razón de las necesidades asociadas a la insuficiencia nutricional y abastecimiento alimentario que sufre una importante parte de la población del Partido de General Pueyrredón producto de factores combinados como la ASPO y la crisis económica y social. Esta fue una de las primeras alertas que se constituyeron como objeto de la actuación de los CBE.

A mediados de abril la demanda alimentaria creció por tres, no solo a nivel nación sino a provincia y municipio, nos pusimos a trabajar en conjunto. En el medio de todo esto surgió la idea de los Comités Barriales de Emergencia como una necesidad de dar respuesta a las demandas sociales, que claramente se potenciaron con la cuarentena pero tenían previa existencia en la mayoría de nuestros barrios. Esto lo llevan adelante organizaciones políticas y sociales en vinculación con otras organizaciones de la sociedad como, por ejemplo, la Iglesia Católica o Cristianas con sociedades de fomento, con clubes de barrios. Allí comienza un trabajo en red comunitaria (Referente del CDR, 08/07/2020)

Algunos datos de Mar del Plata dan un contexto de situación. Para principios del año 2020, según el Instituto de Investigación

Social, Económica y Política Ciudadana [ISEPCi], cerca de mitad de las niñas y los niños que asistían a comedores y merenderos de General Pueyrredón llegaban a ellos con malnutrición infantil.

Todxs lxs entrevistadxs señalaron que la pandemia profundizó un proceso que data de varios años: el incremento de la demanda a comedores y merenderos producto de la crisis económica y laboral. Pero además del crecimiento de los comedores, también hay que señalar el tipo de nutrición que está presente entre los sectores populares. Las dietas son altas en carbohidratos, grasas y azúcares, y pobres en proteínas, esenciales para el crecimiento de lxs niñxs. La demanda de alimentos frescos, es decir, lácteos, verduras, frutas y legumbres, es también parte de la soberanía alimentaria. Hay que señalar que la alerta alimentaria tiene como antecedente la Ley de Emergencia Alimentaria declarada en el año 2019 e impulsada por una serie de organizaciones populares, en particular, las que se agrupan dentro de lo que se dio a llamar la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Allí se agrupan la mayor cantidad de organizaciones que son sujetos de programas sociales, en particular asociados al trabajo de desarrollo barrial y asistencia alimentaria.

En este contexto histórico y social, la alerta alimentaria es puesta sobre la escena pública marplatense a través de estas asociaciones, organizaciones e iglesia que no solo se presentan como demandantes, sino como parte resolutoria de las posibles crisis. En este sentido, la formación de los CBE tuvo la virtud de desarrollar una extensa red de comunicación entre comedores y merenderos existentes en toda la ciudad de Mar del Plata y las diferentes asociaciones, instituciones y organizaciones presentes en las treinta y un áreas que alcanzan los mismos, cubriendo casi toda la ciudad. De esta manera, los sectores más vulnerables tienen acceso a asistencia alimentaria, lxs referentxs tienen un sistema dinámico de información de la demanda real en relación con los alimentos y los canales de comunicación para elevar las demandas se volvieron más fluidos.

Otras alertas presentes fueron contra las violencias de género e institucional, la de salud y la urbana o de derecho a ciudad. Como era

de esperarse la más dinámica fue la alimentaria, aunque la de salud y la de género, ambas asociadas al cuidado de las personas fueron también muy importantes. El objetivo de la alerta de género es acompañar y asesorar a las mujeres y al colectivo LGTBIQ+ en situaciones de violencia por razones de género, sobre todo en casos de emergencia y necesidad de asistencia y denuncia en el marco de la ASPO.

La alerta sanitaria surgió de forma inmediata debido a la preocupación que generó la posible propagación del virus en la ciudad y, ante esto, la necesidad de desarrollar y articular políticas sanitarias de prevención personal y comunitaria, necesidad que se fue profundizando a medida que la situación de la ciudad evolucionó de forma negativa.

En todas las alertas se proponían generar dispositivos comunitarios para resolver las demandas que iban surgiendo: la de sostener alimentariamente a familias que no podían acceder a alimentos por la vía privada, generar dispositivos de protección o acompañamiento de denuncias frente a la violencia de género y generar medidas de prevención del coronavirus, así como la participación de las referentes del territorio y de los CBE en la campaña de vacunación contra el covid.

Como se puede observar, se trató de un dispositivo donde las organizaciones sociales, políticas y populares, las iglesias (sobre todo la católica), las sociedades de fomento o las escuelas y las salitas de salud se encargaron de la sostenibilidad de la vida de una parte importante de la población. El Estado proveyó de alimentos y los dispositivos institucionales pero el protagonismo de la reproducción de la vida estuvo en la población, donde se destaca la ausencia del sector privado.

Frente a estas dos dinámicas particulares es que nos preguntamos sobre la crisis de la reproducción social, las luchas de los colectivos de mujeres y feministas y los límites entre lo público y privado, producción y reproducción.

Síntesis y discusión

La creación de los CBE constituyó un avance en el bienestar de la población y un fortalecimiento de la vida política y social del Partido de General Pueyrredón en varios aspectos. Es evidente que las tareas impulsadas por las organizaciones y asociaciones y las instituciones intermedias fueron una forma de atender a la crisis de reproducción social de manera colectiva y publica.

La teoría de la reproducción social sostiene que las tareas asociadas a los cuidados y sostenibilidad de la vida de la población en general pero en calidad de fuerza de trabajo. Una respuesta inmediata que podría negar este hecho en el caso de las tareas de los CBE es que una parte importante de la población atendida no es posible de ser calificada como trabajadores y trabajadoras que generan valor de cambio que beneficie al capitalismo. No obstante, la teoría no se refiere a las personas particulares sino a potenciales trabajadoras y trabajadores así como aquellxs que se vinculan con ella de manera directa e indirecta (Arruzza y Bhattacharya, 2020).

En este sentido, los CBE se incorporaron a la enorme cantidad de horas y de recursos que realizan las mujeres en las familias y las instituciones públicas en materia de cuidados y que debería pagar el sector privado (o como sostienen las feministas como Federici [2018], que debería pagar el capital porque beneficiarse directamente de esos trabajos). Pero lo interesante de esta experiencia es que no solamente “reproducen”, sino que politizan la forma en que la reproducción social es procesada socialmente.

Es importante señalar que la situación crítica en materia económica y social era previa a la pandemia y sigue siendo muy grave tanto para la población en general, pero en especial para las mujeres, que son también las que principalmente participan de estas experiencias.

Como se registra en el comportamiento de los indicadores sociales, el avance del covid-19 y las medidas de aislamiento asociadas a su

prevención y contención impactaron de manera negativa, afectando todas las variables macroeconómicas y los indicadores de bienestar social, en particular agravando los procesos de reproducción social.

En este sentido, la creación de los CBE pudo poner en el debate público la necesidad de cambiar las formas en que estos se dan, demostrando que la salida a esta crisis tiene que tener en cuenta la colectivización de la solución, la incorporación del Estado y las políticas públicas, así como el reconocimiento de las mujeres protagonistas de este proceso. Así mismo, la formación de los CBE arrojó la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables no solo en materia alimentaria sino en relación con el conjunto de las alertas y problemáticas que aquí se han señalado, distinguiéndose la asociada a la violencia de género, como se señaló en las secciones anteriores.

La estructura de la organización de los CBE, por barrio, por zona, por alertas y en coordinación con los diferentes niveles de Gobierno otorga una mayor fluidez a la gestión de las diversas demandas y una mayor sensibilidad a las diferentes necesidades que van surgiendo según los diversos grupos de la población, en particular el de las mujeres sostén de hogar y las que trabajan en los comedores y merenderos (que suelen ser grupos coincidentes). Además, no solo son vehículos o espacio de articulación entre las necesidades de la población y los diferentes niveles de Gobierno. También han generado dispositivos sociales que funcionan en coordinación y en paralelo con las instituciones públicas en materia de reproducción social. Algunos ejemplos claros son la red de comedores y merenderos y sus formas de gestión y distribución alimentaria, y el plan CUIDARNOS asociado a la prevención y detección del covid-19 en barrios populares.

Como se analizó, se formó “alerta de género” (asociada a la violencia por razones de género) donde se sumaron las redes militantes feministas de los distintos espacios políticos y sociales, y del movimiento de mujeres y diversidad de MDP. En ese sentido, estas redes preexistentes colaboraron para sortear las dificultades de la

representación en la mesa de coordinación general y en la mesa social: a la demografía masculina le opusieron redes preconstituidas de trabajo con dependencias del Estado, ONG, ministerios y la dirección de políticas de género de la MGP. Las organizaciones sociales y políticas que tenían experiencia en el abordaje territorial de la violencia por razones de género y que contaban con promotoras barriales, de género o de violencia de género pudieron contener las demandas de las referentas barriales sobre estos temas. Aquellas organizaciones que no tenían experiencia de este tipo de trabajo y abordaje tuvieron más dificultades para participar de las redes, de las capacitaciones o para resolver situaciones de violencia en sus barrios. Es importante aclarar que la articulación de la mesa de género con la Dirección de Políticas de Género del Municipio es tensa, con demandas irresueltas, sin medidas concretas sobre los pedidos de protección de las mujeres y las disidencias víctimas de violencia, financiamientos, protocolos de acción en tiempos de covid para las denuncias, traslados e ingresos al Hogar municipal. Estas tensiones se vieron profundizadas en gran medida por la intervención del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, que ejecuta sus programas de asistencia en tiempos de covid a través de las Direcciones Municipales. Se ha relevado que este punto es una zona de conflicto, porque vuelve más burocráticos, restringidos y desorganizados los accesos a esos programas por las tensiones entre los colectivos feministas y militantes que forman parte de los CBE y la Dirección de Políticas de Género. No obstante, las organizaciones sociales y políticas que conforman esta mesa, optaron por intentar resolver el acceso a los programas nacionales y provinciales a partir de los puentes que tienen con representantes en ambos ministerios, en direcciones específicas, para acceder a los recursos o a los beneficios. Solo actúa como mesa de género frente a la Dirección de Políticas de Género y la Universidad, luego las demandas de los barrios son resueltas dentro de las organizaciones sociales y políticas con los recursos y las redes de las que participa. La organización comunitaria feminista logró, entonces, a partir de sus propios recursos propuso soluciones que

ni las familias ni los diferentes niveles gubernamentales pudieron hacer (Muñoz y Cepeda, 2022).

Hay que señalar que, en especial la “alerta de género” de los CBE no logró instalar hacia su interior la discusión por el reconocimiento de las tareas comunitarias y de cuidado como trabajo, a pesar de que si lo hicieron otras áreas de los CBE.

Dicho de otra manera, mientras un nivel de organización de los comités se enfocó a solucionar los problemas referidos a la violencia de género, otros espacios de los mismos lograron una serie de reconocimientos en dichos trabajos. En conclusión, es posible señalar que la experiencia es a la vez una expresión de la crisis de reproducción social como una respuesta (heterogenia) política a esta.

Las divisiones entre lo privado y lo público, lo doméstico y lo común, lo productivo y lo reproductivo asociados a los modelos tradicionales en la organización “capitalista” se ponen en cuestión. Al ser esta experiencia en curso es necesario seguir estudiando cuales son los resultados de este proceso. No obstante, es innegable los desafíos como las potencialidades de la misma. Sobre esto último creemos que es necesario seguir centrándonos.

Bibliografía

Arruzza, C. y Bhattacharya, T. (2020). Teoría de la reproducción social. Elementos fundamentales para un feminismo marxista. *Archivos de la historia del movimiento obrero y la izquierda, año VIII* (16), 17-69.

Federici, S. (2018). *El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo*. Buenos Aires: Tinta Limón.

Maldován Bonelli, J., y Melgarejo, M. (2019). Reivindicaciones y demandas de los/as trabajadores/as no asalariados/as: el dilema redistribución-reconocimiento en la economía popular. *RevIISE, Revista De Ciencias Sociales y Humanas*, 13 (13), 263-278

Muñoz, M. A. (2018). Las marcas de los sujetos en el Estado. Los trabajadores de la economía popular y las políticas públicas en la Argentina reciente. Ediciones UNL. *Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal*; 30 (6), 85-128

Muñoz, M. A., Cepeda, A. (2022) Los Comités Barriales de Emergencia: de la crisis de reproducción social a las luchas feministas por los límites. *Revista de investigación y divulgación sobre los estudios de género*, 31 (29), 229-257.

El Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata

María Inés Iglesias

La presentación se centró en el trabajo del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, particularizando en algunos hitos en este recorrido, relacionados con la temática de este panel, referido a Tramas estatales, movimientos sociales y espacialización de las políticas públicas.

El Consejo Social de la UNLP surge de la recuperación, a lo largo de los últimos veinte años, de la extensión universitaria como una herramienta de transformación, una mirada crítica como principal expresión del compromiso social de las universidades, que implicó una recuperación de aprendizajes y debates después de que la dictadura arrasó con los procesos previos.

En ese recorrido se reaprendió la necesidad de una interdisciplina dinámica, ordenada por la práctica y las necesidades sociales, y más adelante se avanzó en reconocer la necesidad de sumar la voz, la palabra, de los actores territoriales, no solo en el trabajo cotidiano, sino también en el diseño de los proyectos antes de llegar al efectivo proceso de intervención.

En ese marco, en el año 2008, se dio un debate en la Universidad Nacional de La Plata con relación a la reforma del Estatuto, que jerarquizó el rol de extensión, cristalizando muchos de estos aprendizajes.

En esa Asamblea Universitaria se planteó la posibilidad de crear un Consejo Social, pero no se llegó a abordar. La iniciativa fue retomada en el año 2009 por la Secretaria de Extensión, y en ese contexto nació el Consejo Social profundamente ligado a los debates y aprendizajes de esa nueva Extensión.

En el marco de la interactoralidad, surge este dispositivo del Consejo Social convocando a representantes del Estado provincial, de los municipios de la región, representantes legislativos, a organizaciones sindicales, a organizaciones sociales, a organismos en ciencia y tecnología, y actores de la propia universidad para empezar a consensuar agendas y priorizar los ejes de trabajo y la manera de abordarlos.

La gestión de este espacio quedó en manos de un equipo con recorrido en la militancia estudiantil de los años noventa, con diálogo con movimientos de desocupados a partir de esa experiencia desde esa experiencia, por lo que ya existía una valoración de la importancia de los movimientos en relación a la capacidad de lucha y organización comunitaria; sin embargo, en el trabajo en el Consejo a lo largo los años, pusimos en valor la cantidad de conocimiento, de organización y de propuestas concretas que había en esas comunidades respecto de cómo abordar las problemáticas.

En función de eso se fueron desarrollando muchos ejes de trabajo, que esta presentación busca recuperar brevemente, para poder traer algunos aprendizajes y reflexiones que surgen de este recorrido.

Un primer ejemplo de esto, dentro de los primeros temas de agenda en 2011, es el tema del acceso a la tierra y a la vivienda, un tema que no resultaba emergente del desarrollo previo de la extensión pero que fue incorporado a demanda de las organizaciones sociales. Estas, sentadas a la mesa multisectorial que ofrecía la universidad, plantearon que sus compañeras y compañeros eran los grandes protagonistas de las tomas, de las ocupaciones de tierra, pero que esa no era una salida que nadie buscara, no era un destino que a nadie le cerrara como alternativa para el acceso a la tierra y a la vivienda. Lo

que buscaban en esa mesa era discutir políticas públicas que permitieran el acceso a la tierra para vivir y para producir.

A partir de este planteo, desde la gestión del Consejo se inició un relevamiento de políticas públicas tanto nacionales como provinciales, y de propuestas académicas, y se fueron organizando foros y jornadas de discusión. En ese camino, el Consejo Social se vinculó fuertemente al proyecto de Ley de Acceso Justo al Hábitat en la Provincia de Buenos Aires, que había sido construida por organizaciones del Conurbano en diálogo con actores que estaban en ese momento en el Estado. El espacio de la UNLP se constituyó en un eje aglutinador de las voluntades en torno a este proyecto, y finalmente se aprobó y reglamentó la Ley 14 449 de Acceso Justo al Hábitat, abriendo el camino a nuevas políticas públicas. Por supuesto que la mayor parte de los conceptos y principios establecidos en esa ley todavía se discuten, elaboran y disputan, ya que no por estar en la letra de la ley su implementación es inmediata y exenta de conflictos.

En el mismo sentido y con algunos años de recorrido, en la inundación que sufrió La Plata el 2 de abril de 2013, el Consejo Social se constituyó en una referencia para vincular los esfuerzos solidarios de distintos actores del país y de nuestra comunidad, con las necesidades particulares de los distintos barrios, y en el marco de ese trabajo surgió la posibilidad de una primera política pública que nosotros valoramos muchísimo como experiencia, porque fue una primera experiencia de cogestión entre instituciones del Estado Provincial, organizaciones sociales y diferentes disciplinas de la universidad. El Programa de Asistencia en la Reparación de Viviendas afectadas por el Temporal fue financiado con recursos del BID que administraba el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, y fueron reorientados a la reconstrucción de viviendas de sectores con alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, que no tenían la posibilidad de poner en condiciones sus viviendas de otra manera, y para lo cual el Estado destinaba un subsidio para la compra de materiales. El Programa no contaba con recursos para mano de obra, y fue a partir de la necesidad de resolver las capacidades de

auto construcción que la Subsecretaría Social de Tierra, Urbanismo y Vivienda se acercó al Consejo, buscando el acompañamiento de organizaciones de disciplinas afines.

En este marco se desarrolló el primer trabajo de cogestión de políticas públicas, del cual surgieron importantes aprendizajes, porque fue una tarea de ejercicio democrático muy importante, muy novedosa para todos los sectores involucrados. En una misma mesa se sentaron funcionarios y técnicos de distintos organismos de la Provincia de Buenos Aires, con referentes de ocho organizaciones sociales, con equipos de distintas Facultades que estaban aportando, junto a la gestión del Consejo Social, y pese a que al inicio existieron desconfianzas y miradas diferentes sobre la problemática a abordar, se construyeron los consensos para relevar, proponer las intervenciones y avanzar en la entrega de los materiales, complementando las diferentes capacidades y aportando desde los distintos roles.

Funcionarios del Instituto de la Vivienda reconocían que, haciendo el cruce de los radios censales de aquellas zonas con porcentaje de necesidades básicas insatisfechas más altas, con los lugares a donde las distintas organizaciones sociales habían llevado a los equipos técnicos a hacer los relevamientos, daban exactamente iguales. Eso mostraba que los que realmente conocían los barrios y sabían dónde recorrer y con quién hablar, qué capacidades existían, etcétera, eran las compañeras y los compañeros que los habitaban y los iban construyendo todos los días.

En el mismo sentido, a medida que las condiciones socioeconómicas de los barrios iban mejorando y se iban resolviendo algunas cuestiones más urgentes, también fueron surgiendo demandas hacia la propia universidad en términos de nuevos procesos de formación que les permitieran a esas compañeras y compañeros jerarquizar los roles que ya cumplían en sus comunidades, o incorporar nuevos saberes para mejorar su empleabilidad.

Este último eje se trabajó en diálogo con la Escuela de Oficios de la Universidad que depende de la Prosecretaría de Políticas Sociales, pero también se empezaron a desarrollar propuestas desde el propio

Consejo Social, y en ese proceso fue que surgió la idea de generar diplomaturas universitarias que cumplieran esta función: dar una respuesta a esta necesidad de las compañeras y los compañeros que tenían saberes que tenían que ser recuperados, que cumplían roles comunitarios que tenían que ser reconocidos, que podían utilizar herramientas que la universidad pudiera aportar. En ese contexto, por decisión de las autoridades de la UNLP se impulsó una ordenanza, en diálogo con otras áreas de la universidad, que permitió la aprobación de diplomaturas orientadas a los sectores que no tenían otras posibilidades de acceso a la formación universitaria por el Consejo Superior.

Desde el inicio esperamos que estos trayectos puedan ir generando nuevas propuestas de formación “de abajo hacia arriba”, promoviendo tecnicaturas que articulen con diplomaturas afines; distintas propuestas que tengan que ver con poder incluir a estas compañeras y compañeros a la universidad desde otra lógica, no ya desde la lógica más liberal del ejercicio profesional de las carreras más tradicionales, sino entendiendo la posibilidad y el rol de la universidad de respaldar la jerarquización y el reconocimiento de esos roles comunitarios, de promoción en salud, de promoción de derechos de infancias y juventudes, de acompañamiento de situaciones de violencia de género, de tantas cosas que suceden en los barrios y que tienen resolución, o al menos abordaje, a partir de la organización comunitaria.

Para mostrar también en el recorrido un punto de inflexión cuando el contexto de las políticas públicas cambia, nos encontramos en el año 2018 con una demanda muy concreta de las organizaciones sociales que estaban ante una profunda crisis alimentaria, con una falta de respuesta muy importante por parte de los distintos niveles del Estado y en donde las áreas de la Provincia de Buenos Aires a cargo de la asistencia alimentaria respondía ante los reclamos que no tenían la capacidad técnica de relevar la necesidad en los barrios.

En ese marco se generó en el Consejo Social un espacio de trabajo y de relevamiento conjunto, de producción de datos de equipos

de investigación y de extensión de la universidad junto con organizaciones sociales. Se produjo un primer informe en 2018, buscando llegar a distintos organismos públicos, para promover la generación de políticas públicas que atendieran esta situación, que lamentablemente no tuvo ningún tipo de repercusión en estos organismos, pero en 2019 frente a un segundo informe iniciaron otro tipo de interlocuciones, con actores del Gobierno por asumir, y la información y perspectivas aportadas, sumaron al diseño de estrategias contra el hambre.

Por último, y en relación con la nueva crisis que produjo la pandemia, el trabajo articulado desde el Consejo Social, en diálogo permanente con las organizaciones que lo integran y con distintos organismos públicos, facultades y equipos de la propia universidad, se orientó a dar respuesta a la emergencia en los barrios populares, a aportar a la generación de Comités Populares, de mesas de trabajo, de algunos Comités Municipales, en donde el conocimiento de la situación por parte de las organizaciones fue el eje ordenador de todas las iniciativas.

En el inicio del ASPO, el primer planteo de las organizaciones fue que había que garantizar el acceso a alimentos en los diferentes barrios, porque de otra manera era imposible que la gente no circulara entre barrios buscando algún ingreso, alguna olla popular, etcétera; también planteaban la urgencia de llegar con agua potable, frente a las indicaciones de higiene para el cuidado frente al covid.; así como la de llegar con lavandina, con alcohol, con todo lo que le se indicaba para la protección personal. Otro aspecto central era la necesidad de generar procesos de promoción de la salud con eje en la atención primaria, porque las comunidades no tenían a donde recurrir, y los inicios de la pandemia fueron caóticos en ese sentido, había mucho miedo y poca información.

Todas las acciones en este sentido fueron sostenidas fuertemente por las organizaciones, acompañadas por equipos de voluntarios y por distintas áreas de la universidad, sumando luego a las iniciativas del Ministerio de Salud y la Región XI de la Provincia de Buenos

Aires. En algunos municipios el esfuerzo fue coordinado con un Estado local muy presente, y en otros el Municipio apostó a que las organizaciones fueran las que efectivamente se encargaran de tramitar la pandemia.

Habiendo repasado este recorrido, es interesante recuperar algunas reflexiones y aprendizajes que tienen que ver, por un lado, con la necesidad de poner en valor el conocimiento y la cantidad de propuestas que producen los actores organizados en los distintos barrios, que muchas veces tienen las propuestas de lo que hay que hacer, y lo que resta es construir la manera de dialogar, desde los distintos niveles del Estado, con este conocimiento y con esa voluntad que es la que gestiona, la que pone a funcionar, la que resuelve cuando nadie más resuelve.

Por otro lado, y en el mismo sentido, no dar por sentada esa suerte de responsabilidad de los movimientos sociales respecto de esas comunidades. En el Consejo lo vivimos permanentemente en el periodo pasado de Gobierno, en donde el neoliberalismo no solamente no valora sino que degrada a esa organización popular, la coloca en términos de “planeros”, los desacredita completamente, pero por otro lado les entrega insumos para que den respuesta, partiendo de la base de que es su responsabilidad, no que es algo que esas personas asumen porque son sus vecinas, sus vecinos, los pibes y las pibas de los barrios, los que están sufriendo esa situación y entonces ponen el cuerpo.

Aún en el caso de los Gobiernos que tienen otra mirada en relación a esto, nosotros entendemos y sobre todo lo hemos visto muy profundamente a lo largo de esta pandemia, que es necesario avanzar en la formalización de esos roles, en el reconocimiento y la formalización, quizás no necesariamente para que todas y todos los que cumplen roles en estas comunidades que son centrales, pasen a ser planta de los distintos niveles del Estado. Pensaba cuando contaba Gerardo la experiencia de la propiedad social no estatal, cómo empezar a pensar esa organización, esas tramas territoriales desde nuevos

modelos de gestión, no necesariamente de seguir profundizando o seguir repitiendo lo mismo.

Es necesario que eso se incorpore porque los barrios populares dependen de esos roles, dependen de ese funcionamiento y las políticas públicas más apropiadas, más ajustadas a la realidad, han surgido realmente en diálogo con aquellos actores que las van a terminar garantizando concretamente, pero que además son los que más saben sobre lo que pasó, lo que sirvió, lo que no sirvió, y lo que falló y porque falló. En ese marco consideramos clave analizar la fragmentación actual de la política pública, porque aparecen permanentemente propuestas y ofertas de política pública, pero hay mucha fragmentación entre los distintos niveles del Estado y dentro de cada nivel, hay superposición, hay fragmentación y eso hace muy compleja la accesibilidad, encontrar el camino por el cual llegar a una política pública no es trivial y mucho menos lo es para aquellos sectores que están resolviendo tantas emergencias en cada contexto. Esto para mí viene de la mano de democratizar, y democratizar en el sentido de poder recuperar estas voces, de poder sentar las compañeras y los compañeros que están en cada territorio a la mesa, que muchas veces hoy tienen obviamente muchísima mejor llegada porque hay referentes de esas organizaciones ocupando lugares de gestión, pero igual falta muchísimo.

Me parece que es la gran tarea que tenemos por delante, imaginar, inventar nuevas maneras de poner en valor estos roles, de reconocer estas voces y de darles participación activa en la gestión de los recursos de manera de garantizar que efectivamente lleguen, porque se están poniendo muchísimos recursos. Ahora, no siempre está claro cómo acceder, ni hasta dónde están llegando, ni cómo se puede facilitar que los sectores más débiles en términos de organización puedan acceder, una serie de cuestiones que yo creo que, si se pudieran territorializar, con una agenda, con prioridades construidas con la comunidad serían mucho más efectivos.

Sobre los autores y autoras

Fernanda Valeria Torres

Investigadora adjunta del CONICET y profesora adjunta ordinaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Licenciada en Sociología por la UNLP, Magister en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y Doctora en Ciencias Sociales por la UNLP. Con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales IdIHCS-UNLP/CONICET y el Departamento de Sociología de la UNLP. Es también co-Coordinadora del Grupo de Trabajo Movimientos socioterritoriales en perspectiva crítica y comparada de CLACSO. Sus temas de estudio e investigación se ubican en el campo de la sociología política y los estudios de movimientos sociales. Se propone una perspectiva espacial de análisis para comprender los movimientos sociales urbanos, problematizando la categoría de movimientos socioterritoriales.

José Sobreiro Filho

Professor do Departamento e do Programa de Geografia da Universidade de Brasília (UnB) e do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe (TerritoriAL) do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacional (IPPRI) da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).

É vice coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa das Lutas por Espaços e Territórios (DATAUTA) e pesquisador líder do Grupo de Estudos sobre Ações Coletivas, Conflitualidades e Territórios (GEACT). Possui graduação, mestrado e doutorado pela UNESP campus de Presidente Prudente, foi professor visitante na Cardiff University e estudou na Universidad Nacional de Córdoba e University of Leeds. Movimentos Socioterritoriais e socioespaciais, Questão agrária, Teoria e Geografia, Política Contenciosa, Amazônia, Atingidos, Povos Indígenas e conflitualidade são seus principais temas de interesse.

Mariana Relli Ugartamendía

Docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Profesora de Geografía por la UNLP, Magister en Hábitat y Vivienda por la Universidad Nacional de Mar del Plata y Doctora en Geografía por la UNLP. Integrante de la Red Iberoamericana de Investigación en políticas, conflictos y movimientos urbanos. Sus temas de investigación se encuadran en el campo de los estudios urbanos, las políticas habitacionales y de regularización del hábitat popular y los procesos de producción social del hábitat.

Matthew Aaron Richmond

Profesor de Geografía Política en la Newcastle University. Es Doctor en Geografía Humana del King's College London. Fue investigador postdoctoral en el Centro de Estudos da Metr pole (CEM) y la Universidade Estadual Paulista (UNESP), ambos en S o Paulo, y Leverhulme Trust Early Career Fellow en la London School of Economics (LSE). Es Secretario del Latin American Geographies Research Group (LAGRG) de Royal Geographical Society (RGS) y forma parte de la comisi n editorial de la Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR). Investiga temas de gobernanza urbana, geograf a electoral, seguridad y sostenibilidad en ciudades brasile as.

Patricia Pintos

Profesora Titular en la carrera de grado en Geografía, en el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de La Plata. Profesora y Licenciada en Geografía (Universidad Nacional de La Plata), Máster en La ciudad: Políticas, Proyectos y Gestión (Universidad de Barcelona. Con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales IdIHCS-UNLP/ CONICET. Actualmente es Subdirectora del Centro de Investigaciones Geográficas, IdIHCS-UNLP/CONICET. Ha ejercido la docencia de grado y posgrado en las siguientes Universidades Nacionales: UNQ, UBA, UNICEN, UNR, UNC, UNLPam y UNMdP. Sus temas de estudio e investigación están relacionados con los cambios operados en la expansión metropolitana de Buenos Aires, los vínculos entre gestión pública del territorio, desarrollos inmobiliarios de tipo cerrado y afectación de bienes comunes de la naturaleza.

Felipe Mesel

Abogado de derechos humanos (UNLP), ha trabajado en temas de vivienda y hábitat como docente y asesor en organismos públicos, como la Secretaría de Integración Socio Urbana de Nación y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y en organizaciones como ACIJ. En la actualidad, es Global Programs Manager en Movement Law Lab y la Red Global de Abogadxs de Movimientos Sociales. Además de derecho, ha estudiado un diplomado en estudios sociojurídicos del suelo urbano (UNAM-LILP) y una maestría en economía urbana (UTDT).

Cristina Fynn

Asistente Social Universitaria, Diploma de Especialización en Sociología Urbana por la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR). Cursó la Maestría en Hábitat y Vivienda de la Facultad de Arquitectura en Rosario-ARGENTINA, realizó cursos de post-grado en Políticas Sociales, género y vivienda. Ha formado parte de equipos técnicos para la formación y el asesoramiento de cooperativas

de vivienda: trabajó en el Departamento de Descentralización en un Centro Comunal Zonal en la periferia de la ciudad, en el Departamento de Planificación y en el Servicio de Tierras y Vivienda de la Intendencia Municipal de Montevideo. Ha desempeñado cargos en la gestión pública: Presidenta de la Agencia Nacional de Vivienda de Uruguay, entre 2010 y 2015, y de Edila en la Junta Departamental en el Gobierno de Montevideo entre 2015 y 2020. Ha participado en equipos de investigación del Instituto de la Construcción de la FADU UDELAR. Sus temas de interés son los relacionados a la Planificación Socio-Urbana de la periferia de las ciudades, vivienda y hábitat, género y evaluación de políticas y programas de vivienda para la población más vulnerada.

Ana Pastor

Magister en Estudios Urbanos por la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento y Licenciada en Trabajo social por la Universidad de Morón. Presidenta de la Asociación Civil Madre Tierra, organización que trabaja junto a los barrios del conurbano bonaerense por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat. Desde mediados de los años 80, ha integrado equipos que han puesto en marcha programas de acceso, construcción y mejoramiento barrial en conjunto con organizaciones sociales, así como de introducción de perspectivas de género y de reconocimiento de los derechos de las infancias en los mismos. Es integrante de redes multiactorales a nivel internacional (HIC-AL), de Argentina (Habitar Argentina) y de la provincia de Buenos Aires (FOTIVBA), desde donde realiza tareas de incidencia política para impulsar proyectos de ley y políticas públicas desde concepciones integrales de acceso a derechos.

Lucrecia Wagner

Investigadora Adjunta del CONICET, Argentina), y profesora del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, y de la Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales de la Universidad de Buenos Aires. Licenciada en Diagnóstico y Gestión

Ambiental por la UNICEN y Doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes. Con lugar de trabajo en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Centro Científico Tecnológico (CCT) Mendoza-CONICET. Sus temas de estudio e investigación se ubican en el campo de la ecología política y la justicia ambiental. Se propone una perspectiva que busca dar cuenta de la espacialidad de la conflictividad socioambiental, es decir, cómo se materializan en el territorio las disputas entre diferentes actores, a partir de diversas estrategias desplegadas principalmente por movimientos sociales, organismos del estado y empresas.

Valter do Carmo Cruz

É professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense - UFF (Brasil) e pesquisador do CNPQ. Atualmente é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia-UFF e do Núcleo de estudos sobre território, ações coletivas e Justiça-NETAJ/UFF. Possui Graduação em Geografia pela Universidade Federal do Pará, Mestrado e Doutorado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Desenvolve pesquisas principalmente nos seguintes temas: Movimentos sociais, identidades coletivas e direitos territoriais; Ecologia política dos grandes projetos de des-envolvimento; Geografia, giro descolonial e epistemologias do sul e Amazônia.

Bruno Cezar Pereira Malheiro

É Professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Campus de Marabá. (Brasil). Possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Pará, é mestre em Planejamento do Desenvolvimento pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA - UFPA) e Doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. É coordenador do Laboratório de Estudos em Território, Interculturalidade e R-Existência na Amazônia (LaTierra). Tem experiência de pesquisa nos seguintes temas: Geografia da Amazônia;

Geohistória da Amazônia; Conflitos territoriais na Amazônia; Geografia dos Grandes Projetos de desenvolvimento; Questão agrária na Amazônia; Educação do campo; e Geografia e Pensamento decolonial.

Marilete Molinari

Formada em Pedagogia pela Unochapecó, pós-graduada em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental pelo Portal Faculdades. Camponesa, Educadora popular, atualmente coordenadora da Regional de Chapecó do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) e também membra do coletivo de lutas da Executiva Estadual do MMC.

Zenaide Collet

Militante do Movimento de Mulheres Camponesas – MMC Brasil. Mestre em Educação pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó e doutoranda em geografia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná -Unioeste, campus de Francisco Beltrão – PR. Integrante do grupo de pesquisa Gênero, corpo e diversidade da Unioeste.

Sara Koopman

Profesora de estudios de paz en la universidad de Kent State, Ohio, EEUU. Recibió su doctorado en geografía en la Universidad de British Columbia, Canadá, y su maestría en estudios de género de la misma Universidad. Su licenciatura es en antropología de Swarthmore College, EEUU. Ella es geógrafa política feminista, interesada en los aspectos socioespaciales de la paz y las maneras en que la construcción de paz y la solidaridad internacional pueden caer en patrones coloniales.

Luis Enrique Ortuño Hernández

Docente del Colegio Universitario de Rehabilitación May Hamilton, y docente de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio

Samuel Robinson, facilitador de la Misión Sucre programa para la territorialización de la educación universitaria. Militante de la Organización Frente Francisco de Miranda. Licenciado en Gestión Ambiental por la Universidad Bolivariana de Venezuela, Magister en Pedagogía Crítica por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Estudiante del Maestrado de Desenvolvimento Territorial para América Latina y el Caribe por la UNESP. Temas de estudio e investigación son los movimientos socio territoriales y su participación en la soberanía alimentaria bajo la perspectiva de agricultura urbana en la ciudad de Caracas Venezuela.

Rafael Sanzio Araújo dos Anjos

Geógrafo, formado pelo IG-UFBA, mestre em Planejamento Urbano pela FAU-UnB, Doutor em Informações Espaciais pela Escola Politécnica da USP e Pós-Doutoramento em Cartografia Étnica junto ao AfricaMuseum em Tervuren – Bélgica (2007-2008). Foi o primeiro Professor Titular afrobrasileiro da Universidade de Brasília (UnB) (2015). Esteve como Diretor do Centro de Cartografia Aplicada e Informação Geográfica (CIGA) da UnB no período de 2000 – 2022. Em 2015 recebeu a honraria Chevalier de L'Ordre de la Couronne de sua Majestade o Rei Philippe da Bélgica pelas suas pesquisas da Diáspora ÁfricaBrasil. Esta como Professor Visitante Titular junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos (PÓS-AFRO) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FFCH)/Universidade Federal da Bahia (UFBA) (2022-2024). É Professor e Pesquisador Sênior do Programa de Pós-Graduação (PPGGEA) da UnB. Pesquisador de Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) do CNPQ–MCTI. É Pesquisador Colaborador do Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO) da UFBA e Autor-Gestor do Projeto Geografia Afrobrasileira: Cartografia, Educação & Ordenamento do Território (Projeto GEOAFRO - Site: <https://www.portalprojetogeoafro.com/>). Autor de vários livros, capítulos e artigos, outros dados de pesquisa, ensino e extensão podem ser acessados no link: <https://www.portalprojetogeoafro.com/prof-dr-rafael/>.

Em 2023 teve publicado na Unesco General History of Africa: Africa and Its Diaspora no Volume 10 – África e suas Diásporas o Capítulo: O Brasil Africano e as Invisibilidades Geográficas. É Guardiã e Obã do Parque Pedra de Xangô em Salvador – Bahia – Brasil

Norberto Pablo Cirio

Nació en Lanús (Buenos Aires) en 1966. Lic. en Cs. Antropológicas (UBA, 2002) y doctorando en la misma carrera y universidad. Trabaja en el Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” y en el Instituto de Investigación en Etnomusicología en proyectos sobre música afroargentina. Desde 2011 es director de la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos y Afroamericanos de la Universidad Nacional de La Plata. Desde 2020 dicta la materia Fundamentos de las músicas afroargentina y afrocubana en la Licenciatura en Música Autóctona, Clásica y Popular de América (UNTREF), la primera universidad pública en incluirlas.

Denílson Araújo de Oliveira

Denílson Araújo de Oliveira é Geógrafo. Mestre e Doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Professor Associado do Instituto de Geografia (Departamento de Geografia Humana) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Professor do Programa de Pós-graduação de Geografia da Faculdade de Formação de Professores da UERJ e do Programa de Pós-graduação em Cultura e Territorialidades - UFF. Coordenador do NEGRA (Núcleo de Estudo e Pesquisa em Geografia Regional da África e da Diáspora). Integrante do Programa de Estudos e Debates dos Povos Africanos e Afroamericanos – PROAFRO UERJ, Integrante da entidade do Movimento Negro Instituto Búzios.

Betania de Moraes Alfonsin

Doctora en Planificación Urbana y Regional por el Instituto de Planificación e Investigación Urbana de la UFRJ. Profesora de la Facultad de Derecho y Máster en Derecho de la Fundação Escola

Superior do Ministério Público (FMP/RS). Coordinadora del Grupo de Investigación Derecho Urbano y Derecho a la Ciudad.

Pedro Prazeres Fraga Pereira

Máster en Derecho por el Programa de Postgrado en Derecho de la UFRGS. Profesor.

Paulo Eduardo Berni

Doctorando en Derecho por el Programa de Postgrado en Derecho de la UFRGS. Profesor.

Pedro Acosta Oliveira

Maestrando en Ciencias Políticas en la UFRGS.

Fernanda Madalosso Guimarães

Maestrando en Derecho en la UFRGS.

Flávia Segat

Máster en Antropología Social por la UFPEL.

Debora Carina Lopes

Maestrando en Planificación Urbana y Regional por la UFRGS.

Vitória Alvarez Montanari

Estudiante de postgrado en Derecho del Estado en la UFRGS y en Derecho Económico y Regulatorio en la PUC/RJ

María Maneiro

Dra. en Ciencias Humanas con Mención en Sociología (IUPERJ, Brasil), Mgter. en Investigación en Ciencias Sociales (UBA) y Lic. en Sociología (UBA). Es investigadora adjunta del CONICET (IIGG/UBA), Profesora Adjunta de la carrera de Sociología (UBA) y Co-Coordinadora del Grupo de Trabajo Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes (ACySE) de CLACSO. Publicó decenas de

artículos y tres investigaciones en formato libro sobre organizaciones sociales, demandas de derechos y respuestas estatales en áreas periféricas de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

María Antonia Muñoz

Investigadora del ISTEAC - CONICET (Facultad de Humanidades de la UNMDP) Profesora de Sociología Institucional y Comunitaria y Sociología del Desarrollo. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales (UNAM) y Maestra en Ciencias Sociales (FLACSO- Sede México). Sus temas de Investigación se encuadran en el campo de la sociología política y la teoría política. Actualmente es responsable de dos proyectos de investigación: “Género, organización gremial y políticas públicas: las estrategias políticas y sindicales de las trabajadoras de la economía popular (2020-2023)” (PICT 2022-2025) y “Movimientos sociales, sujetos políticos y antagonismos. Feminismos y economía popular; tendiendo puentes entre estudios de caso y acercamientos conceptuales” (UNMDP - 2022-2025)

Inés Iglesias

Licenciada en Ciencias Farmacéuticas y Especialista en Gestión de la Educación Superior de la UNLP. Prosecretaria de Extensión Universitaria y Directora General del Consejo Social. Desarrolla docencia en posgrado y se desempeña como profesora a cargo de la coordinación institucional para la creación del Hospital Escuela de la Facultad de Psicología. Su principal tarea se centra en la gestión universitaria en las áreas de políticas sociales, vinculación comunitaria e innovación social.

Este libro surge de las presentaciones realizadas en el II Encuentro Latinoamericano de Movimientos Socioespaciales y Socioterritoriales (ELAMSS), una red internacional de debate e investigación que se propone comprender las organizaciones y movimientos sociales desde una perspectiva espacial. Los movimientos en lucha tienen una perspectiva multidimensional del espacio, desde la tierra al agua, desde el cuerpo a las ideas, desde la semilla a la comida, desde la organización a las políticas públicas, estos movimientos crean espacios y se apropian de territorios. El ELAMSS es un espacio de diálogo interdisciplinario frente a los intensos procesos de exclusión social y desterritorialización, pensando los espacios y los territorios como forma de comprender mejor los conflictos, las estrategias y las resistencias.